

Revolución y Fiscalidad Municipal

La Hacienda de la Villa de Madrid
en el reinado de Fernando VII

Instituto de Estudios Madrileños
Colección Biblioteca de Estudios Madrileños

XXVIII

Edita: INSTITUTO DE ESTUDIOS MADRILEÑOS
C.S.I.C.

UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

Producción y Composición: Anjana Ediciones, S.L.

Depósito Legal: M-17985-95

I.S.B.N.: 84-00-07492-0

Imprime: Gráficas Andemi, S.L.

Trueno, 12 - 28917 Leganés - Madrid.

Revolución y Fiscalidad Municipal

La Hacienda de la Villa de Madrid
en el reinado de Fernando VII

Manuel Martínez Neira

*Instituto de Estudios Madrileños
Departamento de Derecho Público y Filosofía del Derecho
Universidad Carlos III de Madrid
Madrid, 1995*

A la profesora Adela Mora

Evviva il fesso! E a te non pare una rivoluzione che il Sindaco mi vuol far pagare per le erbe create da Dio e che io stesso raccolgo? O ti sei guastato la testa anche tu?

Tomasi di Lampedusa,
El Gatopardo, parte V (manoscritto de 1957)

ABREVIATURAS

- AVM-Cn: Archivo villa de Madrid, contaduría. Se cita junto a la signatura del expediente que se trate.
- AVM-Cr: Ídem, corregimiento.
- AVM-S: Ídem, secretaría.
- LA: Libros de acuerdos del ayuntamiento de Madrid, se cita con la fecha de la sesión correspondiente.
- NCPAR: Nueva Colección de los Reales Decretos, Instrucciones y Órdenes de S. M. para el establecimiento de la Contaduría General de Propios y Arbitrios del Reyno

ÍNDICE

PRÓLOGO de Adela Mora	15
INTRODUCCIÓN	19

Primera parte LA ORGANIZACIÓN

I. LA HACIENDA JOSEFISTA	29
1. Una nueva organización	30
2. La supresión de las sisas: la consignación real	31
a) Un problema latente	31
b) El real Decreto de 21 de agosto	33
c) La consignación real	35
d) Una rebaja forzosa	37
e) El impuesto municipal	37
3. El fracaso de la consignación: la política de arbitrios	41
a) La cesión del estanco de aguardiente	41
b) La explotación del estanco	42
c) La insuficiencia del estanco	43
d) El plan de gastos de abril de 1812	45
e) Un déficit voraz	47
4. Una cuña constitucional	49
5. Últimos intentos de arreglo: la incapacidad de los arbitrios	51
6. Una valoración	54
II. LA HACIENDA DOCEAÑISTA	57
1. Las reformas de la Hacienda: consecuencias municipales	57
a) El debate sobre las contribuciones indirectas	58

b) El nuevo plan de contribuciones públicas	59
2. Las reformas del municipio: consecuencias hacendísticas	61
3. La supresión de los terrenos de propios: un giro en la concepción de las haciendas municipales	63
4. Madrid tras la salida de los franceses	66
5. El intento de supresión de las sisas	68
6. Una valoración	69

III. LA VUELTA AL MODELO TRADICIONAL 71

1. La restauración absolutista	72
2. Un nuevo sistema de recaudación	75
3. El nuevo sistema y la villa de Madrid	77
4. La Instrucción de 1818	80
a) La junta directiva	80
b) La administración y la contaduría	83
c) Los fielatos de recaudación	85
d) Los fielatos de intervención	85
e) Las casas de matadero y rastro	85
f) Las visitas	86
g) El resguardo	87
5. Crisis del nuevo sistema	87

IV. LA HACIENDA EN EL TRIENIO LIBERAL 91

1. Los derechos de puertas: los Decretos de 28 de noviembre y de 3 de diciembre de 1820	95
2. Un intento de ordenación: la Memoria de 1821	98
a) La situación de la que se parte	98
b) El presupuesto para el segundo año económico	100
3. Discurso sobre el sistema de ingresos	102
a) Imposiciones indirectas	102
b) Sistema mixto	104
c) Contribuciones indirectas	106
d) Informe del ayuntamiento	106
4. La aprobación del presupuesto	109
5. El Reglamento de derechos municipales de 1821	110
a) La comisión de hacienda municipal	111
b) La administración de derechos municipales	113
i) La administración principal	113
ii) La contaduría principal	114
iii) El agente	115
iv) El portero	115

v) La administración interior	115
vi) El administrador	115
vii) El interventor	116
viii) El depositario	116
ix) Los vistas	116
x) El fiel romana	117
xi) Los ordenanzas	117
xii) El alcaide	118
xiii) Los mozos	118
xiv) Los administradores de puertas	118
xv) Casas rastro y matadero	120
xvi) La visita	121
xvii) El cuerpo de celadores	123
6. El tercer año económico	124
a) La ejecución del presupuesto	125
b) El presupuesto para el tercer año económico	126
7. La Instrucción para el gobierno económico-político de las provincias de 1823	128
8. ¿Una «época dorada» para la fiscalidad municipal?	130
 V. OTRA VEZ EL MODELO TRADICIONAL	131
1. La insuficiencia del modelo tradicional	134
a) La propuesta de José Dueñas	137
b) La petición de Orfila	138
2. Las reformas de López Ballesteros	142
3. La Instrucción de 1828	144
a) Una nueva organización.....	145
b) El director general	145
c) La contaduría general	146
d) El pagador de las oficinas generales	147
e) El archivo general	147
f) Los subdelegados	147
g) Los contadores principales	148
h) Los tesoreros	148
i) Los visitadores	149
j) Los ayuntamientos	149
4. La Instrucción y el ayuntamiento madrileño	150
5. El presupuesto general de la Monarquía para 1830: consecuencias municipales	152
6. La nueva empresa de los derechos municipales	153
a) Las condiciones del arriendo	154
b) El arrendamiento en el municipio	156

c) Los empleados municipales	160
7. Un intento de reforma municipal en el ocaso del reinado	161
a) El estado de 1830	161
b) Las causas del déficit	162
c) Arbitrios y economías	164
d) Adición de 1832	165
8. Una valoración	165

VI. LA HACIENDA DE LA VILLA TRAS LA MUERTE DE FERNANDO VII: UN EPÍLOGO	167
---	-----

Segunda parte

LOS INGRESOS Y GASTOS

I. LOS INGRESOS MUNICIPALES	173
1. Los propios y las rentas del municipio	175
a) Tierras	176
b) Barcas	177
c) Pontazgo	178
d) Bancas y baños	179
e) Fiel contraste y fiel almotacén	183
f) Peso real	185
g) Puestos de horchata	187
h) Muladares	190
i) Las sillas del paseo del Prado	193
j) El privilegio de recoger caballerías	194
k) El barrido de la plaza y plazuelas	194
l) El arrendamiento de las romanas	195
ll) El producto de cajones	197
m) Las multas de los repesos	199
n) Las medidas de madera	201
ñ) Los menuderos, mesas y bancas	201
o) El arbitrio de tabernas	202
p) Otros	205
2. Los arbitrios, impuestos y sisas	205
a) Concepto y naturaleza de los arbitrios	206
b) Concepto y naturaleza de las sisas	206
c) Clases de sisas	208
d) Las sisas madrileñas	208
i) Ocho mil soldados	210
ii) Carnicerías y aceite	210
iii) Nuevos impuestos	210

iv) Moderada de carnes	210
v) Nueva de carne	210
vi) Vino y aceite de tres millones	211
vii) Vino de quiebras de millones	211
viii) Ordinarias	211
ix) Cuarto de palacio	211
x) Sexta parte	212
xi) Vino de la plaza	212
xii) Vino de salud y primera blanca	212
xiii) Carnero de hospitales	213
xiv) Vino de Lérida	213
xv) Segunda blanca del carbón	213
xvi) Carnero de quiebras	213
xvii) Vino de Olivenza	213
xviii) Tercera blanca del carbón	214
xix) Segunda onza de azúcar	214
xx) Vino bajada de medidas	214
xxi) Cuarta blanca del carbón	214
xxii) Vino error de medidas	214
xxiii) Renta del tabaco	215
xxiv) Cacao y chocolate	215
xxv) Renta del hierro	215
xxvi) Carnero de fuentes	215
xxvii) Maravedí de la cárcel	215
xxviii) Vaca de hospitales	215
xxix) Primer cuartillo de real	216
xxx) Segundo cuartillo de real	216
xxxi) Real en cabeza de cabrito	216
II. LOS GASTOS MUNICIPALES	217
1. La estructura del gasto del municipio	217
2. Los grandes problemas del gasto municipal	218
a) La deuda	218
b) Las refacciones	220
c) La beneficiencia	221
d) El fraude	222
e) Los créditos y las deudas con el Estado	222
PARA CONCLUIR	225
ANEXO GRÁFICO DE INGRESOS Y GASTOS	229
RELACIÓN BIBLIOGRÁFICA	241

PRÓLOGO

Este trabajo realiza una incursión en aspectos de nuestra historia no demasiado explorados: la hacienda municipal en los inicios contemporáneos. Si bien la hacienda pública cuenta con análisis ya clásicos¹, aun tocando éstos a veces el tema de la hacienda local, ésta se encuentra aún bastante desprovista de estudios particularizados.

Al plantear el contenido de esta investigación, puesto que se trataba de estudiar un municipio, el elegido habría de ser Madrid, ya que la investigación aquí se realizaba; y centrado el tema en la edad contemporánea, mejor comenzar desde el principio. La acotación tradicional por reinados relativa al de Fernando VII pareció muy representativa puesto que en ella jugaban, por los avatares históricos, varios modelos. A priori se preveían, sucediéndose en el tiempo, el napoleónico, el liberal y el absolutista. La realidad, plasmada en la abundante documentación que para esta trabajo ha manejado el autor, se encargó de añadir complejidad y enriquecer los modelos previstos.

En efecto, esta división correspondiente a tres hipotéticos modelos ideales, arrancaba de la organización de la hacienda municipal madrileña del antiguo régimen, dependiente de la Junta de Propios y Sisas conectada no tanto con el ayuntamiento como con la Contaduría General de Propios y Arbitrios del Reino, y basada fundamentalmente en las sisas —en contradicción con la tendencia a hacer descansar la economía municipal en sus recursos patrimoniales—.

La dominación napoleónica pretendió dar al traste con esta estructura, configurando desde 1809, una hacienda local también dependiente de la real hacienda que cobraba las sisas y entregaba una consignación mensual al municipio para que hiciera frente a sus gastos. En 1811 se reconoció el fracaso del modelo pero los arreglos que se fueron ensayando no resultaron más efectivos.

La disolución del ayuntamiento josefista en agosto de 1812 permitió al «gobierno legítimo» un breve ensayo que no fue sino la reposición de la antigua Junta de Propios y Sisas. Desde septiembre del mismo año hasta junio de 1813, en que los

¹ M. ARTOLA, *La hacienda del siglo XIX. Progresistas y moderados*, Madrid, 1986; J. FONTANA, *La quiebra de la monarquía absoluta 1814-1820*, Barcelona, 1987; F. COMIN COMIN, *Hacienda y economía en la España contemporánea (1800-1936)*, 2 vols., Madrid, 1988, por no citar sino algunos de los más representativos.

franceses abandonaron Madrid, imperó de nuevo el modelo francés, que no creó sino un municipio dependiente y carente de autonomía en lo económico.

El nuevo plan de contribuciones públicas establecido por el gobierno constitucional en el decreto CCCIV de 13 de septiembre de 1813, haría hincapié en la imposición directa frente a la indirecta sobre el consumo; el modelo liberal de municipio «constitucional» diseñaba un Estado centralista en el que los municipios tampoco gozaban de autonomía. Pese a ello, Madrid, tras la salida de los franceses, volvió una vez más a su planta de 1808, es decir la del antiguo régimen, y al sistema tradicional de sisas, en contradicción con los postulados liberales.

En este orden de cosas, que la restauración absolutista que protagonizó Fernando VII volviera al ayuntamiento madrileño a la planta y forma que tenía en 1808 «antes de la revolución» no aportaba teóricamente grandes novedades, al menos estructuralmente. Algún cambio introdujo la reforma de Garay (decreto de 30 de mayo de 1817), con la transformación de las sisas en derechos de puertas de cuya recaudación se encargaría la real hacienda y cuyo destinatario no era sólo el ayuntamiento, que percibía la cantidad que le correspondía en función de lo que se hubiera recaudado.

El trienio liberal fue, en palabras del autor, «el primer intento acabado de ordenar con criterios modernos» la fiscalidad municipal. El planteamiento descansaba en la teórica igualdad de los ciudadanos ante la ley y los impuestos. Los recursos servirían para hacer frente, tan sólo, a los gastos del ayuntamiento. Para ello, recuperó la administración de las sisas. La Comisión de Hacienda municipal —creada por el reglamento de 10 de agosto de 1821 de gobierno interior del ayuntamiento— se ocupó de recaudar las contribuciones y de administrar los caudales de la villa. Pero se mantuvieron los derechos de puertas —imposiciones indirectas— y se diseñó una hacienda encuadrada en un sistema de centralización económica en el que el municipio dependía de la Diputación.

La vuelta al absolutismo restauró el sistema hacendístico impuesto en la reforma de Garay que, en esta segunda etapa mostró su insuficiencia. La administración de la hacienda municipal pasó a manos de la real hacienda, que unió sus derechos a los del municipio. El real decreto de 3 de abril de 1824 creó la Dirección General de los Propios y Arbitrios del Reino, cuyo director general dependía directamente de la Secretaría del Despacho de Hacienda. Cuando en 1830 se arrendaron por la real hacienda —no por los municipios— los derechos de puertas y arbitrios de las capitales de provincias y puertos habilitados a la «Empresa de los Derechos de Puertas», se volvió al sistema de gestión privada de la fiscalidad municipal, despojando aún en mayor medida a Madrid, puesto que, perdida la dirección y la administración de sus rentas, perdió también todo derecho sobre ellas a cambio de una cantidad mensual.

A través de la somera visión expuesta en estas líneas pretendo apuntar esquemáticamente lo que en las páginas que siguen se estudia en profundidad, pudiendo comprobarse la inexistencia de modelos claramente delimitados en sus rasgos y en el tiempo; se percibe cómo se entremezclan en ellos las soluciones de unos y de otros, a la búsqueda no tanto —o no sólo— de la efectividad en la hacienda municipal sino en cuanto ésta tenía repercusiones en la hacienda real. Cada uno de los

modelos de gobierno sucediéndose en el tiempo le otorga a la hacienda municipal unos rasgos específicos: así, no hay un único modelo liberal, sino dos modos distintos de organizar las finanzas locales en cada una de las dos ocasiones en que se instauró un gobierno constitucional durante el reinado de Fernando VII. Lo mismo cabría decir de los períodos absolutistas con el mismo monarca. Y como trasfondo, el poder central, ya fuera el del monarca absoluto, ya fuera en sistemas constitucionales, organizando la vida económica de los pueblos, sin renunciar nunca al control de las haciendas locales.

El trabajo de Martínez Neira es importante. Se encuadra, aparentemente, en el terreno de la microhistoria, afirmación que no tiene, desde mis parámetros metodológicos, carga alguna peyorativa. Pero además, recurre a la referencia continua a un entorno mucho más amplio, en el que se mueven las decisiones del poder central; gracias a ello las páginas que siguen demuestran que los sistemas de hacienda municipal que durante el primer tercio del siglo XIX se implantaron no se quedaban tan sólo en el nivel local sino que tenía mucho que ver con los resultados que se querían para la hacienda real.

No le hubiera sido posible llegar al análisis detallado de todo cuanto en este libro se trata de no haber recurrido al ingente y vivo material documental del Archivo de Villa de Madrid, yendo más allá de lo que la inerte literatura de decretos, reglamentos e instrucciones pueda mostrar. En este sentido, este trabajo de Historia del Derecho —que podría no serlo según lo que algunos iushistoriadores entienden por tal—, gana con ello en profundidad y facilita la comprensión del significado de la hacienda municipal durante el primer tercio del siglo XIX, en este caso concreto, la de la Villa de Madrid.

Prudentemente, Manuel Martínez Neira calla las condiciones no siempre fáciles en que se ha desarrollado su tarea archivística por las trabas que tuvo que superar: los cortos horarios de apertura al público, la prohibición de hacer fotocopias sin facilitar otros medios para la reproducción de los documentos, la imposibilidad de utilizar ordenador por falta de las instalaciones adecuadas, el número limitado de expedientes que se pueden consultar diariamente, y el manejo de una ingente documentación sin inventariar adecuadamente.

Para llegar al final de su obra ha realizado la paciente y dura labor de archivo que los historiadores conocemos y que lo es por sí misma, sin necesidad de que las personas encargadas de los centros públicos de investigación —archivos y bibliotecas— aporten su granito de arena. Por ello creo que debe ponerse de manifiesto todo esto para que las autoridades encargadas de velar por la utilización —la buena utilización— del patrimonio cultural documental y bibliográfico sean conscientes de ello, y que en tales lugares, —con alguna excepción digna de consideración—, deje de contemplarse al investigador como un infractor en potencia, indigno de confianza, incapaz de manejar adecuadamente los fondos, al que no hay sino que ponerle trabas para ver si desiste.

Que pese a ello una legión de estudiosos continúe acudiendo a esos centros, en un ejercicio de búsqueda de la trasmutación de la materia, desde el arcano del docu-

mento a su conocimiento en la obra publicada gracias al trabajo y la interpretación del investigador², no debería evitar que los encargados de dirigir y gestionar estos centros culturales reflexionaran acerca del modo de facilitar al máximo las tareas que en ellos se desarrollan y para las que, en teoría, están destinados.

Adela Mora

² La vocación del investigador va, desde luego, más allá de las dificultades, y ello ha quedado bien plasmado en el atractivo trabajo de A. FARGE, *La atracción del archivo*, Valencia, I.V.E.I., 1991.

INTRODUCCIÓN

Como es conocido, las revoluciones burguesas produjeron una alteración en el desarrollo de las instituciones, alteración que en algunas ocasiones acabó con la vida de las mismas y en otras provocó una mutación más o menos profunda. Cuando comencé el estudio que ahora entrego a la imprenta, buscaba comprender el origen de las haciendas municipales contemporáneas, es decir de las que nacieron de la revolución. O si se quiere, saber cómo habían afectado éstos cambios a esta institución clave para el conocimiento de la realidad municipal y hacendística.

Para ello me situé en 1808, año del comienzo del reinado de Fernando VII, pero sobre todo año de crisis política ocasionada por la invasión francesa entre otros factores. Para comprender cómo franceses y liberales alteraron el orden de las haciendas locales, era una necesidad prioritaria conocer cómo eran éstas en el antiguo régimen. Y esto tomando como base un municipio concreto, Madrid, que además era el municipio paradigmático del nuevo régimen, la capital del Estado nacional.

El punto de partida era razonable, el de conclusión una cuestión abierta. Primero pensé en fechas emblemáticas, como la revolución de 1868, o la reforma de Mon de 1845. Pero la abundancia de la documentación que se conserva en el Archivo de Villa sobre estos temas, hacía necesaria una cronología reducida, aunque a la vez lo suficientemente amplia para poder llegar a unas conclusiones aceptables.

Por lo tanto comencé el estudio fijándome en la organización de la hacienda madrileña del antiguo régimen. Comprobé que la reforma carolina sirvió de catalizador de lo que se puede llamar modelo tradicional, ya que en él aparecen elementos de larga perduración.

Frente a ese modelo surgían otros, el josefino o josefista, el de Cádiz o doceañista, el del sexenio absolutista, el del trienio liberal, etc. Modelos que a medida que avanzaba en la investigación se volvían más complejos y eran difícilmente reducibles a la unidad.

También quedaba claro que en el reinado de Fernando VII había material más que suficiente para estudiar cómo el modelo tradicional era pensado y modificado por el nuevo orden.

* * * * *

En cuanto a las fuentes empleadas, hay que señalar que fundamentalmente son los fondos del Archivo de Villa, con algunas excepciones³. Esto supone que el estudio se hace «desde abajo», es decir desde la realidad documentada de la vida municipal; no desde los datos que aportan los órganos del poder central, aunque obviamente los haya tenido en cuenta.

La Contaduría general de propios y arbitrios fue desde su creación en 1760, el órgano central que fiscalizó y dirigió las distintas haciendas municipales del Reino. De forma que su archivo, donde anualmente se enviaban —con omisiones, por supuesto— las cuentas de los distintos ayuntamientos sería de gran importancia para esta investigación, y facilitaría mucho la misma. Ocurre sin embargo que ha desaparecido⁴. De manera que no contamos con lo que sería una fuente principal para el estudio de las haciendas municipales de ese periodo. Y, por ello, sólo desde los archivos locales se puede realizar este estudio.

Los expedientes conservados en el Archivo de Villa se cuentan por millones. He fichado más de 3.000, aunque no todos me han sido útiles. También he utilizado los llamados *libros manuscritos*: los de acuerdos del ayuntamiento, los de acuerdos de la Junta de Propios y Sisas. Son más de 50 los correspondientes al periodo que abarca este estudio.

Otro capítulo de las fuentes utilizadas está constituido por la legislación del momento, que además de aparecer en distintos diarios —el diario de Madrid⁵, la Ga-

³ Sobre los fondos del Archivo véase, María del Carmen CAYETANO MARTIN, «El siglo XIX en el Archivo de Villa», en *Madrid en la sociedad del siglo XIX, I Coloquio de historia madrileña*, Madrid, 1986, vol. II, 549-569. Sobre los fondos específicos para el estudio de la fiscalidad, Carlos DE LA HOZ GARCIA, «Fuentes para el estudio de la fiscalidad municipal en el Madrid de la Edad Moderna», en *Primeras jornadas sobre fuentes documentales para la historia de Madrid*, Madrid, 1990, 329-333.

⁴ Cuando en el trienio se suprimió esta Contaduría sus fondos se enviaron a las Diputaciones; y al restablecerse el antiguo orden y suprimirse la Contaduría en 1824, esos fondos pasaron al ministerio de Hacienda. De allí parece ser que se trasladaron al Archivo General de la Administración, y por último en el incendio de 1939 desaparecieron. He buscado esos fondos en el archivo de la extinguida Diputación de Madrid, en el Archivo general de Simancas, en el Archivo general de la Administración de Alcalá de Henares, en el Archivo histórico nacional... no hay rastro de ellos. Por su cuenta Carmen García y Carlos de la Hoz han llegado a la misma conclusión.

⁵ Como se sabe el diario oficial del momento era la Gaceta de Madrid, en la que se publicaban en primer lugar «artículos de oficio» y a continuación noticias extranjeras y de España, para terminar con unas secciones de avisos y anuncios. Obviamente lo que interesa es fundamentalmente el primer apartado. Pero el Ayuntamiento de Madrid más que utilizar ese periodico se guiaba —continuamente aparece en la documentación— por el llamado Diario de Madrid. Tiene su origen en enero de 1759 con el nombre de Diario noticioso u niversal, a partir de 1 de julio de 1786 se llamó Diario curioso, erudito, económico y comercial, desde 1 de enero de 1788 Diario de Madrid, el 1 de abril de 1825 Diario de avisos de Madrid, a partir de 2 de febrero de 1836 otra vez Diario de Madrid y desde 1847 y hasta 1918 en que desaparece Diario oficial de avisos de Madrid. Este periodico también tenía una sección de oficio y luego pasaba a distintas informaciones: tiempo, libros, anuncios breves, etc. Lo que me interesa señalar es que alguna vez los peritos municipales dicen que una disposición no está vigente por publicarse en la Gaceta de Madrid, sino que debe ser circulada entre los afectados (AVM-S 3-296-21).

ceta— se recogió en colecciones: el Prontuario de las leyes y decretos de José Napoleón I, la Colección de los decretos y órdenes de las Cortes de Cádiz, los decretos de Fernando VII y los de las Cortes del Trienio. Además sobre las disposiciones relativas a la Hacienda se publicaban unas Guías o Estados de Hacienda por cada año. Los Diarios de sesiones de Cortes ofrecen también una información valiosa para interpretar en su contexto las distintas normas.

Me ha interesado más la hacienda real, la que existía en Madrid, que las elucubraciones sobre los reglamentos. Cuando me fijo detenidamente una disposición normativa, no lo hago como un estudio de la realidad social, pues no es la única — la norma queda en papel mojado frecuentemente—, sino como acercamiento a lo que era la mentalidad dominante del momento, la del poder. Los decretos, órdenes, etc. indican lo que desde el poder se quería, cómo se veía a la sociedad, con independencia de que después esto se cumpliera o no. El análisis del texto legal es desde luego un estudio de pensamiento jurídico, que me parece —al igual que el filosófico, económico, etc.— importante conocer, pero que no siempre muestra toda la realidad.

En cuanto a la bibliografía, señalaré ahora las grandes líneas de investigación existentes, con sus aportaciones. Un estudio más detenido se hará en cada capítulo. Pienso que dentro de los estudios que interesan en un sentido amplio —fiscalidad municipal siglos XVIII y XIX— se pueden hacer la siguiente división: estudios antiguos, estudios de teoría de hacienda, estudios historico-económicos.

Un estudio antiguo se tiene en Manuel Cristobal y Mañas⁶; libro que trata de la hacienda madrileña desde el trienio en adelante, aunque dedica una breve introducción a tiempos anteriores. Sin embargo es bien poco lo que aporta para esta investigación. El autor —oficial de la secretaría del ayuntamiento— se limita con frecuencia y sin decirlo, a copiar informes o expedientes, que por supuesto tenía a su disposición. Lo malo no es eso, que daría al menos una serie de noticias, sino que copia de forma desordenada, sin dar un esquema explicativo de lo que narra; copia de forma parcial, tomando una serie de datos y dejando otros —fundamentales— en el tintero; y —quizá lo más grave— copia de forma equivocada⁷.

Por otro lado Gabriel Solé Villalonga ha dirigido dos tesis sobre estos temas: la

⁶ *La hacienda municipal de la Villa de Madrid, estudio histórico-crítico*, Madrid, 1900.

⁷ Así, cuando anuncia el presupuesto del primer año económico del trienio, lo que transcribe es lo que la Memoria de 1821 preveía de ingresos y gastos para el segundo año económico (1821-1822), si se hubiera continuado con el sistema que se utilizaba en el momento de redactar ese documento. Pero con la respuesta a la Memoria se modificó el sistema, de forma que esa estimación, que nunca fue presupuesto, no se aproxima ni de lejos al aprobado. Y cuando promete el presupuesto del segundo año económico, Cristobal y Mañas copia el estado de los ocho primeros meses de ese año, que aparecen en el Memoria de 1822. Tampoco son correctos otros muchos datos, que omito por no ser este el lugar para semejante crítica. Lo que sí quiero hacer ver es que al consultar este libro ha de hacerse con cautela y contrastar los datos que aporta con los documentos que señala, porque la diferencia puede ser enorme.

de Juan San Román Rodríguez⁸ y la de Maximino Carpio García⁹. El problema de en ambos trabajos, sobre todo del primero, es que parten de la teoría de la Hacienda pública, y no de la realidad histórica. Así se ensaya sobre la hacienda madrileña de ese periodo una serie de clasificaciones del gasto público que se han propuesto en la obra del profesor Beltrán, en la legislación española actual, en las Naciones Unidas, etc. Esto provoca desde mi punto de vista unos resultados anacrónicos, que no tienen que ver con la institución estudiada, y que no son de utilidad directa al historiador que se esfuerza por comprender la sociedad pasada —no se si será de alguna utilidad para los estudiosos de Hacienda pública—.

Algo parecido ocurre con la obra de Isabel Mugartegui Eguia¹⁰, donde se intenta realizar un estudio sobre la hacienda y la fiscalidad en las provincias vascas, desde la guía analítica que vincula fiscalidad y evolución del gasto, en un periodo que abarca desde el siglo XVI hasta comienzos del XX¹¹.

Un enfoque distinto —menos positivista— se da por un conjunto de historiadores que mayoritariamente enseñan historia económica, y donde hay una gran diversidad de resultados. Señalaría entre otros a Carmen García, Carlos de la Hoz y Javier Hernando Ortego, que en mi opinión aplican una metodología adecuada y tratan con profundidad los problemas, y lo que es más importante explican. Men-

⁸ *La hacienda de Madrid en el periodo 1834-1843. Una aproximación al estudio de las haciendas locales en el siglo XIX*, inédita, Universidad Autónoma de Madrid, sin fecha, luego publicada en síntesis con un ambicioso título, «La hacienda local madrileña en el siglo XIX», en *Madrid en la sociedad del siglo XIX. I Coloquio de historia madrileña*, Madrid, 1986, vol. I, pp. 515-525.

⁹ *Las haciendas municipales en la década moderada [1844-1854]. Especial referencia a la del municipio de Madrid*, inédita, Universidad Autónoma de Madrid, sin fecha, que sería continuación de la anterior.

¹⁰ *Estado, provincia y municipio. Estructura y coyuntura de las haciendas municipales vascas. Una visión a largo plazo (1580-1900)*, Oñati, 1993.

¹¹ Se trata de un trabajo serio, al que haría algunas observaciones. No me parece oportuna una división por siglos, como la que se hace en el trabajo, pues el vértigo de las centurias no tiene porqué ocasionar modificaciones institucionales. Y es que no hay que olvidar nunca que nos encontramos con una realidad institucional, y por lo tanto social, que no existe asépticamente, sino que se mueve en un marco jurídico, político, económico... Aspecto al que se alude en el trabajo, aunque luego apenas se desarrolla. Así por ejemplo al comenzar el siglo XVIII, se da un cambio dinástico, y con él se emprenden una serie de reformas —las reformas borbónicas— en las haciendas locales, a las que no se alude. Más en concreto, la vasta labor que Carlos III realiza en el control de las haciendas locales y que afectó a las haciendas vascas, como corrobora la autora citando a Egaña, no es atendida. Esto lleva a que cuando se intenta hacer comparaciones de cantidades se recogen secuencias temporales que no tienen nada en común, por existir en ellas sistemas fiscales distintos. Así se hace un año común del periodo 1830-45, para compararlo con otro, sin darse cuenta que desde 1830 a 1845 se produce una transformación radical de las haciendas locales, que no se estudia, y que vicia cualquier comparación. En definitiva, falta situar las cuentas en su realidad social, porque sólo así se puede explicar algo. El estudio de la autora es pues una aproximación contable, que aporta algunas ideas sugerentes, pero —como ella señala— queda mucho por explicar de las haciendas vascas en ese periodo.

ción especial merece la reciente tesis de la profesora madrileña, que supone una referencia obligada para esta línea de investigación¹².

Pero siguen siendo escasas las publicaciones sobre las finanzas municipales en el Estado liberal, y por ello falta mucho camino para llegar a una visión general.

* * * * *

Para entender lo que ocurrió en las haciendas municipales a partir de 1808, hay que volver la vista atrás, fijarse en las reformas borbónicas, y más en concreto en las carolinas, que fueron el esqueleto de esta institución durante largos años.

Efectivamente, Carlos III acometió con una sugerente prontitud la creación de un órgano que centralizó la dirección de los propios y arbitrios del Reino. Se trataba de la Contaduría General de Propios y Arbitrios, dependiente del Consejo de Castilla y dotada de amplias competencias¹³.

Su cometido principal fue asignar a cada pueblo un reglamento, y controlar la administración de los propios y arbitrios municipales¹⁴. Los reglamentos describían los ingresos que tenía cada municipio, sus cargas, y daban algunas disposiciones de organización. A la larga, estos reglamentos funcionaron fundamentalmente como una ordenación del gasto, disponían cuanto, y en qué, debían gastar los entes locales. Eran por lo tanto una especie de presupuestos perpetuos, dictados desde el poder central. Cualquier gasto extraordinario superior a cien reales —cantidad ciertamente pequeña— debía ser consultado y aprobado por el Consejo de Castilla. Un control realmente agobiante.

De esta manera, desde el poder central se ordenaba toda la vida municipal, porque controladas sus finanzas difícilmente no se controlaba su política.

En dependencia de la Contaduría, en cada municipio se creó una Junta de Propios y Arbitrios, denominada en Madrid de Propios y Sisas. Estas Juntas eran unos mini-ayuntamientos, formadas por unos regidores —dos generalmente, y en Madrid, morada de los augustos soberanos, cinco—. El secretario de ayuntamiento lo era también de la Junta; y las presidía el Corregidor. Tras las reformas de 1766, el personero y los diputados pasaron también a integrarse en estas Juntas.

De esta forma el ayuntamiento de regidores era despojado de competencias económicas y veía una vez más reducidas sus atribuciones.

La hacienda de la Villa, tal y como se dibujaba en el Reglamento de 1766, tenía unos ingresos de casi doce millones de reales frente a unos gastos de casi once;

¹² Carmen GARCIA GARCIA, *La crisis de las haciendas locales: de la reforma administrativa a la reforma fiscal (1743-1845)*, Universidad Autónoma de Madrid, 1994.

¹³ Sobre la reforma carolina puede verse mi libro *Una reforma ilustrada para Madrid. El Reglamento del Consejo Real de 16 de marzo de 1766*, Madrid, 1994 (en adelante *Una reforma...*), y la bibliografía indicada en él.

¹⁴ El reglamento de Madrid aparece editado en M. MARTINEZ NEIRA, *Una reforma...*

aunque esto era en el papel, en la realidad era deficitaria. Los ingresos procedían fundamentalmente de los arbitrios y sisas, casi el 98 por 100; y el resto de los propios. Esta estructura de ingreso puede considerarse excepción en el panorama peninsular, en el que los propios suponían la mayor parte de los ingresos municipales.

Las sisas se encontraban en administración, es decir era el propio municipio, a través de un mecanismo complicadísimo el que se encargaba de su explotación. Sin embargo los propios y arbitrios se arrendaban.

En cuanto al gasto, un 60 por 100 se debía a los intereses de la deuda municipal; casi un 10 a salarios, un 9 por 100 para la refacción eclesiástica; un 8 por 100 para causa pública; un 7 por 100 para beneficencia; el 0,8 para festividades de iglesia y limosnas voluntarias.

Como queda patente el pago de la deuda era el principal problema con el que se tenía que enfrentar el ayuntamiento. Su origen generalmente estaba en préstamos realizados al ayuntamiento para necesidades de la real Hacienda. Esta deuda fue creciendo hasta alcanzar más de 200 millones de reales, importe que correspondía a 6.065 títulos, que en la terminología de la época se denominaban «efectos de Villa».

El capital era facilitado generalmente por comunidades religiosas —algo más de la mitad—, instituciones piadosas o particulares acomodados. A estos préstamos se les asignaba un interés entre un 8 y un 10 por 100, que luego fueron rebajados hasta el 3 por 100.

Es interesante señalar que en el siglo XVIII ya no era un negocio rentable esta inversión, no sólo por la rebaja de los intereses, sino sobre todo porque no se pagaban. Los déficits municipales iban a parar siempre al impago de los intereses de la deuda. Así cuando se hizo el Reglamento de 1766, se debían los intereses de 10 años, y al final del reinado de Fernando VII éstos superaron al capital de la deuda.

Esta era en esencia la situación que los franceses encontraron cuando asumieron el gobierno del país. Sobre ella aplicaron soluciones urgentes, motivadas por las necesidades numerarias de la guerra. Pero interesa señalar que realizaron un vaciado del municipio, de sus atribuciones y de sus potestades. Realidad que luego, de distinta manera, los liberales españoles van a utilizar a lo largo de la primera mitad del siglo XIX. La consignación real, la sustitución de las sisas de Madrid por una asignación del Estado, quizá sea lo más llamativo de este periodo.

Los doceañistas, con su nuevo plan de contribuciones públicas, intentaron una nueva comprensión de los problemas. Lo esencial, para lo que aquí interesa, era la supresión de las contribuciones impuestas sobre los consumos, las sisas, que suponían más del 90 por 100 de los ingresos madrileños, como se ha dicho. Lo que hacía que esa supresión fuese difícilmente realizable. La instauración del presupuesto anual, y el intento de supresión de los terrenos de propios fueron otras premisas que configuraron el momento.

El regreso de Fernando VII fue la vuelta al modelo tradicional, pero una vuelta en un contexto difícil, sobre todo ocasionado por la debacle de los ingresos americanos. Esto produjo una crisis del sistema que se intentó paliar con la reforma de

Martín de Garay, reforma que puso en marcha una contribución general y un derecho de puertas. Esta medida tenía claras consecuencias para los arbitrios municipales. Estos pasaron a ser administrados por los empleados de la Hacienda regia, con la sola intervención de los partícipes. De esta forma las antiguas sisas madrileñas se convirtieron en los nuevos derechos de puertas.

El trienio liberal supuso la vuelta a la legalidad doceañista y un intento serio de solucionar los problemas económicos del ayuntamiento de Madrid. Para ello se pidió una memoria donde el ayuntamiento expresase cómo hacer frente a las necesidades financieras derivadas de sus atribuciones. En esa memoria se descartó la supresión de las sisas o derechos de puertas, que pasaron a denominarse derechos municipales. También se clarificó la deuda, dividiéndola —prácticamente en mitades iguales— entre el municipio y la nación. De esta forma Madrid se veía liberado de un gasto considerable y se ponían los medios para una solución del problema.

La llamada década ominosa estuvo dirigida por López Ballesteros, que sustituyó la contribución directa del Trienio por cuatro contribuciones diferentes, cada una con un ámbito territorial distinto; y mantenía los derechos de puertas. Fue el momento de la creación de la Dirección general de propios y arbitrios, con lo que el Consejo dejaba de tener competencias en la dirección de las rentas municipales. Fue también el momento de un aumento de la presión fiscal (un 5 por 100), ante las dificultades de la Hacienda. Y por último fue la vuelta al negocio de particulares, después de casi un siglo de administración fiscal pública.

Con la muerte de Fernando VII la crisis se agudizó debido a la guerra, lo que ocasionó un nuevo descuento en los ingresos de la Villa, esta vez de un 10 por 100. Al terminar el contrato de la Empresa de derechos de puertas, se volvió al sistema anterior, y hasta 1835 estuvo vigente el Reglamento de 1766.

* * * * *

De lo dicho hasta ahora, tal vez podamos adelantar una reflexión global. Se trataría de comprender qué relación existe entre el modelo de sociedad, el concepto de propiedad y el sistema de hacienda. Y esto porque parece que existe una correlación entre estas realidades, al menos en el paso del antiguo régimen al régimen constitucional que se opera en España al despuntar el siglo XIX.

Como se sabe la sociedad del antiguo régimen era una sociedad estamental, lo que significaba que no era igualitaria y que se estructuraba de una forma privilegiada, en el sentido de que cada estamento tenía una función y un estatuto jurídico propio para llevarla a cabo. Esta configuración venía unida a lo que se ha llamado un modo de producción sin que se pueda señalar una diferencia clara entre una y otro.

Este tipo de economía determinaba un concepto de propiedad, que no era absoluto, como luego sucederá con el capitalismo¹⁵. Como se sabe la propiedad no es

¹⁵ M. PESET, *Dos ensayos sobre historia de la propiedad de la tierra*, Madrid, 1982; existe una edición escolar valenciana de 1994.

una institución unívoca, sino que a lo largo de la historia ha ido adoptando distintas configuraciones¹⁶. La sociedad del antiguo régimen, esa sociedad estamental, provocaba una fragmentación en la propiedad, que aseguraba el dominio de unos estamentos sobre otros.

La propiedad se hizo estática, descansaba sobre el patrimonio, no sobre el capital. Los municipios del antiguo régimen, que reflejaban esa sociedad, también reproducían ese esquema económico. Sus haciendas descansaban sobre sus patrimonios. Ciertamente éstos, a medida que se desarrollaba una ciudad, quedaban cortos; pero el ideal seguía siendo los propios, y los arbitrios se veían como algo excepcional, transitorio.

Esta estructura cambió con la revolución, cuando la sociedad se hizo formalmente igualitaria y el dominio se casó con el capital. La propiedad se reunió, para hacerse más ágil y productiva, según los nuevos modos. En esa dinámica capitalista los puntos basilares de las haciendas municipales fueron los impuestos; realidad que cristalizó con la desamortización.

* * * * *

Todas las cantidades monetarias se expresan en reales y maravedís. Como se sabe un real equivalía a 34 maravedís. Para hacer más ágil la lectura, generalmente he suprimido los maravedís, pues su importancia económica era mínima; por ello en algunas operaciones aritméticas puede existir una diferencia de más o menos un maravedí.

* * * * *

Hasta aquí la introducción, sólo faltan los agradecimientos. En primer lugar a la profesora Adela Mora —a quién va dedicado este libro—, que dirigió esta investigación, y que ha tenido la amabilidad de prologarla. Después al tribunal que juzgó esta tesis que fue: a su presidente, el profesor Benjamín González Alonso; al profesor Mariano Peset; al profesor Feliciano Barrios; al profesor José Sarrión; y a la profesora Elena Hernández Sandoica.

También quisiera dar las gracias al departamento de derecho público y filosofía del derecho de la Universidad Carlos III de Madrid, y en concreto a su director, el profesor Juan Zornoza, que siempre ha facilitado mi tarea universitaria.

Soy consciente de no haber agotado este apartado, pero sería excesivamente prolijo dejar constancia aquí de tal deuda de gratitud, por ello he preferido hacerlo personalmente.

¹⁶ P. GROSSI, *La propiedad y las propiedades. Un análisis histórico*, Madrid, 1992.

PRIMERA PARTE
LA ORGANIZACIÓN

Capítulo I

LA HACIENDA JOSEFISTA

En este capítulo se aborda la influencia que la dominación francesa tuvo en las haciendas municipales, y en concreto en la de Madrid, aspecto todavía poco conocido¹. La actividad josefista fue revolucionaria en muchos aspectos; así por ejemplo en la estructura del ingreso o en la adopción del presupuesto como eje de la actividad financiera. También obviamente en la organización administrativa.

Por otro lado Madrid, para el reinado de José I, no fue tan sólo la sede del gobierno, la capital, sino muchas veces la única base segura de su política efectiva. De ahí que la hacienda madrileña fuera un soporte financiero claro del Estado bonapartista. Pienso sin embargo, que esto no quiere decir —como ha insinuado J.

¹ Un adelanto de ésta investigación en M. MARTINEZ NEIRA, «Fiscalidad municipal en el reinado de José Bonaparte: Madrid 1808-1813», *Anuario jurídico y económico escorialense*, XXVI, vol. II, 1993, 609-638. Sobre el municipio josefista en general puede verse: Carmen MUÑOZ DE BUSTILLO ROMERO, *Bayona en Andalucía: El Estado bonapartista en la prefectura de Xerez*, Madrid, 1991; J. SANCHEZ-ARCILLA BERNAL, «El municipio de Palencia durante la ocupación francesa: 1808-1813. Notas para el estudio del régimen municipal josefista», *Actas del I Congreso de Historia de Palencia*, tomo III, Palencia, 1987, 69-139; y también del mismo autor «Del municipio del Antiguo Régimen al municipio Constitucional. Un caso concreto: Guadalajara», *Actas del IV Symposium de Historia de la Administración*, INAP, Madrid, 1983, 629-681 —ambos incluyen una extensa relación bibliográfica—; Javier GARCIA FERNANDEZ, *El origen del municipio constitucional: autonomía y centralización en Francia y en España*, Madrid, 1983; además la Memoria de licenciatura inédita de M. I. GARRIDO GOMEZ, *La organización del municipio de Madrid durante la Guerra de la Independencia (1808-1814)*, UCM, 1986. Entre los estudios que directamente se fijan en la hacienda local sobresale lo que podemos llamar la historiografía vasca: J. R. CRUZ MUNDET, *Rentería en la crisis del Antiguo Régimen (1750-1845): familia, case-río y sociedad rural*, Ayuntamiento de Rentería, 1991 —dedica un capítulo a la hacienda—; J. M. ORTIZ DE ORRUÑO, *Alava durante la invasión napoleónica. Reconversión fiscal y desamortización en el término municipal de Vitoria*, Diputación Foral de Alava, Vitoria, 1983; A. OTAEGUI ARIZMENDI, *Guerra y crisis de la hacienda local (las ventas de bienes comunales y de propios en Gipuzkoa. 1764-1814)*, Gipuzkoa, 1991, I. MUGARTEGUI EGUIA, *Hacienda y fiscalidad en Guipuzcoa durante el Antiguo Régimen, 1700-1814*, Donostia, 1990 —aunque este analiza la hacienda provincial. Por último sobre el reinado de José Bonaparte entre otras son obligadas las obras de Juan MERCADER RIBA, *José Bonaparte rey de España. 1808-1813. Historia externa del reinado*, CSIC, Madrid, 1971; y *José Bonaparte, Rey de España. 1808-1813. Estructura del Estado español bonapartista*, Madrid, 1983.

Mercader²— que la esfera municipal y la propiamente gubernamental llegaran a confundirse³, sino que en las apremiantes necesidades del erario público, se acude a lo único que hay: las rentas e impuestos madrileños.

1. UNA NUEVA ORGANIZACION

El comienzo del reinado de José I trajo consigo la eliminación de la organización carolina, vigente todavía en las finanzas municipales⁴. En la nueva organización desaparecen el Consejo de Castilla, la contaduría general, las juntas de propios y arbitrios, ejes del gobierno y administración de los propios y arbitrios del reino. El ministerio del Interior y de Hacienda despachará directamente de estos asuntos con los municipios.

La estructura de ingresos y gastos que subsistía en 1808, era en lo básico también la carolina, en la que las sisas suponían el 95 por 100 de las entradas de la hacienda madrileña. En el quinquenio 1804-1808 el año común suponía unos ingresos de 12 millones de reales y unos gastos de 13, lo que significaba que anualmente el ayuntamiento tenía un déficit aproximado de un millón de reales. De los 12 millones de ingresos, 600.000 reales correspondían a la explotación de los propios y arbitrios de la villa. Las sisas ingresaban el resto, es decir 11.400.000. Sobre el monto de las sisas recaía el pago forzoso de 6.213.642 reales por razón de efectistas y censualistas⁵.

Esta estructura de ingresos se va a modificar ahora —entre otras cosas porque Madrid va a ser despojado de sus sisas— y como consecuencia también los gastos,

² José Bonaparte rey de España, 1808-1813. *Historia externa del reinado*, Madrid, 1971, pp. 271 y ss., en adelante *Historia*...

³ Puede que el tenor del Decreto de 21 de agosto de 1809, que se estudia luego, cree cierta confusión sobre esto.

⁴ Como se sabe el comienzo del reinado, como su posterior desarrollo, no estuvo exento de dificultades que impidieron un normal desarrollo y una pacífica reflexión sobre las reformas político-administrativas. El 20 de julio de 1808 el rey hizo su entrada en Madrid, pero como consecuencia de la derrota de Bailén, a primeros de agosto se evacuó la villa; y el 23 de agosto hizo su entrada el General Castaños. El 4 de diciembre siguiente, con la presencia de Napoleón Bonaparte en Chamartín, entonces pueblo independiente de la villa, sucedió la capitulación de ésta. El 22 de diciembre Napoleón abandonó la población, y un mes más tarde su hermano entró de nuevo.

⁵ AVM-S 3-289-70 y 10-233-29. Frente a esto Canga Argüelles afirmó que los fondos de propios y arbitrios «antes de la insurrección del año 1808, eran tan cuantiosos, como que después de pagados los gastos peculiares de los pueblos sobraba gruesas cantidades, de las cuales se ha valido el gobierno en sus apuros.» *Diccionario de hacienda para el uso de los encargados de la suprema dirección de ella*, tomo IV, voz «propios y arbitrios», Londres, 1827. Para corroborar esto recogía valores de estos ramos en todo el Reino, a unque sin indicar el año de los datos o si se trataba de un año común de un periodo concreto. Para todo el Reino recogía un total de 102.677.177 reales, de los que sobraban anualmente 16.096.724. A Madrid correspondían unos ingresos de 13.885.895 reales y un sobrante de 739.611, lo que contrasta claramente con los datos aportados aquí.

dato este apenas conocido⁶; así por ejemplo Madoz⁷ dice:

Los referidos impuestos, que componen estas 20 sisas y algunas mas que se concedieron en adelante, han continuado exigiéndose en las puertas de Madrid desde su creación hasta 1º de agosto de 1845, que cambiaron de aspecto, a consecuencia de la nueva tarifa de consumos del sistema tributario; sin otra alteración que la que produjo la corta suspensión de los años de 1821, a 1823, que administró el Ayuntamiento por distinta tarifa de consumos, y la de los 7 meses de 1843, que también administró con la de las 7 especies, y la módica que motivó el señalamiento del cupo.

Sin embargo ahora se verá cómo el gobierno de José Bonaparte es también otra excepción.

2. LA SUPRESION DE LAS SISAS: LA CONSIGNACION REAL

a) *Un problema latente*

Tras la capitulación de la villa, la municipalidad⁸ se planteó el problema hacendístico. El 10 de enero de 1809, y como punto de partida para las reformas, se nombró una comisión para conocer el verdadero estado de las sisas de Madrid. Dicha comisión estaba compuesta por los comisarios de sisas, los dos diputados más antiguos y los procuradores general y personero⁹.

Al mismo tiempo el monarca también se interesó por estos datos. Se comprende que las necesidades financieras ocasionadas por la guerra, movieran al rey José I a buscar numerario donde fuese. Las sisas madrileñas no dejaban de ser un ingreso sustancioso y una orden de tiempos de Carlos IV, serviría de excusa para intentar acapararlas¹⁰.

Efectivamente, una real Orden de 1806 mandaba liquidar y transferir a la real Hacienda las sisas que hasta ese momento administraba la municipalidad madrileña. Esta disposición se basaba en un expediente promovido en 1806 por el subdelegado de rentas provinciales de la villa. El problema que se planteaba era saber si las sisas pertenecían a la real Hacienda o a Madrid, que venía disfrutando de ellas des-

⁶ Sí lo señala J. MERCADER RIBA en su libro: *José Bonaparte, Rey de España, 1808-1813. Estructura del Estado español bonapartista*, Madrid, 1983, en adelante *Estructura*. ... Pero por las fuentes utilizadas y por la naturaleza del trabajo, no capta lo que esto quiere decir y ofrece alguna información errónea. Así por ejemplo de la lectura de la página 278 se deduce que el 4 de mayo de 1811 Madrid recobra sus sisas, cuando esto —como se verá más adelante— no es cierto en absoluto.

⁷ Pascual MADDOZ, *Madrid, Audiencia, Provincia, Intendencia, Vicaría, Partido y Villa*, Madrid, 1848, p. 475.

⁸ Durante la dominación francesa, al ayuntamiento de Madrid se le denomina en los expedientes y en los Libros de Acuerdos con el término municipalidad.

⁹ AVM-S 3-289-4.

¹⁰ AVM-S 3-288-23.

de 1667. En los informes anexos al citado expediente se exponía que Madrid se hallaba reintegrado de las cantidades que había anticipado a la corona y que eran la que habían motivado esta administración, de ahí que se dedujese la necesidad de que éstas pasasen a la Hacienda real¹¹.

Pero la municipalidad hizo caso omiso de la real Orden, y seguía percibiendo unos derechos, que según esa disposición, no le correspondían; privando así a la Hacienda real de ingresos nada despreciables. Por ello, ahora, José I insistió en que se llevase a cabo la referida liquidación mandada en 1806. Para lo cual se pidió que la municipalidad presentase al subdelegado de rentas provinciales los privilegios de concesión de las sisas, un informe de las anticipaciones de caudales hechas por Madrid a la Corona; un estado de lo que cada una de ellas hubiese rendido¹²; las cargas que tenían que sostener, etc.¹³.

Se ordenó, el 9 de marzo de 1809, que mientras se efectuaba la mencionada liquidación, los productos semanales de sisas fuesen ingresados en la Tesorería de gremios y no en la de este ramo. Frente a esto, la municipalidad hace ver, por un lado, sus necesidades y el déficit que arrastraba; por otro, que en el capítulo de ingresos realmente sólo cuenta con las sisas, y que la mayoría de éstas son municipales. De ahí que pida que mientras no haya una solución definitiva, se continúe ingresando en la Tesorería del ramo el importe de éstas.

¹¹ En esos informes se explicaba que las sisas eran una parte de las rentas provinciales, pues procedían de los servicios de millones concedidos por el reino para las urgencias de la Corona, en la que se hallan perpetuados aunque se renovaba la concesión de seis en seis años. Estos derechos o servicios, verdaderamente reales, fueron concedidos en empeño a la villa de Madrid, encargándola de su recaudación hasta que se reintegrase de varias cantidades que había anticipado en distintas épocas para las urgencias de la Corona, especialmente en tiempos de Felipe V, por motivo de la larga guerra (AVM-S 3-288-23).

¹² La elaboración de este estado era un asunto imposible. Cuando se concedieron las sisas reales y municipales a Madrid, se llevaba cuenta separada de cada una de ellas, para con su producto atender a los fines referidos de su instituto. Pero, posteriormente, en virtud de reales órdenes, se fueron suprimiendo algunas sisas, se retiró la consignación existente sobre la renta del tabaco y el producto de las que restaban se invirtió en objetos ajenos a su obligación. Esto ocasionó no sólo el retraso en el pago de los réditos a los acreedores capitalistas de las sisas existentes, sino que los que lo eran de las sisas extinguidas y sobre la renta del tabaco se hallaron destituidos de sus réditos y capitales. Dada la injusticia del particular el monarca ordenó —en reales Cédulas de 25 de junio de 1681, 19 de agosto de 1686, 15 de marzo de 1703, 16 de julio de 1753 y 16 de noviembre de 1754— que se mancomunasen las sisas, esto es que de los productos de las existentes se pagasen los capitales y réditos no sólo de las que permanecían, sino también de las extinguidas sin necesidad de la liquidación y prorrateo que anualmente se hacía de cada una de ellas (AVM-S 3-288-23).

¹³ Con fecha 26 de enero de 1809 tenemos una relación elaborada por los contadores, fruto de un oficio del corregidor y superintendente general de sisas de villa, motivado por una real Orden. En esta relación se expresa el modo y forma de administración que observaba Madrid, los fondos o arbitrios que tenía a su disposición, el número de empleados que existían para la administración y para el juzgado de corregimiento, la nómina mensual que se pagaba y donde se satisfacía, los individuos que estaban pensionados, etc. (A VM-Cn 3-774-43).

Pero las urgencias son las urgencias y el ejército en una situación de guerra lo primero. Por ello, el rey no podía atender a razones y el 28 de marzo ordena que el ingreso se haga en la Tesorería de los gremios. Entre tanto, el 31 de marzo, el ayuntamiento acordó llevar cuenta separada del producto de las tres sisas reales¹⁴, en un intento de conservar las municipales. Además el 9 de abril comunicó al monarca la imposibilidad de pasar a la Tesorería de gremios el producto causado antes de la orden de 28 de marzo; ya que además de carecer absolutamente de fondos, tenía numerosas deudas ocasionadas entre otras cosas por haber desembolsado 2.863.784 reales a la tropa francesa, en concepto de suministros, alojamiento, etc., y 118.000 para el mantenimiento de enfermos franceses que quedaron en el hospital general de Madrid. El rey volvió, el 20 de abril, a ignorar las razones de la municipalidad y ordenó de nuevo el ingreso de los productos de sisas en la tesorería de gremios¹⁵.

b) *El real Decreto de 21 de agosto*

A la crisis de Talavera (julio de 1809) siguió una gran cantidad de disposiciones, que produjeron importantes cambios en la alta nobleza, los consejos tradicionales de la administración, oficiales, clero regular y también en materia municipal¹⁶. Valorando la capitulación de la villa en diciembre de 1808, José Bonaparte había confirmado en su cargo a las autoridades municipales. Sin embargo los acontecimientos mencionados hicieron ver la necesidad de reformar —entre otras cosas— la esfera municipal.

En la sesión del Consejo privado¹⁷ del 21 de agosto de 1809, se acordó absorber los derechos de sisas, que eran sustituidos por una consignación, y reordenar la administración municipal¹⁸. Efectivamente, por real Decreto del mismo día el monarca mandó que todos los caudales procedentes de las sisas se ingresaran en la Tesorería general; y que los acreedores de villa pasasen a serlo del Estado¹⁹. De esta

¹⁴ La de ocho mil soldados, carnicería y aceite, y nuevos impuestos; sobre esto véase la segunda parte del libro.

¹⁵ AVM-S 3-288-23.

¹⁶ J. MERCADER, *Historia...*, 116-126.

¹⁷ Sobre esta institución véase el estudio de J. SANCHEZ ARCILLA, «"Consejo privado", "Consejo de Ministros". Notas para el estudio de los orígenes del Consejo de Ministros en España», *Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid*, n. 71 (1985), 251-307.

¹⁸ Para el tema de la nueva municipalidad madrileña: J. MERCADER RIBA, *Estructura...*, pp. 271-287; y J. GARCIA FERNANDEZ, *El origen del municipio constitucional*, Madrid, 1983.

¹⁹ «En nuestro palacio de Madrid a 21 de agosto de 1809 [...] para dirimir las controversias entre el Real Erario y la Villa de Madrid [...] artículo 1. Todos los derechos de sisas municipales que cobraba Madrid se rehunirán en una sóla cobranza con lo demás que percibe la Real Hacienda. artículo 2. Todos los acreedores de la Villa de Madrid se declaran acreedores del estado, y estarán como tales a las disposiciones de nuestros Reales Decretos de 9 de junio y 19 del corriente respectivos a la deuda pública. artículo 3. Nuestro Ministro de Hacienda, cuidará de que se entreguen semanalmente a la Tesorería de la Villa las cantidades que por el Ministerio de lo interior señalaremos a esta para sus gastos municipales. artículo 4. Nuestros Ministros de lo Ynterior y de Hacienda quedan encargados de la ejecución del presente Decreto. Firmado. Yo el Rey. Por SM su Ministro Secretario de Estado Mariano Luis de Urquijo.» Vid. AVM-S 6-148-8 y *Prontuario de las leyes y decretos del rey nuestro señor don José Napoleón I*, tomo I, segunda edición, Madrid 1810, 311 y 312.

forma el ayuntamiento se quedó sin la fuente de ingresos más importante que tenía para cubrir sus múltiples obligaciones. Aunque continuó con el disfrute de sus propios y arbitrios, éstos —como ya se ha dicho— no suponían gran cosa y menos ahora en época de calamidad general²⁰. De todas formas hay que ponderar que también se quedó sin la mayor fuente de gastos: los acreedores de villa, aspecto este que la municipalidad no airea mucho y que suponía aproximadamente el 52 por 100 de los gastos al dictarse este Decreto. Pero aparte del alcance económico está —y tal vez esto sea lo fundamental— el político. La supresión de recursos «propios» y su sustitución por una asignación estatal, condujo al municipio a una total dependencia del Estado. Se puede decir que de esta forma culminaba en parte todo el proceso de centralización y fortalecimiento del poder real, que se da en la época moderna; o, si se quiere, es el comienzo del modelo liberal centralista que luego va a triunfar.

La nueva municipalidad de Madrid, creada por real Decreto de 30 de agosto de 1809, sobre la planta de otro de 21 del mismo, se reunió por primera vez a primero de septiembre²¹, y tras pedir informes al contador sobre las finanzas del municipio, hizo una serie de reflexiones en las que analizaba los gastos que podían suprimirse y aquellos que eran imprescindibles: el ajuste era forzoso. Por una parte existía una serie de necesidades básicas que ineludiblemente tenían que ser atendidas, como eran el alumbrado de las calles, la limpieza de éstas, la de los pozos, la manutención del empedrado, etc. Por otra la «segregación» del ramo de sisas permitía a Madrid desprenderse de una serie de dependientes; es decir, anular algunos gastos²². Cuatro días más tarde, el 4 de septiembre, se pidió al corregidor que informara sobre las canti-

²⁰ Así lo explica el contador (AVM-S 2-365-3).

²¹ Esta fecha es importante porque se va a tomar como referencia para los años contables. Por otro lado las funciones del nuevo corregidor se señalan en el Prontuario..., I, 310-311.

²² AVM-S 6-148-11 y 2-365-3, por descontado —y dentro de la euforia revolucionaria— se excluyen las tres partidas de sueldos de regidores, procurador del común y comisiones; con ello se preveía un ahorro de 135.928 reales. De los abogados, agentes, procuradores del consejo y villa, escribanos de comisiones, dobles contadurías, tesorería con dobles tesoreros y cajeros, se deberían «separar» el mayor número; pues al ser las sisas el ramo más robusto de la intervención, sería suficiente con menos. El contador y contaduría de valores de sisas en la real Aduana, los administradores, el fiel de romana, vista, escribano, alguacil de la misma, registradores de sisas en las puertas y dependientes de la ronda también de sisas, ya no lo eran de Madrid; con ello se podría ahorrar 247.190 reales de salarios anuales. Por otro lado el coste de la manutención de los presos pobres de la cárcel de villa se había aumentado enormemente por haberse conducido a ella militares y paisanos franceses. Además Madrid estaba costeando la conservación y reparaciones de cuarteles, obligación que jamás había sido de su competencia, pues los fondos destinados a este objeto siempre los había recaudado la Tesorería general. Las dotaciones mensuales de ocho mil reales para cada uno de los comandantes de la plaza y real sitio del Retiro, lo señalado para el batallón de policía de esta corte y la brigada de doce carros para las atenciones del ejército suponían 850.390 reales anuales. Lo cual absorbía todo el fondo con que contaba el ayuntamiento. Aunque el intendente había manifestado que a este gasto contribuían todos los pueblos de la Intendencia, la parte que soportaba Madrid exigía una asignación especial. La partida de gastos eventuales era muy indefinida para poderla fijar. Siendo las circunstancias tan críticas en el día parecía demasiado reducida la cantidad de 120.000 que sienta el estado. Sólo la conservación y obra de las fuentes «consumían una barbaridad y eran

dades que la municipalidad necesitaba semanalmente teniendo en cuenta que el producto de propios y arbitrios debería contribuir también para el pago de sus obligaciones²³. A pesar del plan drástico de ahorro para suprimir más de 1.233.438 de gastos, todavía quedaba una deuda anual de 5.577.451. Deuda que podría disminuir cuando los empleados que quedaban provisionalmente en la administración municipal pasaran a la central; pero, mientras, era indispensable que se librase dicha suma, semanal o mensualmente y siempre en metálico. Además convendría que se anticipase una cantidad como de un millón de reales para tener siempre corrientes los jornales de los operarios y los acopios de aceite, paja y cebada hasta que se arrendasen los ramos a que corresponden. Con fecha de 11 de septiembre se hace la petición de la consignación de los 5.577.451 de reales.

c) *La consignación real*

El 21 de septiembre el rey concedió por un Decreto esa asignación, para cobrarlos por mesadas, adelantadas si fuera posible y sólo en caso de absoluta necesidad por semanas. El ministro del Interior pidió en virtud de dicho Decreto, a través del corregidor, que la municipalidad remitiese el presupuesto correspondiente; que puede considerarse el primero de la municipalidad madrileña²⁴. Era un presupuesto de gastos elaborado sobre los ingresos previstos por la consignación; de ahí que cada partida esté reducida al mínimo. Por ello se preveía en una serie de gastos (limpiezas, cañerías, manutención de presos pobres de la cárcel de villa, eventuales, etc.) la existencia de déficit, y se pensó en los productos de los propios —exiguos— para paliarlo. Por otro lado, tres partidas se llevaban casi la totalidad de lo presupuestado: la limpieza (27 por 100), la manutención de propios y alcantarillas (25 por 100) y las nóminas (20 por 100). El resto, 28 por 100 del total, se repartía fundamentalmente entre empedrado, fontanería y manutención de paseos. En definitiva un presupuesto de mínimos, para una actividad municipal «en coma», que sólo aspiraba a mantener la vida de la villa en espera de tiempos mejores: una economía de guerra.

Enviado este documento, se consideró más oportuna la asignación semanal, que se dió por Decreto de 3 de octubre de 1809²⁵ y en cantidad de 107.298 reales. Pero

imprescindibles». El ramo de alcantarillas y el de presidios eran también imprescindibles. La alcantarilla del Prado necesitaba 15.000 reales todas las semanas. Se necesitaría que la partida de gastos eventuales fuese como un fondo subsidiario para subvenir en alguna falta. El ramo de alumbrado tenía dotación propia, pagada por el vecindario, y superabundante a no haber ocurrido los accidentes que se indican. Pero habiendo estos dado lugar a un déficit que han tenido que suplir los demás ramos, importa mucho que por la desmembración del de sisas que ocurría a todo no quede la villa en la impotencia de continuar aquel servicio público.

²³ AVM-S 6-148-8.

²⁴ AVM-S 2-365-3. En mi artículo La fiscalidad... adjunto como anexo 1 el texto del mismo, que permitirá con una simple lectura comprender muchos aspectos de la vida municipal del momento.

²⁵ AVM-S 6-148-8: «[...] artículo 1. La villa de Madrid cobrará semanalmente de la depositaría de renta y contando desde 1º de septiembre de este año la cantidad de 107.298 reales y 20 maravedís vellón. artículo 2. La Depositaria general dará parte de pago a la Tesorería general los recibos de las cantidades semanales que en virtud del presente decreto percibirá el tesorero de la Villa. artículo 3. Nuestros ministros de lo Ynterior y de Hacienda quedan encargados de la execución del presente decreto...».

una cosa es lo previsto y otra la realidad, el Decreto no se cumplió y entre las realidades percibidas y las que se debían percibir existía una gran diferencia; tras un año de consignación, la Hacienda debía a Madrid la cantidad de 1.792.052 reales, casi un tercio de lo dispuesto²⁶.

En el primer cuatrimestre de la nueva municipalidad de Madrid (1 de septiembre al 31 de diciembre de 1809) se habían producido unos ingresos de 3.082.089 reales²⁷, a lo que había que sumar las existencias en 6 de septiembre según el ar-

²⁶ AVM-S 10-233-27. Esta diferencia se encuentra recogida en certificaciones de contaduría, donde aparecen los créditos de Madrid contra el estado. Don Pedro Monfort y Viergol, contador de la municipalidad, certificó —el 22 de diciembre de 1810— que por real Decreto de tres de octubre de 1809 el rey consignó a la municipalidad de la villa para sus gastos 107.258 reales y 20 maravedís vellón semanales, que debían contarse y percibirse desde 1 de setiembre del mismo año. Por dicha consignación la municipalidad recibió desde dicho día 1 de septiembre de 1809 hasta 30 de igual mes de 1810 las cantidades que a continuación se indican. En setiembre de 1809 importó la consignación 459.679 reales y 22 maravedís; se recibió de la depositaría general de rentas 360.000 reales, por consiguiente quedó a deber 99.679 reales y 22 maravedís. En el mes de octubre ascendió la consignación a 475.002 reales y 10 maravedís; se cobró 429.034 reales y 12 maravedís, quedó a deber 45.967 reales 32 maravedís. En el mes de noviembre importó la consignación 459.679 reales 22 maravedís; se percibió 429.034 reales 12 maravedís, quedó a deber 30.645 reales 10 maravedís. Diciembre importó 475.002 reales 10 maravedís, cuya cantidad se percibió íntegra y además 31.232 reales 2 maravedís a cuenta de lo debido. En Enero de 1810 importó la consignación 475.002 reales 10 maravedís, que se percibió íntegra de la referida depositaria, con 10.090 reales 22 maravedís a cuenta del débito, quedando a deber sólo 35.290 reales 18 maravedís. En febrero importó 429.034 reales 12 maravedís, se percibió 299.000, quedó a deber 130.034 reales 12 maravedís. En marzo ascendió la consignación a 475.002 reales 10 maravedís, se cobraron 442.000 y quedaron a deber 33.002 reales 10 maravedís. En la mesada de abril importó la consignación 459.679 reales 22 maravedís, se cobraron 169.000 y quedaron a deber 290.679 reales 22 maravedís. En el mes de mayo importó la consignación 475.002 reales 10 maravedís, se cobraron 286.000 y quedaron a deber 189.002 reales 10 maravedís. En los 13 primeros días del mes de junio importó 199.194 reales 16 maravedís, se percibieron a cuenta 195.000 y quedaron a deber 4.194 reales 16 maravedís. De esta forma, en los 9 meses y 13 días desde primero de setiembre de 1809 hasta 13 de junio, importó la consignación 4.382.279 reales 8 maravedís, se percibió en dicho tiempo por la municipalidad 3.600.396, quedó a deber 781.883 reales 8 maravedís. Desde el 14 de junio la tesorería mayor del rey empezó a satisfacer a la municipalidad la repetida consignación semanal, importó esta 260.485 reales 4 maravedís. Se percibieron a cuenta 127.500 y quedaron a deber 132.985 reales 4 maravedís. En el mes de julio ascendió la consignación a 475.002 reales 10 maravedís, se cobraron 202.500 y se quedaron a deber 272.502 reales 10 maravedís. En el mes de agosto 475.002 reales 10 maravedís. Se cobraron 142.500 y quedaron a deber 332.502 reales 10 maravedís. En el mes de setiembre ascendió la consignación a 459.679 reales 22 maravedís, se cobraron 187.500 y quedaron a deber 272.179 reales 22 maravedís. De forma que desde 14 de junio de 1810 hasta 30 de setiembre la consignación importó 1.670.169 reales 12 maravedís y lo percibido de la tesorería mayor del rey a cuenta de ella en dicho tiempo fue únicamente 660.000; de forma que faltaba 1.010.169 reales 10 maravedís. Unida esta cantidad a los 781.883 reales 8 maravedís que quedó debiendo la depositaría general de rentas asciende todo el débito de la real hacienda y crédito a favor de la municipalidad por ambas épocas a 1.792.052 reales y 20 maravedís.

²⁷ De estos 1.724.303 correspondían a la consignación semanal, y 1.357.786 al producto de propios y arbitrios de la municipalidad. No incluyo otros ingresos ficticios, como 569.699 reales por créditos a favor del real Pósito contra la Tesorería general de S. M. y algunos particulares, que se consideraban incobrables, y entraron en calidad de depósito; ni 1.889.278 por créditos a favor de los abastos contra la real caja de consolidación y tesorería general de S. M. (AVM-S 4-126-20).

queo ejecutado por la municipalidad: 75.324 reales en metálico²⁸.

El dinero disponible, 3.157.413 reales en total²⁹, se gastó de la siguiente forma: sueldos 692.774, festividades de Iglesia 4.013, conservación del Paseo del Prado 6.011, limpiezas 329.396, empedrados 107.412, fontanería 215.379, manutención de los presos de la cárcel de villa 49.454, construcción de alcantarillas 398.044, manutención de los dos presidios 39.089, conservación de fincas de propios 6.368, gastos extraordinarios y eventuales 211.551, alumbrado público 179.183, conservación del camino del Pardo 2.850, abono de pérdidas en reducción de cédulas 67.645, Junta general de la Caridad 57.655; lo que hacía un total de 2.366.824 reales. Por lo tanto había una existencia en caja al terminar el año de 790.589. Esta cifra positiva tan poco inaudita en el periodo se debe a que el 1.357.786 reales del producto de propios y arbitrios era anual, aunque se había cobrado en ese momento, por lo que se tenía que repartir entre doce meses y no entre cuatro.

d) *Una rebaja forzosa*

Aparte de alguna modificación de organización³⁰ y de un intento de mejorar la gestión de los propios, para lo que se crea una dirección de propios y arbitrios de Madrid³¹, es importante hacer ver que las urgencias del erario además de impedir la entrega de las cantidades con puntualidad, precisaron la rebaja de la consignación. Ésta se fijó en 7.500 reales diarios, es decir 2.250.000 anuales; un 60 por 100 menos que la consignación anterior³².

e) *El impuesto municipal*

Además, por real Decreto de 19 de noviembre de 1810 se concedió a Madrid el

²⁸ No incluyo aquí otras existencias, también ficticias: 5.124.230 reales en créditos antiguos incobrables, 626.800 en cédulas de la real caja de consolidación, 128.694 en vales reales, 6.768 en recibos de intereses de vales (AVM-S 4-126-20).

²⁹ Aunque en el Estado que contiene AVM-S 4-126-20 se muestre un total de 11.502.886, ya digo que lo que excede a los 3.157.413 era más ficticio que real, y nunca disponible para gastos.

³⁰ AVM-S 10-233-27: Hasta el 14 de junio de 1810 la consignación se percibía de la depositaría general y a partir de aquí de la tesorería real.

³¹ El 14 de febrero de 1810 se dio un Reglamento para la Dirección de Propios y Arbitrios de Madrid, tan sólo nueve artículos manuscritos con los que se intentaba encauzar en alguna medida este ramo (AVM-S 6-148-10). La dirección dependía de la municipalidad y tenía delegados poderes para cumplir con sus funciones (a. 2). Éstas eran básicamente (a. 1): la administración de todos los propios y arbitrios corrientes y productivos; la promoción del pago de los créditos que tenía Madrid en la deuda pública; el de los que tenga contra las casas o bienes secuestrados; el recobro de las fincas de que se aprovechaba la extinguida dirección de abastos; el seguimiento de los pleitos incoados y no concluidos, especialmente aquellos en que Madrid era actor, previo el parecer y examen del procurador sustituto; el despacho de todos los negocios y expedientes que se envíen a informe; la indagación de los derechos que tiene perdidos; la formación de un inventario. Además cada semana tenía que hacer una cuenta de lo recibido, y anualmente otra. Esta dirección no tiene nada que ver en importancia con la Junta de propios y sisas, ya que sin éstas las cantidades que se manejaban eran ridículas.

³² AVM-S 6-148-9.

recargo o impuesto municipal. Éste no era, aunque su denominación pueda llevar a equívocos, un impuesto para fines municipales, sino un recargo sobre una serie de géneros de consumo³³ con el fin de hacer frente a un aumento de la contribución que la ciudad tenía que ingresar en el erario público; es decir, una contribución extraordinaria. Efectivamente, mediante dicha disposición se aumentaba en 24 millones de reales las contribuciones establecidas en las cinco provincias de Madrid, Toledo, Mancha, Guadalajara y Segovia³⁴; de éstos el pueblo de Madrid tenía que aportar seis millones³⁵.

De esta forma, el ayuntamiento que no conseguía fondos para sí, se tuvo que encargar de buscar más ingresos para el tesoro público. Aunque el cobro se realizaba, éste no alcanzaba los 500.000 reales mensuales que estaban previstos; en enero y febrero de 1811, el impuesto había rendido aproximadamente sólo unos 200.000 reales mensuales, un 40 por 100 de lo estipulado³⁶. La municipalidad intentó solucionar este déficit, y propuso pedir —para los meses que no alcanzasen esa cantidad— un préstamo que se iría pagando con los productos que continuase dando el arbitrio, una vez concluida la contribución extraordinaria, y hasta recuperar la cantidad recibida en préstamo. El 27 de febrero de 1811, el monarca aprobó el plan y el ayuntamiento creó una comisión, con el encargo de arreglar la administración del recargo para la exacción de los seis millones de contribución provisio-

³³ El impuesto o recargo de derechos recaía en los siguientes géneros de consumo: carnes, 10 maravedís en libra; carbón, 10 maravedís en arroba; tocino, 8 maravedís en libra; jabón, 6 maravedís en libra; aceite, 6 maravedís en libra; vino, 2 reales en arroba; aguardiente, 3 reales en arroba; ternera, 16 maravedís en libra; conejos, perdices, pichones, palomas y palominos, 8 maravedís por pieza; pavos, 1 real por pieza; pescados frescos y salados, 8 reales por arroba; garbanzos, 3 reales en arroba; arroz, 3 reales en arroba; leña, 7 reales por carro; cebada, 1 real por fanega; paja, 4 maravedís en arroba (AVM-S 2-366-3).

³⁴ Para un acercamiento al estudio de estas contribuciones puede verse, J. MERCADER, *Estructura...*

³⁵ El real Decreto, que contaba con un total de ocho artículos, decía —en lo que interesa aquí— lo siguiente: «a. 1. Para hacer frente a los gastos del año próximo se aumentará 24 millones de reales a las contribuciones establecidas en las 5 provincias de Madrid, Toledo, Mancha, Guadalajara y Segovia. a. 2. El pueblo de Madrid concurrirá al aumento referido con seis millones de reales, y con dos millones y quinientos mil reales los demás Pueblos de su provincia; la de Toledo con seis y medio millones; la de Mancha con 3 millones; la de... a. 4. Señalada por el Prefecto o Yntendente la quota de cada pueblo será cargo de la justicia repartir inmediatamente su importe entre el vecindario por el mismo orden y método que se observa en los repartimientos de contribuciones ordinarias. a. 7. Se abonará a las Justicias por la cobranza, conducción y responsabilidad un 6 por 100... El Rey. 19 de noviembre de 1810». No he encontrado ni en la Gaceta, ni en el Diario de Madrid la publicación de este Decreto, una copia manuscrita del mismo en LA 240.

³⁶ En AVM-S 2-366-14, se encuentra un atado que incluye notas de los productos del impuesto municipal o temporal a cargo de los seis millones. También en AVM-S 2-366-8, aparecen distintas hojas con «nota de los productos» que, con distinción de puertas, había rendido la contribución temporal hasta el 21 de agosto de 1811. Por último en AVM-S 2-366-13 se incluye un atado con los productos del impuesto municipal de dicho año. Los del año siguiente, 1812, se encuentran en un atado en AVM-S 2-366-13.

nal impuesta a esta capital, a fin de que los recaudadores nombrados para las puertas y aduana supieran sus obligaciones³⁷. A este fin, la comisión se reunió el 2 de marzo para elaborar un reglamento que debía observarse en la recaudación del citado recargo impuesto en los géneros de consumo³⁸; y se nombraron los sujetos para la intervención y recaudación del mismo.

El 7 de marzo comenzó el nuevo sistema, con la idea de subsanar el déficit acumulado de los meses anteriores, unos 600.000 reales, y pagar los 500.000 de marzo; siempre sometido a las peticiones apremiantes del gobierno³⁹. El ministerio de Hacienda pidió a la municipalidad que estudiara nuevos arbitrios para evitar el déficit, pero ésta pensaba que aunque se aumentaran los arbitrios el préstamo era forzoso. El 14 de febrero, con la aprobación del ministerio de Hacienda, se expidieron letras por el valor del déficit; pero en las circunstancias del momento tampoco era fácil encontrar quien prestase esas cantidades. Sólo una oferta, la de Antonio Mottet y Cia., se lanzaba a facilitar 400.000 reales al 15 por 100 de interés, más un 3 por 100 de gastos de corretaje, cambios, etc. Es decir un 18 por 100, precio alto para los intereses del momento⁴⁰.

Esto provocó largas discusiones sobre lo gravoso del préstamo, pero la otra solución, un reparto, se preveía con mayores inconvenientes; de ahí que el ministerio de Hacienda aprobase la propuesta de la municipalidad para tomar el dinero de Antonio Mottet y Cia.

Además, había que suprimir algunos de los recargos que se cobraban, ya que la gran diferencia entre el precio real y el fiscal de algunos productos aumentaba enormemente el contrabando y aportaba poco a las arcas. Así se suprimió, el 22 de abril, el recargo de puertas en la carne, el vino, el aceite y el jabón⁴¹. De esta ma-

³⁷ Las actas de esa comisión se encuentran en AVM-S 2-366-8.

³⁸ El título dice Reglamento que por ahora debe observarse para la administración y recaudación del nuevo derecho impuesto por S. M. para cubrir la contribución extraordinaria de 6 millones impuesta a Madrid por real decreto de 19 de noviembre de 1810. Consta de trece artículos sobre las obligaciones de los interventores y recaudadores; cuatro sobre orden y arreglo para el depositario pagador; y seis sobre la contaduría, como anexo una nota con los géneros que estaban sobrecargados (AVM-S 10-202-9 y 2-366-8).

³⁹ Así por ejemplo, el 9 de marzo el gobierno pedía esos importes con la mayor urgencia.

⁴⁰ Téngase en cuenta que las sisas rendían al 3 por 100, e incluso al 2,5 por 100.

⁴¹ Por real Decreto de 22 de abril de 1811 se suprimió la exacción en el vino, carne, aceite y jabón. Con este motivo la contaduría procedió a liquidar lo que estos cuatro ramos habían producido desde el 10 de marzo en que por los dependientes de la municipalidad empezó a verificarse la recaudación de los derechos hasta el 23 de abril fecha en que cesaron en cumplimiento del referido real Decreto, para de este modo analizar el déficit que esto supondría a la municipalidad. Los guarismos son los siguientes: 1. El vino produjo en los 45 días 43.628 reales, lo que corresponde anualmente 353.875. 2. La carne 98.097, a lo que corresponde 795.676. 3. El aceite 5.942, al año 48.196. 4. El jabón 10.331, es decir 83.196. El total de estos 45 días hacen un global de 157.998, lo que equiva le a 1.281.543 anuales. El contador propuso el 19 de diciembre de 1811 un leve recargo de derechos en distintos géneros, pero no se accedió a ello y la municipalidad continuó con las anteriores obligaciones y otras impuestas con posterioridad. Además más tarde hay nuevas rebajas (AVM-S 2-366-3).

nera, la municipalidad perdió lo más productivo del impuesto, y aunque se volvió a barajar la idea del reparto tanto la municipalidad como el ministerio coincidieron en su imposibilidad. Si al principio se ingresaban en puertas por este concepto unos 200.000 reales, en este momento los ingresos líquidos aproximados de un mes eran 90.000 reales. Para intentar solucionar la diferencia creciente la municipalidad, el 14 de abril, acordó un recargo sobre las casas, tomando el número de faroles como base, a 60 reales por farol y mes. Se calcularon uno 6.600 faroles, que darían 400.000 reales al mes, algo menos de lo que se necesitaba conseguir cada mes. Y en cualquier caso, se pensaba también en la venta de algunos propios, para aliviar en algo, con esta medida, la cuenta mensual⁴². Por último se aludió a lo que tenían que pagar los terratenientes y colonos del término de la alcabala de Madrid.

A esto, el ministerio de Hacienda respondió críticamente. Pensaba el ministerio que el ayuntamiento queriendo huir de un repartimiento directo, caía —de un modo más gravoso y desigual—, por el recargo que proponía sobre las casas, en el mismo inconveniente que quería evitar. Ya que de los diversos géneros de propiedad existentes, sólo las casas quedaban gravadas, además de los recargos que ya sufrían por la contribución ordinaria de los años 1808 y 1809, que se estaban cobrando en el momento; la del farol sereno y casa de aposento; y el 10 por 100 que no se había acabado de cobrar. Esto sin contar que los inquilinatos estaban en la mayor parte sin pagar, teniendo los propietarios que cargar con toda la contribución. Sería además injusto que las casas que presentaban más frente, y que por lo tanto tenían más faroles, pagaran más que otras mayores, pero no con esa característica⁴³.

Pero esto no era todo; la municipalidad vió acrecentadas sus obligaciones, disparados los precios⁴⁴, y por si fuera poco, parte del dinero que recibía lo hacía en papel⁴⁵, que se depreciaba enormemente al convertirlo en efectivo. En diciembre de 1810 y para ordenar las finanzas del año siguiente, el corregidor dirigió a la superioridad un estado de gastos y obligaciones; lo que se podría llamar el presupuesto de 1811. En él se contaba con el importe de la consignación y se valoraron los productos de propios y arbitrios en 800.000 reales. Con todo resultaba un déficit de 1.223.392 reales. Esto sin aumentar —respecto al presupuesto anterior— los gastos más que en la cárcel de corte y los sobresueldos y coches de los comandantes. En este plan se pidió que, además de mantener la consignación, no se cargase al ayuntamiento con más obligaciones. Se veía también conveniente activar algún medio oportuno para tener fondos recaudados por el mismo ayuntamiento, a fin de no tener que depender del tesoro público⁴⁶; ¿se añoraba, tal vez, cierta autonomía fiscal, es decir política?

⁴² De hecho se intentó la venta de Migascaliente, propiedad municipal utilizada por la casa real; y seguramente por ello, no se consumó.

⁴³ Todo lo referente a este asunto, cuando no se ha dicho lo contrario, en AVM-S 2-366-8.

⁴⁴ El pan duplicó su precio en este período (J. MERCADER, *Historia...*, p. 242).

⁴⁵ AVM-S 10-233-21 y 6-148-9. En un informe de 1810 se hace ver que se han perdido en el cambio de cédulas 300.161.

⁴⁶ AVM-S 6-148-9.

3. EL FRACASO DE LA CONSIGNACION: LA POLITICA DE ARBITRIOS

a) *La cesión del estanco de aguardiente*

Desde el gobierno central se veía que el asunto no podía continuar así. Ni el gobierno podía seguir facilitando a la municipalidad la consignación, ni ésta era suficiente para las necesidades municipales. La situación se hizo insostenible y en un nuevo intento de enmendarla el ministro de Hacienda comunicó que el monarca deseaba que la municipalidad propusiera arbitrios con que hacer frente a los gastos que se cubrían con la consignación⁴⁷. La municipalidad hizo un plan⁴⁸. Posteriormente, el rey reunido con sus ministros en Consejo privado, al que asistió el corregidor de Madrid, trató el asunto⁴⁹. Ante la insuficiencia y la inoportunidad de algunos de los arbitrios propuestos, el monarca rechazó los más y cedió el producto del lucrativo estanco de aguardiente⁵⁰: el sistema de la consignación había fracasado. La deuda estatal para con la municipalidad había alcanzado en estos meses de consignación la no pequeña cifra de 7.686.989 reales, más de lo que la municipalidad ingresaba teóricamente en un año⁵¹.

⁴⁷ J. MERCADER, *Historia...*, p. 240 y ss. Con fecha de 30 de julio de 1811, esto es una vez que José I regresa a Madrid, tras el viaje a París de 24 de abril a 15 de julio. Durante esa ausencia el Consejo de Ministros pensó en devolver a Madrid la administración directa de los derechos de puertas, a cambio de que se hiciese cargo del aprovisionamiento militar y sanitario; pero esto no se hizo.

⁴⁸ El 8 de agosto de 1811.

⁴⁹ El 25 de agosto de 1811.

⁵⁰ En Consejo privado resolvió el monarca que desde el uno de octubre la renta del aguardiente corriera a cargo de la municipalidad, y cesaran los 7.500 reales diarios (AVM-S 2-366-4). Lo que se recogió en real resolución de 25 de septiembre de 1811 (AVM-S 2-3 66-13). Esta renta se remontaba a 1632, fecha en la que se redujo a estanco el ramo del aguardiente. En 1650 se abolió y se volvió a establecer y a abolir, hasta que en 1746 se mandó extinguir el estanco para siempre y se asignó a cada provincia o partido la cuota que debía pagar arreglada a lo que hasta entonces había producido esta renta anualmente, esto es 5.307.352 reales, debiendo recaudar las cuotas juntamente con las rentas provinciales, por encabezamiento o administración. Por consideraciones particulares el estanco se conservó en Madrid, sitios reales, isla de León, población de San Carlos, presidio de Ceuta, Cádiz, Carraca, Ferrol y Lagraña. En 1747 se autorizó el estanco en los pueblos, para que de esta forma pudieran conseguir la cuota asignada. Los pueblos encabezados arrendaban este ramo sin regla fija a quien les ofrecía una mayor suma por hacer exclusivamente la venta. En este estado se encontraba cuando el Decreto de 15 de febrero de 1809 declaró libre la fabricación, circulación y venta del aguardiente con el fin de promover su abundancia y fomentar la agricultura y la industria nacional. Esto ocasionó que los pueblos se vieron imposibilitados para pagar la cuota y no hallaban arbitrio para sustituirlo. Sin embargo la libertad se veía útil para la agricultura, la industria y las rentas del Estado, estableciendo impuestos generales y regulares sobre este ramo (AVM-S 2-366-4).

⁵¹ En informe de 16 de octubre de 1811 se hace un balance de lo que este sistema había supuesto para la villa (AVM-S 10-233-27). Por real Decreto de 3 de octubre de 1809 y para que se cobrase desde 1 de septiembre anterior concedió el rey a la municipalidad para atender a sus gastos la consignación semanal de 107.258 reales 20 maravedís. Esta consignación cesó en el último día de septiembre de 1811. En su lugar se concedió la renta del Aguardiente, desde el día 1 de octubre del

b) *La explotación del estanco*

Por otro lado; la cesión⁵² del «arbitrio, es decir la propiedad del derecho del aguardiente con facultad de estancarlo, por subrogación absoluta a la consignación de 7.500 reales diarios», planteaba el problema de saber qué medio se adoptaría para hacer más productivo ese arbitrio. Se pensaba que el medio más beneficioso sería el estanco. Para ello era necesario contar con unos dos millones de reales, que permitieran a la municipalidad realizar el acopio del género necesario, lo que en las circunstancias del momento era prácticamente un imposible. Además, para que el estanco fuese productivo, debería hacerse en toda la provincia, asunto que además de difícil iba en contra de la ideas liberales del gobierno.

Una segunda posibilidad era el arriendo alzado. Esta opción sería la mejor si se

mismo, según orden del Ministerio de Hacienda del día 26 de dicho mes de septiembre. Por lo tanto, Madrid había disfrutado de dicha consignación semanal por espacio de 108 semanas y 4 días, que son los transcurridos desde 1 de septiembre de 1809 hasta fin de igual mes de 1811; por dicho tiempo debió percibir 11.645.216 reales 4 maravedís. En dicho tiempo la municipalidad había percibido del tesoro público y de la Depositaria General de Rentas —en metálico, cédulas de caja, letras y libranzas— y del ministerio de Hacienda —en certificaciones de crédito contra el tesoro público— 8.036.948 reales y 20 maravedís; de forma que faltaba por entregar a Madrid 3.608.267 reales 18 maravedís. Además por certificaciones remitidas al ministerio del Interior con fecha de 3 de diciembre de 1810 resultaba ser la municipalidad acreedora al estado de las cantidades siguientes: 11.040 reales que se debían hasta fin de marzo de 1810 al ramo del alumbrado y serenos varias casas pertenecientes al rey; 88.896 reales que se debían al mismo ramo de alumbrado y serenos en dicho fin de marzo de 1810 por las casas pertenecientes a comunidades extinguidas; 10.724 reales 16 maravedís debidos al ramo de alumbrado y serenos por las casas pertenecientes a la real Hacienda como son las de aduana, fábrica de aguardiente, etc; 295.424 por los capitales de varias redenciones de la carga del alumbrado y serenos que entraron en la real caja de consolidación y por sus réditos devengados hasta el repetido día último de marzo; 31.528 reales 20 maravedís que hasta el mismo día último de marzo de 1810 estaban debiendo al ramo del alumbrado y serenos varias casas incorporadas a bienes nacionales que fueron propias de varios grandes de España, títulos de Castilla y personas particulares; 35.334 reales 30 maravedís por el repartimiento hecho a varias casas incorporadas a bienes nacionales en la construcción de las alcantarillas de las calles de la Montera y del Ave María y sus ramales; 1.726.401 reales 23 maravedís que en varios tiempos han suplido los propios de Madrid a la real Hacienda para urgencias, por los capitales y réditos de efectos de sisas, por el arrendamiento y pastos del soto de Migas Calientes, por capitales y réditos de varios censos redimidos y depositados en la caja de consolidación y por intereses de vales reales; 282.832 reales 8 maravedís que debe la real Hacienda al ramo de Fuentes por varios créditos e imposiciones a su favor; 226.378 reales 32 maravedís que debe el Estado a la real cárcel de villa por varios créditos contra las sisas, temporalidades e imposiciones sobre el fondo de amortización; 1.349.941 reales 7 maravedís que resultan contra la real Hacienda por varios libramientos y abonos contra la caja de consolidación y tesorería mayor por lo correspondiente al ramo de abastos. Importaban estos créditos 4.078.722 reales, que unidos a los 3.608.267 reales 18 maravedís que restaban de la consignación seman al hacían un total de crédito liquidado de la municipalidad contra el Estado de 7.686.989 reales y 18 maravedís.

⁵² Se trataba de una subrogación de la municipalidad en lugar de la real Hacienda, que comprendía todos los derechos que se exigían en ese momento. En consecuencia los empleados de la municipalidad debían recaudar en las puertas y en la aduana los derechos del aguardiente y licor nacional y extranjero.

presentasen licitadores que asegurasen el pago. Se acordó que mientras se decidía cómo hacer este arbitrio más productivo, se continuase como hasta el momento lo hacía la real Hacienda. La municipalidad tenía en todas las puertas reales dependientes que cuidaban del nuevo impuesto municipal, estos mismos podían encargarse de la cobranza de los derechos que venía recibiendo el erario público por la introducción del aguardiente y demás licores. Para mayor seguridad, sólo se haría la entrada de aguardiente por la puerta de Toledo. Los dependientes se servirían de aerómetros, exigiendo —según lo indicado en el real Decreto de 15 de febrero de 1809— 34 reales por el común de 15 grados; 40 por la «prueba de olanda» y el ron de 19 grados; 50 por el de aceite de 24 grados. El ayuntamiento pensaba recaudar al menos 1.720.574 reales; sin embargo la disminución de población en la ciudad, motivada por la situación política, y la introducción fraudulenta de género, hicieron que el producto bajase a casi la mitad de lo que daba en un año común del quinquenio anterior⁵³.

c) *La insuficiencia del estanco*

Al mismo tiempo que se privó a la municipalidad de la consignación, se traspasó el mantenimiento de los hospitales y demás establecimientos de beneficencia a ésta, lo cual produjo un nuevo problema de financiación⁵⁴; la municipalidad volvió a proponer arbitrios para cubrir el déficit de estos centros.

En el nuevo arreglo aparecía un déficit anual de 195.505 reales. Ante esto el monarca resolvió en Consejo privado de 25 de septiembre de 1811 que inmediatamente se dieran por la dirección general de bienes nacionales noticia de fincas que pudieran producir dicha cantidad. Con posterioridad⁵⁵ el rey decidió que se sustituyesen los dos millones impuestos sobre los propios y arbitrios del reino por la dotación de un millón de reales en renta anual de bienes nacionales, con lo que habría suficiente para todos los establecimientos piadosos de su cargo, además de los otros arbitrios con que se hallaban dotados. Además, respecto a los otros gastos del ayuntamiento, se destinaron 1.200.000 reales anuales del producto de la consignación de las casas de juego. Como en un principio sólo se había pensado en una dotación de un millón, se suprimieron los 195.000 previstos anteriormente. Junto a todo esto se pidió al gobierno local el plan de obligaciones y medios, con la explicación oportuna, para la formación del Decreto. De esta forma, por real Decreto de 26 de noviembre de 1811 se declaraban entre las atenciones municipales el cuidado de los hospitales civiles y demás establecimientos de beneficencia y educación.

⁵³ Esta información es del 4 de octubre de 1811 (AVM-S 3-458-77). Para intentar acabar con el fraude, se acordó que los dependientes del resguardo se quedasen con las dos terceras partes del género aprehendido.

⁵⁴ AVM-S 2-365-2. Aquí aparece una interesante exposición sobre el error de Felipe II de suprimir los numerosos hospitales con que contaba Madrid y su sustitución por uno general. Ahora se proponía la creación de 24 y también de una serie de normas para su regulación.

⁵⁵ El 12 de octubre de 1811.

Se señalaron de manera global las rentas con que debía contar para unas y otras obligaciones⁵⁶.

Tampoco esta vez fue posible el arreglo, los nuevos arbitrios no se pudieron realizar, y la municipalidad —con impotencia total— vio crecer sus deudas⁵⁷. Esto coincidió en el tiempo con el encarecimiento de todos los géneros. Sólo la subida del pan —que alcanzó más de cuatro veces su precio normal⁵⁸—, hizo que la manutención de las cárceles y presidios se situase en 800.000 reales anuales. Esta situación también influyó en el «lucrativo estanco del aguardiente», que vio mermar sus ingresos de forma que en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 1811 produjo en total tan sólo 204.285 reales; y siguió decreciendo, fundamentalmente

⁵⁶ El Decreto aparece recogido en el *Prontuario* III, 237-239. Visto el plan enviado, para que la municipalidad pudiese atender a sus obligaciones, comprendiéndose en ellas las de todos los hospitales civiles, hospicios y demás establecimientos de beneficencia y primera educación, se establecieron una serie de rentas. En AVM-S 2-366-3 se hace una estimación de lo que esos arbitrios podían producir: estanco de aguardiente, 1.500.000; contribución sobre tiendas: 365.000; puestos públicos: 100.000; teatro de los caños del Peral: 60.000; impuesto municipal: 60.000; bienes nacionales: 1.037.084; productos de juegos: 1.200.000; plaza de toros: 150.000. Lo que hacía un total de 5.012.084 reales. Con posterioridad (14 de enero de 1812) se dio un reglamento para el arbitrio de puestos (AVM-S 10-95-41). En él se estipulaba lo que debía observarse por la oficina y demás dependientes que intervenían en la expedición de licencias y recaudación de la moderada contribución que tenían que pagar a la municipalidad, para sus gastos de policía urbana, todos los dueños de tiendas de comercio y todas las personas que tenían o colocaran puestos de venta u otro ejercicio en las calles, plaza o plazuelas de la población, paseos o avenidas, puertas de algunas tiendas o portales, y también los que vendían comestibles en las calles sin sitio fijo.

⁵⁷ AVM-S 2-366-3. Con lo recaudado por el nuevo plan resultaría un déficit de 958.421, aún cuando todos los arbitrios fuesen productivos en el momento. El déficit de la municipalidad para sus gastos después de deducidos sus propios y arbitrios era —en 26 de septiembre de 1811, fecha en que se envió el estado— de 2.470.290. El de hospitales —no sólo de los civiles sino de todos los particulares de Madrid y de la hermandad del refugio—, deducido el producto de las fincas, 2.160.474 reales y 16 maravedís. El de la Inclusa y sus adyacencias, deducidas sus rentas y las de la Hermandad de la Esperanza y colegio de San Nicolás: 712.652 reales y 26 maravedís. El del hospicio: 627.087 reales y 27 maravedís. Lo que hace que un total de 5.970.505 reales y 1 maravedís. A los 958.421 reales han de sumarse lo que importaban las rentas de refugio, con que se contó en el presupuesto y después se han excluido: 400.440. El aguardiente no produjo en los últimos 4 meses de 1811 más que 247.765, de donde se observa una baja considerable. El teatro se arrendó por orden del rey en 20.000. La plaza de toros nada producía por estar el asentista reintegrándose de anticipaciones. Los bienes nacionales eran nulos. Los gastos «de primitiva dotación» de la municipalidad habían aumentado. La cuota que se aumentó de juego, la recibía el Hospicio y la Inclusa. De forma que resultaba un déficit de 4.783.142. Déficit de los establecimientos en el presupuesto: 3.500.215. Renta de refugio: 400.440. Déficit de la municipalidad: 4.102.487. Total: 8.003.142. Productos corrientes: Impuesto municipal: 1.000.000. Arbitrio de tiendas y puestos: 300.000. Aguardiente: 700.000. Teatro: 20.000. Cuota sobre juego: 1.200.000. Total: 3.220.000. Déficit líquido: 4.783.142. A esto había que agregar la diferencia por la subida de comestibles. Además necesita un nuevo contingente para el ramo de educación que aunque viene comprendido en el real Decreto, no en los arbitrios.

⁵⁸ J. MERCADER, *Historia...*, p. 294 y 300.

por el fraude, a pesar de que la municipalidad para atajarlo bajó los derechos que se cobraban, hasta que no se vio otra salida que su subasta⁵⁹.

d) *El plan de gastos de abril de 1812*

Despojado de las sisas, Madrid no tenía más fondos que los que el monarca se dignase aplicar, aparte de distintos créditos a su favor, entre ellos los 3.608.267 reales debidos por la referida consignación, de difícil cobro. El 14 de marzo de 1812 se nombró una comisión municipal para que formase un estado de rentas y gastos de Madrid y propusiese alguna solución a estos problemas⁶⁰. El uno de abril la comisión presentó el estado o presupuesto de ingresos y gastos. Se aprobó y se envió al Ministro y al prefecto:

Plan⁶¹ de gastos en primero de Abril de 1812

	Rs anuales
Nº 1º cárceles con sus dependientes ⁶²	615.313
2º los dos presidios con los suyos ⁶³	147.010
3º limpiezas de las calles y pozos con sus empleados	1.000.000
4º fontanería con los suyos ⁶⁴	300.000

⁵⁹ La historia de la subasta es larga: un vecino, Juan la Barchede propuso el 11 de enero de 1812 tomar en arriendo los derechos de entrada de aguardiente, licores, espíritu de vino y demás líquidos espirituosos. Las condiciones del arriendo le asemejaban a una subrogación, por tiempo de un año, prorrogable –a instancia del interesado– por otro más. Por su lado se comprometía a pagar un millón de reales, en doce mensualidades, de forma adelantada y con una fianza de 100.000 reales. La municipalidad, que veía disminuir sus ingresos –32.404 reales en octubre, 87.600 en noviembre, 84.281 en diciembre– manifestó su conformidad con la propuesta, con una serie de condiciones: que tras el año se pudiese rescindir el contrato por ambas partes, y que se controlasen las entradas de los últimos meses, para evitar el fraude. El proponente estaba de acuerdo, pero bajó el monto a 750.000 reales, cantidad que la municipalidad consideraba inaceptable. La continua baja de los productos hizo que la municipalidad, con total impotencia, no tuviera otra escapatoria que convocar en mayo una subasta; aunque de sus resultados no he encontrado documentación (AVM-S 2-366-6). Los productos de esta renta en el año 1812 se encuentran en AVM-S 2-366-13.

⁶⁰ AVM-S 2-366-3. Los trabajos de esa comisión, es decir la razón de gastos que anualmente debía hacer la municipalidad por un lado y los productos y rentas con que contaba, se encuentran en AVM-Cn 4-41-8.

⁶¹ AVM-S 2-366-3. En las notas siguientes iré dando un somero análisis siguiendo las justificaciones que la municipalidad hizo sobre el presupuesto. En ellas, como se verá, se intenta mostrar la eficacia de la gestión del ayuntamiento –cosa que, pienso, era sincera– y los motivos de la desastrosa situación.

⁶² Los gastos de las cárceles crecían «enormemente»; debido al gran número de presos existentes –llegaban a 550– y al excesivo precio del pan –que importaba 35.000 reales al mes, a pesar de haberse reducido la ración a lo mínimo.

⁶³ Con los presidios ocurría lo mismo, eran más de cien el número de individuos en ellos y ya no existía sitio donde meter a más «delincuentes».

⁶⁴ Con lo previsto para limpieza, apenas podía hacerse superficialmente. Nunca había sido menor el gasto en este servicio; ni había estado más cara la cebada –necesaria para las mulas de los carros que transportaban la basura–. Lo destinado a fontanería apenas daba para conservar las aguas existentes, pero no servía ni para obras para nuevas conducciones, ni para evitar la disminución de este líquido.

5º empedrados id. ⁶⁵	200.000
6º Paseos públicos y caminos de ronda ⁶⁶	150.000
7º Conservación y reparos de fincas de propios con sus dependientes ⁶⁷	140.000
8º Alumbrado con los suyos ⁶⁸	700.000
9º Alojamientos y coches de los Sres. Generales y comandante de la Plaza	160.000
10º Sueldos del correximiento y su secretaría, la de Ayuntamiento, Contaduría, Oficinas de Alojamientos, Archivos, Porteros, Celadores de Policía Urbana, Administraciones de Arbitrios, Verederos y guardas de entrepuertas ⁶⁹	738.250
11º Yd de jubilados de aquellos destinos ⁷⁰	133.414
12º Asistencia del Colegio de Doctrinos ⁷¹	18.000
13º Gastos Judiciales ⁷²	10.000
14º Yd de ejecución de Justicias ⁷³	4.000
15º Ympresiones ⁷⁴	20.000
16º Gastos de escritorio, esterado, carbón y leña de todas las oficinas que están a cargo de la municipalidad ⁷⁵	70.000
17º Gastos con los sordomudos ⁷⁶	20.000

⁶⁵ El empedrado se redujo a los remiendos.

⁶⁶ La conservación de los árboles de la corte consumía más de lo indicado.

⁶⁷ La fincas de propios padecían continuos perjuicios y deterioros. Las que estaban en el campo porque se encontraban en orillas de ríos y les afectaba las humedades y crecidas de estos, o por las tallas indiscriminadas de extraños que sufrían sus árboles. Las que estaban dentro de Madrid porque eran muy viejas y necesitaban continuos reparos.

⁶⁸ El ramo de alumbrado era en lo antiguo un auxilio para el ayuntamiento porque la contribución de los caseros superaba con mucho el gasto ocasionado. Pero en el día el mayor precio del aceite, cristales, algodón y demás artículos, hacían que existiese déficit.

⁶⁹ A pesar de la reforma que hizo la nueva municipalidad al comienzo de su mandato, en la que se suprimieron algunos empleos municipales y los capitulares renunciaron a sus sueldos y comisiones, sigue quedando ese monto de gasto en personal.

⁷⁰ Los jubilados eran 26, hacía pocos meses eran 45. Pero se les fue colocando en las vacantes o fallecieron, y de esta forma este gasto podría ir desapareciendo.

⁷¹ Este colegio, cuyo patronato es inmemorable en la municipalidad, tendría que pasar a la protección del monarca, y su nueva denominación sería de colegio municipal.

⁷² Gastos en el día más precisos, pues la calamidad de los tiempos hacía más difícil la cobranza. Además, desde que se separó del corregimiento la jurisdicción ordinaria era forzoso acudir a otros tribunales.

⁷³ Aunque los 800 ducados que tenía de sueldo el ejecutor estaban cargados a las sisas, Madrid continuaba pagándolos sin el auxilio de estas; aparte de la mayor frecuencia de gastos.

⁷⁴ Los continuos bandos, edictos, reglamentos, avisos y otros papeles que se imprimían y publicaban hacían indispensable este gasto.

⁷⁵ Más de doce oficinas trabajando justificaban este gasto.

⁷⁶ Por orden del ministro del Interior y a solicitud de la real sociedad económica se dio albergue a estos individuos en el colegio de los doctrinos, privando a estos de la renta de un espacioso cuarto. Si no se les agregaba a otro cuarto era imprescindible la inclusión de este gasto.

18ª Gastos con los prisioneros ⁷⁷	60.000
19ª Festividades de Yglesias ⁷⁸	40.000
20ª Últimamente para gastos extraordinarios y eventuales como undimientos, reparos y construcción de alcantarillas, contribución de fincas de propios, vestuarios de los doctrinos, obsequios, y festejos públicos, y otras varias obras de comodidad u ornatos de la población ⁷⁹	<u>900.000</u>
	5.425.987

Ingresos

21. Producto de sus Propios y Arbitrios antiguos ⁸⁰ :	800.000
22. Id del Impuesto líquido en las puertas ⁸¹ :	1.000.000
23. Id del aguardiente ⁸² :	700.000
24. Id del arbitrio municipal ⁸³ :	300.000
25. Id de la contribución de alumbrado ⁸⁴ :	523.500
Total:	3.323.500
Déficit anual:	2.102.487

Como puede apreciarse aparecían las obligaciones que en el día tenía Madrid reducidas al mínimo y los productos posibles para atenderlas. Este estado sólo cuenta con sus antiguas obligaciones, es decir las de «su primitivo instituto», en las que se aprecia el expresado déficit sin contar con 1.400.000 reales que debía la municipalidad en concepto de cuentas liquidadas y libradas para cuyo pago necesitaba un fondo subsidiario, siempre que no se le reintegrasen los 3.608.267 reales debidos por retrasos de la consignación.

e) *Un déficit voraz*

El 20 de mayo de 1812, el corregidor manifestó a la municipalidad el estado de

⁷⁷ Desde antes de la batalla de Ocaña, se había visto precisada la municipalidad a asistir a los innumerables prisioneros que habían ido llegando a ella.

⁷⁸ Antes de la municipalidad josefista eran tantas que sólo la del Corpus gastaba lo indicado.

⁷⁹ Y otros muchos gastos no previsibles. Aunque el Rey, en 5 de septiembre de 1811, redujo su importe a 200.000 diciendo que el resto se incluyera en apartados concretos, la experiencia muestra que ni la cantidad anotada era suficiente.

⁸⁰ En el primer presupuesto no pasaba de 600.000, pero con el nuevo sistema de administración aumentó en una tercera parte; aunque por la calamidad del momento estaba disminuyéndolo.

⁸¹ Este impuesto se destinó como parte del cupo de los seis millones y se le reservó después a la municipalidad como uno de los arbitrios que se subrogaron en lugar de la consignación. Aunque producía más de lo previsto, no compensaba la baja en otros.

⁸² No lo había usado en toda su extensión por falta de fondos y por no contrariar el sistema de libertad. Hay una diferencia de más de un 50 por 100.

⁸³ El primer trimestre del año en curso este arbitrio tendría gran baja.

⁸⁴ Disminuía no sólo por razones generales, sino por las muchas casas que faltan o están totalmente desalquiladas.

los fondos y las deudas existentes⁸⁵; era desolador: 1.821 reales de fondos, 602.620 de deudas. Esto le llevó a proponer que se presentase al ministerio del Interior un estado demostrativo de los ingresos de la municipalidad en los dos meses últimos, pagos hechos en el mismo período y déficit que resultaba. Y así se hizo el 27 de mayo, día en que se envió un estado sumario de los ingresos y pagos de la municipalidad por todos los ramos en los dos meses que van de 25 de marzo a 25 de mayo⁸⁶. El resultado global era —en palabras del corregidor— lastimoso: 931.195 reales de ingresos —y esto porque se incluían 50.000 reales extraordinarios de la explotación de propios que estaban en juicio y 125.940 de certificaciones a cargo de lo debido por la consignación—, 1.559.114 de gastos y un déficit de 627.918⁸⁷. Aproximadamente la mitad del déficit se cubría con préstamos⁸⁸, el resto girando letras; no por ello dejaba de ser un déficit real y efectivo en dichos dos meses, que no pudiéndose cubrir con los productos y rentas asignados resultaría al año la can-

⁸⁵ AVM-S 2-366-3. Tomados de la cuenta que la contaduría presenta cada miércoles.

⁸⁶ Los borradores de los productos, gastos y débitos en los dos meses contados desde 25 de marzo hasta 25 de mayo, se encuentran en AVM-Cn 3-558-16.

⁸⁷ AVM-S 2-366-3. Estas cantidades se desglosaban de la siguiente forma:

- | | |
|-----------|---|
| Ingresos: | 1. Propios y arbitrios antiguos: 156.260 |
| | 2. Alumbrado: 37.344 |
| | 3. Arbitrio municipal: 51.922 |
| | 4. Recargo en las puertas: 103.794 |
| | 5. Renta del aguardiente: 62.478 |
| | 6. Casas de juego: 150.000 |
| | 7. Letras giradas contra la caja: 243.455 |
| | 8. Producto líquido de certificaciones de créditos: 125.940 |
| Pagos: | 9. Parte de sueldos: 86.294 |
| | 10. Alumbrado: 36.531 |
| | 11. Limpiezas: 192.615 |
| | 12. Empedrados: 18.115 |
| | 13. Fontanería: 45.257 |
| | 14. Paseo del Prado: 1.552 |
| | 15. Presidios: 20.595 |
| | 16. Gastos extraordinarios: 53.763 |
| | 17. Fiestas de la Iglesia: 8.595 |
| | 18. Propios y sus obras: 15.998 |
| | 19. Obras de la plaza de toros: 1.952 |
| | 20. Manutención de ambas cárceles: 129.722 |
| | 21. Colegio municipal: 3.000 |
| | 22. Policía urbana y gastos de municipalidad: 264.639 |
| | 23. Ramo de alcantarillas: 42.000 |
| | 24. Establecimientos de beneficencia: 300.119 |
| | 25. Pérdidas de pagarés: 6.272 |
| | 26. Letras sobre el recargo: 263.661 |
| | 27. Letras sobre el ramo de aguardiente: 68.427 |

⁸⁸ AVM-S 2-366-3. El déficit se cubrió con los 200.000 reales que en 24 de marzo prestó a intereses don Pedro García y Compañía, con 113.142 que había suplido de su casa el corregidor y con 314.778 girados en letras.

tidad de 3.767.511. En definitiva que en los casi dos meses transcurridos desde el envío del «estado» del 18 de abril la situación no sólo no había mejorado, sino todo lo contrario. Lo cual confirmaba que los productos y rentas con que contaba la municipalidad no eran suficientes para el desempeño de sus obligaciones. Además el real Decreto que eximía de derechos de introducción y tráfico de los granos y legumbres⁸⁹ disminuía las rentas municipales más de 300.000 reales al año. En un intento desesperado de supervivencia el 5 de junio se proponen nuevos recargos de los derechos de entrada. De ahí que se pida al rey que se digne proveer los medios necesarios y en especial los derechos sobre el vino, carne, aceite, jabón, bacalao, granos, arroz y legumbres; además de poder cobrar sobre los demás géneros que comprenden la razón que se envió con fecha de 5 de junio. Los distintos acontecimientos políticos impidieron cualquier nuevo arreglo. La limpieza de las calles y pozos quedó abandonada, el alumbrado descuidado, las cárceles al mínimo y los demás ramos se resentían de la misma calamidad y algunos jornaleros y dependientes —en los momentos de máxima escasez— fallecieron de hambre⁹⁰.

4. UNA CUÑA CONSTITUCIONAL

El 9 de agosto se disolvió el ayuntamiento josefista, el 10 se ausentó el rey y la evacuación de la ciudad se hizo hasta el 31. El 1 de septiembre Madrid «recuperaba» sus sisas y desaparecía el impuesto municipal. El ayuntamiento extinguido dejaba una deuda de 1.849.823 reales⁹¹.

La comisión interina de Hacienda pública, deseaba por todos los medios restablecer el orden que había sido alterado «por los reglamentos e instrucciones dictadas por los franceses», sobre la administración y recaudación de todas las rentas reales y municipales para la introducción de géneros y efectos en esta villa. Acordó para ello, el 31 de agosto, la abolición de dichos reglamentos, tarifas e impuestos. Y determinó que desde el 1 de septiembre se siguieran las disposiciones del «gobierno legítimo», para lo que se comunicaban éstas a la administración general y demás oficinas de liquidación y recaudación que regían a principios de enero de 1808; dirigiéndose a las mismas los correspondientes avisos al público, para su debida inteligencia⁹². La junta interina de Hacienda se apoderó de 24.000 reales procedentes

⁸⁹ Medida que intentaba paliar en algo el hambre generalizada en el invierno de 1812, sobre todo en Madrid. J. MERCADER, *Historia...*, p. 305. En este sentido el real Decreto de 23 de abril de 1812 concedió la absoluta exención de introducción, portazgo, pontazgo, peage y demás. Esta medida produjo que los arrendatarios de la barca de Arganda y Arrebatacardos, peso real y Alóndiga pidieran una compensación por ello (AVM-S 3-459-20).

⁹⁰ AVM-S 2-366-3. Particularmente para el tema del hambre en Madrid es interesante la aportación de J. MERCADER, *Historia...*, pp. 294-306.

⁹¹ Cantidad acumulada desde el 2 de septiembre de 1809 hasta el 9 de agosto de 1812 (AVM-Cn 4-41-2).

⁹² AVM-S 3-289-10.

del producto de sisas en la real aduana, a causa del préstamo de la misma cantidad que hizo para la manutención de los hospitales.

La nueva municipalidad en su intento de poner orden en las cuentas, mandó realizar un cálculo aproximado de las rentas que podía tener Madrid mensualmente⁹³. Se esperaban 447.730 reales de productos; 652.347 reales de gastos; y por lo tanto, un déficit mensual de 204.617 reales⁹⁴. Por otro lado se puso en pie de nuevo la Junta de propios y sisas, que con una vigencia temporal breve, va a dejar frutos de una actividad frenética. La repuesta Junta de propios y sisas, acordó —entre otras cosas— proceder al nombramiento de recaudadores y demás empleados que se considerasen precisos en la aduana y puertas, para el cobro de todo lo perteneciente a las sisas⁹⁵. También se mandó que el contador formara un reglamento para estos menesteres.

Mientras se formaba dicho reglamento se dispuso, el 29 de septiembre, que no hubiese en la aduana y puertas más empleados que un interventor o administrador y un recaudador⁹⁶. A pesar de todo lo prescrito se siguieron cobrando en las puertas los derechos que se establecieron en 1810 y no los que antiguamente regían; con el agravio que esto suponía para las sisas de Madrid. De ahí que el ayuntamiento exigiera que se cumpliera lo establecido, y que semanalmente se entregasen los productos en la Depositaria municipal.

El reglamento siguió su fase de elaboración, encargado a principios de septiembre, el 20 ya estaba terminado. El 22 se pasó a los síndicos, y estos dieron su parecer el 28, y se aprobó definitivamente el 30, encargando su impresión⁹⁷; todo un récord en esta historia.

No se puede decir que esta disposición fuese un primer intento de orden con criterios liberales. Lo que se ofrecía era un intento de fiscalizar minuciosamente todas

⁹³ AVM-Cn 4-41-7.

⁹⁴ Es evidente la caída de ingresos producida por la guerra, sólo 5.372.760 reales al año, frente a 7.828.164 de gastos, lo que suponía un déficit de 2.455.404.

⁹⁵ El nombramiento de dependientes para la recaudación de derechos de sisas, que se hizo de entre los antiguos recaudadores, en AVM-S 3-289-10 y 3-459-11. En este último expediente aparece una orden para que se cerrasen los portillos de la villa, medida que seguramente tenía una finalidad de orden público, pero que también evitaría el fraude.

⁹⁶ El primero cobraría 800 ducados y el segundo 600, anualmente (AVM-S 3-289-10). Los lugares que deberían ser atendidos eran la real aduana, la puerta de Alcalá, la de Atocha, la de Toledo, la de la Vega, la de San Vicente, la de Santo Domingo y el portillo de Embajadores.

⁹⁷ El *Reglamento que por ahora debe observarse para la recaudación y administración de los productos de sisas y derechos de hospitales que se adeudan en la Real Aduana y Puertas de Registro de esta Villa*, era un impreso de ocho páginas, dividido en tres títulos, y estos en distintos capítulos: obligaciones de los interventores o administradores y recaudadores (12 capítulos); orden y arreglo para el depositario general del ayuntamiento de Madrid (3 capítulos); de lo que corresponde a la contaduría (6 capítulos). Terminaba con una nota de los géneros que satisfacían derechos a sisas y hospitales, es decir, la tarifa de derechos. Ejemplares impresos de este reglamento se encuentran en AVM-S 4-186-52, 1-450-2, 7-204-73; la copia manuscrita, que aparece con otros papeles relacionados con su elaboración en AVM-S 3-289-10.

las entradas, para conseguir el máximo rendimiento y evitar el fraude. Todo el edificio era sostenido por la Junta de propios y sisas, que continuaba con su papel directivo.

Al mismo tiempo se pidió que se hicieran las propuestas de sujetos idóneos para el desempeño de la recaudación. Así se hizo, pero los sucesos acaecidos impidieron el nombramiento de éstos y la vigencia real del reglamento⁹⁸.

5. ÚLTIMOS INTENTOS DE ARREGLO: LA INCAPACIDAD DE LOS ARBITRIOS

Con la restauración del «gobierno intruso», el 3 de noviembre de 1812, volvió el impuesto municipal. Pero no todo volvió a ser igual. Para economizar 118.800 reales en sueldos, se encargó a los dependientes de la real Hacienda que ellos mismos verificasen el impuesto municipal. También se nombraron, de entre el número de jubilados, un visitador o interventor para cada puerta y aduana. El cometido de éstos era intervenir en el aforo y reconocer los asientos que llevaban los dependientes de rentas respectivos al impuesto; fundamentalmente en lo que se refiere a la renta del aguardiente, ya que al no tener parte la Hacienda real en los derechos de esta renta, se pensaba que no haría la misma comprobación que con los demás géneros⁹⁹.

El 15 de diciembre de 1812, ya sin el agobio de las peticiones de tropas¹⁰⁰, se intentó dar principio a las atenciones de policía urbana. Para ello se elaboró un plan de las atribuciones fijas, sobre el general de 18 de abril, que informase a un golpe de vista de la situación en que se estaba¹⁰¹: o se dan los medios oportunos, o se exonera al gobierno local de mantener los hospitales y demás establecimientos de beneficencia y educación. En ese plan aparecía que los ingresos con que contaba la municipalidad tan sólo aportaban 1.650.000 reales¹⁰². Frente a estos los gastos mínimos, puramente municipales, alcanzaban al menos cinco millones de reales¹⁰³. Resultaba por tanto un déficit de 3.350.000 reales.

⁹⁸ AVM-S 3-289-10.

⁹⁹ AVM-S 2-366-10.

¹⁰⁰ J. MERCADER, *Historia...*, 355 y 359. El 2 de noviembre José I recuperó Madrid, donde sólo estuvo 48 horas, dejó al general Merlin encargado de la comandancia de la plaza y al Ministro de Policía Arribas como jefe del gobierno civil. El grueso de la corte permanecía en Valencia. Hasta el 3 de diciembre no pudo regresar a su Palacio regio, desde donde intenta reorganizar los servicios públicos.

¹⁰¹ AVM-S 2-366-3. En el anexo 2 de mi artículo *La fiscalidad...* aparece este nuevo presupuesto.

¹⁰² El producto de los propios y arbitrios antiguos era de 500.000 reales; el impuesto líquido en las puertas, 500.000; el aguardiente, 350.000; la contribución del alumbrado, 300.000.

¹⁰³ De ellos la limpieza suponía el 20 por 100; las cárceles algo más del 12 por 100; fontanería y empedrados el 10 por 100; alumbrado el 14 por 100; sueldos más del 15 por 100, aunque esta partida sería algo mayor pues en otras se incluye tanto materiales como sus empleados; un 18 por 100 en gastos extraordinarios y eventuales, etc.

Ante esa situación el monarca intentó poner orden. Pidió¹⁰⁴ que se formasen nuevas tarifas para restablecer la contribución sobre puestos y tiendas —uno de los arbitrios concedidos por Decreto de 26 de noviembre de 1811 para cubrir sus gastos y los de beneficencia. Pero la experiencia mostraba que las ventajas del arbitrio eran pocas: lo poco que producía prácticamente era devorado por la gran masa de personal necesaria para su puesta en funcionamiento¹⁰⁵. Además, los acontecimientos que habían ocurrido en los últimos cuatro meses ocasionaron una alta emigración, con lo que el número de consumidores había disminuido. Por ello la municipalidad vio —y así lo comunicó al ministro del Interior¹⁰⁶— que esto no podía ser el remedio para la situación; lo oportuno sería volver a las antiguas sisas o retomar la consignación, o, en último caso, buscar nuevos arbitrios.

Mientras, la situación continuaba agravándose; así, por ejemplo, el 22 de enero de 1813, el regidor comisario de alumbrado comunicó que sólo quedaba aceite para iluminar la ciudad dos días. Se veía claramente que no había solución, el momento final estaba claro¹⁰⁷. El ministro de Interior apuntó que se aumentase el alumbrado y la carga real, la cuota del aguardiente u otro arbitrio cualquiera que no pesase sobre el tesoro público¹⁰⁸. El ayuntamiento pensaba que esto era inaceptable. La carga real¹⁰⁹ era pagada por todas las casas de Madrid, exceptuando aquellas que la habían redimido. Y, sin embargo, en el día no había casa a la que correspondiere más de un tercio de sus productos posibles. La situación imposibilitaba la cuota an-

¹⁰⁴ Por acuerdo de 24 de diciembre de 1812.

¹⁰⁵ AVM-S 2-366-3. En el cálculo que se formó de los rendimientos de este arbitrio se supuso que ingresaría 465.000 reales: 365.000 por el ramo de tiendas y 100.000 por el de puestos. La cuota se redujo a lo mínimo debido a la pobreza del pueblo y para facilitar la cobranza. Se formó una oficina y se nombraron recaudadores cuyo coste anual era de 72.066 reales, si bien en realidad sólo era de 25.884 ya que los 52.182 restantes tenían que salir de las pensiones que disfrutaban como jubilados. Pero lo cierto era que las pensiones no se pagaban y que el total debía salir puntualmente del arbitrio. Entablado el método y establecida la recaudación fueron indecibles las dificultades y reclamaciones que se produjeron, sin haber dado más ingresos hasta su suspensión en 9 de agosto, y a pesar de estar ya vencidos dos tercios, que 118.894-6, es decir un tercio de lo previsto. Sólo del anuncio de la contribución se cerraron infinitas tiendas, muchas se transformaron en puestos, más beneficiosos para la tributación.

¹⁰⁶ En oficio de 30.XII.1812.

¹⁰⁷ AVM-S 2-366-3. Así lo discute la municipalidad el 1 de febrero de 1813 y está claro a la luz de los datos que han ido apareciendo. Sólo el recargo en las puertas y el ramo de aguardiente aportan algo a las arcas municipales, en las que mensualmente al menos se daba un déficit de 270.290 reales y había una deuda líquida de 2.000.000 de reales. Las rentas no alcanzaban la tercera parte de los gastos de policía urbana y los establecimientos de beneficencia ni se contemplaban. Se necesitaban más de 6 mill. Para esto no hay finca de los bienes nacionales que sirva; de forma que propuso que los recursos que en el día podría servir son el producto de los juegos prohibidos hasta tres millones de su importe, y seis en granos de tercias, casas, escusados, noveno y demás diezmos correspondientes al estado y bienes nacionales en Madrid y alrededores.

¹⁰⁸ El 6 de febrero de 1813.

¹⁰⁹ La carga real era una redención de la de toda clase de hospedaje de corte, que se impuso al trasladarse la corte de Valladolid a Madrid.

tigua y no dejaba lugar para otra nueva. Lo mismo ocurría con el alumbrado y otros arbitrios¹¹⁰, éstos eran ineficaces.

Pero como algo había que buscar, la municipalidad propuso el recargo de derechos en la introducción de varios artículos¹¹¹ con lo que pensaba podía conseguir un millón de reales. Se pediría desde luego el producto de patentes, el de papel sellado, el de la contribución temporal y el de los juegos.

El 19 de febrero se presentó al ministro un plan de gastos indispensables de la municipalidad y de los establecimientos de beneficencia, basado en el plan de 11 de diciembre de 1812¹¹². En él se pedía que las obligaciones de la villa fueran menores; así, por ejemplo, que se dictase un Decreto en el que se eximiese de todo el gasto que hacían las tropas y sus generales, de forma que éstas —las obligaciones— quedasen reducidas a las de mera policía urbana y cuando más a los establecimientos piadosos¹¹³. También se solicitaba que los gastos de educación no recayesen en el presupuesto municipal; éstos no habían entrado en los últimos planes y en el caso de que se adjudicasen a la municipalidad habría que proveer los fondos.

Además de los gastos corrientes, había que tener en cuenta que Madrid debía 200.000 ducados —2.200.000 reales— en cuentas liquidadas. Los gastos se habían reducido una tercera parte desde que se instaló la municipalidad, a costa del servicio y de los dependientes —muchos fueron despedidos o se jubilaron—; y otros no cobraban su sueldo, lo que ocasionaba miseria y aún —debido a las circunstancias excepcionales— la muerte. Todos los arbitrios fueron nulos, ya que recaían sobre un pueblo agonizante y exhausto. Los números dicen lo demás: déficit de policía, 2.830.000 reales; déficit de hospitales, 3.164.740 reales; déficit total, 5.994.740 reales.

Después de esta fecha no hay más información en la documentación utilizada. No existen libros de acuerdos sobre el período¹¹⁴: faltan desde 1 de enero de 1813

¹¹⁰ AVM-S 2-366-3. Así el ramo del aguardiente se aplicó en real Decreto de 25 de septiembre de 1811 por valor de 1.500.000. Luego decayó de tal forma que en poco tiempo se pidió permiso y se le negó para arrendarlo en 1.000.000 y en el día apenas producía 400.000.

¹¹¹ AVM-S 2-366-3. El rey había concedido por real Decreto de 19 de noviembre de 1810 este derecho. El 22 de abril de 1811 mandó cesar el recargo en el vino, carne, aceite y jabón. En 21 de noviembre, también por real Decreto, se redujo a la mitad el de 8 reales que exigía en arroba de bacalao. Posteriormente solicitó con un plan se le concediese la extensión de dicho recargo. En el documento citado arriba, aparece un cuadro con estos: los derechos que se pagan para la real Hacienda por la entrada de los géneros indicados y lo que se podía aumentar para el impuesto municipal.

¹¹² El plan aparece en AVM-S 2-366-3. En él se preveía unos gastos municipales ordinarios de 2.830.000 reales, después de deducir los ingresos de los propios y arbitrios antiguos, el impuesto de las puertas y la contribución de alumbrado. Un déficit por la manutención de hospitales, Inclusa y hospicio, de 3.164.740 reales, una vez deducidos sus productos. De esta forma el déficit total era de 5.994.740 reales.

¹¹³ Una razón de los gastos que podían economizarse, por no ser propios de la municipalidad, en AVM-Cn 4-41-2. Aquí aparecen, entre otros, coches y gastos de alojamiento de algunos generales.

¹¹⁴ Hay que recordar aquí un acuerdo del ayuntamiento constitucional de Madrid, de 30 de diciembre de 1813, sobre que se tachase en los expedientes existentes en el archivo cuanto fuese denigrante para la nación obrado en tiempos del gobierno francés (AVM-S 2-343-8).

hasta 31 de mayo, fecha en que el gobierno josefista abandona Madrid definitivamente. Tampoco se conservan las cuentas de este período, de forma que resulta difícil seguir la exposición; sin embargo no es posible pensar otro desenlace que el fracaso. El 17 de marzo el «rey intruso» salió de Madrid para no regresar; en la villa, convertida ahora en una simple plaza de guerra, quedará el general Leval con unos 10.000 hombres¹¹⁵. El 1 de junio se ausentó para siempre el gobierno; el ensayo josefista había concluido y Madrid volvió a su sistema de sisas.

6. UNA VALORACION

Las distintas medidas que se suceden en el reinado de José I (consignación, cesión del estanco de aguardiente, venta de propios, etc.) vienen dadas sin duda por las necesidades financieras de una economía destrozada por la guerra. Pero si de todo esto se abstraen las líneas maestras, pueden encontrarse una serie de criterios que difieren de lo que hasta entonces venía siendo una política sobre las finanzas locales. Y esta novedad refleja bien la recién estrenada ideología liberal —a la que la documentación hace referencia concretamente— y el «espíritu de libertad» que empezaba a ponerse en práctica.

Me refiero en concreto a la centralización: el gobierno josefino despojó de cualquier prerrogativa al municipio y lo articuló según sus necesidades, era el triunfo del Estado, de un Estado liberal si bien aún no desarrollado. La consignación suponía la culminación de todo ese proceso, se hacía al ayuntamiento totalmente dependiente y se le privaba de cualquier autonomía. No era ya una pérdida de la dirección de sus propios y arbitrios, como había ocurrido con la reforma carolina; sino que ahora pierde también la administración de ellos, y, si se puede hablar así, su propiedad. Esos recursos financieros pasan al Estado, y es éste quién dispone de ellos.

Por otro lado se rompió con la vinculación de las tierras concejiles, y comenzó a darse un paso para la creación de un mercado desamortizado. Lo que suponía romper con la base patrimonial de las haciendas municipales y contruir las desde otros postulados.

También fue novedosa la adopción del presupuesto anual, en ese intento de ordenar *ex novo*, propiciado por la ruptura que suponía el nuevo régimen. Desde luego la técnica era todavía defectuosa y sólo supone un barrunto, pero era ya un cambio respecto a esos reglamentos de gasto, que se habían mostrado inoperantes. Frente a ese inmovilismo, se ofrecía una forma más ágil y concreta, más conforme con una sociedad más dinámica.

También se realizó una reforma institucional al suprimirse el Consejo de Castilla, la contaduría general, las juntas de propios y sisas, etc. Un ministerio del Interior se hizo cargo de los municipios, también en lo referente a sus haciendas,

¹¹⁵ J. MERCADER, *Historia...*, p. 367.

aunque en la ordenación de éstas intervenía el ministerio de Hacienda. Las figuras del intendente y del prefecto de provincia, serían las encargadas de unir la administración central con la municipal.

A pesar de todo, el fruto fue el fracaso producido quizás por la inquina que la sociedad española mostró contra el nuevo rey; fue un rechazo a un intento reformador no revolucionario que aportó una serie de respuestas frecuentes en la historia decimonónica.

Capítulo II

LA HACIENDA DOCEAÑISTA

Como es sabido la vigencia de la Constitución de 1812 no es continua en el tiempo, desde su promulgación en 1812 lo estuvo hasta el 4 de mayo de 1814; después volvió a estar vigente en el denominado Trienio liberal, desde el 10 de marzo de 1820 hasta el 1 de octubre de 1823; y por último desde el Motín de la Granja de 13 de agosto de 1836 hasta que el 18 de junio de 1837 entró en vigor la Constitución de 1837. Es el primer período, el que se va a estudiar ahora, y por ser éste el de elaboración y promulgación de dicho texto, se le ha denominado doceañista.

Se trata por lo tanto de comprender lo que los primeros liberales españoles hicieron con las haciendas municipales, y en concreto con ésta de Madrid; en un momento no fácil ciertamente, sino marcado por la guerra y por las consecuencias de la misma. Hay que hacer ver lo que suponía Madrid para el nuevo gobierno: la capital del Estado. Un nuevo estado nacional, que surge con la revolución, y en el que su capital va a jugar un papel esencial. Y esto se verá en la práctica, pues ante los novedosos cambios que se van a operar en las haciendas locales, varios ayuntamientos —como el de Barcelona, Orense o Granada— pedirán a Madrid consejo para solucionar sus dificultades: capital y modelo, por lo tanto.

1. LAS REFORMAS DE LA HACIENDA: CONSECUENCIAS MUNICIPALES

Al mismo tiempo que se produjo la invasión francesa, se operó en las zonas no ocupadas una revolución que ocasionó, al menos temporalmente, la destrucción del antiguo régimen en España. Como fruto de esta experiencia se desencadenó una serie de reformas en la Hacienda pública, que como se verá afectaron también a las haciendas municipales¹.

Desde los primeros intentos de reforma², la eliminación de las antiguas contribuciones era una meta clara; éstas, además de aparecer obsoletas desde el punto de

¹ Una buena introducción para estos temas se encuentra en el libro de Miguel ARTOLA, *La Hacienda del siglo XIX. Progresistas y moderados*, Madrid, 1986.

² La Junta Central intentó poner orden en la Hacienda, e inició una reforma fiscal. Con el real Decreto de 7 de agosto de 1809 se anunciaba que las alcabalas y millones quedarían abolidos tras la

vista técnico —pues no proporcionaban suficientes recursos—, no respondían a los postulados liberales, que entre otras cosas exigían la libertad de los ciudadanos y el fomento de la agricultura, industria y comercio interno y externo; esto, en lo que ahora interesa, se traducía en una libertad absoluta del tráfico interior³.

a) *El debate sobre las contribuciones indirectas*

Las Cortes de Cádiz recogieron la tendencia partidaria de la contribución directa y enemiga de la indirecta. Esta tendencia era fruto de un estado de opinión contra la imposición sobre el consumo que se tradujo en una extensa literatura sobre la alcabala, cientos y millones. Algunos economistas llegaron a indicar que la decadencia española se debía a la supervivencia de esos impuestos⁴.

Los argumentos que se usaron contra el impuesto de consumo a lo largo del siglo XIX se recogen muy bien —a pesar de ser de fecha tan tardía— en el preámbulo

aprobación de las nuevas contribuciones. Por otro lado se decía que éstas recaerían sobre cosas que verdaderamente podrían contribuir; se repartirían con igualdad; serían lo menos gravosas posible y se recaudarían con el menor desperdicio. Los acontecimientos posteriores al fracaso de Ocaña (noviembre de 1809) contribuyeron a dinamizar las reformas haciendísticas. Por real Decreto de 12 de enero de 1810, se establecía la Contribución extraordinaria de guerra que, sin ninguna operatividad práctica, sí tiene importancia doctrinal. También en ella se hablaba de la supresión de las rentas provinciales, y se introducía un impuesto sobre la renta, sin excepción alguna por razones territoriales o estamentales; sino que todos los vecinos «de estos reinos» tendrían que pagar un monto proporcionado a sus fortunas. De esta forma, por primera vez, y antes de que lo expusiera la Constitución de 1812, se establecía el principio revolucionario de la igualdad ante el impuesto. En la instrucción que acompañaba al Decreto se establecían 22 categorías, según el modo de vivir el vecino, que como ha señalado Artola suponían una contribución del 0,8 por 100. Este Decreto encontró resistencias de todo tipo, muchas veces insuperables. Sin embargo, mediante un reglamento de 3 de septiembre de 1812, se mantenía su vigencia, y no se suprimió hasta que se dictó el Decreto CCCIV de 13 de septiembre de 1813, art. IX.

³ Es decir nos encontramos con uno de los presupuestos ideológicos de la revolución. La burguesía española se encontraba muy influenciada por los autores ingleses, Adam Smith y Ricardo sobre todo. Para ellos lo importante era un sistema de comercio perfectamente libre, sobre todo el interior de cada nación; por el contrario, sí se dejaban algunas trabas proteccionistas con el exterior, las aduanas. De ahí que la tributación indirecta sea considerada como un obstáculo para la libertad del comercio y como algo a eliminar. Por ello el ideal de imposición era la tributación personal, que no interfería con el mercado. Sobre estos asuntos puede ilustrar Henry W. SPIEGEL, *Desarrollo del pensamiento económico. Historia del pensamiento económico desde los tiempos bíblicos hasta nuestros días*, tercera reimpresión, 1990. También E.R.A. SELIGMAN, «El desarrollo de la imposición», *Hacienda pública española*, 13, 1971, 1 49-162. Se trata de una traducción del capítulo primero de su obra *Essays in Taxation* publicada en 1895. Explica el paso de la imposición directa —capitación primero para luego incidir sobre la propiedad— a la indirecta en la edad moderna, y como este cambio pudo acarrear una mayor justicia, pues también pagaban impuestos indirectos las clases privilegiadas. Las revoluciones burguesas traen la tendencia a oponerse a los impuestos indirectos sobre el consumo, que se entiende como impuesto sobre el trabajo y no sobre la riqueza.

⁴ Sobre esto Fabián ESTAPÉ Y RODRIGUEZ, *La reforma tributaria de 1845*, Madrid, 1971, p. 151.

del Decreto de 12 de octubre de 1868 que establecía el impuesto personal⁵. Los inconvenientes de este impuesto radicaban —según el citado preámbulo— «en su forma y de ningún modo en su fondo. Lo que el pueblo maldice y la ciencia tiene condenado, lo que la experiencia rechaza y el estudio ha proscrito, no es la cantidad que se pide al contribuyente, sino la forma en que se le exige. La demora en la entrada de las poblaciones, la odiosa fiscalización, el continuo entorpecimiento en la circulación, la carestía de los artículos más necesarios para la vida, carestía tanto más terrible cuanto mayor es la necesidad, y de la cual no es posible escapar sino privándose de aquel artículo, los procedimientos aún más degradantes que vejatorios, todo ese conjunto de circunstancias contrarias a la libertad, opuesto a la economía y perjudicial en el más alto grado a la riqueza pública, eso es lo que condena con energía la clase que siente a todas horas sus efectos. Y comprendida así la cuestión y conocido el fundamento de las quejas populares, nadie puede, si ama la justicia, sostener un impuesto que tiene la condición de ser más gravoso y duro, cuanto más triste es la situación del contribuyente».

La discusión se fundaba por lo tanto en razones éticas y económicas. Las primeras se podían resumir en una frase de Florez Estrada: «gravar los objetos de consumo general, no es otra cosa más que gravar al pobre y eximir al rico»⁶. Las segundas, según el mismo autor, se concretarían en que «las contribuciones indirectas causan un grave perjuicio a la industria de un país, alterando el valor de las utilidades. Encarecen el precio del trabajo, y, por la misma razón, abaten la cuota de las utilidades; por último disminuyen las facultades productivas de un país, pues, cuanto más baja es la cuota de las utilidades, tanto más difícil es reunir capitales nuevos»⁷.

b) *El nuevo plan de contribuciones públicas*

La Constitución de 1812 establecía un período transitorio, en el que esas contribuciones tradicionales estarían vigentes hasta su sustitución por otras nuevas⁸. Un Decreto dictado en Cádiz, pocos días antes de cerrar sus sesiones las Cortes extraordinarias, desarrollaba este precepto constitucional, mediante el diseño de un

⁵ Esto según opinión de Jesús MARTÍN NIÑO, *La Hacienda española y la Revolución de 1868*, Madrid, 1972, pp. 297-316. Hace un interesante análisis de lo suponía esta imposición antes de las Cortes de Cádiz y de su desenvolvimiento hasta las reformas de 1868. Analiza las ideas del momento sobre las relaciones entre la imposición sobre el consumo y la libertad, el nivel de salarios, el nivel de empleo. También realiza un estudio comparado de estas contribuciones en el sistema fiscal de los países desarrollados del momento.

⁶ *Curso de economía política*, tomo II, primera edición, Londres, 1828, p. 412. Existe una buena edición actual a cargo de Salvador Almenar, con un extenso estudio preliminar. Esta edición reproduce íntegramente la cuarta de 1835, pero introduce las variaciones de la primera (1828), quinta (1840) y séptima (1852). En esta edición el capítulo X se dedica a «las ventajas e inconvenientes de las contribuciones indirectas, y de las personas que las pagan», pp. 923-949.

⁷ *Curso...*, tomo II, p. 411.

⁸ Artículo 338.

*nuevo plan de contribuciones públicas*⁹.

En él se establecía una contribución directa¹⁰, que en consonancia con el principio de igualdad fiscal afectaba a todos, también a los propios de los pueblos. En lo que interesa para esta investigación, hay que exponer que se disponía en él que todas las contribuciones impuestas sobre los consumos¹¹ quedaban extinguidas¹². También quedaban extinguidas las rentas estancadas, exceptuándose el papel sellado¹³. Los pueblos que —como era el caso de Madrid— sobre los citados efectos de consumo, o sobre el comercio interior, que debía quedar enteramente libre, tuvieran señalados algunos arbitrios para sus gastos municipales, o para la subsistencia de algún establecimiento público, deberían proponer a las Diputaciones provinciales otros medios de distinta clase y naturaleza con que subrogar los arbitrios suprimidos¹⁴. Las propuestas debían ser presentadas a las Diputaciones, para que éstas, si las consideraban oportunas, las enviaran al gobierno, y éste a las Cortes —donde recaía la soberanía— para que fueran aprobadas, en su caso¹⁵.

Es decir, que de esta forma Madrid, al igual que otras ciudades¹⁶, se veía —en teoría— otra vez desposeído de sus sisas, al incluirse éstas entre las contribuciones suprimidas. En el Decreto de 21 de noviembre¹⁷ se establecían una serie de reglas para la exacción del tercio anticipado de la contribución directa¹⁸. En él se disponía que en las provincias en que se verificase el repartimiento y la exacción de dicho tercio anticipado conforme a la instrucción aprobada para el establecimiento de la contribución directa, cesaran las contribuciones que debían quedar derogadas¹⁹. Y

⁹ Decreto CCCIV, de 13 de septiembre de 1813, que iba acompañado de una *Instrucción para las Diputaciones provinciales, que acompaña al decreto de las Cortes generales y extraordinarias de 13 de Septiembre de 1813, dirigida a uniformar y facilitar la ejecución del mismo decreto, y establecimiento de una contribución directa sobre la riqueza territorial, industrial y comercial, en lugar de las rentas provinciales y estancadas que quedan extinguidas*.

¹⁰ Los productos de las fincas pertenecientes a los propios de los pueblos, se declaraban sujetos a estas contribuciones, como si fuesen personas particulares; art. XIII.

¹¹ Conocidas bajo la denominación genérica de rentas provinciales y sus agregadas, como son alcabalas, cientos, millones, martiniega, fiel medidor, renta de aguardiente y licores, quinto y millón de la nieve, renta del jabón, la de la sosa y barrilla, cargado y regalía, renta de la abuela, seda y azúcar de Granada, frutos civiles, derechos de internación, etc.

¹² Artículo I.

¹³ Artículo III.

¹⁴ Artículo VI.

¹⁵ Se seguía por lo tanto lo dispuesto por el art. 322 de la Constitución, donde se establecía la exclusividad de competencias de las Cortes para la creación de arbitrios municipales.

¹⁶ En muchas ciudades así ocurrió. Por ejemplo Orense preguntaba el 21 de noviembre de 1813 al ayuntamiento madrileño sobre qué arbitrios había adopta en sustitución de las rentas estancadas. Sucedió que la ciudad gallega cubría escasamente sus gastos con el sobrante de la renta de aguardiente estancado. Y, por las disposiciones ya mencionadas, se encontraba sin medios. Madrid no le pudo a yudar mucho, pues carecía de experiencia sobre el asunto al seguir cobrando todas sus rentas; y así se lo comunicó en carta de 15 de diciembre de 1813 (AVM-S 3-459-83).

¹⁷ Decreto XVIII, ya de las Cortes ordinarias.

¹⁸ Decretado en 16 de noviembre de 1813.

¹⁹ Artículo 2.

en las demás provincias se daba de plazo hasta el mes de abril de 1814 como máximo para realizar esa sustitución²⁰. De no cumplirse lo dispuesto la persona o cuerpo sería responsable, según lo dispuesto en el Decreto de 24 de marzo de 1813.

2. LAS REFORMAS DEL MUNICIPIO: CONSECUENCIAS HACENDISTICAS

La revolución trajo también consigo un nuevo modelo de municipio, el municipio constitucional²¹. Este modelo en contra de lo que expuso Posada²², no fue tan revolucionario, sino que nos ofrece un municipio centralizado, donde la autonomía municipal es mínima²³. Concepción esta que obedece al Estado centralista que instauró la Constitución de 1812.

La noción de este municipio viene marcada fundamentalmente por dos cauces: el texto constitucional y la Instrucción para el gobierno económico-político de las provincias de 1813²⁴.

De los artículos 309²⁵ y 310²⁶ de la Constitución se desprende una ruptura que se operó con el concepto municipal del antiguo régimen, es decir con la consideración de éste como un «ente natural» con una serie de competencia que surgían de su primitivo instituto. Frente a ello las Cortes de Cádiz adoptaron una nueva distribución municipal que se fundamentaba en un concepto legal de municipio. Por otro lado el artículo 311²⁷ suponía el triunfo de un modelo uniformista²⁸. Este municipio era un instrumento del gobierno que de esta forma extendía su poder por todo el territorio nacional.

²⁰ Artículo 3.

²¹ Para un análisis del municipio que surge con la Constitución de 1812 véase Javier GARCIA FERNANDEZ, *El origen...*, pp. 211-301. Libro que utilizo al redactar este epígrafe, siempre que no diga lo contrario. También interesa Concepción DE CASTRO, *La Revolución...*

²² Adolfo POSADA, *Evolución legislativa del Régimen Local en España 1812-1909*, Madrid, 1909. Utilizo una edición realizada por el Instituto de Estudios de Administración Local en 1982.

²³ En contra de lo que sucedió con el primer ordenamiento municipal de la Francia revolucionaria, que creó la noción de *pouvoir municipal*, dotando así al municipio de un área privativa de competencias que daban a éste una gran autonomía. Véase J. GARCIA, *El origen...*, pp. 35-58.

²⁴ Aprobada por el Decreto CCLXIX, de 23 de junio de 1813.

²⁵ «Para el gobierno interior de los pueblos habrá Ayuntamientos compuestos del alcalde o alcaldes, los regidores y el procurador síndico, y presididos por el jefe político donde lo hubiere, y en su defecto por el alcalde o el primer nombrado entre estos, si hubiere dos.»

²⁶ «Se pondrá Ayuntamiento en los pueblos que no le tengan, y en que convenga le haya, no pudiendo dexar de haberle en los que por sí o con su comarca lleguen a mil almas, y también se les señalará término correspondiente.»

²⁷ «Las leyes determinarán el número de individuos de cada clase de que han de componerse los Ayuntamientos de los pueblos, con respecto a su vecindario».

²⁸ Aunque esto no sea una conclusión aceptada unánimemente, puede verse lo que sobre el particular comenta J. GARCIA, *El origen...*, pp. 284-286.

Ni el artículo 321²⁹ ni el capítulo I de la Instrucción de 1813 delimitaban un ámbito de poder privativo del municipio. Tampoco se enunciaba un criterio delimitador claro, sino que tan sólo se hacía una enumeración de competencias, que como ha explicado Javier García parecen extraídas del libro VII de la Novísima Recopilación³⁰. Esto nos enfrenta con una concepción residual del municipio; éste venía a rellenar aquellas áreas, que por un motivo u otro, no fueron ocupadas por el gobierno, que era el verdadero protagonista del Estado nacional centralizado. La lectura del capítulo I de la Instrucción no hace más que reforzar esta conclusión: el sometimiento del municipio al poder ejecutivo mediante la persona del jefe político.

El municipio se había convertido en una mera circunscripción administrativa del Estado³¹, y las autoridades en funcionarios estatales. Brevemente el organigrama nos ofrecía los siguientes elementos: ayuntamiento, diputación, gobierno; y el jefe político que era el enlace entre el primero y el segundo, y entre el segundo y el primero³².

Dentro de estas competencias residuales aparecían la «administración e inversión de los caudales de propios y arbitrios conforme a las leyes y reglamentos, con el cargo de nombrar depositario, baxo responsabilidad de los que le nombran»; y «hacer el repartimiento y recaudación de las contribuciones, y remitirlas a la tesorería respectiva.»

Como se puede observar estas competencias no difieren sustancialmente de las que tenía el municipio carolino, sino que se puede hablar de una continuidad de planteamientos en cuanto a la administración de las haciendas locales; como se verá la novedad viene por otros derroteros.

²⁹ «Estará a cargo de los Ayuntamientos: 1. La policía de salubridad y comodidad. 2. Auxiliar al alcalde en todo lo que pertenezca a la seguridad de las personas y bienes de los vecinos, y a la conservación del orden público. 3. La administración e inversión de los caudales de propios y arbitrios conforme a las leyes y reglamentos, con el cargo de nombrar depositario, baxo responsabilidad de los que le nombran. 4. Hacer el repartimiento y recaudación de las contribuciones, y remitirlas a la tesorería respectiva. 5. Cuidar de todas las escuelas de primeras letras, y de los demás establecimientos de educación que se paguen de los fondos del común. 6. Cuidar los hospitales, hospicios, casas de expósitos y demás establecimientos de beneficencia, baxo las reglas que se prescriban. 7. Cuidar de la construcción y reaparición de los caminos, calzadas, puentes y cárceles, de los montes y plantíos del común, y de todas las obras públicas de necesidad, utilidad y ornato. 8. Formar las ordenanzas municipales del pueblo, y presentarlas a las Cortes para su aprobación por medio de la diputación provincial, que las acompañará con su informe. 9. Promover la agricultura, la industria y el comercio, según la localidad y circunstancias de los pueblos, y quanto les sea útil y beneficioso.»

³⁰ J. GARCÍA, *El origen...*, p. 277.

³¹ Lo que exigía una división provincial y municipal inspirada en esos principios, véase Pablo BAE-NA PINEDO, «La división municipal de Madrid» en *Homenaje a Miguel Artola*, Universidad Autónoma de Madrid, en prensa, que he podido utilizar por gentileza del autor.

³² Instrucción de 1813, capítulo III, artículo XVI: «El Gefe político será el único conducto de comunicación entre los Ayuntamientos y la Diputación provincial, como asimismo entre esta y el Gobierno, al que remitirá para la determinación competente los proyectos, propuestas, informes y planes que aquella formare sobre los objetos encargados a su vigilancia, quedando responsable de cualquiera omisión o dilación que hiciere con el fin de que no lleguen al Gobierno.»

Estaba a cargo de cada ayuntamiento la administración e inversión de los caudales de propios y arbitrios, conforme a las leyes y reglamentos existentes, o que en adelante existieran. Si el ayuntamiento necesitaba para gastos públicos o de utilidad común alguna cantidad no prevista, debería acudir al Jefe político, haciéndole presente la utilidad o necesidad del gasto, y éste lo comunicaría a la diputación provincial³³.

La diputación podía disponer ese gasto con tal de que no excediera del duplo de lo que tenía previsto ese pueblo para gastos extraordinarios y alterables³⁴. Si era superior, por medio del Jefe político tenía que solicitar la aprobación del gobierno, acompañando la solicitud de un informe³⁵.

El ayuntamiento debía rendir anualmente cuentas documentadas a la diputación provincial, dirigiéndolas por medio del Jefe político, de la recaudación y de la inversión de los caudales que administraba³⁶, ya que era del cargo de la diputación velar sobre la buena inversión de los fondos de propios y arbitrios de los pueblos, y examinar sus cuentas según preveía la Constitución; para lo que las pasaría a la contaduría de propios y arbitrios de la provincia.

Una vez que la contaduría había examinado y glosado dichas cuentas las devolvía a la diputación para que se pusiera el visto bueno, si las encontraba conforme a las leyes y reglamentos. Con estos requisitos se pasarían al Jefe político; éste haría formar a la contaduría un finiquito general comprensivo de las cuentas de todos los pueblos de la provincia, y se remitiría cada año al gobierno³⁷.

Este rígido control sobre las finanzas limitan drásticamente el papel del municipio en el nuevo Estado. Como ha explicado Concepción de Castro, los revolucionarios liberales no esperaban de la burguesía que gobernaba los municipios una gestión económica mejor que la tradicional; pero, quizás, tampoco la quisieran³⁸.

3. LA SUPRESION DE LOS TERRENOS DE PROPIOS: UN GIRO EN LA CONCEPCION DE LAS HACIENDAS MUNICIPALES

El Decreto CCXIV, de 4 de enero de 1813, intentaba reducir los baldíos y otros terrenos comunes a dominio particular; favoreciendo un reparto de estas tierras en-

³³ Instrucción de 1813, capítulo I, artículo XI.

³⁴ Sobre esto, además de lo que dice Concepción DE CASTRO, *La revolución...*; interesa la tesis doctoral de Pedro ORTEGO GIL, *Evolución legislativa de las Diputaciones provinciales en España. La Diputación provincial de Guadalajara (1812-1845)*, Universidad Complutense, 1990. Fundamentalmente lo que dice sobre las atribuciones de la diputación en las contribuciones y arbitrios (pp. 929 y ss.); y en el control presupuestario y contable (pp. 987 y ss.)

³⁵ Instrucción de 1813, capítulo II, artículo VI.

³⁶ Instrucción de 1813, capítulo I, artículo XVI.

³⁷ Instrucción de 1813, capítulo II, artículo V.

³⁸ C. DE CASTRO, *La revolución...*, p. 85.

tre los defensores de la patria y los ciudadanos no propietarios³⁹. Esta medida venía reclamada por las ideas liberales de fomento de la agricultura e industria. Se trataba de liberar grandes masas de tierras que estaban fuera del mercado y subexplotadas, de esta forma se pensaba que se aprovecharía mejor la riqueza de la nación y todas sus fuerzas productivas; parte de razón parece que tenían⁴⁰.

El Decreto era fruto de una larga historia que al menos hay que situar en el siglo XVIII, y que las urgencias de la guerra no hizo más que agravar⁴¹. Efectivamente la escasez de medios hizo que se tuvieran que vender algunos baldíos para hacer frente a las grandes necesidades del momento. Pero esas mismas circunstancias hacían que las ventas fueran malas y difíciles.

El 23 de agosto de 1811, la comisión de baldíos presentó un proyecto de Decreto a las Cortes, en un intento de encauzar el problema⁴². El proyecto proponía la venta de la tercera parte de propios y baldíos⁴³, con el objetivo fundamental de aumentar de forma considerable los necesitados ingresos de Hacienda. La discusión comenzó el 27 de agosto de 1811, y para lo que aquí interesa hay que resaltar la intervención de Calatrava. En su opinión la medida sería ruinoso para los pueblos, ya que se verían privados de la tercera parte de sus rentas con las que sufragaban los gastos municipales.

El 15 de abril de 1812 se inició la discusión de un nuevo proyecto⁴⁴. En él se exponía la superioridad y racionalidad de la propiedad privada sobre las formas colectivas, la eficiencia del interés individual para maximizar la rentabilidad agrícola y la necesidad de desamortizar estos bienes reduciéndolos a propiedad particular. Se daba gran importancia al reparto; lo idóneo era que los baldíos, propios y realengos pasaran a propiedad privada, bien mediante venta o reparto gratuito. De esta forma se estableció que todos los vecinos sin tierra recibieran una parcela de baldíos o realengo. En los pueblos en que no existieran baldíos o estos fueran insuficientes, se podría distribuir las tierras de propios. Pero —y esto interesa— el campesino de-

³⁹ Decreto CCXIV de 4 de enero de 1813; sobre reducir los baldíos y otros terrenos comunes a dominio particular, suertes concedidas a los defensores de la patria y a los ciudadanos no propietarios. Se componía de una breve introducción y veinte artículos.

⁴⁰ Una excelente introducción a estos problemas en F. TOMAS Y VALIENTE, *El marco político de la desamortización en España*, Barcelona, 1971.

⁴¹ El libro de Josep FONTANA y Ramón GARRABOU (*Guerra y Hacienda. La Hacienda del gobierno central en los años de la Guerra de la Independencia (1808-1814)*), Alicante, 1986) contiene un capítulo sobre la postura de los liberales frente a baldíos y tierras comunales, donde explica la génesis y trascendencia de este Decreto. Por otro lado el Informe sobre la ley Agraria de JOVELLANOS ofrece un discurso muy clarificador sobre el problema.

⁴² El proyecto de Decreto está reproducido en el Diario de sesiones de las cortes generales y extraordinarias, tomo III, pp. 1. 578-79. Tomo los datos de FONTANA y GARRABOU, *Guerra...*, p. 141.

⁴³ Se exceptuaban de éstos los ejidos, dehesas, boyales y otros bienes similares necesarios para mantener los ganados; FONTANA y GARRABOU, *Guerra...*, p. 141.

⁴⁴ El proyecto se reprodujo en el Diario de sesiones de cortes generales y extraordinarias, tomo IV, pp. 2.806-09; sigo citando por FONTANA y GARRABOU, *Guerra...*, p. 146.

bería pagar, en éste último caso, un canon perpetuo equivalente a las rentas que cobraba el concejo por esas tierras, de forma que se mantuvieran los ingresos municipales.

El 25 de abril comenzó la votación del articulado, hasta el 27 de noviembre no se reanudó la discusión, que concluyó el 2 de enero de 1813. En el texto aprobado se decía que «todos los terrenos baldíos o realengos, y de propios y arbitrios, con arbolado y sin él, así en la Península e islas adyacentes, como en las provincias de Ultramar, excepto los exidos necesarios a los pueblos, se reducirán a propiedad particular, cuidándose de que en los de propios y arbitrios se suplan sus rendimientos anuales por los medios más oportunos, que a propuesta de las respectivas Diputaciones provinciales aprobarán las Cortes.»⁴⁵

Al margen de que, como dice Fontana, a corto plazo los efectos prácticos de este Decreto fueron escasos o nulos⁴⁶, doctrinalmente suponían una revolución, ya que al ser reducidos a propiedad particular todos los terrenos de propios y arbitrios, los pueblos dejaban de tener una parte basilar de sus haciendas: la que proporcionaba la explotación de sus propios⁴⁷. En ciudades como Madrid, donde estos ingresos ocupaban una parte insignificante del total —sobre el 2 por 100— la consecuencia de esta medida no era dramática. Pero existían otros pueblos donde el rendimiento de los propios suponía prácticamente la totalidad de los ingresos; para ello el Decreto preveía que se suplieran estos rendimientos por otros oportunos, bajo la aprobación de la diputación y a su vez de las Cortes; lo cual, como se sabe, no siempre era una tarea realizable⁴⁸.

Aparte de otras consecuencias, lo que quizá sea más importante para este análisis es que se cambia por completo la base sobre la que estaban constituidas las haciendas municipales en el antiguo régimen. Ya se explicó cómo durante siglos los propios, el patrimonio municipal, había sido el sustento de sus necesidades económicas; y cómo los arbitrios se habían concebido siempre como un medio extraordinario, y por lo tanto temporal. La reforma de Carlos III sobre las haciendas concejiles descansaba todavía en esta estructura. Pues bien, ahora se dinamita el pilar más importante de los propios municipales: sus tierras. De forma que indirectamente se está cambiando el sostén de las haciendas locales, éstas tendrían que dejar de ser patrimoniales para convertirse en impositivas.

⁴⁵ Artículo I.

⁴⁶ FONTANA y GARRABOU, *Guerra...*, p. 148.

⁴⁷ Los propios de los pueblos no sólo consistían en tierras, sino también en fincas urbanas, tiendas, oficios, molinos, etc. Con esta disposición sólo se anulaban los primeros, pero en muchos casos eran los más importantes.

⁴⁸ El Decreto también establecía —art. 15— que los vecinos que no tenían tierra podían pedir una parte de baldíos y realengos sobrantes. Si éstos no fueran suficientes se haría el reparto con las tierras labrantías de propios y arbitrios, imponiéndose sobre ella en tal caso un canon redimible equivalente al rendimiento de la misma en el quinquenio que terminó en 1807, para que no decayesen los fondos municipales.

Se puede deducir de lo dicho, por lo tanto, que frente a una hacienda de base patrimonial, que es la del antiguo régimen, la revolución diseña una hacienda asentada sobre la imposición; y esto viene determinado por las necesidades de libertad económica y de mercado que marca la economía liberal. Una pequeña disposición —el Decreto CCXIV— que a simple vista iba encaminada a restituir a los defensores de la patria, fue sin embargo la primera formulación de una larga, y por supuesto no pacífica, historia.

Los obstáculos que los municipios pondrán a la realización de lo previsto en el Decreto fueron muchos. Se verá cómo se restablece el gobierno absoluto sin que Madrid —como la mayoría de los pueblos⁴⁹— venda un propio; y habrá que esperar a las leyes desamortizadoras para que exista un avance en esta materia.

4. MADRID TRAS LA SALIDA DE LOS FRANCESES

Tras la salida de los franceses, una vez que su ejército abandonó la capital, se repuso el ayuntamiento constitucional⁵⁰ y se ordenó que la recaudación de los derechos reales y municipales debían volver a la forma que tenían en 1808. Lo que suponía que otra vez estaba en vigor el reglamento de 1766, con todas las disposiciones posteriores⁵¹ y, entre otras cosas, que la ronda de sisas del casco de Madrid debía volver a desempeñar sus funciones⁵².

Esto era urgente porque los fraudes que se cometían sobre estos derechos eran notables⁵³. Para solucionarlo, los contadores de la villa, el 6 de agosto, propusieron el

⁴⁹ Esto no quiere decir que no se dieran ventas de propios como consecuencia de la guerra, pero la mayoría se hicieron antes de l Decreto. Así gracias a los trabajos de A. OTAEGUI («Las ventas de bienes concejiles en la provincia de Guipúzcoa durante la guerrade la independencia», comunicación mecanográfica presentada al I Coloquio Vasco-Catalán de Historia, celebrado en Sitges, diciembre de 1982) y M.^a Paz ALONSO ROMERO («Ventas de bienes municipales de la provincia de Salamanca durante la guerra de la independencia », *Desamortización y Hacienda pública*, Madrid, 1986) conocemos las ventas realizadas en Salamanca y Guipúzcoa. En el primer caso el grueso se realizó entre 1810 y 1811; en el segundo no se conocen los años, sino que las cantidades corresponden al período 1808-1814 . Sobre esto también trata Carmen MUÑOZ DE BUSTILLO ROMERO, *Bayona en Andalucía...*

⁵⁰ El uno de junio de 1813 se dió aviso al publico comunicando que: «Habiendose regresado a esta Villa los Señores Procuradores Síndicos generales de ella D. Antonio Gómez Calderón y D. Juan Ramón Matute de Texada, y puesto de acuerdo con el Caballero Regidor decano D. Manuel de Rivacoba en unión de los Señores D. Agustín Goycoechea, D. Pedro Uriarte, D. José de Arratia, D. Lucas de Carranza y D. Saturio Cantabrana, se ha restablecido e instalado el Ayuntamiento constitucional de la misma a las diez de la mañana de ho y 1º de junio de 1813. Lo que se avisa al público para su noticia y gobierno. Angel González Barreyro, secretario.» (AVM-S 4-304-32).

⁵¹ Así por ejemplo fue preciso proporcionar en la Aduana nacional un departamento al interventor y recaudador de sisas de Madrid para el desempeño de sus funciones (AVM-S 3-289-26).

⁵² Que no cumplía desde fin de agosto de 1809, fecha en que Madrid perdió sus sisas.

⁵³ AVM-S 3-289-20. Al ponerse en sus funciones la ronda de sisas del casco de Madrid, observó que en las operaciones correspondientes de los dependientes y las introducciones de los tragneros — particularmente los de vino— se cometía fraude; lo cual comunicó a la Junta.

medio, modo y reglas que debían observarse; y a costa de los fondos municipales se reimprimió⁵⁴ y repartió a todos los dependientes de la real Hacienda y de Madrid en las puertas y aduanas la Instrucción para la recaudación de los derechos reales y municipales, de fecha 16 de agosto de 1766, del ministerio de la real Hacienda⁵⁵.

Sin embargo los resultados no fueron los esperados⁵⁶, la realidad no se atiene a instrucciones o a reglamentos: es compleja. Los contadores echaban la culpa a la inexactitud del cumplimiento de la Instrucción de 1766, y así lo expresaron en reiteradas instancias⁵⁷. En ellas manifestaban el modo y medio de corregir los interesados abusos que se sucedían.

De nuevo el problema del fraude se observaba como uno de los mayores enemigos de los derechos de puertas⁵⁸, de ahí que las medidas para erradicarlo se multiplicasen. Por un lado se ordenó cerrar los portillos y extremar la vigilancia en las rondas⁵⁹. Por otro se dieron una serie de normas para la entrada de las carnes a la villa, de forma que además de mejorar la higiene y el abastecimiento, se frenasen las defraudaciones. Así se ordenó que todos los carneros entrasen únicamente por la Puerta de Toledo⁶⁰, en un horario concreto. Lo que obviamente facilitaba el control, al reducirse el espacio y tiempo de éste. Se intentó también evitar el impago de los derechos de carnes mediante un aviso al público⁶¹ en el que se comunicaba que a aquellos proveedores de carnes que no pagasen los derechos en el plazo establecido, no se les permitiría el romaneo⁶². Así como solucionar algunos desa-

⁵⁴ El 25 de agosto de 1813.

⁵⁵ Una copia manuscrita de la Instrucción en AVM-S 3-289-20; un ejemplar impreso en AVM-S 3-263-7; para un análisis de la instrucción M. MARTINEZ NEIRA, *Una reforma...*, pp. 29-31.

⁵⁶ Como indicaron los contadores de villa en un informe (AVM-S 3-294-44).

⁵⁷ Existen instancias en 1814, 1815 y 1817.

⁵⁸ Tanto nacionales como municipales, además de ser un perjuicio para la salubridad.

⁵⁹ AVM-S 3-289-18.

⁶⁰ AVM-S 3-289-15.

⁶¹ AVM-S 3-289-22. «En atención a que las semanas de carnes se cuentan de Miércoles a Jueves, y que en este día ponen los fieles de romana de las Casas del Rastro y Matadero las certificaciones de la carne que en cada una se ha romaneado, por quien, y los der echos que han debengado por sisas y Hospitales, cuyas certificaciones sirven a los dependientes de la Puerta de Toledo, para verificar el cobro, y a la Contaduría para el cargo, y en atención también a que en todo el día del Viernes y la mañana del Sábado tienen los proveedores de carnes suficiente tiempo para acudir al pago de derechos, ha acordado el Ayuntamiento constitucional de esta villa en el celebrado en 21 de este mes se haga saber, y mande a los fieles de romana que al proveedor que en la tarde del Sábado de cada semana no le presente la cédula de haber pagado los derechos de la anterior vencida el Jueves, no le permitan romanear carne, ni salir de allí la que tenga; cuya diligencia bajo la responsabilidad del fiel sea y se entienda respecto de los proveedores conocidos y de provisión continua; pero respecto de los proveedores o abastecedores de quienes se pueda temer verificada la matanza, romaneo y venta de cierto número de cavezas se pueden ausentar sin pagar los derechos, no se les permita romanear y sacar la carne sin afianzar ante los derechos a satisfacción del mismo fiel, a quien también en este caso se le constituye responsable. Madrid, 25 de Agosto de 1813».

⁶² Este aviso vino motivado fundamentalmente por un crédito contra Juan Pariente y Compañía, que adeudaba derechos de sisas de carnes y contra el que se había interpuesto recurso judicial (AVM-S 3-289-22).

justes que se observaban, como el del cobro en la sisa del cuatro y medio por ciento del valor en venta de cada arroba de pescados frescos y en escabeche⁶⁵.

Esta vuelta al sistema «tradicional» también suponía que junto a las sisas el municipio recaudaba de nuevo una serie de derechos para los hospicios⁶⁴ y otras instituciones de beneficencia. Pero las agobiantes necesidades pecuniarias del municipio hicieron que de entrada estas catidades no fueron a parar a sus titulares hasta que estos no las reclamaron. Así la Junta del hospicio envió el listado de las consignaciones que le pertenecían para que se le remitieran⁶⁵.

5. EL INTENTO DE SUPRESION DE LAS SISAS

Pronto se vislumbró el arduo problema que planteaban los Decretos de las Cortes de 13 de septiembre y 21 de noviembre de 1813, sobre la necesidad de que cesase toda percepción de intereses en las puertas de la población⁶⁶. La comisión de depositaría comprendió claramente que esto era, en realidad, uno de sus quehaceres más urgentes. Lo primero que hizo fue calcular qué aportaban estos derechos a las arcas municipales. Analizando los últimos quinquenios —1799 a 1803 y 1804 a 1808— estimaba los ingresos municipales en doce millones de reales y sus gastos en trece⁶⁷; de forma que anualmente aparecía un déficit de un millón de reales. A lo que había que sumar los más de 145 millones que la comisión calculaba de deuda. De los doce millones de ingresos sólo 600.000 reales correspondían por razón de propios y arbitrios; siendo por lo tanto el producto de las sisas y derechos de puertas de 11.400.000 reales.

El 7 de febrero de 1814 la comisión de depositaría llevó el asunto al ayuntamiento para que se estudiase cómo actuar, el asunto no era fácil, se trataba de sufragar unos derechos que aportaban el 95 por 100 de los ingresos municipales, y los recientes experimentos franceses no es que hubiesen sido precisamente muy afortunados. De ahí que el ayuntamiento constitucional, al día siguiente, pidiese a la contaduría con la mayor urgencia un informe donde se clasificasen los gravámenes y cargas que Madrid tenía sobre sí, al mismo tiempo que las rentas y arbitrios. De esta forma, la municipalidad quería tener claras las cantidades a las que tenía que hacer frente, y sus medios. Realmente una buena medida, sin información difícilmente se puede acertar.

⁶⁵ AVM-S 3-494-17, se trata del real hospicio general del Avemaría y de San Fernando.

⁶⁶ Para este asunto, mientras no se diga otra cosa (AVM-S 3-289-70).

⁶⁷ Éstos se distribuían en 6.213.642 reales por razón de efectistas y censualistas; los gastos indispensables de causa pública en limpiezas, empedrados, cárcel, presidio, fontanería, policía y sueldos de empleados sumaban al menos 3.500.000 reales; los gastos en fuentes alcantarillas, reparación y conservación de caminos y paseos, etc. suponían más de 1.270.000; aparte de varias consignaciones que Madrid tenía aplicadas a obras pías, la refacción de los eclesiásticos y sus adyacentes que subían a más de un millón de reales.

No tardó mucho la contaduría y el 14 de febrero se pudo comprobar la situación límite en la que se estaba. Lejos de los datos del quinquenio, las consecuencias de la invasión francesa habían dejado una honda huella: los ingresos no llegaban a 4.779.138 reales, mientras que los gastos se habían disparado hasta 15.804.494, lo que daba un déficit nada tranquilizador de 11.025.355 reales. Esto se debía fundamentalmente a que los derechos de sisas desde el 2 de junio de 1813, fecha en que Madrid volvió a recaudarlos⁶⁸, y hasta el 31 de diciembre habían recaudado solamente 2.085.328 reales, que en un año suponía la cantidad de 3.574.849. Además, la contribución para el alumbrado público, que habitualmente producía beneficios, en las circunstancias del momento era también deficitaria⁶⁹.

Ante esta situación, se pidió a los síndicos que propusieran las soluciones que vieran más convenientes, para cumplir con el art. 7 del Decreto de septiembre del año anterior.

A todo esto la dinámica de los presupuestos continuaba, y en febrero de 1814 el Jefe político de la provincia, pedía a los ayuntamientos que le remitieran el presupuesto de sus gastos y de los fondos para cubrirlos⁷⁰.

6. UNA VALORACION

La política emprendida por los liberales fue sumamente coherente con su ideología. Por un lado, la supresión de las trabas para el comercio interior, con lo que tenían que desaparecer los derechos de consumos y ser sustituidos por una imposición personal. Por otro, la venta de los baldíos y propios para liberalizar esas tierras y crear un mercado inexistente. Además esto servía para hacer frente a las necesidades de la Hacienda central. De esta forma se despoja a los municipios de su patrimonio, con toda la crítica liberal de las oligarquías.

En cuanto al poder, movidos por un claro recelo al municipio, se continuó con la misma línea centralizadora de los Borbones, pero sin radicalización, en contra de lo que ocurrió con José I.

Así vemos una doble política: en la constitución de la hacienda, cambio radical; en la administración y dirección de ella, continuidad.

Se podría hablar de raíces ilustradas, en el sentido de continuidad. No hay una ruptura entre el diseño carolino de la administración y dirección de la fiscalidad municipal, y las propuestas doceañistas, sino una culminación de aquellas. Los liberales libres de las ataduras que inmovilizaban a los gobernantes de finales del dieciocho, llevan a su conclusión sus postulados; corrigiéndolos con las exigencias del mercado.

⁶⁸ Por haberles privado de ellos el gobierno intruso el 1 de septiembre de 1809, incorporándolos al llamado Tesoro público.

⁶⁹ Consistía en 96 reales que por cada farol debía pagar los dueños de las casas de esta población. Al existir 7.632 luces o faroles debía producir un total de 732.672 reales; pero que sólo producía en ese momento 555.963.

⁷⁰ AVM-S 2-167-115.

Capítulo III

LA VUELTA AL MODELO TRADICIONAL

Ciertamente la historia siempre pasa factura; intentar mostrar que no ha ocurrido nada y volver a una situación pretérita como si todo fuera igual, es al menos una falacia. Eso ocurrió también con la hacienda municipal, no podía ser como antes, y los intentos de restauración ofrecen una serie de dificultades que demuestran lo dicho. Pero como en lo formal se continúa bajo el orden propio del antiguo régimen, y se va a intentar que sus disposiciones sean las vigentes, y el Reglamento de 1766, aquel reglamento carolino, va a estar de nuevo en uso, denomino a este período como tradicional, en el sentido que supone la continuidad frente a las innovaciones liberales.

Ya se ha dicho algo en la introducción sobre ese modelo tradicional, el carolino, y se han señalado algunos libros, a ello me remito para una mejor comprensión de las páginas siguientes, que de todas maneras forman una unidad en sí¹.

En primer lugar hemos de fijarnos en la Hacienda real, para analizar un cambio que afectó a la esfera municipal. Me refiero en concreto a la *Instrucción general de rentas reales*, de 26 de abril de 1816, promulgada cuando López Araujo desempeñaba la cartera de Hacienda. En esta Instrucción se formuló el principio de soberanía fiscal —«las contribuciones emanan de mi soberana voluntad»—, cosa que según Artola no se había hecho todavía², y que es muy significativo de los vientos que corrían. El artículo 4 de la Instrucción decía: «Ninguna se creará, aun con el nombre de arbitrios, ni se alterarán las establecidas, ni se harán gracias a los derechos, ni se concederán esperas sin que mi real voluntad se haga entender por el secretario del despacho de Hacienda, superintendente general».

Es decir, Fernando VII se aprovechó de algunos logros revolucionarios para tratar de reforzar el absolutismo, y en esta inteligencia se inscribía la proclamación de la soberanía fiscal. Se produjo, por lo tanto una agudización del centralismo, que estaba latente en la constitución de la monarquía absoluta; se daba un paso más en la concentración del imperium, en su monopolización. El Estado nacional lo único que hizo en este sentido fue sustituir al monarca, de ahí que todas las prerrogativas

¹ Me refiero fundamentalmente a mi libro *Una reforma...*, y a la bibliografía citada en él.

² *Progresistas...*, p. 52.

reales sean a partir de ese momento nacionales. Pero esto no supuso un drástico cambio de planteamiento.

1. LA RESTAURACION ABSOLUTISTA

El conocido Decreto de 4 de mayo de 1814, datado en Valencia, declaró abolida la Constitución y aquellos Decretos que atentasen contra la soberanía real. Otras disposiciones fueron restaurando el orden anterior³, aunque esta vuelta fue más nominal que real: ni las instituciones ni las leyes, como ha señalado Artola, recuperaron nunca el prestigio ni el vigor que tuvieron las del mismo nombre antes de la guerra⁴.

Mediante el real Decreto⁵ de 30 de julio de 1814 se restableció, el 3 de agosto, el ayuntamiento madrileño en la planta y forma que tenía en 1808 antes de la revolución —es la palabra que utiliza la documentación⁶—. Ya antes, por real Cédula del rey y señores del Consejo de 8 de julio de 1814 se había anulado explícitamente el artículo VII del Decreto de las Cortes de 13 de septiembre de 1813, y se mandaba restablecer los antiguos arbitrios municipales. Entre otros motivos, se exponía que esa medida había dejado a la Nación privada en sus mayores apuros del cuantioso producto de sus «contribuciones indirectas» —así se denominan en la real Cédula—. Anulada ahora la *contribución directa* por el Decreto de 23 de junio, volvieron las provinciales y estancadas; y para evitar la confusión que el citado artículo VII había ocasionado en los arbitrios municipales⁷ se daba esta nueva disposición.

Esto en la hacienda de Madrid no supuso un cambio radical, pues como ya se ha explicado, la corte continuó disfrutando de sus sisas en todo el período de la aplicación de la Constitución de 1812, no así otras ciudades de la Monarquía, como Tole-

³ El 15 de Junio se dio un real Decreto por el cual se mandaba que los ayuntamientos se arreglaran en el uso de sus facultades económicas y demás que les correspondían a lo prevenido en las leyes que regían en 1808 (AVM-S 2-249-89). Por otro lado, en lo que se refiere a la administración de propios y arbitrios, el Ministerio interino de Gracia y Justicia envió al ayuntamiento madrileño una real Orden en la que se aprobaba el restablecimiento de la Contaduría de valores de sisas, bajo el pie que tenía en el año de 1808; y se nombraban los empleados de ella (AVM-S 2-187-39). Por real Cédula de 22 de agosto se mandó devolver al Consejo la dirección, gobierno y administración de propios y arbitrios (AVM-S 2-168-6).

⁴ *Progresistas...*, p. 51.

⁵ AVM-S 2-249-85. Real Decreto por el cual se manda que los ayuntamientos se arreglen en el uso de sus facultades económicas y demás que le correspondían a lo prevenido en las leyes que regían en 1808. Una vez más hay que señalar como lo prioritario en el cambio es lo económico; poner orden en la hacienda para tener medios que permitan otras tareas.

⁶ La 244, de 3 de agosto de 1814.

⁷ Un ejemplar impreso de la Real Cédula en AVM-S 2-167-190 y 2-167-205; este último fue enviado el 7 de agosto por el gobierno político de Madrid y su provincia a todos los ayuntamientos, que acababan de constituirse conforme al modelo absoluto.

do⁸. Pero sí hubo que modificar algunas cosas; sobre todo porque la restauración de las antiguas instrucciones y reglamentos, que se hizo formalmente con gran celo, multiplicó el papeleo de nombramientos⁹, oficinas y demás requisitos. El 28 de agosto se informó a la Junta de propios y sisas de que la recaudación de los derechos debía hacerse en todas sus partes como se hacía a principios de 1808 y restablecerse sus oficinas en el orden que se hallaban entonces, pues toda dilación se estimaba perjudicial para los intereses de Madrid¹⁰. Hubo que realizar una serie de gastos, como la impresión de las hojas de registro para la real Aduana que debía costear Madrid¹¹.

Y todo esto en las circunstancias de penuria económica, de necesidad, que la guerra había ocasionado. Es así como la municipalidad tiene que hacer frente a una serie de gastos que le superan: el sueldo de los empleados del resguardo¹²; las consignaciones del Hospicio¹³ y otras instituciones de beneficencia; las refacciones eclesiásticas¹⁴; el alojamiento de la tropa de la casa real¹⁵; el pago de deudas¹⁶, etc.

⁸ AVM-S 3-290-79. En una carta el ayuntamiento de la Imperial ciudad de Toledo consultaba al de Madrid cómo recuperar las sisas. El gobierno madrileño comunicaba que nunca —exceptuando el período francés— había estado privado de sus sisas, y que era mejor que acudiese para este asunto al “Supremo Consejo”. Por otro lado en la real Cédula de 8 de julio de 1814, se anotaba cómo enteramente los arbitrios impuestos sobre el consumo; y en otros se había producido una notable decadencia en sus productos, siendo el resultado común la falta de fondos para cubrir las necesidades municipales.

⁹ Así los fieles registradores de sisas mayores y menores de las cinco puertas de la villa pidieron tener sobrestantes o aforados, como lo había pedido la Junta de propios y arbitrios (AVM-S 5-492-45). O, el nombramiento de alcaide de la real Aduana, que además ocasionó una disputa entre la municipalidad y el rey, por corresponder desde la época de Carlos IV este oficio a Madrid (AVM-S 3-5-34).

¹⁰ AVM-S 3-289-64.

¹¹ AVM-S 3-289-36.

¹² El intendente general de la provincia envía al ayuntamiento un oficio para que éste se haga cargo de los sueldos de los empleados del resguardo, que suponían más de 33.000 rs mensuales. Estos empleados realizaban una tarea que servía tanto a la municipalidad como a la real Hacienda, de ahí lo conflictivo del pago de su nómina (AVM-S 3-290-9).

¹³ Obviamente el Hospicio estaba muy necesitado de fondos, y prácticamente desde la entrada de los franceses no había conseguido apenas fondos. Por eso, ahora que vuelve todo al orden anterior, la junta del Hospicio se apresuró a pedir que la franquicia concedida a dicho establecimiento en los géneros que consumía se considerase como consignación fija, y se le restituyera en sus antiguas rentas (AVM-S 3-289-46).

¹⁴ Los guardianes de los conventos de San Francisco y Capuchinos, pidieron rápidamente que se les rebajaran los derechos de las carnes que necesitaban aquellas comunidades (AVM-S 3-289-39). Sobre el pago de refacciones por sisas a obispos, inquisición, jesuitas, Escorial, Cabildo, etc, (AVM-S 3-339-4).

¹⁵ Desde 1795 en que se suprimió la superintendencia general de la real Hacienda, estaba a cargo de la Tesorería general los ramos de cuarteles y utensilios, por lo que se encargaba de recaudar los antiguos derechos de 68 maravedises en arroba de azúcar, 114 en la de aceite y 11 en la de vino, que se exigía al vecindario de Madrid con destino a los gastos de alojamiento de la tropa de la casa real. También recaudaba el impuesto que pagaban con el mismo objeto los pueblos de diez leguas en contorno de la corte (AVM-S 3-289-50).

¹⁶ Que eran muy numerosas, así por ejemplo los 20.000 reales que se le debían al tesoro interino de la sisa del maravedí en azumbre de vino (AVM-S 1-209-9).

El problema principal era que los resultados no llegaban a los niveles esperados: faltaban recursos. La administración no se reponía tan fácilmente como pudiera pensarse de los traumas «revolucionarios», y éstos debían también apreciarse en la realidad económica. Los embistes y jirones que franceses y liberales habían ocasionado a la organización del antiguo régimen, ya de por sí débil, no eran tan fácilmente subsanables.

Quizá fuese ésto lo que motivó el real Decreto de 31 de diciembre de 1814, por el que se ordenó que las ciudades, villas y lugares se encabezasen con la real Hacienda por lo respectivo a las rentas provinciales; con excepción de los puertos habilitados y que se habilitasen para el comercio con Europa y América¹⁷, y la villa y corte de Madrid¹⁸, en la que se seguiría la administración de esos derechos mientras se resolviera lo más conveniente¹⁹. Los encabezamientos debían hacerse por períodos de un año, y tras él se renovarían o se pasaría a administración, según se viera mejor²⁰. De esta manera la real Hacienda intentaba asegurarse unos ingresos mínimos. Incapaz de conseguirlos por sí misma, mediante la administración directa de esas rentas, vuelve al sistema de los encabezamientos, como única salvación que le permita hacer frente a las necesidades apremiantes.

Por lo tanto Madrid continuaba «como siempre», administrando sus sisas. Pero como los resultados no eran los queridos, se hacía necesario un ajuste. Los contadores echaban la culpa a la inexactitud del cumplimiento de la Instrucción de 1766, y así lo expresaron en reiteradas instancias²¹ dirigidas al corregidor. En ellas manifestaban el modo y medio de corregir los interesados abusos que se sucedían.

¹⁷ Se excluían los puertos habilitados para evitar los inconvenientes que pudieran ocasionar la separación de las Rentas Generales.

¹⁸ Se continuaban así la tradición de exceptuar a la corte de las disposiciones generales.

¹⁹ *Decretos...*, tomo I, pp. 432-438. El real Decreto argumenta que las vicisitudes de la última época habían desnivelado la riqueza del reino, decayendo el número de habitantes y fortuna en unos pueblos, aumentado en otros. Se tomaba por base las leyes V y VI libro VI, título XXII de la Novísima Recopilación —disposiciones de Enrique IV y de Carlos I y doña Juana—, donde se determinaba que en semejantes casos se hiciera nuevas igualas a fin de que los lugares más poblados satisficieran lo que los despoblados no pudieran.

²⁰ AVM-S 3-294-44.

²¹ Existen instancias en 1814, 1815 y 1817; y numerosos testimonios de estos fraudes. Ya desde el primer momento (3 de junio de 1814) la visita de sisas exponía los distintos abusos que ocurrían, así a un tratante que introducía 70 arrobas de aceite, sólo se le aforó 28; y a un particular que introducía 13, sólo se le anotaron 3. La visita decía que desde el 19 de julio de 1813, en que se habilitaron sus funciones, al observar los abusos ocasionados desde la revolución los denunciaba, y así muchas veces. El núcleo del problema se veía en la falta de cumplimiento de la Instrucción de 1766 (AVM-S 3-290-4). El que fuera en 1813 recaudador de sisas en la puerta de Toledo, expuso que los abusos en la exacción de los derechos que habían disminuido en un momento, habían vuelto a retornar y continuaban con mayor fuerza. Ponía como ejemplo a un sujeto que introdujo 47 arrobas de «vino en limpio» de las que sólo se registraron para adeudo 15 y no era un hecho aislado (AVM-S 3-289-56). También se tenía constancia de algunas faltas de puntualidad y asistencia de los administradores y registradores (AVM-S 3-291-41).

Estas instancias dieron lugar a la publicación de sendos bandos en 1814²² y 1815²³.

Por real Orden de 1 de marzo de 1817, se pidió a la dirección de rentas que manifestase la verdadera causa de la notable disminución que sufrían los valores de las rentas en todo el territorio, y sobre todo en las provincias de Madrid, Cádiz, Barcelona y otras ricas y populosas²⁴.

2. UN NUEVO SISTEMA DE RECAUDACION

El ascenso de Martín de Garay a la Secretaría de Hacienda se produjo el 23 de diciembre de 1816, con carácter de interinidad, y de manera definitiva el 21 de enero de 1817. Con él se hizo un nuevo planteamiento de los problemas²⁵.

²² Estos bandos se producirán posteriormente en 1823 (AVM-S 4-4-25), como se verá. En el bando de 28 de junio de 1814 se mandaba que para impedir los fraudes en la villa, a distancia de una legua de Madrid no se ejecutasen ventas por mayor ni menor de vino y demás efectos que adeudasen alcabalas, millones, cientos, sisas y derechos municipales. Esto en ninguna de las posadas, ventorrillos, barracas, casas-huertas; como tampoco en los mesones o paradores. Los sujetos de estos negocios debían sacar para el consumo diario los géneros de la corte, con papeleta de registro de la puerta correspondiente. Al mismo tiempo que la administración general de Rentas controlaría los depósitos de estos productos que se retuvieran en estos locales. Por otro lado, los arrieros de vino se tendrán que abstener de hacer sus cargas en los sitios que venían haciéndolo, y cualquier otro dentro de dicha legua. Las personas que dentro del término alcablatorio hicieran ventas, permutas o cambio de efectos que inmediatamente a dar razón a dichos contratos y hacer el pago de lo que les correspondiera por ellos al registrador de la puerta que se hallase más inmediata al sitio donde se verificó. Se prohibía establecer almacenes de cualquier género a la distancia de cinco leguas de la capital —conforme a lo que estaba ordenado. Tampoco podía estacionarse esa mercancía más de 24 horas, y esto únicamente en los mesones y paradores. Todo trajinero, tratante o comerciante que condujera géneros de cualquier clase y de adeudo para el surtido de esta capital, o de tránsito por ella para el de otros pueblos del Reino, lo debía ejecutar con las correspondientes guías o testimonios que acreditaran su verdadera y legítima adquisición, porción procedencia y dirección.

²³ El bando publicado el 10 de enero de 1815 mandaba cesar la venta de aguardiente, licores y vinos generosos a los dueños de tiendas de cualquiera especie que no tengan la licencia debida, y que en su virtud no se permitiría a ninguno que venda aquellos líquidos sin que previamente obtenga la licencia correspondiente; y el que lo hiciera sin ella sería castigado don arreglo a las leyes de la materia.

²⁴ Publicado por circular de la Dirección general de rentas del día 7, en el Diario de Madrid de 20 de marzo, y en *Decretos...*, IV, 84-85. La real Orden mostraba perplejidad ante la disminución de las rentas de la corona, en vez de aumentar como convenía los gastos del Estado. Se quería que el "sistema económico" diera todos su fruto, sin tener que imponer "nuevas y pesadas contribuciones". Por ello se instaba a la Dirección de Rentas para que tomase todas las medidas que creyera oportunas. No se escatimaban incentivos para ello, así se tendría presente para los adelantamientos en la carrera burocrática a todos los que promoviesen y proporcionasen aumentos efectivos a la real Hacienda y valores de las rentas. En contra, se tomarían severas resoluciones con todos los que "por falta de inteligencia, aplicación u otro motivo" perjudicasen o dejaran de contribuir eficazmente a la verificación del aumento.

²⁵ Una visión de las reformas emprendidas por el nuevo ministro pueden verse en M. ARTOLA, *Progresistas...*, pp. 55-56. También interesa el libro de F. SUAREZ, *Martín de Garay y la reforma de la Hacienda*, Pamplona, 1967; y el de J. FONTANA, *La quiebra de la monarquía absoluta, 1814-1820*, Barcelona. 1971.

En la memoria que el 6 de marzo de 1817 leyó el ministro, se proponía la extinción de las rentas provinciales y equivalentes, y su sustitución por una contribución común a las dos Coronas. El Decreto de 30 de mayo de 1817 puso en marcha la contribución general, así llamada por aplicarse a todos los estamentos y en todas las provincias contribuyentes²⁶.

El Decreto —en lo que aquí interesa— extinguía por segunda vez las rentas provinciales y equivalentes, frutos civiles, paja y utensilios, y subsidio eclesiástico. Quedaban subsistentes las generales, estancadas, aguardientes y licores y alguna otra de poca importancia²⁷. Para equilibrar la balanza, se introducía una *contribución general* por valor de 250 millones²⁸, y un *derecho de puertas* a percibir en la entrada de productos en las capitales y puertos habilitados. Para estos derechos de puertas se arreglarían tarifas claras, sencillas y correspondientes a la contribución general. Mientras no se dieran las nuevas, se comenzaría cobrando las antiguas tarifas²⁹. La contribución general no se pagaría dentro de las capitales de provincia y puertos habilitados, en donde se establecían los derechos de puertas³⁰. Todos los habitantes del Reino estaban sujetos a esta contribución³¹. Tanto en un caso como en otro, el estado eclesiástico secular y regular gozaba de las inmunidades y exenciones tradicionales³².

Con posterioridad se dio el real Decreto de 26 de enero de 1818³³. En él se explicaba que cuando se dió el Decreto de 30 de mayo de 1817 estableciendo un derecho de puertas y una contribución general, se conocían las consecuencias que estas medidas iban a tener en la recaudación y métodos administrativos —viciosos muchos, señalaba la disposición— de diferentes derechos conocidos con el nombre de arbitrios. Pero no había que perder de vista que se trataba de poner orden en el sistema fiscal de la Monarquía.

Por ello se pidió a la dirección general de rentas que —de acuerdo con lo dispuesto en la Instrucción general de rentas de 1816— formase un expediente sobre la manera y los términos en que podían permanecer y cobrarse los productos de tales arbitrios.

Hasta que se dijera otra cosa, por real orden de 29 de noviembre de 1817 se dispuso que los arbitrios debían seguir pagándose hasta que se hiciera un arreglo más

²⁶ Por lo tanto se exceptuaba tanto Navarra, como las Provincias vascas; *Decretos...*, tomo IV, pp. 210-241. Junto al real Decreto aparecían la Instrucción para el repartimiento y cobranza de la contribución del reino y las bulas dadas por Pío VII; *Decretos...*, tomo IV, pp. 241-275.

²⁷ Artículos 15 al 19.

²⁸ La suma de la contribución se repartiría entre todas las provincias y pueblos contribuyentes del Reino, art. 24. Como ya se ha dicho se dictó también una Instrucción para el repartimiento y cobranza de la contribución, de fecha 1 de junio de 1817, que constaba de 39 artículos.

²⁹ Artículo 13. Por Decreto de 13 de junio de 1818 se dictó una instrucción estableciendo los fieltos.

³⁰ Artículo 19.

³¹ Artículo 22.

³² Artículos 14 y 22.

³³ *Decretos...*, tomo IV, pp. 23-27, y en AVM-S 1-494-13 y 2-168-104.

beneficioso, sin que al suprimirse las rentas provinciales se hubieran suprimido aquéllos³⁴.

Una vez que la dirección general de rentas evacuó su expediente se mandó —y esto era el contenido del real Decreto de 26 de enero de 1818— que se continuara percibiendo los arbitrios concedidos con superior aprobación, y que cesaran todos los demás³⁵. La administración y recaudación de toda clase de arbitrios se haría por medio de los empleados de la real Hacienda³⁶, con la sola intervención de los partícipes³⁷. En las oficinas donde se hacía la recaudación tendría que existir una tarifa de los derechos, para que el público supiera cuales eran los artículos sujetos al pago y su cantidad³⁸. Junto a esto aparecían en el susodicho Decreto otras reglas que aseguraban la separación entre los caudales de la real Hacienda y los municipales³⁹.

Por otro lado el Decreto mantenía al Consejo real como órgano superior en esta materia. Se determinaba que los ayuntamientos debían acudir al Consejo para cualquier asunto relacionado con los arbitrios, y éste consultaría mediante el ministerio de Hacienda lo que considerase conveniente⁴⁰. La dirección general de rentas —en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23, capítulo 1 de la Instrucción general de 16 de abril de 1816— cuidaría de que los arbitrios temporales y perpetuos fueran disminuyendo⁴¹.

3. EL NUEVO SISTEMA Y LA VILLA DE MADRID

Esta novedad, el verse privados de la noche a la mañana de la administración de sus arbitrios, como puede pensarse no fue admitida pacíficamente por algunas municipalidades. Las quejas de éstas, en concreto me constan las de Valladolid, Madrid y Cádiz —aunque puede suponerse que éstas serían generalizadas—, motivaron la real orden de 6 de abril de 1818⁴², en la que se disponía que el Decreto de 26 de enero debía cumplirse sin ninguna tergiversación, ni excepción. Los pueblos se quedaban sin la administración de sus arbitrios, otra forma de centralismo agobiante⁴³.

Efectivamente, esta real Orden comunicada por el ministerio de Hacienda a la dirección de rentas era una respuesta a la representación hecha por el ayuntamien-

³⁴ *Decretos...*, tomo IV, pp. 634-638.

³⁵ Artículo 1.

³⁶ Artículos 2 y 3 del Decreto.

³⁷ Artículo 6.

³⁸ Artículo 4.

³⁹ Artículos 5, 7 y 8.

⁴⁰ Artículo 16.

⁴¹ Artículo 17.

⁴² *Decretos...*, tomo V, 182-183, y AVM-S 2-168-104. Sobre la oposición en la ciudad de Valladolid puede verse: Carmen GARCÍA, *La crisis...*

⁴³ Sobre esto, mientras no se diga lo contrario (AVM-S 3-294-44).

to de Madrid, en la que hacía presente las múltiples obligaciones que gravaban los arbitrios municipales. Por ello pedía que se le eximiese del real Decreto de 26 de enero, que determinaba la administración y recaudación de toda clase de arbitrios por medio de los empleados de la real Hacienda, con la sola intervención de los partícipes. También respondía la real Orden a una exposición del gobernador subdelegado de rentas de la ciudad de Cádiz, en la que manifestaba la pretensión de todos los partícipes de arbitrios, especialmente del administrador de Correos, alegando para continuar con el método observado hasta el día las mismas razones que el ayuntamiento madrileño; comunes por cierto a los dueños de arbitrios de todos los pueblos, porque todos querían administrarlos separadamente.

Ante estas consideraciones la Orden hacía caso omiso y mandaba que el Decreto de 26 de enero se cumpliese «pura e inviolablemente, sin ninguna tergiversación, excepción, ni reforma en Madrid, Cádiz y generalmente en todo el Reino.» Y encomendaba a la dirección general de rentas el exacto cumplimiento de lo establecido.

Para intentar solucionar las cosas, no pudiendo ser de otra manera, y mediando informes del corregidor y síndico personero, en virtud de real Orden de 25 de agosto de 1818 y en cumplimiento de los reales Decretos de 30 de mayo de 1817 y 26 de enero de 1818, se mandó que desde 1 de septiembre de 1818 se suprimiesen en la corte las contribuciones interiores de frutos civiles, alcabalas, cuarteles, cientos y millones. Quedarían sólo los derechos de puertas, cuya recaudación la realizarían los dependientes de la real Hacienda y la intervención se realizaría por los encargados de la villa.

Se exponía también la prohibición absoluta de que a una legua de la corte ninguna corporación o particular pudiese establecer almacenes de géneros o efectos, causasen o no derechos, cualquiera que fuera su naturaleza; que no se ejecutasen ventas de vino, aguardiente ni efectos por mayor ni menor; que los dueños de posadas, ventorrillos, barracas, huertas y paradores no tuviesen en sus casas más porción de aquellos géneros que la necesaria al consumo diario, sacándolos de Madrid con papeleta del registro de la puerta por donde se extrajese. Se trataba por lo tanto de hacer la guerra al fraude, en uno de sus mayores campos, y con los medios que se venían repitiendo desde hacía tiempo.

En virtud de distintas reales órdenes, y en especial de las de 12 de marzo de 1805 y 3 de marzo de 1808, el intendente hizo manifiesto esta reforma, mediante edictos⁴⁴ de 31 de agosto, 1 de septiembre, y 13 de diciembre de 1818.

En el primero hizo saber que había llegado el momento de cumplir en Madrid los reales Decretos de 30 de mayo de 1817 y 26 de enero de 1818, en cuanto a la supresión de contribuciones interiores y su sustitución por un pequeño aumento de los derechos de puertas en algunos artículos y su recaudación por dependientes de la real Hacienda. En consecuencia y según determinaba la real Orden de 25 de

⁴⁴ Se encuentran publicados en el *Diario de Madrid* de esos días, excepto el último que lo está el 18 de diciembre.

agosto, el día siguiente —1 de septiembre— cesaría de cobrarse en la villa lo que hasta ese momento se había exigido por la contribución de frutos civiles, percibiéndose sólo las prorratas hasta ese día. Las ventas de almonedas, ganados y fincas serían libres de alcabalas. Y las contribuciones de cientos, millones, cuarteles y alcabalas sobre consumos quedaban también extinguidas desde ese día. La recaudación de los derechos de puertas se haría por los dependientes de la real Hacienda, y la intervención por empleados de la villa, en atención a las particulares circunstancias que concurren en ella, y a los motivos, entidad y destinos de los derechos que percibe. Al mismo tiempo determinaba que para evitar las infinitas introducciones fraudulentas de vino aguardiente, aceite, jabón y otros géneros que se habían advertido con escándalo general, y baja de los derechos reales y municipales, se resolvía también que no existieran en las afueras de Madrid almacenes, depósitos, casas de venta ni reuniones de géneros y efectos que comúnmente no tenían otro objeto que el de hacer introducciones clandestinas.

El segundo edicto venía prácticamente a repetir lo dicho, con la introducción de una nueva coletilla⁴⁵.

El último prohibía la venta de vino y comestibles en las afueras de Madrid, con el justo fin de evitar las desgracias que ocurrían diariamente, y el escándalo producido por la embriaguez y demás efectos de las malas costumbres. La intendencia ya había encarecido el cumplimiento de aquellas disposiciones en los bandos de 28 de junio de 1814 y 14 de enero de 1815, conminando a los contraventores con la pena de ser juzgados con todo rigor. En tanto se dictó el real Decreto de 30 de mayo, con el que Madrid se incluyó en la Contribución general y como consecuencia fue libre la venta de dichos géneros, hasta que establecido el derecho de puertas el 1 de septiembre de 1818 se renovaron aquellas prohibiciones como necesarias a la conservación del buen orden —como se indicaba en el edicto de 31 de agosto ya visto—. Sin embargo no se cumplió y se encontraron reuniones de géneros y efectos con claro fin defraudatorio. Por real Orden de 25 de octubre del mismo año se desestimó una petición de varios habitantes de las afueras de Madrid sobre que se les permitiese continuar en la venta de vino. Se reforzaba la vigencia de los bandos de 28 de junio de 1814 y 24 de enero de 1815 y se decía que ninguna corporación o particular podía establecer en las afueras de la corte almacenes de géneros o efectos, causen o no derechos, cualquiera que sea su naturaleza. Y que no se ejecuten ventas de vino, de aguardiente ni efectos por mayor o menor en el distrito de una legua; que los dueños de posadas, ventorrillos, barracas, huertas y paradores no tengan en sus casas más porción de aquellos géneros que la necesaria para el consumo diario, sacándolos de Madrid con los papeles del registro de la puerta por donde lo extragesen.

En la misma real Orden de 25 de agosto se aprobó la Instrucción que se formó para la dirección, recaudación e intervención de los derechos reales y municipales.

⁴⁵ Se hace referencia al perjuicio a las buenas costumbres que ocasionaba el contrabando de alcohol.

Ésta entró en vigor el 1 de septiembre⁴⁶, y estuvo vigente hasta fin de 1820, en que con el ayuntamiento constitucional varió el sistema.

4. LA INSTRUCCIÓN DE 1818

La *Instrucción para la dirección, recaudación e intervención de los derechos de puertas de Madrid*⁴⁷ estaba formada por 215 artículos distribuidos en siete capítulos⁴⁸.

En ella, la administración de las puertas se encargaba a la real Hacienda; su intervención, esto es su fiscalización, a Madrid; y la dirección a una Junta compuesta de sujetos de ambas partes⁴⁹.

Esta normativa suponía la distinción entre un órgano político de dirección de los derechos de puertas y una estructura administrativa para la recaudación de los mismos; lo que en la ordenación de 1766 no estaba tan claro.

a) *La Junta directiva*

La Junta estaba compuesta por el intendente de la provincia, que sería el presidente de ella; el corregidor de la villa, su vicepresidente; el administrador de los derechos de puertas; el síndico procurador general del ayuntamiento y el contador de hospitales, que era el partícipe mayor de los derechos que la villa percibía para otros⁵⁰. El secretario del corregimiento lo era también de la Junta; no tenía voto⁵¹.

La Junta tenía que velar por el cumplimiento de los deberes de los empleados de este ramo, a cuyo fin cada uno de los vocales visitaría dos puertas y la administración una vez al mes, comprobando la observancia de las reglas establecidas, examinando los libros y cédulas, y presenciando los adeudos con lo demás que estimen⁵².

⁴⁶ En el artículo 26 del capítulo 1 de la Instrucción se disponía que, desde el día en que se establezcan los nuevos derechos de puertas y se empiece a realizar esta instrucción, cesarán las contribuciones interiores, suprimidas por el real Decreto de 30 de mayo de 1817.

⁴⁷ Este es el nombre que se da en el cuerpo de texto, en portada dice: *Instrucción para la dirección, recaudación e intervención de los derechos reales y municipales de las puertas de Madrid*; vid. AVM-S 2-168-117 y 3-291-32.

⁴⁸ El capítulo primero trataba de la Junta directiva, constaba de 26 artículos; el segundo de la administración y contaduría, 81 artículos; el tercero de los fielatos de recaudación, 40 artículos; el cuarto de los fielatos de intervención, 10 artículos; el quinto de las oficinas del matadero y rastro, 12 artículos; el sexto de las visitas, 24 artículos; el séptimo del resguardo de puertas y casco, 22 artículos. La numeración del articulado no era lineal, comenzaba desde uno en cada capítulo.

⁴⁹ Capítulo 1, artículo 12.

⁵⁰ Cap. 1, art. 2. Dichos vocales no pueden delegar la comisión y asistencia en otros; ni tampoco gozan de sueldo por este servicio, ya que realizan atribuciones de sus empleos; pero les servirá de mérito el esmero con que lo presten. Cap. 1, art. 3.

⁵¹ Gozaba de 200 ducados anuales para sueldo y gastos de escritorio. Se encargaba de los trabajos que fueran surgiendo y no tenía auxiliares. Cap. 1, art. 4.

⁵² Cap. 1, art. 6. Para ello se reuniría al menos dos veces al mes, y cuando fuera necesario, en la habitación que la Dirección general de rentas disponga en la casa Aduana, a la hora más cómoda, para facilitar la asistencia de todos los vocales. Cap. 1, art. 5.

En cuanto a los nombramientos y sueldos de los empleados⁵³, hay que señalar que el empleo de administrador era dotado por el rey, a propuesta de la dirección⁵⁴; los demás destinos de ascenso eran propuestos por la Junta⁵⁵. Los de entrada serían nombrados por parte de la real Hacienda y de la villa⁵⁶.

Las plazas ínfimas, o de nueva entrada de la recaudación y visita por la real Hacienda las proveería S. M. a propuesta del administrador, que la dirigirá al secretario de estado y del despacho de Hacienda por medio del intendente; y éste, con su dictamen, según lo prevenido en el capítulo 5º de la instrucción general de 16 de abril de 1816, por el de la dirección general de rentas⁵⁷. Las plazas de nueva entrada o ínfimas de la intervención y visita municipal las proveería el ayuntamiento por votos secretos, a propuesta del corregidor⁵⁸.

La Junta dotaría las plazas de guardas de a pie, y propondría para las de guardas a caballo por medio de la dirección general tres sujetos, previniéndose que unos y otros habrían de reunir, cuando menos, la pluralidad de votos secretos, y que se había de tener en estos casos presente lo prevenido en el artículo 55, capítulo 1º de dicha instrucción general⁵⁹.

En definitiva, atendiendo a los nombramientos se puede concluir que continuaba la tendencia centralizadora; no había en ello novedad.

La Junta tenía capacidad de mando suficiente para llevar a cabo su cometido con cierta autonomía⁶⁰.

⁵³ Los sueldos de los empleados en la recaudación, tanto de la administración como de los fielatos, se pagarán en la Depositaria por nómina firmada del Administrador y Contador. Lo mismo y bajo nómina firmada del Comandante, visada del Administrador y Contador, se hará con los sueldos del resguardo de puertas. Los de los empleados en la intervención y del Secretario de la Junta se pagarán por la villa en virtud de nómina firmada de los dos primeros. Cap. 1, art. 16.

⁵⁴ Supongo que se referirá a la Dirección general de rentas.

⁵⁵ Cap. 1, art. 7.

⁵⁶ Cuando ocurran vacantes de contador y depositario, oficiales de administración y contaduría, vistas, fieles de romana y ordenanza, fieles registradores, interventores, recaudadores, oficiales de libros y aforadores de puertas, visitadores, tenientes de visitador, teniente comandante y cabos del resguardo, y de alcaides de la administración de las casas matadero y rastro; la Junta propondrá por medio de la Dirección los tres sujetos que a pluralidad de votos secretos tenga más acreedores al ascenso, teniendo en cuenta no sólo su antigüedad, sino también aptitud y celo. Aunque pudiendo observar la escala rigurosa sin inconvenientes de mejor servicio, deberá hacerse. Además, los destinados una vez a la recaudación y visita de real Hacienda, nunca han de pasar a la intervención, ni visita de la villa; ni los empleados en estas a aquellas. Cap. 1, art. 8.

⁵⁷ Cap. 1, art. 9.

⁵⁸ Cap. 1, art. 10.

⁵⁹ Cap. 1, art. 11.

⁶⁰ La Junta tenía facultad para castigar, suspender y mudar a los empleados de unas puertas a otras, si convenía para el mejor servicio (Cap. 1, art. 12). El administrador podía reprender, suspender y castigar a todos los empleados por la real hacienda en la administración, recaudación y visita; y a los del resguardo; pero no a los destinados por la villa a la intervención y visita. El corregidor era competente para reprender, suspender y castigar por sí a éstos, mas no a aquellos; de cuyas facultades carecerán enteramente el procurador síndico general y contador de hospitales (Cap. 1, art. 13). De esta forma se observa —una vez más— la separación de competencias. Cuando alguno de los vocales de la Junta observe alguna cosa digna de castigo, represión o reforma, dará parte a la Junta

La villa recibía diariamente de la Depositaria el producto de sus arbitrios y abonaba a ésta mensualmente la cantidad que la Junta considerase prudente, a cuenta de los que pueda corresponderle pagar por su parte y la de los demás partícipes que cobraran por su mano, como los hospitales, canal, cárcel de corte, etc. Por el resguardo y gastos comunes que pudieran ocurrir, exigiría a éstos a fin de año la solvencia de lo que les correspondiera pagar a prorrata por ello, y en el ínterin les entregaría semanal o mensualmente, según acordaran entre sí, los productos de sus arbitrios, con una deducción prudente a cuenta de dicho objeto⁶¹.

La Depositaria entregaría semanal o mensualmente los productos de arbitrios piosos y del Crédito público, reteniendo lo que estimara la Junta a cuenta de los sueldos y gastos que habrían de solventarse cuando se hiciera el prorrateo al fin de año⁶².

La Junta podía autorizar gastos⁶³ superiores a seis mil reales, acordando quién tenía que suplirlos, en concepto de que a fin de año se prorratearían —así como los sueldos— entre la real Hacienda, Madrid y demás partícipes a proporción del producto de sus derechos.

A la vista de los estados mensuales y anual de productos y gastos, se tomarían las medidas necesarias para aumentar los primeros y economizar los segundos. Si se advierte que conviene aclarar, ampliar o variar algo, lo consultaría por medio de la dirección general de rentas, para que por medio del ministerio de Estado y del Despacho de Hacienda se resolviera lo conveniente⁶⁴.

La Junta debía examinar las cuentas de los fieles registradores y recaudadores de las puertas después que el Administrador; y las de los Interventores después que el Contador. Las debía cotejar unas y otras, y estando conformes dispondría los finiquitos. También fiscalizaba las cuentas anuales del Administrador, Contador y Depositario. Si eran conformes se remitían a la contaduría principal de Provincia, y un duplicado al ayuntamiento⁶⁵.

Para evitar las introducciones fraudulentas, no se permitían almacenes, depósitos, ni casas de venta en las afueras de Madrid⁶⁶.

de ello, y de lo que haya hecho —si fuese alguno de los que tienen jurisdicción, según lo dicho arriba— a fin de que tome la providencia conveniente para lo sucesivo y aumente la pena al delincuente, si su jefe inmediato no le hubiese impuesto la correspondiente, según reales órdenes. Cap. 1, art. 14. Si algún empleado fuese suspendido o mereciese ser separado por la reincidencia o gravedad de sus defectos, la Junta —después de cumplir lo prevenido en los artículos 2 y 3 del capítulo 5º de dichas instrucciones generales— dará cuenta de ello a la Dirección general de rentas, para que ésta con su dictamen lo eleve al Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda para la resolución de S. M. Cap. 1, art. 15.

⁶¹ Cap. 1, art. 17.

⁶² Cap. 1, art. 18.

⁶³ En la cerca de la Ronda para proporcionar aumento en los derechos de puerta o para mejorar el servicio, cedulage, libros, etc. Cap. 1, art. 19.

⁶⁴ Cap. 1, art. 20.

⁶⁵ Cap. 1, art. 21.

⁶⁶ Cap. 1, art. 22.

La Junta quedaba encargada de proponer, por medio de la dirección general de rentas, el arreglo de tarifas de derechos de puertas de Madrid⁶⁷; y de evitar la introducción de abusos y cargas para el público⁶⁸. Por último tenía que proponer con arreglo al artículo 23 del capítulo 1º de la Instrucción general, los medios de disminuir los arbitrios temporales o perpetuos⁶⁹.

b) *La Administración y la Contaduría*

El administrador de los derechos de puertas era el jefe inmediato del ramo. Tenía que velar por el puntual desempeño de todos los empleados. El objeto esencial del cargo estaba en la recaudación de derechos de puertas, vigilando todos los aspectos de ésta⁷⁰.

Además había un contador —que intervenía cuanto ocurría en el ramo— y un depositario de los productos cuyo cometido era velar por la atención de los sujetos que acudan a la administración⁷¹.

El administrador y el contador dependían de la Junta para todo lo relativo a la mejor administración de los derechos de puertas, sin perjuicio de la dirección general y contaduría principal en lo que correspondía⁷².

Los efectos que entraban en la administración lo hacían con la intervención y conocimiento de ella, de la contaduría y del alcaide; observándose las reglas pertinentes⁷³. Y se situaban en lugar seguro⁷⁴.

⁶⁷ Mientras se hace se cobrará por derechos de puertas los mismos que hasta aquí, con la sola alteración que se ha hecho, llevándose cuenta separada de los arbitrios piadosos y del aguardiente (Cap. 1, art. 23).

⁶⁸ Cap. 1, art. 24.

⁶⁹ Cap. 1, art. 25.

⁷⁰ Cap. 2, art. 38.

⁷¹ Cap. 2, art. 1. Además, para dar facilidades al público el horario de oficinas será de 8.00 a 14.00 desde uno de abril hasta finales de septiembre, y de 9.00 a 14.00 el resto del año. Esto todos los días del año, menos los domingos y fiestas de riguroso precepto. En las temporadas de mayor ingreso —y siempre que haya trabajos extraordinarios— habrá horario de tarde. Cap. 2, art. 3 y 4.

⁷² Cap. 2, art. 2.

⁷³ Cap. 2, art. 5 y ss. Los géneros que deban llevarse a la administración para su introducción o para depósito por ser de tránsito (los géneros de tránsito no devengarán derechos si salen en el plazo de 15 días; cap. 2, art. 20), irán acompañados desde los fielatos de las puertas de un dependiente del resguardo y de una hoja de registro para cada interesado, firmada y formada en ellos por lo que digan los conductores o por lo que produzcan las guías, siempre que no se pueda hacer recuento de ellos. En estas hojas, que serán numeradas por año, se expresará la puerta y día de la entrada, el número de fardos, rollos, cajones, etc. y el sujeto para quien son. Llegados los géneros y hojas de registro a la administración, el alcaide en persona —u otro elegido por el bajo su responsabilidad— se enterará en presencia del conductor, del dependiente del resguardo que le hubiese acompañado y del ordenanza que en aquel día esté destinado a ello por el administrador, de si las hojas están conformes y no habiendo novedad pondrá entró y firma. Registrarán el ordenanza y el dependiente del resguardo el carro, mulas y aparejos que hayan conducido los géneros y se volverá éste a la puerta de donde venga. Si por este registro se hiciese alguna aprehensión, tendrán parte en él el ordenanza de la administración y el guarda, solo como únicos aprehensores.

⁷⁴ Cap. 2, art. 10. En los artículos 11, 12 y 13 aparecen más medidas de seguridad.

En el momento del adeudo el alcaide debía exhibir los géneros, que se conducirían al paraje destinado para el reconocimiento, medida, recuento o peso de ellos⁷⁵. Asimismo cuidaría el administrador de que los géneros extranjeros que no hubieran pagado los derechos de introducción en el Reino en las aduanas de frontera lo hicieran debidamente. El importe debía entregarse en la Tesorería de provincia⁷⁶.

Diariamente se tomaban conocimiento de los productos de cada puerta⁷⁷. El contador era el responsable de las cuentas de los productos de puertas que los fieles registradores pasaban cada cuatro meses⁷⁸; así como de los estados mensuales⁷⁹ y de las cuentas anuales⁸⁰.

El contador de los derechos de puertas, además de desempeñar las funciones propias de su destino —la cuenta y razón⁸¹— comprobaba e intervenía todos los adeudos, ingresos en depositaría y salidas de caudales de ella⁸².

Del mismo modo se preveía la existencia de un oficial mayor en la administración y otro en la contaduría; que, en ausencia de sus jefes, hacía las veces de ellos⁸³. Éstos servían de unión entre el administrador y el contador y el resto de los oficiales⁸⁴.

⁷⁵ Cap. 2, art. 14 y 15.

⁷⁶ Cap. 2, art. 19. En los libros de la administración y contaduría se distinguirán los artículos extranjeros, coloniales y del reino, así como de derechos reales y municipales, de los arbitrios piadosos y crédito público; según lo indicado en los artículos 11 y 13 del cap. 6 de la Instrucción general. Cap. 2, art. 26.

⁷⁷ Mediante un parte que le daban los fieles registradores e interventores, Cap. 2, art. 31.

⁷⁸ Cap. 2, art. 32; estas cuentas las recibirá, examinará y remitirá a la Junta con sus observaciones.

⁷⁹ Cap. 2, art. 33; remitirá a la Dirección general, a la Contaduría principal de la provincia, a la Junta y ayuntamiento los estados mensuales de los productos totales y entregas de derechos de puertas, firmadas por el y por el contador.

⁸⁰ Cap. 2, art. 34. También formaban a fin de año la relación general de los valores de los derechos de puertas. Cap. 2, art. 35.

⁸¹ Cap. 2, art. 42 y ss. El contador es el responsable del funcionamiento de la Contaduría, y como tal trabajará en estrecha relación con el administrador y la Junta.

⁸² Cap. 2, art. 39; también cuidará de que se hagan conforme a lo prevenido, de que se sienten en los respectivos libros sin enmienda alguna, pues las equivocaciones se han de salvar por notas, y de que el depositario reciba sus importes. Y celará como segundo jefe del ramo de la administración de puertas (Cap. 2, art. 40), así como de que la cuenta y razón de los derechos de puertas se lleve con separación de derechos reales y municipales y de ramos (Cap. 2, art. 41).

⁸³ Cap. 2, art. 45.

⁸⁴ Cap. 2, art. 46. El resto de los oficiales eran: dos escribientes (Cap. 2, arts. 48 y 49), vistas (Cap. 2, arts. 50-56), el tasador de joyas (Cap. 2, art. 57), el depositario (Cap. 2, arts. 58-62), su ayudante (Cap. 2, art. 63), un portero para estas oficinas (Cap. 2, art. 64), dos fieles de romana (Cap. 2, arts. 65 y 66, uno de la real hacienda —pagado por ella—, y el otro de los aforadores de intervención pagados por la villa), el alcaide (que según sus funciones no es más que un guarda almacén, cap. 2, arts. 67 y 68), con los mozos por él elegidos (Cap. 2, art. 69) y cinco ordenanzas (Cap. 2, arts. 70-78, elegidos entre los individuos del resguardo. Uno de ellos estará fijo día y noche, sin salir ni para comer, en la casa de correos. Otro, estará fijo de guardia, también día y noche y sin salir ni para comer, en la administración. Los demás se encargarán de presenciar en las horas de despacho la llegada de los conductores de géneros, el descargue, examen y recuento de fardos, la confrontación de ellos con las hojas de registro y la colocación de los géneros, etc.)

c) *Los fielatos de recaudación*

Los fielatos⁸⁵ se abrían al amanecer —al mismo tiempo que las puertas—, y empezaban en el acto el despacho, que proseguía durante todo el día sin interrupción hasta el toque de oraciones, siendo la última operación la del recuento de caudales y comprobación con los libros de recaudación e intervención⁸⁶.

Todos los géneros, frutos, efectos, granos, semillas, ganados y artículos que llegaban a Madrid —bien para consumo de la ciudad o bien de tránsito— tenían que declararse en los fielatos de las cinco puertas reales⁸⁷.

Los fieles registradores e interventores todos los días dirigían un parte a la administración donde se expresaba el importe de los derechos de puertas, así reales como municipales⁸⁸. Además, cada cuatro meses debían formar las cuentas de los productos de puertas⁸⁹.

El jefe de la puerta era el fiel registrador⁹⁰. Tenía que presenciar los aforos, pesos y recuentos. Los otros empleados por orden jerárquico eran: el fiel interventor, el recaudador, los oficiales y los aforadores⁹¹.

d) *Los fielatos de intervención*

Verificados los adeudos en los fielatos de recaudación y recogida la cédula por los introductores, pasarán estos con ella y los géneros a los fielatos de intervención, que estaban en el interior⁹².

En estos se procedía a examinar los géneros y comprobar si estaban bien aforados; tras lo cual se hacían los asientos de las cédulas en los libros de intervención⁹³.

e) *Las casas de matadero y rastro*

Se seguía la práctica establecida de que todos los ganados que llegaban a Madrid para consumo se mataban en las casas de matadero y rastro⁹⁴.

⁸⁷ Esto se hacía a las horas de despacho y quedando absolutamente prohibida la entrada y salida de géneros a otras horas y por otros parajes. Cap. 3, art. 6.

⁸⁸ Cap. 3, art. 30.

⁸⁹ Cap. 3, art. 31.

⁹⁰ Cap. 3, art. 32.

⁹¹ Los fieles registradores e interventores debían prestar fianza (Cap. 3, art. 34). Los empleados no gozaban de ningún privilegio en relación con los derechos de puertas y el trabajo que desempeñan (Cap. 3, art. 35). Aunque a los fieles registradores se les daba habitación en los fielatos. Los demás empleados en las puertas —incluso los aforadores— tenían obligación de vivir a trescientos pasos de distancia de aquella a que están destinados (Cap. 3, art. 36).

⁹² Cap. 4, art. 2. En todo lo que no se regule específicamente de estos fielatos de intervención, se aplica lo dicho para los fielatos de recaudación, cap. 4, art. 1.

⁹³ Cap. 4, art. 3. Siempre que se hagan pesos y recuentos largos de algunos géneros en los fielatos de recaudación, y el interventor o alguno de los aforadores de la intervención pueda sin perjuicio del despacho de su oficina ir a presenciar dichas operaciones, lo verificará para fiscalizarlas y evitar con las dudas la necesidad de repetirlas y toda detención excusable al contribuyente, c ap. 4, art. 6.

⁹⁴ De consiguiente sólo podrán entrar los ganados vivos que vengan a matarse por la puerta de Toledo, que es la más cercana; c ap. 5, art. 1 y 2.

Al entrar el ganado era contado por dos aforadores: uno de la recaudación y otro de la intervención. Seguidamente se extendía una cédula que se entregaba a un dependiente del resguardo, quien la llevaba con el ganado a las casas del matadero o rastro, y la presentaba al alcaide⁹⁵.

Dos empleados de los fielatos de recaudación e intervención pasaban diariamente desde la puerta de Toledo a las casas matadero y rastro, en las horas de hacer el romaneo⁹⁶, para verificarlo⁹⁷.

Si el introductor no se hubiese presentado al tercer día a hacer el pago, el registrador, interventor y recaudador, como responsables de su importe, procurarían que se realizara. Si a pesar de ello no se hiciera lo comunicarían al corregidor y administrador para que se procediera al embargo o lo que se estimase conveniente⁹⁸.

f) *Las visitas*

Había dos visitas: una por la real Hacienda y otra por Madrid; la primera estaba bajo las órdenes del corregidor y la segunda del administrador⁹⁹. Cada una se componía de un visitador, un teniente, dos aforadores y cuatro guardas¹⁰⁰.

Estas visitas tenían la obligación de velar y fiscalizar las operaciones de todos los empleados¹⁰¹; de perseguir todo fraude, contrabandista y matutero; de evitar todo depósito, almacén y casa de venta en las afueras; y de hacer cuantas diligencias se estimen útiles para promover el exacto cumplimiento de cuanto se dispone en la *Instrucción*¹⁰².

Cada visita tenía que salir tres noches a la semana a rondar la cerca y parajes sospechosos de las afueras¹⁰³. Saldrían también tres veces a la semana de día¹⁰⁴.

⁹⁵ Cap. 5, art. 3. Los alcaides de los mataderos eran los jefes de ellos, y dependían de los fieles registrador e interventor de la puerta de Toledo. Cap. 5, art. 4. Dichos alcaides al llegar el ganado lo reconocerán. Si lo hallan conforme con la cédula, pondrán en ella entró, para que el dependiente del resguardo la devuelva con esta anotación al fielato de recaudación, donde se conservará hasta que se verifique el pago; cap. 5, art. 5.

⁹⁶ Cap. 5, art. 9, sobre la forma de hacer el romaneo.

⁹⁷ Cap. 5, art. 8.

⁹⁸ Cap. 5, art. 11.

⁹⁹ Cap. 6, art. 1.

¹⁰⁰ Cap. 6, art. 2.

¹⁰¹ Tanto en la recaudación, intervención y resguardo de las puertas, casas matadero y rastro, portillos y puntos avanzados

¹⁰² Cap. 6, art. 3. Tendrán por lo tanto facultad de reconocer a los introductores, desde la puerta hasta que hayan descargado en sus casas, las cédulas con que hayan sido despachados los géneros que introduzcan, y los libros de los fielatos, confrontándolo todo para ver si está bien. Estar pendientes de que los géneros que vayan a la administración para su despacho o los que salgan de ella para fuera de Madrid no se descaminen de la vía recta por donde deben ir, ni detengan o paren pues cualquiera de estas cosas da que sospechar algún fraude. Examinar la asistencia y desempeño de los empleados; registrar los fielatos y casa del resguardo, y de estar armados sus individuos; cap. 6, art. 4.

¹⁰³ Unas veces lo hará unida, otras divididos en mitades, unas a caballo, otras a pie, a diferentes horas y por distintas puertas, etc. Es decir que procurará que sus salidas sean tan imprevistas que tenga a los defraudadores y a los empleados y resguardo en continua sorpresa y vigilancia; cap. 6,

g) *El resguardo*

El resguardo de puertas y casco estaba bajo las órdenes del Comandante del resguardo destinado para la provincia y ramos estancados; pero formaba una compañía con un teniente comandante particular¹⁰⁵. Además de estos dos jefes, el resguardo de puertas y casco se componía de cuatro cabos y treinta y seis guardas de caballería, de veintidós cabos y noventa guardas de pie, y seis supernumerarios de éstos¹⁰⁶. Al ser el resguardo del casco auxiliar de la recaudación de los derechos de puertas, estaba —así como su comandante y teniente— sujeto a las órdenes de la Junta, del corregidor y del administrador¹⁰⁷.

Todos los individuos del resguardo del casco tenían que conocer las afueras y rondas de Madrid, instruirse sobre los parajes por donde se solía hacer el fraude, de los medios utilizados por los defraudadores y de quiénes eran éstos¹⁰⁸.

El comandante enviaba diariamente, al toque de oraciones, a todas las puertas y portillos los piquetes de guardia¹⁰⁹. La primera diligencia del piquete al llegar a la puerta de destino era presentarse a los fieles registrador e interventor para tomar el relevo¹¹⁰.

Las obligaciones de los piquetes eran: celar que no se introdujeran géneros de ilícito comercio; que los permitidos no pasasen sin pagar los derechos; que no hubiera reuniones, alborotos, ni desorden en el distrito; acompañar a la administración los géneros que debieran ir a ella¹¹¹.

4. CRISIS DEL NUEVO SISTEMA

La nueva Instrucción era una adecuación de la antigua —la carolina de 1766— al nuevo diseño hacendístico. Con la vigencia de la reforma de Garay las antiguas sisas —junto a otros arbitrios que se cobraban en las puertas— se transformaron en

art. 5. Además para que sea eficaz, cada visita ha de reconocer al menos seis introductores al día y a diferente horas, después de que hayan sido despachados en los fielatos, pidiéndoles las cédulas, viendo si llevan todos los requisitos necesarios, tomando razón de ellas, graduando si se ha aforado bien o mal, y cotejándolas después con los libros de los fielatos en que hayan sido despachadas; cap. 6, art. 11.

¹⁰⁴ Cap. 6, art. 6.

¹⁰⁵ Cap. 7, art. 1.

¹⁰⁶ Cap. 7, art. 2.

¹⁰⁷ Cap. 7, art. 4. Sobre la forma de nombramiento y pago de los sueldos, cap. 7, art. 3 y lo que se dice en el cap. 1. De esto se deduce que al comandante del resguardo —y en su ausencia un teniente— se presentará al menos tres veces a la semana en la administración para despachar con el administrador lo que sea más conveniente al servicio; cap. 7, art. 7.

¹⁰⁸ Cap. 7, art. 5.

¹⁰⁹ Cap. 7, art. 8. A dicho fin se presentarán a dicha hora con sus armas los cabos y guardas que no hayan estado de guardia en el día en casa del comandante, cap. 7, art. 9.

¹¹⁰ Cap. 7, art. 10.

¹¹¹ Cap. 7, art. 13. Sobre el modo de realizarlo fundamentalmente vid. art. 16. Los individuos del resguardo destinados a los portillos no permitían que entrase ningún género, ni correo, ni caballerías o carruajes. Cap. 7, art. 15.

los nuevos derechos de puertas¹¹². Estos derechos no correspondían sólo al municipio, sino que existía una serie de partícipes: real Hacienda, ayuntamiento, cuarteles, impuesto del vino, impuesto del aguardiente, impuesto del trigo.

Se puede decir que con el sistema Garay el municipio pierde la administración de sus sisas, pero conserva un derecho sobre ellas, sobre los derechos de puertas. Es decir, en la reforma carolina había perdido la dirección, ahora la administración, pero mantenía su «propiedad». Ese derecho se concretaba en recibir el importe que le correspondiera por lo recaudado, no una cantidad preestablecida, sino lo correspondiente a la recaudación, de ahí que el ayuntamiento mantuviese una intervención de esos derechos, que seguía conservando.

La recaudación se hacía conforme a una nueva tarifa que contemplaba por un lado los derechos reales de puertas, y por otro los municipales. Los introductores pagaban el total de derechos, y luego se procedía al complicado sistema de apuntes y cotejos explicado arriba. La tarifa general era extensísima, se dividía en una serie de secciones¹¹³, y estas en los distintos artículos, hasta sumar casi cuatrocientas clases.

Los empleados municipales de la recaudación quedaron sin trabajo, pues al tener Madrid sólo la intervención de los derechos le bastaba con unos cuantos¹¹⁴.

La ordenación de la Instrucción de 1818 estuvo vigente desde este momento y hasta la desaparición del Reglamento de 1766, a pesar de las frecuentes quejas municipales para volver a la situación anterior.

Pero el nuevo sistema falló en lo que era su principal cometido: el producto de los derechos de puertas seguía a la baja. Hubo excusas de todo tipo: la mala inteligencia del nuevo sistema, la prudencia con que se conducían los empleados, etc. Pero la realidad era esa, no había fondos suficientes¹¹⁵.

Seguramente por esto la real Hacienda empezó a vislumbrar que era mejor que Madrid estuviera encabezado, de esta manera se intentaba salvar los ingresos en la esfera central. Por ello, el corregidor expuso de forma reservada, el 15 de marzo de 1819, este asunto a la municipalidad¹¹⁶. Según esto, Madrid pasaría a gobernar por sí las sisas reales y municipales; y tendría que pagar una cuota anual a la real Hacienda; es decir, como ocurría en otros muchos pueblos.

¹¹² Aunque se continuaron denominando de las dos formas. Así en una memoria económica elaborada por el ayuntamiento en 1835, al hablar de los productos de 1833 aparecen en primer lugar las sisas, y se explica que son los derechos municipales de puertas. Y cuando se hizo el inventario del Archivo de villa, se denominó a esta sección derechos de puertas, antes sisas.

¹¹³ Caldos, carnes, combustibles, dulces, esparto y mimbres, frutas, granos y legumbres, maderas, materiales de fábrica, metales, pescados, pieles y cueros, vidriado, verduras, diversos. Una copia de la tarifa en AVM-S 3-293-3.

¹¹⁴ AVM-Cr 1-138-12. Los empleados en las cinco puertas desde 1 de septiembre de 1818 según el plan de recaudación de Garay eran los siguientes. En las puertas de Toledo, Atocha y Segovia — en cada una—: un interventor, un oficial primero de libros y otro segundo, un aforador primero y otro segundo. En las de Alcalá y Santo Domingo: un interventor, un oficial de libro y un aforador.

¹¹⁵ AVM-S 3-292-18.

¹¹⁶ AVM-S 3-292-9.

Se nombró una comisión para estudiar el asunto, pero no hubo ninguna resolución. Hasta que ya establecido el gobierno constitucional, el ministerio de Hacienda, con fecha de 6 de julio de 1820 dio una circular en la que exponía que se había comunicado a la dirección general de la Hacienda pública la real Orden de 13 de marzo en la que se resolvió que continuase el sistema de Hacienda establecido el 30 de mayo de 1817.

Capítulo IV LA HACIENDA EN EL TRIENIO LIBERAL

Con el triunfo de Riego se volvió de nuevo a la legalidad constitucional. Durante tres años se vivió una experiencia revolucionaria sin precedentes¹. Las reformas liberales operadas a partir de marzo de 1820 en materia de fiscalidad municipal supusieron el primer intento acabado de ordenar con criterios modernos este asunto. Sin ir más lejos la *Memoria* que presentó el ayuntamiento de Madrid en 1821 era, dentro de la retórica y criterios sistemáticos de la época, un trabajo serio, eficiente, clarificador y ambicioso, como no se había hecho hasta el momento². La igualdad de los ciudadanos ante la ley y los impuestos, fue uno de los logros del momento.

Es por lo tanto una época de especial relevancia, pues supuso la puesta en práctica del modelo liberal, ya que lo conseguido hasta 1814 no puede considerarse más que como barruntos de lo que se iba a realizar en este momento. Y donde los municipios jugaron un papel insustituible³. Tanto entonces como ahora la guerra,

¹ Sobre la época del trienio en general es útil la obra de Alberto GIL NOVALES, *El trienio liberal*, Madrid, 1980. Para lo que nos interesa servirá el libro de J. DEL MORAL, *Hacienda y sociedad en el Trienio constitucional 1820-1823*, Madrid, 1975 y fundamentalmente el de M. ARTOLA, *La Hacienda del siglo XIX. Progresistas y moderados*, Madrid, 1986. Además sobre este período existen estudios de las haciendas locales de Sevilla y Santander: M^a. José ALVAREZ PANTOJA, «La hacienda municipal sevillana en el Trienio Liberal», en *Hacienda Pública Española* (55), 1978, 25-70; Miguel Angel SANCHEZ GOMEZ, «Haciendas municipales y revolución liberal: el caso de Santander (1807-1823)», en *Fiscalitat estatal i hisenda local* (ss. XVI-XIX). *Funcionament i repercussions socials. VI jornades d'estudis històrics locals*, Palma de Mallorca, 1988, 101-124. Para Madrid contamos con un viejo libro, el de Manuel CRISTOBAL Y MAÑAS, *La hacienda municipal de la Villa de Madrid, estudio histórico-crítico*, Madrid, 1900; que ha de utilizarse con reserva, pues contiene algunos equívocos.

² Quizá sin contar la obra de Carlos III. Un dato que ilustra el trabajo de los liberales es que tras la vuelta al modelo tradicional, en la municipalidad se piden ejemplares de las memorias presentadas por el ayuntamiento constitucional a las Cortes, de los reglamentos de gobierno interior y de derechos de puertas, del proyecto de reglamento para alcaldes de Barrio y de otros impresos (bandos, modelos, oficios, recibos, etc.) para instruir a los capitulares sobre las rentas, cargas y obligaciones de Madrid (AVM-S 2- 249-45).

³ J. GARCIA, *El origen...*, pp. 305-306, dice que hasta que se reunieron las Cortes en julio de 1820, España estuvo gobernada por los ayuntamientos constitucionales que existían en 1814. Durante todo el trienio los municipios fueron el órgano impulsor de la vida política, y no sólo administrativa: garantizaron el orden público, combatieron contra los absolutistas, movilizaron al pueblo en

con todas las implicaciones que trae consigo, sería la principal cortapisa para la realización feliz de toda esta tarea reformadora.

Las primeras medidas del nuevo gobierno, al igual que hizo Fernando VII en 1814 pero en sentido contrario, se dirigieron a restaurar el orden de la anterior etapa liberal. Los Decretos de 8 de noviembre de 1820 y de 29 de junio de 1822 regularon la enajenación de propios y baldíos, en consonancia con los postulados doceañistas⁴.

En el municipio madrileño hay que distinguir en principio dos momentos: el restablecimiento provisional del ayuntamiento y el definitivo tras celebrarse elecciones. El primero sirvió de tránsito al segundo y sólo funcionó ante la urgencia de las necesidades.

A su vez, cuando el ayuntamiento estuvo constituido en propiedad hay que diferenciar entre antes y después de la modificación del sistema de hacienda todavía vigente, el de Garay.

En la tarde del 9 de marzo de 1820 se restableció el ayuntamiento constitucional, ordenándose que todo volviese al ser y estado de 1814⁵. Una de las primeras tareas que ocupó la atención de la nueva municipalidad constitucional fue —como era de prever— su hacienda⁶; se estudiaron distintos negocios pendientes de la Junta de propios y sisas, nombrándose para ello las comisiones oportunas⁷: de esta forma se esbozó un esquema provisional de organización, heredero de la experiencia anterior. El ayuntamiento tenía presente la necesidad de ir satisfaciendo por la depositaria lo que devengaban los diferentes cargos de Madrid y otras cantidades que están ya resueltas y libradas por el ayuntamiento y la Junta de propios y sisas cesantes, por lo que se nombró rápidamente una comisión de pagos, como la que existía en 1814, la cual semanalmente debía formar listas de los pagos que debían verificarse⁸.

De esta forma y provisionalmente⁹ se articularon una serie de comisiones que se encargaban de los distintos negocios municipales, entre ellos los referentes a sus

apoyo de la constitución, fomentaron las obras públicas y convirtieron al municipio en el primer escalón de la participación política.

⁴ Estas disposiciones según J. GARCIA (p. 307) arrebataron una parte importante del patrimonio a los municipios, pero en Madrid —aunque se hizo alguna venta— no ocasionaron grandes cambios.

⁵ Para ello se leyó la lista de los Alcaldes, Regidores y Procuradores que lo eran en aquella fecha, y que lo serían de nuevo ahora (LA 252, 9.III.1820). Esto suponía entre otras cosas eliminar todo derecho y regalía que los empleados de la secretaría habían tenido en tiempo del ayuntamiento tradicional (LA 252, 15.VI.20).

⁶ En concreto, al día siguiente de constituirse el ayuntamiento se acordó que la Contaduría presentase un estado de existencias, para según éstas acordarse los pagos (LA 252 de dicha fecha).

⁷ Habiéndose hecho presente las Comisiones que hay que proveer entre los Regidores, y las cantidades que se libraban semanalmente para atender la limpieza, etc, se acordó proceder al nombramiento para las Comisiones más urgentes: limpiezas y alcantarillas; empedrados; Prado, paseos y presidio; fuentes; cárceles; compra de aceite para el alumbrado (LA 252, 11.III.1820). Poco después, el día 15 de marzo se nombró entre otras la Comisión de propios, bancas y baños (LA 252 en esa fecha).

⁸ LA 252, 14.III.1820.

⁹ El 16 de marzo de 1820 se acordó que todas las disposiciones que tomase el ayuntamiento serían provisionales, hasta que éste se estableciese en propiedad (LA 252 de esa fecha).

rentas, sin modificar el sistema de hacienda existente en espera de que las Cortes acordasen uno nuevo¹⁰.

Estas comisiones eran realidades técnicas, sin poder de decisión, pues el poder recaía en la municipalidad. Se reunían, estudiaban problemas, proponían; pero era el ayuntamiento el que decidía. Esto hizo que el trabajo del ayuntamiento se multiplicase y que sus sesiones fueran continuas¹¹. En esta organización seguía desempeñando un papel importante la Junta directiva de Derechos de puertas¹².

El 9 de abril se instaló el ayuntamiento constitucional en propiedad¹³. Tras dictar una serie de medidas de ordinaria administración¹⁴, pero que denotaban el buen hacer de los municipales, se trató de las comisiones y se acordó proveer las de mayor urgencia¹⁵: entre las que se encontraban varias relacionadas con la hacienda del municipio.

¹⁰ Así lo indica el rey (LA 252, 28.III.1820). En este sentido se comunica a la Contaduría se siga la práctica de presentar semanalmente un estado de entradas y salidas (LA 252, 12.IV.1820).

¹¹ El día 9 de abril —al constituirse el ayuntamiento en propiedad— se acordó la frecuencia de las sesiones: todos los días, en las Casas Consistoriales, a las 10 de la mañana. Esta frecuencia nos habla del mucho trabajo existente para hacer operativo el sistema constitucional. Más adelante, el 20 de mayo, cuando ya estaba incoado el trabajo municipal se redujeron a tres: martes, jueves y sábados; a las 9.00 en verano y a las 10.00 en invierno. Posteriormente con la municipalidad que surge de las elecciones de diciembre de 1820, las sesiones quedaron en dos: miércoles y sábados a las 10 de la mañana; LA 253, 1.I.21. Sin embargo, el volumen de trabajo —en el que los problemas de orden público pesaban mucho— hicieron que el 31 del mismo mes se acordase celebrar tres sesiones semanales: martes, jueves y sábados; a las diez de la mañana. Se intentó deslindar materias en esas sesiones: una para asuntos de gobierno, otra para intereses de Madrid y la otra para todo lo demás de particulares. Y el 5 de junio del mismo año se acordó tener ayuntamientos diarios, a las once de la mañana. Luego, el 27 de julio redujeron a los martes, jueves y sábados; el jueves se reserva para la discusión del Reglamento interior del cuerpo.

¹² Con fecha 28 de marzo de 1820 se recibió en el ayuntamiento un oficio del intendente sobre los miembros que debían pertenecer a ella. El ayuntamiento acordó que por Madrid asistiera el alcalde primero y el procurador síndico general primero. Debiendo seguir desempeñando la secretaría Faustino Domínguez, que continuaba siendo secretario de los Alcaldes, como lo era de corregimiento (LA 252 de esa fecha). Tras constituirse el ayuntamiento en propiedad, se envió un oficio al intendente dando nombres para la Junta directiva de puertas (LA 252, 12.IV.1820).

¹³ Nombrado por las Juntas parroquiales, todo el proceso de elección viene recogido en LA 252.

¹⁴ Ese día 9 de abril se suspendieron todos los pagos hasta que se realizara arqueo de la caja: estamos ante una municipalidad celosa de sus derechos y obligaciones. De esta forma el mismo día de su constitución se esforzó en hacer suyos todos los contenidos del artículo 321 de la Constitución. Así se estudió la figura del Depositario y se preguntó a Francisco Soriano si tiene venticinco mil duros para depositarlos como fianza para desempeñar ese cargo, y que se haga un arqueo general cada semana; el 12 de abril se le habilita. También el día 9 se acuerda que las contadurías den un estado demostrativo de los fondos o rentas anuales de Madrid, cargas a que tiene que atender y deudas que tiene que satisfacer (LA 252).

¹⁵ Para arqueo de fondos de la depositaría y comisión de pagos: Conde de Oñate y Conde de Noblejas. Cárceles: Juan Isidoro Pérez. Fuentes: Pedro Delgado y Juan Farquis. Paseo del Prado, Delicias, inmediaciones de Madrid y Presidios: Ramón Lancha. Limpiezas de día y noche, y alcantarillas: Martínez de Mollinedo y Marqués de Cusano. Empedrados: José Güell. Propios y arbitrios y de banca y baños de la ribera del Manzanares: Ramón Lancha y Rodríguez de Toro. Pleitos: Juan Isidoro Pérez. También se nombran los de Teatro, A ceite para el alumbrado público, Niños doctriños, Obras en las casas de la plaza Mayor y Nueva Puerta de Toledo (LA 252).

Una primera preocupación era conseguir los fondos necesarios para el funcionamiento del municipio: todo cambio político genera gastos y la instalación de los órganos constitucionales —por su radicalidad— más¹⁶. Urgía que las contribuciones rindieran todo lo que debían, cosa que realmente no era sencilla. En este sentido el 18 de abril la municipalidad estudió el estado de valores de derechos de puertas que había remitido el administrador general de aduanas, respectivo al mes de marzo. Se acordó enviar un oficio a la Junta directiva de derechos de puertas para manifestar la diferencia que se observaba en el producto de las puertas en dicho mes, comparado con igual del año anterior. ¿Por qué esta diferencia?

El ayuntamiento decía que se debía a la falta de vigilancia, tanto en la ronda como en los empleados en la recaudación. No había otra excusa, el número de habitantes era mayor que en aquella época y por lo tanto el ayuntamiento esperaba que dicha Junta directiva acordase las providencias oportunas para evitar semejantes perjuicios en la hacienda nacional y en la municipal¹⁷. Sin embargo la solución no era fácil, el 18 de julio volvió a debatirse el tema pues seguía patente la baja en los productos de puertas y aduanas. El Jefe político ordenó que se pusiesen bandos en la población y el ayuntamiento ofició a la Junta directiva para que tomase medidas enérgicas¹⁸. En este sentido el 22 de julio se aprobó que la milicia auxiliara en las puertas. Y el 27 el intendente envió un oficio sobre mejoría en el cobro de los derechos municipales en las puertas.

Evitar el contrabando¹⁹ y continuar con la normal explotación de los propios y arbitrios²⁰ se perfilaban como objetivos prioritarios. En este sentido hay que situar

¹⁶ Así la diputación pide 8.000 reales de la cantidad que corresponda a la villa de gastos de la provincia, para habilitar la sala de reunión de la diputación (LA 252, 17.IV.1820). El 24 de abril se recibió una real Orden pidiendo adelanto de 400.000 reales para el salón de córtes. El ayuntamiento constestó que estaba pronto a suministrarlos, pero que por falta de fondos lo haría a medida que se fuesen gastando (LA 252 de esa fecha). Días después, el 4 de septiembre, la diputación provincial pidió 20.000 reales a cuenta de las cantidades que corresponden a gastos comunes de provincia (LA de esa fecha).

¹⁷ LA 252, 18.IV.20.

¹⁸ LA 252 de esa fecha.

¹⁹ El 20 de julio un sereno observó a dos hombres con una escalera larga al hombro, siendo uno tabernero: sin duda un medio para la introducción de vinos (LA 252, 20.VII.1820). Más adelante, el 3 de enero de 1821, el ayuntamiento se enteró de que por las ventanas del establecimiento de la veterinaria estaba frente a la plaza de toros, se introducía contrabando. Por lo que se ofició al Director del establecimiento para clausurarlas (LA 253, de esa fecha).

²⁰ Así entre otros se acordó el 13 de abril sacar a subasta 26 puestos de agua de cebada (LA 252, de esa fecha). El 25 se hizo lo mismo con las limpiezas. El 13 de mayo se vió un papel del Mayordomo de Propios de cumplir en Santa María de agosto próximo el arrendamiento de 12 fanegas y 6 celeminies de tierra situadas en Arroyo de Bayones o Cochineros, que disfrutaba Vicente Pachón y que debía los seis últimos meses. Se acordó nueva subasta y que el mayordomo practicara diligencia para el cobro. El 25 se vendió una porción de terrenos en Puerta Cerrada, a Juan Montero. Se hizo nuevo arriendo de las medidas (10.VI.1820). El 4 de agosto se vendió un terreno en la Ribera de curtidores. Y el 11 se sacó a subasta la carnicería de la plazuela de Santo Domingo. El 17 de agosto se arrendaron tierras propias en arroyo de bayones. El 22 se subastó la Romana en plaza de la Cerrada. Véanse LA 252 de esas fechas.

también el esfuerzo de la municipalidad por no soportar gastos que no fueran de su estricta incumbencia²¹.

Un aspecto no pequeño era el pago a los censualistas efectistas, que eran los principales acreedores a los productos que rendían las sisas²². Para ordenar este pago, el ayuntamiento acordó dar las dos medias pagas anuales²³. Las sisas con acreedores eran 25, de ahí que se decidió sortear el orden progresivo con que cada una había de satisfacerse, el pago a los interesados se verificaría por la progresión numérica con que cada capital estaba designado desde su imposición²⁴. Otro pago importante eran los sueldos a cargo del ayuntamiento²⁵.

1. LOS DERECHOS DE PUERTAS: LOS DECRETOS DE 28 DE NOVIEMBRE Y DE 3 DE DICIEMBRE DE 1820

Como se ha dicho, la entrada del ayuntamiento constitucional no supuso un cambio inmediato en la organización de la hacienda madrileña, lo cual no significa inactividad: desde un primer momento se trabajó en una racionalización del sistema fiscal según nuevos criterios. En esta línea el 31 de julio se recibió en el ayuntamiento una real Orden autorizando a los intendentes de las provincias para que celebrasen contratos con los ayuntamientos de las capitales de un ajuste alzado

²¹ Así la cárcel de corte (LA 252, 22.IV.1820). También la negativa de pagar lo que estaba asignado para la franquicia o refacción de los cuerpos de casa real y guarnición (LA 252, 10.VI.1820). Aunque más adelante un oficio del tesorero general de la Nación con fecha de 13 de septiembre ordenó al ayuntamiento formar nueva tarifa y que mientras regía la de 1816 debía satisfacerse la refacción a la tropa. Adeudándose desde la semana que finalizó el 9 de abril 733.326 reales, rebajados los 400.000 del salón de cortes, restan 333.326 reales; y se continúe con el abono semanal (LA 252, 16.IX.1820). Por otro lado se acordó informar al jefe político en orden a que desde que el rey juró la Constitución política de la monarquía y decretóse plena observancia debía cesar la aplicación de los productos de la sisa del maravedí en cárcel de corte para fines que por no ser de utilidad peculiar de Madrid, no tenía obligación de costear. Se propuso destinar el sobrante, después de satisfechos los réditos de los dos capitales de censo que importan 640.000 reales que fueron tomados sobre la citada sisa, para construir una nueva cárcel (LA 252, 11.XII.1820).

²² El 31 de mayo el Conde de Noblejas propuso el pago anual de réditos —él era uno de los interesados— (LA 252). Al mismo tiempo —el 12 de junio— se incoa un recurso en solicitud de espera o moratoria por 4 ó 6 meses para que en este intermedio no demanden a Madrid los acreedores censualistas para el pago de los intereses que tengan devengados. Se instó a la Contaduría a que formasen un estado exacto e individual de lo que son en deber los fondos públicos a dichos efectistas censualistas y otros acreedores.

²³ El 18 de junio se comunica a los interesados efectistas contra las sisas que se estaban satisfaciendo las cartas de pago sin cobrar relativas al último medio año, para que las presentasen en el término de 8 días en la Contaduría de intervención.

²⁴ LA 252, 20.VI.20. El 24 de julio se acordó dar principio desde el 1 de agosto al pago del segundo medio año de efectistas. Para lo cual se ordenó hacer el sorteo público de las sisas. Cada semana se invertirían 120.000 reales. El sorteo se realizaría el 27 de julio.

²⁵ El 28 de junio se ordenó el pago de los sueldos del mes conforme las existencias que fueran entrando (LA 252).

equivalente a los derechos de puertas, entretanto que las Cortes resolvían sobre la permanencia o extinción de éstos.

La municipalidad dijo que Madrid siempre había sido una excepción en las reglas acordadas para los encabezamientos de derechos de puerta y, por lo tanto, pedían continuar con la administración²⁶. Al mismo tiempo que se pedía a Madrid que manifestara los medios y arbitrios que se podían adoptar en el caso de abolir los derechos de puertas²⁷.

El problema se resolvió con los Decretos de 28 de noviembre y 3 de diciembre de 1820²⁸. En el primero se establecía el plan de gastos y contribuciones para el primer año económico que corría desde 1 de julio de 1820 hasta 30 de junio de 1821. En él se decía que los derechos de puertas nacionales debían quedar extinguidos desde la publicación del Decreto. El importe de lo que estos derechos hubiesen rendido se deduciría de lo que cada pueblo tenía que abonar. De momento continuarían los arbitrios municipales, destinados a cubrir las obligaciones de los pueblos. En el otro Decreto se decía que las Cortes habían repartido 125 millones entre las provincias que habían sufrido la contribución de 250 millones impuesta por el real Decreto de 30 de mayo de 1817. Asimismo se hacía un repartimiento de 27 millones de reales a las capitales de provincia y puertos habilitados, de acuerdo con el valor que tenían los derechos de puertas en cada una en el año 1819. La cuota que correspondía pagar a Madrid era de 6.983.801 reales²⁹.

Esto suponía una reorganización de este ramo³⁰: Madrid recuperaba la administración de las sisas, se suprimía la Junta directiva³¹; se creaba una comisión de arreglo de derechos de puertas³²; se organizaba una Junta de puertas³³; y se tenían que

²⁶ LA 252, 31.VII.20.

²⁷ El Congreso pidió a Madrid esa información, en esa misma orden se pedían quinquenios de sisas, propios y gastos (LA 252, 16. VIII.1820). Para ello el 2 de septiembre el ayuntamiento aprobó una comisión.

²⁸ La Gaceta de esas fechas recoge estos decretos, que tenían fecha de 9 de noviembre los dos.

²⁹ Madrid era la capital con mayor carga, le seguía con menos de la mitad Barcelona (3.048.000), después Cádiz (2.278.868), Valencia (2.029.809), Sevilla (1.853.709).

³⁰ LA 252, 4.IX.1820. Esto suponía que el vino sufría gran perjuicio, pues en derechos municipales satisfacía 12 reales y 28 maravedís; el aguardiente sólo 4 reales en arroba. Como el aguardiente era peor para la salud se aprobó una propuesta al Gobierno en la que se pedía la subida del aguardiente y la rebaja del vino. Las Cortes resolvieron autorizar al Gobierno para que pudiese atender a la nivelación de los derechos municipales de vino y aguardiente, previa audiencia del ayuntamiento y la diputación, según prevenía la Constitución (LA 252, 2.XII.1820). El Gobierno pidió que diputación y ayuntamiento informasen sobre las cargas que han de cubrirse con los 6.704.72 reales que produciría el impuesto de vino y aguardiente (LA 252, 20.XII.1820). A lo que el ayuntamiento informó el 23 de diciembre.

³¹ Se nombró una comisión compuesta del Alcalde de primer voto, Regidores (Mollinedo y Delgado) y procuradores síndicos para que teniendo en consideración la proximidad de tener el ayuntamiento a su cargo la administración exclusiva del ramo interno de puertas, practicasen con la prontitud posible cuanto fuese conveniente para la mejor administración de dicho ramo, sustituyendo a la antigua Junta directiva constituida con este objeto; dando cuenta al ayuntamiento de lo que juzguen (LA 252, 10.IX.1820).

³² Dicha comisión presentó a la municipalidad el 18 de diciembre el arreglo de los empleados.

poner empleados propios para la recaudación de los derechos de puertas, cesando los de la real Hacienda. También se nombró una comisión para despachar con el ministerio sobre el día en que tenían que cesar los derechos nacionales de puertas³⁴; se fijó el día 20 de diciembre³⁵.

³³ El 28 de diciembre la Comisión de arreglo de Puertas presentó un reglamento provisional para la Junta directiva: «Reglamento provisional para la Junta directiva de la recaudación de los derechos municipales que por ahora quedan a cargo del Excelentísimo Ayuntamiento Constitucional de esta M. H. Villa con arreglo al Real Decreto de veinte y ocho de Noviembre próximo pasado.

1. La Junta directiva se compondrá de cinco individuos del mismo Excelentísimo Ayuntamiento siendo presidente el Sr. Alcalde 1º e individuos los dos Procuradores síndicos nombrándose los otros dos por el mismo Excelentísimo Ayuntamiento.
 2. Se reunirá dos veces por semana en las Casas Consistoriales a la ora que señalen.
 3. Asistirá a esta Junta el administrador central para esponer cuanto ocurra en la administración de los derechos municipales, y no tendrá voto.
 4. Entre los oficiales agregados a la administración central, la Junta nombrará un secretario para llevar el libro de actas y comunicar las resoluciones que acordare, y este gozará por este trabajo extraordinario un sobre sueldo de doscientos ducados anual es pagados por gasto de administración.
 5. Las propuestas de los empleos que bacasen perteneceran a la Junta, oído el administrador central y a la aprobación de estas propuestas la hará el Excmo. Ayuntamiento.
 6. La Junta decidirá por si en todo lo governatibo con arreglo a los Reglamentos aprobados por el Excmo. Ayuntamiento en el caso que sea preciso variar o modificar estos, lo propondrá al Excmo. Ayuntamiento para su aprobación, como también en los casos extraordinarios cuya gravedad exigiese igual aprobación.
 7. En casos imprevistos se reunirá la Junta extraordinariamente por orden del señor Alcalde 1º, su presidente.
 8. El administrador central llevará a cada Junta todos los datos necesarios para que conozca la marcha de la administración y será responsable de la egecución de los acuerdos de la misma.
 10. Las variaciones o modificaciones que haya que hacer en los reglamentos administrativos serán examinadas por la Junta y propuestas al Excmo. Ayuntamiento para su aprobación.
 11. Las cuentas mensuales de los administradores y seis depositarios examinadas por la contaduría y señores Procuradores, serán presentadas al Ayuntamiento para su aprobación del mismo modo que lo son las de otros ramos de Villa.
- Madrid veinte y seis de Diciembre de mil ochocientos veinte. Félix de Oballe. Gregorio Martínez Mollinedo. Pedro Delgado. Domingo Villamil. Juan Antonio Castejón.»
- Enterado el ayuntamiento acordó el 18 de enero aprobar este reglamento, y se comunicó a la Contaduría general de cuentas de la villa, como la elección o nomina de los empleados en la administración Central, Puertas y resguardo para la recaudación de derechos municipales.

³⁴ Tras el despacho se acordó que el ayuntamiento pasase por escrito este asunto (LA 252, 4.XII.1820).

³⁵ Por real Orden se dispuso que a partir del 20 de diciembre sólo Madrid se encargase de las puertas (LA 252, 18.XII.1820). En concreto el intendente envió un oficio con fecha de 17 comunicando que el 19 a las cuatro de la tarde se haría entrega a los empleados municipales de los instrumentos materiales de las puertas, y estos deberan firmar un inventario de lo que se entrega. La decisión no fue fácil. Primero hay una real Orden en que se comunica que el Rey se ha dado cuenta de la exposición del ayuntamiento para que a 10 ó 15 de diciembre se mande cesar los derechos de puertas nacionales. Lo cual es de su conformidad siempre que se comprometa a hacer efectivo según el art. 321 de la Constitución el cupo señalado para el casco de la villa de Madrid; y además satisfaga los haberes de los individuos que van a quedar cesantes —mientras se empleen en otro sitio—, ya que el Congreso no ha comprendido en los 6.983.801 reales que deben ser líquidos para

2. UN INTENTO DE ORDENACION: LA MEMORIA DE 1821

A uno de enero de 1821, tal y como estaba previsto se nombró la nueva municipalidad que había surgido de las elecciones³⁶. Esto supuso un cambio en los componentes de las comisiones, cuarteles, etc.

El 26 de marzo de 1821 se aprobó por la municipalidad la Memoria³⁷ formada por la Junta de puertas sobre los gastos precisos del ayuntamiento con el fin de llenar las atribuciones que le señalaba el artículo 321 de la Constitución³⁸.

La Memoria era un impreso largo, de 116 páginas, de un estilo árido y complicado, donde el intento de apabullar con datos dificultaba su comprensión. Comenzaba con un fervorín del más puro estilo decimonónico liberal³⁹; para a continuación señalar cuáles eran las necesidades numerarias del municipio: cupo de gastos de la nación, las necesarias al ayuntamiento para realizar las atribuciones del art. 321, y para satisfacer los réditos de sus deudas.

Después analizaba cómo realizar la exacción de forma que se obtuvieran las mayores ventajas. De tres formas podían realizarse: sólo contribución directa, sólo indirecta y de forma mixta. El ayuntamiento no intentaba con ello exponer teorías brillantes, sino lo que pensaba era posible y de fácil ejecución. Por eso no citaría autores, sino que se fijaría en los hombres y en las cosas, tales como eran en el momento.

a) *La situación de la que se parte*

Lo primero que afrontaba la Memoria era el análisis del sistema de impuestos vi-

el erario aquella obligación. El ayuntamiento se mostró conforme con el pago del cupo, pero lógicamente se negó a correr con los sueldos de los empleados nacionales (LA 252, 11.XII.1820). Por otro lado estaban las dificultades que el intendente y la diputación provincial encontraron para suprimir los derechos de puertas y repartir la cuota de contribución directa que por equivalente se ha señalado; ya que no estaban reunidos los datos necesarios para verificar equitativamente la operación. La diputación propuso continuar con los derechos municipales, amparándose en el Decreto de las Cortes de 6 de septiembre sin perjuicio de que el ayuntamiento y diputación dieran cuenta específica de las cantidades cuya exacción se estimase absolutamente necesarias (LA 252, 11.XII.1820).

³⁶ LA 253, 1.I.1821.

³⁷ El impreso llevaba fecha de 30 de abril de 1821, y decía en portada: «Memoria presentada a las Cortes por el Ayuntamiento Constitucional de la M. H. Villa de Madrid sobre sus gastos precisos, con el fin de llenar las atribuciones que le señala el artículo 321 de la Constitución: sus rentas, débitos en pro y en contra, medios de compensación de unos con otros, cupo que toque a esta capital en las rentas nacionales, y el modo más a propósito que podrá adoptarse para exigir por medio de contribuciones las cantidades necesarias para cubrir el presupuesto municipal y cupo nacional» (AVM-S 3-293-26 y 3-293-3). El 8 de mayo se remitieron a las Cortes los ejemplares de la Memoria (LA 253, de esa fecha).

³⁸ Sobre el artículo 321 de la Constitución de 1812 véase lo dicho en el capítulo III.

³⁹ En la primera parte se hace una introducción a lo que suponen las contribuciones para la felicidad de los pueblos. Analizaba el caso de Grecia y Asia Menor frente al de Inglaterra y Francia. Concluía ponderando la importancia de los impuestos nacionales para el bien y prosperidad nacional. Si era así —se decía—, mucho más ocurría con las contribuciones municipales, que son más inmediatas.

gente antes del Decreto de 28 de noviembre y 3 de diciembre de 1820, y el estado que había quedado a partir del 19 de diciembre en que se pusieron en ejecución dichos Decretos; es decir la situación de la que partía cualquier reforma que se quisiera realizar.

En 1819 se recaudaron en las distintas puertas y en la aduana un total de 32.952.461 de reales, de los que 18.020.803 correspondían a las contribuciones nacionales y 14.931.658 a las contribuciones municipales.

Los ingresos de 1820 fueron menores debido a la disminución de los consumos y al establecimiento de puestos de ventas en los exteriores de la corte, es decir al fraude ocasionado por el desorden de la revolución. En concreto las cifras para ese año hasta el 19 de diciembre daban un total de 27.901.350 reales; de los que corresponden 14.087.590 a contribuciones nacionales y 13.813.760 a las municipales. Aumentando ese monto por los doce días del mes de diciembre que van desde el 19 al 31 hacían un total de 28.867.159, que correspondían respectivamente 14.585.136 y 14.282.023.

Por lo tanto hubo una baja total del 12.4 por 100. Baja que probablemente hubiese continuado en 1821, ya que los motivos que la causaron continuaban existiendo. Además a las cantidades indicadas había que deducir los costos de la administración recaudatoria, que fueron de 709.427 para la Hacienda nacional y de 1.038.287 para la municipal, ya que esta última abonaba 328.860 más para el pago de los empleados en la intervención. Por otro lado Madrid debía pagar a la Tesorería general por el equivalente del arbitrio de tabernas 213.038 reales y por el líquido de la contribución de las casas con destino al Crédito público 701.929⁴⁰.

En el primer año económico del trienio, que comenzó el 1 de julio de 1820, se señaló a la villa por cupo nacional la cantidad de 6.983.801 reales. Para pagarlo, conforme al Decreto de 28 de noviembre, se debía admitir por cuenta de Madrid todo lo ingresado en las puertas desde 1 de julio de 1820 hasta el 19 de diciembre. En ese periodo se recaudaron 5.682.259, a los que hay que deducir 332.777 de los gastos ocasionados, es decir que la recaudación líquida ascendió a 5.349.482. Como el cupo nacional era de 6.983.801, restaba por pagar 1.634.319 reales.

Esa cantidad se veía reducida a sólo 76.472 reales, por deducirse distintas partidas que Madrid había pagado⁴¹. Lo cual permitió no tener que realizar un repartimiento de contribución directa en el año económico que concluyó en 1 de julio de 1821.

⁴⁰ Se cobraba el 4 por 100 de las casas y el 6 por 100 de los censos, lo que importa correspondientemente 523.217 y 215.655 reales. El método de esta recaudación era el de acudir los cobradores a los dueños o administradores de las casas con las cartas de pago que designaban el número y manzana y la cantidad que había sido repartida por rendimientos de ella y por los censos. En la página 19 de la Memoria aparecían las cuentas justificativas de esta contribución.

⁴¹ Esas partidas consistían en 268.238 reales pagados a la Tesorería de Provincia; 213.038 entregados también a esa Tesorería por el equivalente al arbitrio de tabernas, que es el de dos reales por cada una, y un real por cada tienda de vinos; 619.149 para el canal de Manzanares, gasto que pertenecía al presupuesto de la Gobernación ya que este canal era un ramal del gran sistema de canales nacionales; 31.000 a la Tesorería de Correos, también corresponden al presupuesto de la misma Gobernación; 422.133 al Crédito público; 4.289 de depósitos en la administración interior.

b) *El presupuesto para el segundo año económico*

El segundo año económico venía marcado por la instauración de un nuevo sistema de Hacienda. Efectivamente, el 29 de junio de 1821, último día de la segunda legislatura de Cortes, se aprobaron una serie de Decretos⁴² que suponían la puesta en marcha de la obra fiscal de Canga Argüelles, a pesar de que éste no estaba ya en el gobierno. Esto suponía, como decía el dictamen de la comisión parlamentaria, la instauración de un nuevo sistema de Hacienda que venía a sustituir al de Garay, todavía vigente.

Cuatro eran las contribuciones en las que descansaba este nuevo orden, además de la vuelta al estanco de la sal y del tabaco: la contribución directa, la de patentes, la de registro y los consumos. Estos últimos, que Canga Argüelles se había limitado a sugerir, se convirtieron —según cuenta Artola— por obra de la comisión de Cortes en una nueva versión de los millones, al repartir un cupo de 100 millones de reales entre las provincias. Para obtener esta cantidad se dejó que los ayuntamientos determinasen el procedimiento a partir del consumo de artículos tradicionalmente gravados por este concepto: vino, vinagre, aguardiente y licores, aceite y carne.

El 3 de julio de 1821 se celebró un ayuntamiento extraordinario con el fin de estudiar una real Orden en que se exponía que para facilitar y poner en planta el nuevo sistema de hacienda que las Cortes acababan de aprobar y que debía regir el actual año económico —el segundo— era necesario ponerse de acuerdo con el ayuntamiento. Para ahorrar tiempo se propuso elegir una comisión para comenzar a establecer dicho sistema⁴³.

En este segundo año la municipalidad preveía unos gastos de 23.801.656 reales, siempre que la Nación corriera con los réditos de su deuda que pesaban en ese momento sobre Madrid, de lo contrario las necesidades serían de 25.068.591 reales⁴⁴.

Frente a esto, se suponían unos ingresos —conforme al sistema que se venía siguiendo— de 16.001.279 reales. El sistema era el mismo, en cuanto a lo cobrado en las puertas, que antes del Decreto; con la única variación de la subida del aguardiente y la bajada proporcional del vino, para que sin aumento de ingresos quedasen más proporcionados estos dos ramos de consumo⁴⁵.

⁴² Como dato que ilustrará baste decir que las páginas 219 a 430 del tomo VII de la Colección de decretos corresponden a esa fecha.

⁴³ Se nombró para la Comisión del nuevo sistema hacendístico al alcalde primero, dos regidores y un procurador síndico; con mandato para acudir al día siguiente a las once de la mañana al Ministerio de Hacienda, donde tratarán con el ministro sobre el particular.

⁴⁴ Los efectos de villa ascendían al capital de 206.782.159 reales y sus réditos a 5.533.291. De éstos 100.473.571 correspondían a capitales impuestos a beneficio de la Nación, cuyos intereses eran 2.688.576; de forma que a Madrid le quedaría por pagar el resto, esto es 2.844.715. Sin embargo el ayuntamiento venía cargando con el pago total, aunque preveía que ahora el imperio de la razón y de la justicia reconociera esa deuda como nacional y respondiese la Nación al pago de sus réditos.

⁴⁵ Esta compensación se hacía fundamentalmente por razones sanitarias. De nivelarse esa imposición se consumiría mayor cantidad de licor, que perjudicaba más la salud que el vino.

¿De dónde procedía esta estimación de ingresos? Cómo siempre el grueso lo proporcionaban los derechos de puerta; en concreto, y teniendo en cuenta lo ingresado en los meses de enero y febrero⁴⁶ se preveía una renta líquida en las puertas de 14.400.000 reales⁴⁷. A esta cantidad había que añadir lo que se recaudaba por el alumbrado⁴⁸, 660.000; por los arbitrios⁴⁹, 691.568; y por la explotación de los propios de la villa⁵⁰, 249.711. Es decir que los derechos de puertas suponían un 90 por

⁴⁶ En enero se había ingresado por este concepto 1.368.877 reales y en febrero 1.265.094; es decir un total de 2.633.971 en ambos meses.

⁴⁷ Se presupuestaban unos ingresos de 15.600.000 reales, a los que se rebajaba la cantidad de 1.200.000 en concepto de gastos de recaudación, de forma que restaba la cifra dicha arriba.

⁴⁸ Las casas de Madrid debían pagar 120 reales por cada una de las 7.191 luces existentes. Muchas no contribuían a pesar de estar comprendidas en este número, como eran las de Palacio —que se encendían por cuenta de la real casa—; las del hospital y otros establecimientos de beneficencia, que nada pagaban; e igualmente las casas arruinadas y eriales. De ahí que se estimasen 5.500 luces para los cálculos del presupuesto.

⁴⁹ Estos eran: el arbitrio de tabernas estaba arrendado en 370.000 reales, de los cuales 213.038 se destinaban a cubrir parte del cupo de las contribuciones nacionales, 156.962 reales; censos y efectos de fuentes, 16.327; un juro que rentaba 3.041; el producto de las ventas de agua que por hacerse de muy tarde en tarde es muy incierto, 10.000; las multas, legados, efectos, memorias y obras pías de la cárcel de villa, 10.858; el producto líquido de los arbitrios de la cárcel de corte, que son 6 reales semanales en cada uno de los 77 juegos de billar que había en el día en Madrid, 3 reales semanales por cada uno de los cuatro juegos de bochas, bolos y pelota, por el alquiler de las diez escribanías de provincia que era de 3.170 reales y el de los sótanos 2.250, todo sumaba 30.068 reales, de los que había que deducir 3.131 reales de gastos de recaudación, asignación a un alguacil e impresión de recibos, quedaban líquidos 26.937; los cajones de la plaza y plazuelas producían 110.006 reales, de los que había que descontar 9.328 de recaudación, quedaba líquido 100.678; la poda y escamonda de los árboles del paseo del Prado y Delicias, 6.736; los tres muladares que existían en las extremidades de la villa, 45.613; los lavaderos del río Manzanares producen 30.058 y los baños del mismo río 4.201, de los que hay que descontar en gastos 2.442, queda un líquido de 31.817; el oficio de fiel contraste marcador de pesos, pesas y romanas produce por el registro, reconocimiento y venta de dichos instrumentos 107.333, de los que hay que descontar en sueldos y material 49.744, queda un líquido de 57.589; el fiel almotacén producía por el reconocimiento y venta de las medidas de cabida y de longitud 73.991, de los que hay que descontar por material y sueldos 38.164, resultaba líquido 35.827; los puestos fijos del peso nacional producían 18.342, de los que hay que descontar 10.893, quedaban líquidos 7.449; el producto de los alquileres de los aprovechamientos de la casa matadero era de 15.809, de los que hay que descontar 9.752 de gastos, restaba líquido 6.057; el barrido de la plaza y plazuelas producía por arrendamiento 36.500; el archivo de escrituras públicas 8.615, de los que restados gastos quedaban 5.981; la alhondiga producía 8.182, restados gastos quedaban 6.827; los puestos de agua de cebada producían 8.300; las sillas del paseo del Prado, 2.500; el arrendamiento de la mitad del puente de Arganda, 33.010; el arrendamiento de los dos teatros de Madrid, 86.600.

⁵⁰ Los productos de los propios consistían en los alquileres de las casas que hay en esta corte, 69.533; varios censos contra casas en la villa, 2.597; dos huertas y algunos terrenos contiguos, 8.870; el aprovechamiento de las laderas de los paseos, 2.000; las posesiones que hay fuera de Madrid (sotos, bosques, dehesas), 185.043; tierras labrantías que se hallaban en el día arrendadas, 25.725; terrenos dados a censo fuera del municipio, 8.145; la barca de arrebatacardos, 7.166. En total sumaban todos 309.079 reales. De esta cantidad hay que rebajar por reparos de las casas, contribuciones por las propiedades que están fuera de la villa, dietas que causa el visitador, sueldos de los guardas de bosques, dehesas y sotos, veredas y otros gastos: 59.368. Por tanto quedan líquidos los 249.711 reales dichos arriba. Esto quiere decir que casi el 24 por 100 del producto de propios se empleaba en su obtención: una ruina.

100 de los ingresos, el alumbrado y los arbitrios algo más del 4 por 100 cada uno, y los propios tan sólo un 1,5 por 100.

En cuanto a los gastos, éstos se distribuyen de la siguiente manera⁵¹: los gastos de personal, es decir todo tipo de sueldos suponían 1.303.556, casi el 5,5 por 100 del total; los establecimientos de beneficencia 3.300.000, un 14 por 100; festividades y extraordinarios 476.524, un 2 por 100; los teatros 437.830, un 1,8 por 100; Material de oficinas 81.532, 0,4 por 100; jubilados y viudas 197.128, 0,8 por 100; intereses de la deuda y amortización⁵² 3.844.715, un 16 por 100; obras públicas y limpieza 6.098.055, un 25 por 100.

Además de esto estaba el cupo nacional, su monto dependería de lo que resolvieran las Cortes, pero la municipalidad lo había graduado para fundamentar sus cálculos en 8.000.000 de reales⁵³, es decir un 33,6 por 100. De esta forma casi la mitad del gasto se destinaba a partidas que se pueden llamar extramunicipales: cupo nacional e intereses de la deuda.

3. DISCURSO SOBRE EL SISTEMA DE INGRESOS

El ayuntamiento pensaba que el monto que necesitaba para cubrir sus distintas necesidades podía alcanzarse de distintos modos: por contribuciones directas, por contribuciones indirectas o de forma mixta.

a) *Imposiciones directas*

Para cubrir el cupo nacional según las bases presentadas —y aprobadas— por la comisión de Hacienda el 31 de agosto de 1820 a las Cortes se deberían imponer las rentas de las casas y las utilidades que se suponen al comercio e industria por el sistema de patentes.

Ya se vió más arriba que el valor líquido del impuesto sobre las casas en la corte fue en 1817, último año ajustado, de 701.929 reales bajo el supuesto de que los alquileres fuesen de 30.497.175 reales. El ayuntamiento pensaba que esta regulación era baja y que el importe de los alquileres no podría graduarse en menos de 45.000.000 cada año, de los que rebajando las casas desocupadas, reparaciones, insolvencias, fraudes, etc. quedarían 25.000.000 que al 10 por 100 producirían 2.500.000 y deduciendo un 4 por 100 de recaudación y administración quedaría líquido 2.400.000.

⁵¹ Aquí el criterio clasificador es más complicado, ya que en los ingresos seguimos el que está en la mente de la época: puertas, alumbrado, arbitrios y propios. Pero para los gastos no existen criterios clasificatorios, sino que estos bullen desordenadamente. Intentaré no hacer una clasificación actual, que sería un anacronismo falseador, y seguir las áreas que se puedan deducir del presupuesto y nos sirvan para una buena comprensión de lo que se intentaba hacer.

⁵² Los 5.533.291 reales a que ascendían los réditos de los 6.200 efectistas, no podían dejar de pagarse sin faltar a los principios de la justicia y arruinar a esos individuos. El millón de reales destinado al fondo de amortización, era también necesario como esperanza de que un día Madrid quedaría redimido de la carga de la deuda. Asimismo convenía según los munícipes enajenar las fincas que poseía la villa pagándolas con réditos o efectos que contra sí tenía.

⁵³ Como más abajo se dirá la cantidad que aprobaron las Cortes fue ligeramente superior: 8.181.167.

Para poder establecer el sistema de patentes se necesitaba un censo exacto de todos los comerciantes, fabricantes y artesanos, lo cual suponía una operación sumamente prolija y costosa. Para dar una idea de lo que podía producir este impuesto el ayuntamiento hizo un cálculo aproximado basándose en el censo de 1797, con las modificaciones necesarias⁵⁴ y un margen de error de un 6 por 100, y quedaría líquido del producto de patentes 5.600.000 reales.

El ayuntamiento no ignoraba la imposibilidad existente para repartir las contribuciones con proporción exacta; nada más incierto que los beneficios que estas clases generaban. Como era lógico había comerciantes que en un año duplicaban su fortuna y en otro la perdían, etc. Por eso el sistema de patentes se veía como el menos susceptible de abusos, como un límite a la arbitrariedad⁵⁵, de ahí que las Cortes en las bases aprobadas para el sistema de Hacienda dieran preferencia a las patentes para el repartimiento de las contribuciones sobre el comercio e industria.

En cuanto a las cantidades que debían exigirse para cubrir los gastos municipales se disponía en primer lugar el principio de igualdad fiscal: todos los habitantes de la corte debían contribuir, pues todos sin excepción alguna se beneficiaban de esas inversiones. Estas contribuciones, según la municipalidad, no podían hacerse en virtud de las rentas de que gozaba cada uno de sus habitantes, sino del beneficio del que disfrutaban por las ventajas que la inversión de las rentas municipales les proporcionaban, cosa difícil de averiguar. Como la renta que pagaba cada uno por su casa tenía hasta cierto punto proporción con el disfrute, sería quizá éste el único elemento susceptible de tomarse por base⁵⁶. Exigir el 30 por 100 de lo que los vecinos pagaban por el alquiler de sus casas, daría una suma de 11.250.000 reales, a los que rebajados un 10 por 100 por fallidos quedarían 10.125.000 y descontando un 4 por 100 por gastos de administración y recaudación quedaría líquido 9.564.375.

Pero esta cantidad no era suficiente, por lo que habría que imponer, según los municipios, otro derecho de patentes. Como los gastos de administración y recaudación serían menores en la segunda patente, se podría graduar en 5.720.000.

Para conseguir, después de esto, las cantidades que faltaban se señalarían los si-

⁵⁴ En 1797 la población de la corte, sin incluir militares, era de 156.339 habitantes —siempre según lo que dice la municipalidad en su Memoria—, y en el día era sólo de 135.629. Es decir, que hubo una disminución de un 13 por 100. Se suponía que la disminución era proporcional en cada profesión. Así se muestra una tabla (pp. 85-88) de los distintos profesionales de cada ramo en 1797, los que se calculaban en el día y las cantidades. Aunque el comercio y la industria había decaído desde ese año más que la población, se estimaba que diversos ramos de industria no incluidos en el censo y susceptibles de imponerse —como tahoneros, revendedores en plazas y plazuelas, músicos y otros— podrían producir la diferencia.

⁵⁵ Tampoco parecía una solución exenta de grandes inconvenientes exigir las contribuciones por gremios. ¿Cómo era posible fijar la escala de cada gremio para hacer la repartición total?, ¿a cuantos errores no estaría expuesta? Además, el segundo reparto entre los individuos de cada gremio era igualmente problemático.

⁵⁶ Si en lugar de esto el ayuntamiento tomase el arbitrio de imponer contribuciones a las puertas y ventanas, todavía sería más defectuoso y desigual que el método anterior, ya que casas de los pobres podrían pagar en proporción más que las de los ricos.

guientes arbitrios: aguadores⁵⁷; juegos de billar⁵⁸; juegos de bolos, bochas y pelota⁵⁹; coches⁶⁰; criados⁶¹; casas de comer⁶²; posadas⁶³; fuentes particulares⁶⁴; casas particulares de huéspedes⁶⁵. Con ellos se recaudarían hasta 1.784.216 reales líquido⁶⁶. De esta forma se vería completado el presupuesto de ingresos.

b) *Sistema mixto: contribuciones directas para el presupuesto nacional, indirectas para el municipal.*

En este caso el cupo nacional se cubriría del mismo modo que en el caso anterior, es decir mediante las rentas de las casas y por la contribución de patentes.

En cuanto al gasto municipal, éste se cubriría mediante los derechos de puertas y otros arbitrios. Los derechos de puertas tal y como estaban en el día producían 14.400.000, cantidad que no era suficiente. El ayuntamiento pensaba que se podrían exigir los siguientes arbitrios⁶⁷: juegos de billar; juegos de bolos, bochas y pelota⁶⁸; casas de comer⁶⁹; posadas y fondas⁷⁰; casas particulares de huéspedes y casas amuebladas que se arriendan⁷¹; tabernas⁷². Todo lo cual daría líquido 717.298 reales⁷³. Y cargando a los comerciantes por el equivalente de los derechos de puertas en los géneros de vestir, daría un total de 1.317.298.

Para poder obtener lo que todavía faltaba, la municipalidad opinaba que había que modificar la tarifa de los derechos de puertas, además de poner todos los me-

⁵⁷ En el año 1797 había 720 aguadores, admitiendo la mencionada reducción del 13 por 100, existirían 626, que pagando cada mes 30 reales daría un total de 225.360. Esta contribución los aguadores la repercutirían en los consumidores de agua, como es obvio.

⁵⁸ Existían 77 juegos de billar, que a 600 reales darían un total de 61.600.

⁵⁹ Cuatro juegos de bolos, bochas y pelota a 600 reales hacían un total de 2.400.

⁶⁰ Como máximo existían en ese momento 300 coches, los que a 1.200 reales de imposición podían producir 360.000.

⁶¹ En 1797 había 11.200 criados, si se aplica el descuento del 13 por 100 quedarían 9.720. Imponiéndolo a sus dueños 60 reales al año por cada uno daría un total de 583.200.

⁶² Existían 102 casas de comer, a 400 reales cada una producirían 40.800.

⁶³ En 1797 existían 222 posadas y en proporción en el momento existirían 190, incluidas las fondas. A 1.000 reales producirían 190.000.

⁶⁴ Las 385 fuentes particulares existentes a 25 reales mensuales importarían 115.500.

⁶⁵ Había en Madrid muchas casas particulares de huéspedes entre las que se podría repartir hasta 401.500 reales.

⁶⁶ Incluyendo una disminución de 6 por 100 por fallidos y los gastos de administración y recaudación.

⁶⁷ Los 77 billares, a razón de 500 reales anuales: 38.500.

⁶⁸ Cuatro juegos de bolos, bochas y pelota a 300 reales: 1.200.

⁶⁹ 102 casas de comer a 300 reales: 30.600.

⁷⁰ 190 posadas y fondas a 600 reales: 114.000.

⁷¹ Un «cuartillo» de real por cada forastero que estuviese en las casas particulares que reciben gentes de posada, o en las casas amuebladas que se arriendan —arbitrio que además serviría para tener un registro exacto de todos los forasteros que estuviesen en Madrid y de las mudanzas de habitación—, suponiendo una cantidad de 2.200, serían al día 550 reales y al año 200.750.

⁷² El arbitrio de tabernas a 2 reales diarios por cortina: 370.000.

⁷³ Se rebajaba por recaudación y administración un 5 por 100, esto es 37.752 reales.

dios para aumentar sus valores sin hipotecar la libertad de industria⁷⁴ y castigar de forma más eficaz el fraude⁷⁵.

Por lo que se refiere a esta nueva tarifa —la tarifa número 3 en la Memoria presentada—, obedecía a una nueva equilibración de las imposiciones en los distintos géneros. Efectivamente al decretar las Cortes el 3 de noviembre de 1820 la supresión de los derechos nacionales y la continuación de los de puertas municipales, se produjo una desproporción en la imposición, sólo corregida —como ya se explicó— en lo referente al vino y aguardiente. Ciertamente era ridículo que la libra de ternera pagara sólo algo más de 3 maravedís, mientras que la de vaca —carne de peor calidad— 14; que la arroba de pescado extranjero 2 maravedís y el escabeche nacional 6 reales y 2 maravedís, etc. De forma que el ayuntamiento proponía bajar los derechos de algunos artículos de la tarifa vigente y añadir algunos que no pagaban nada, a fin de obtener lo necesario para el gasto municipal.

Los criterios que regían en la nueva tarifa propuesta eran los siguientes: cargar lo menos posible los géneros de primera necesidad; aumentar los derechos de los géneros de lujo; que los derechos sean lo suficientemente moderados como para no incitar al contrabando. Según lo propuesto, se preveía una disminución de dere-

⁷⁴ Esto se decía porque numerosas personas habían abierto puestos de ventas de caldo y carnes en todos los contornos de Madrid, llegando a un número superior a 200. Las carnes que se vendían en esos puestos además de no pagar derechos eran por lo general de mala calidad, de forma que se ofrecían a precios sumamente bajos. Luego se introducían para el consumo en porciones pequeñas, que burlaban la vigilancia del resguardo. Con los puestos de bebida ocurría igual. El ayuntamiento proponía para terminar con el fraude prohibir matar o vender carnes de cualquier especie en las afueras de Madrid, siempre que no constase que habían sido muertas en los mataderos públicos, sujetándose a las leyes de policía y sanidad que regían sobre la materia, y pagando en dichos mataderos los derechos que pagaban las demás. También se prohibiría en las afueras de Madrid la venta de vinos y licores, excepto en los puestos cuyos dueños obtuviesen la correspondiente licencia, pagando en este caso a la administración de derechos municipales la contribución correspondiente.

⁷⁵ El intento de defraudar las rentas era general y sólo podía contenerlo los riesgos que trajesen consigo ese conato. Varias eran las penas establecidas contra los defraudadores, y varios también los premios a los aprehensores; pero casi nunca se producía el efecto deseado. Con cada aprehensión se formaba un pleito interminable en donde las costas solían subir a mucho más que el efecto comisado, con graves daños para los defraudadores; pero también a los aprehensores, por la tardanza en recibir la parte que les tocaba. El ayuntamiento pensaba que esto se podía remediar si la pena de los defraudadores que introdujeran o intentasen introducir clandestinamente o manifiestamente el contrabando fuera la pérdida de los géneros, siempre que la aprehensión se verificase en el acto de hacerse las introducciones fraudulentas. Si los supuestos defraudadores no se allanaban a ésto, se les citará a juicio de conciliación entre ellos y el agente de los derechos municipales. Si en el juicio de conciliación no se conviniesen, aquellos podrán acudir ante un juez de primera instancia, quién fallará sobre la legitimidad de la aprehensión. En este caso, pagaría las costas del pleito. Si se le absolviese pagaría —en especie o dinero— sólo los derechos del género que habría estado depositado en una de las administraciones de las puertas. Las costas serán entonces de cuenta del fondo del resguardo. Si los efectos, bien por allanamiento del aprehendido, bien por sentencia del juez se vendiesen, con su importe se pagarían primero los derechos municipales, y el resto se entregaría al resguardo para distribuirlo entre los aprehensores según el reglamento existente.

chos de 1.990.783 reales⁷⁶. Este déficit y lo que faltaba para completar el presupuesto se cubriría con los nuevos artículos añadidos y el aumento de derechos en los géneros de lujo. En cuanto a los géneros de vestir, la municipalidad no se atrevía a imponer derecho alguno para no perjudicar las ventas de los comerciantes en otras provincias, ni la libertad que se entendía como «alma del comercio»⁷⁷.

c) *Contribuciones indirectas*

Este sistema descansaría en los derechos de puertas, según una nueva tarifa —la número 4 en la Memoria—, produciría según las estimaciones municipales un producto líquido de 21.000.000. Continuarían los arbitrios señalados en el sistema anterior, que estaban graduados en 717.298. Por otro lado, aunque no se impusieran derechos de introducción a los géneros de vestir, por las razones expuestas, podría hacerse un ajuste con los comerciantes que aportaría 1.400.000 reales a las arcas municipales⁷⁸. Es decir, que en total se recaudarían 23.117.298. Para conseguir lo que faltan de los ingresos, se pensaba en la oportunidad de empezar a establecer los elementos de la contribución directa. Esto por dos motivos. Primero porque aumentar los derechos de puertas mediante la subida de los aranceles, ofrecería el grave inconveniente del fraude⁷⁹. Después porque sería muy útil empezar el establecimiento de la contribución directa por cuotas muy pequeñas; el pueblo se iría acostumbrando poco a poco a ellas y serviría como experiencia para un sistema futuro de contribución. Así en este caso, se impondría la renta de las casas, bajo las bases que se sentaron en el primer sistema, a 2.5 por 100, lo que produciría 600.000 reales. Y las patentes, por unas cuotas que fuesen la cuarta parte de las señaladas en aquel sistema, lo que daría 1.400.000 reales; es decir un total de 2.000.000.

Las contribuciones directas aparecen sólo como complemento de las indirectas y podrían eliminarse de no ser necesarias.

d) *Informe del ayuntamiento*

Una vez expuestas las distintas posibilidades de arreglo para cubrir los gastos

⁷⁶ En 660.000 arrobas de vino a 1 real y 23 maravedís: 1.106.470; en 10.500.000 libras de carne de vaca y carnero a 2 maravedís: 617.647; en 800.000 libras de cacao Guayaquil a 1/4 de real: 200.000; en 50.000 arrobas de aguardiente y licores a 1 real y 1/3 de maravedí: 66.666.

⁷⁷ Para gravarlos habría que formar depósitos de ellos de donde se pudieran sacar fuera de la corte sin pagar derechos. Como los géneros que se pedían de las provincias o las compras que los comerciantes de las mismas hacían en Madrid eran surtidos sacados de diversos fardos y examinados —generalmente— pieza a pieza, no podrían hacerse estas operaciones comodamente en ningún depósito.

⁷⁸ Considerando que los 135.629 con que contaba la corte, sin incluir la guarnición, gastarían unos 68 millones de reales cada año en géneros de vestir, aplicando un 3 por 100 de contribución daría más de 2 millones. Pero como se estimaba muy perjudicial al comercio la exacción en las puertas, la municipalidad veía preferible una ajuste con el comercio.

⁷⁹ Se podría decir que existe un límite señalado en la fuerza de las cosas, superado el cual el aumento nominal del impuesto disminuye los valores. Sucedió con el café, que al subir los derechos de introducción de cada libra a 4 reales y medio, se adeudaba sólo 6 u 8.000 al año, en lugar de 150.000 que aproximadamente se consumían; y así otros artículos.

municipales y de cupo nacional, el ayuntamiento pasaba a analizarlas, y propuso la tercera —contribuciones indirectas— como la más ventajosa.

En cuanto al cupo nacional, el primer sistema, la municipalidad observaba las dificultades existentes para cobrar las rentas de las casas⁸⁰ y la contribución de patentes⁸¹. En cuanto al presupuesto municipal, los obstáculos aumentaban hasta un punto que el ayuntamiento juzgaba imposible de vencer⁸². Por otro lado la experiencia histórica en la imposición directa decía todo lo demás: fracaso⁸³. Y así parecía ser también en algún caso extranjero⁸⁴.

De forma que la municipalidad era partidaria de los derechos de puertas para esta capital⁸⁵, ya que pensaba que éstos no dificultaban tanto la circulación de los frutos⁸⁶, ni a los proveedores⁸⁷, ni a las fábricas establecidas en Madrid⁸⁸. Tampoco

⁸⁰ Esa contribución estaba retrasada 3 años, pues todavía no se había podido acabar de cobrar lo correspondiente a 1818. Era comprensible que al pasar del 4 por 100 al 10 por 100 las dificultades se disparasen.

⁸¹ Fundamentalmente porque habría que hacer una separación de clases en cada profesión. Sin esto se verían comerciantes y artistas que ganan quince o veinte veces más que otros pagar el mismo impuesto. Aún hecha la clasificación las dificultades serán muchas si las cuotas son grandes.

⁸² No había ninguna contribución más general que el 30 por 100 sobre el alquiler de las casas, se pensaba, pero su realización se presentaba preñada de dificultades. Una gran parte de los 35.799 contribuyentes que existían vivían al día, por lo que la mínima cantidad que se les pidiera causaría una grave imposibilidad. Además, suponiendo que el cobro se realizase cada tres meses, la recaudación de 143.196 pagos exigirían un esfuerzo mayúsculo donde sería preciso recurrir con frecuencia al embargo de bienes y a la venta de éstos; operaciones que irritarían a los ciudadanos y que difícilmente llenarían las arcas.

⁸³ Cuando se intentó imponer a todo el Estado la única contribución a Madrid le correspondió de los 176.285.305 reales un total de 17.532.498. Los que entonces trabajaban en el establecimiento de la única contribución comprendieron la imposibilidad de obtener estas sumas por contribución directa, de modo que dejaron el estanco del aguardiente, 2.033.293, y el derecho del vino en las puertas, 6.320.166. El total conseguido por estos era de 8.353.459, más de la mitad de lo que tenía que imponerse. En el repartimiento de los 300 millones que se impusieron a toda la Nación, el cupo que tocó a Madrid ofreció inmensas dificultades en su cobranza, tales que tuvieron que sustituirse algunos arbitrios en las puertas por su equivalente, ejemplo que se imitó en otras ciudades grandes del Estado. En el año 1816 se impusieron para la expedición de ultramar 100 reales a cada tienda. Los productos del citado año y del siguiente fueron de 441.734, después de largos trabajos, reclamaciones sin fin, etc.

⁸⁴ París y las demás ciudades de Francia, según la Memoria, después de haber dejado libres las puertas tuvieron que volver a ellas para poder atender a sus gastos. En aquella capital las rentas municipales ascendían a 42 millones de francos, 32 de los cuales procedían de sus puertas, más de 7 de impuestos sobre juegos y el resto de diversos arbitrios y propios.

⁸⁵ Lo que a Madrid era útil, no tenía porque serlo a otros pueblos. Había algunas ciudades de corta población y cortos consumos cuyo perímetro era casi tan grande como el de Madrid. Por consiguiente para realizar la exacción de los derechos de puertas con exactitud se tendría que emplear un tanto por ciento muy elevado de la recaudación.

⁸⁶ Según la Memoria, Madrid nada producía, todo lo que se consumía en el venía de fuera por lo que los derechos de puertas eran un valor añadido a los géneros que no perjudicaba en nada al comercio ni a la circulación. A pesar de ello el ayuntamiento proponía que los géneros valiosos de poco peso y volumen tuviesen derechos cortos y compensados por ajustes moderados con los comerciantes para los consumos de la ciudad, con el fin de dejar libre el tráfico, es decir por si convenía volver a sacar de la corte esos productos. Incluso los de comer, en el caso rarísimo de que no se vendiesen se permitía su extracción y se devolvían los derechos.

pensaba la municipalidad que los derechos de puertas perjudicasen a las personas con menos capacidad económica, ni a los artesanos⁹⁰.

El pago del derecho de consumo aparecía como algo encubierto, lo que producía cierta insensibilidad frente al impuesto. Era como un espejismo al permutar un objeto por una cantidad de dinero. Pero —se podría objetar— al fin y al cabo la carga impositiva estaba ahí, y el problema radical no estaba —como no está tampoco en nuestros días— en que uno sea más o menos consciente del impuesto que paga, sino en la justicia de aquello que paga.

Otro aspecto era el coste de la recaudación. En el tercer sistema, de contribuciones indirectas, se pensaba que no pasaría de un 5,5 por 100. Cuota que, según los cálculos de la municipalidad, no sería mayor que la que ocasionaría cualquier contribución directa; aunque las justificaciones de este pensamiento no sean del todo muy claras. Por otro lado de esta forma se evitaban los infinitos gastos que las contribuciones directas traían consigo para apremiar a los morosos⁹¹.

Los derechos de puertas no hacían distinción de personas; todos tendrían que contribuir, de un modo indirecto, sin ver la mano del exactor inmediatamente. «¡Ventaja inmensa que nunca se apreciará tanto como vale!»

Por otro lado el ayuntamiento pensaba que la parte numérica de los impuestos debía combinarse con la moral y filosófica para que los resultados fuesen favorables. Aquí la máxima: todo impuesto nuevo es malo y todo impuesto conocido es bueno; intentaba ahondar en la idea de que el hombre es animal de costumbre y se acostumbraba a todo. Después de tantos años pagando derechos de puertas, sustituirlos por contribuciones directas, aunque tengan el mismo valor y sean más racionales, sería muy conflictivo. Se miraría al ayuntamiento como a un destructor y causante de la ruina, y no como un administrador paternal.

A esto, la memoria añadía otros inconvenientes de las contribuciones directas.

⁸⁷ Algunos pensaban que los derechos de puertas eran negativos para los pueblos que abastecían a Madrid, pero esto nada influía en ellos ya que todo era pagado por los consumidores. El vendedor exigía de su comprador el precio del fruto en el lugar de origen, más el transporte, más los derechos de puertas, más el beneficio que se deba obtener.

⁸⁸ Por lo general en Madrid sólo podían sostenerse las industrias de artículos de moda y lujo. Aunque las materias primas estuvieran gravadas con el 2 ó 3 por 100, en nada influiría esto en el precio final de los artículos.

⁸⁹ Decía la Memoria que el pobre compraba con su jornal, cuando los víveres estaban más caros, los jornales eran proporcionalmente más elevados. Como los ricos eran los que pagaban estos jornales, eran ellos en última instancia los que pagaban el derecho de consumo. Y esto sobre todo porque los géneros de primera necesidad no pagaban casi nada. De esta forma creía también salvada la municipalidad la situación del pobre sin trabajo. Ahora bien, debajo de esta argumentación se encuentra la negación al pobre —llámese así para simplificar— de una mejora en su nivel de vida, de un progreso, de capacidad de ahorrar. Y si esto era así para el jornalero, también para la clase media que vería diezgadas sus posibilidades por la carga fiscal.

⁹⁰ Ya que estos consumiendo menos, pagarían menos impuestos. Con una contribución directa, sin embargo, la carga impositiva sería la misma y no tendría en su mano ninguna fórmula para disminuirla.

⁹¹ El ayuntamiento calculaba unos 300 soldados ocupados permanentemente en apremiar a los morosos.

De ahí que se proponga la tarifa número 4, es decir el sistema número 3, para conseguir los ingresos municipales. Si se compara ésta con la que estaba vigente hasta el momento, se observa una baja sobre todo en los géneros de mayor consumo —vino, aguardientes, carnes, los llamados artículos coloniales, etc.—; y eran pocos los artículos aumentados y éstos de los de mayor lujo. En general se podría decir que la carga fiscal que soportaban las entradas disminuía en un tercio, cantidad que el ayuntamiento pensaba recuperar por el menor fraude, dada la baja de la imposición, y por una administración más cuidadosa.

Por todo lo dicho en la Memoria el ayuntamiento proponía a las Cortes para su aprobación los siguientes artículos:

1. Que el presupuesto de gastos del ayuntamiento quedase en 18.490.232 reales, incluido un millón destinado al fondo de amortización de la deuda.

2. Que se eximiese al municipio del pago de los réditos de la «deuda nacional», es decir de los 2.688.576.

3. Que se procediese a la liquidación de lo que la Hacienda nacional estaba debiendo a la villa.

4. Que se autorizase la venta de las fincas que conviniesen para aumentar con ello los medios de amortización de la deuda de villa.

- 5, 6 y 7. Que se adoptase el tercer sistema propuesto para los ingresos de villa.

8. Que se nombrase una Junta de beneficencia.

9. Que se aprobasen una serie de medidas contra el fraude propuestas en la Memoria.

4. LA APROBACION DEL PRESUPUESTO

El cuatro de julio se recibió en el ayuntamiento una orden de las Cortes, de fecha 29 de junio⁹², sobre la Memoria del presupuesto: se aprobaba el presupuesto anual de 15.801.656 reales.

Para cubrir esta cantidad y lo correspondiente por la contribución sobre consumos —esto es los 8.181.167 reales que por Decreto de 29 de junio se asignaron a Madrid del repartimiento de 100 millones por contribución de consumos entre las provincias de la Monarquía⁹³— se aprobaban los derechos de puertas de la referida tarifa número 4, excepto lo dispuesto sobre el tabaco.

Por otro lado, el capital de los 100.473.571 reales impuestos sobre las sisas de Madrid a beneficio de la Nación pasaban al crédito público con los intereses que devengaban, desde el 1 de julio de 1821 en adelante. Los intereses de este capital devengados hasta último de junio de ese año serían de cargo de la villa de Madrid. También se procedería a la liquidación general entre la Hacienda nacional y el ayuntamiento de la villa, reconociendo el crédito público el alcance que resultase contra aquella, y entregando al ayuntamiento acreedor las correspondientes certificaciones. Con ellas pagaría la municipalidad los atrasos por réditos de capitales.

⁹² *Colección de los decretos y ordenes generales*, tomo VII, 243-245.

⁹³ *Colección...*, tomo VII, 272-274.

El ayuntamiento presentaría otro presupuesto nuevo a la diputación provincial —el del tercer año económico— para que con el informe de ésta se remitiera a las Cortes en los dos primeros meses de la legislatura de 1822.

Se autorizaba al ayuntamiento para enajenar las fincas que posee. También se le permitía convertir en papel negociable los 106.308.588 reales de efectos de villa que quedaban a su cargo, a fin de facilitar la enajenación y amortización. De todo esto, como estaba indicado, se enviaría cuenta a la diputación.

Por último se indicaba a la municipalidad que invitase al gobierno para que nombrase la junta para los establecimientos de beneficencia⁹⁴.

Se podría decir que esta Orden de las Cortes era todo un triunfo de la municipalidad, prácticamente se habían aprobado todas sus propuestas y, quizás lo más importante, el eterno problema de la deuda parecía tener al fin una clara solución.

5. EL REGLAMENTO DE DERECHOS MUNICIPALES DE 1821

Tras casi cinco meses de trabajo⁹⁵, el 10 de agosto de 1821 se leyó y aprobó el Reglamento de gobierno interior del ayuntamiento y se acordó la impresión de 500 ejemplares⁹⁶.

Con él se creaban diez comisiones permanentes para facilitar el despacho de los negocios municipales⁹⁷. A ellas competían preparar los expedientes para su discusión y aprobación en el pleno⁹⁸.

⁹⁴ Se envió el 9 de julio esta resolución a Contaduría y Junta de Puertas para su cumplimiento.

⁹⁵ El 26 de marzo de 1821 se nombró una comisión para formar un reglamento de gobierno interior para el ayuntamiento. El 15 de junio dicha comisión presenta la minuta y se acuerda imprimir ejemplares del proyecto del reglamento para su estudio entre los individuos de la municipalidad. En distintas sesiones se fue discutiendo el articulado.

⁹⁶ LA 253, 10.VIII.1821. El Reglamento, de fecha 10 de agosto de 1821, se componía de diez capítulos (AVM-S 6-143-32). El capítulo primero trataba de las sesiones del ayuntamiento. En él se disponía donde se celebrarían las sesiones del ayuntamiento; la concurrencia que se requería; la residencia de sus componentes; el número de sesiones semanales; su duración; la hora de comienzo; su no publicidad; la lectura de actas; el libro de actas; las actas reservadas, etc. El capítulo segundo versaba sobre el presidente; quién era —el Jefe político superior de la Provincia—; sus competencias, etc. El tercero del secretario y sus funciones. El cuarto del despacho de los negocios; su clasificación y orden de temas; nota que exprese el orden de cada sesión, etc. El quinto de las comisiones: objeto de ellas; cuales son y función de cada una; comisiones para negocios determinados; el informe o dictamen, etc. El sexto de las proposiciones y de las indicaciones. El séptimo de las discusiones. El octavo de las votaciones, donde se especifican los tres métodos existentes. El noveno de los acuerdos del ayuntamiento, y el modo de comunicarlos. Aquí se habla de la ratificación de acuerdos y del modo de modificar este reglamento. Por último en el capítulo décimo se incluían disposiciones generales.

⁹⁷ Estas comisiones eran las de policía de salubridad; de policía de comodidad; de hacienda municipal; de depositaría municipal; de educación y beneficencia; de obras públicas; de fomento industrial; de reemplazo del ejército y asuntos de milicia nacional local; de espectáculos públicos; y de gobierno interior del ayuntamiento (artículo 47). El 18 de agosto se establecieron. En la de hacienda municipal estaban el alcalde primero, Mollinedo (Muguiro en su ausencia), Saenz, Villamil, Sagarzurieta.

⁹⁸ Artículo 46.

La comisión de hacienda municipal se encargaba de todos los asuntos relativos a la administración de los caudales comunes, al examen de las cuentas y al repartimiento y recaudación de las contribuciones impuestas⁹⁹. Elaboró un «Reglamento para la dirección, administración, recaudación e intervención de los derechos municipales y cupo de contribución de consumos»¹⁰⁰, que fue aprobado por el ayuntamiento con fecha 14 de diciembre de 1821 constaba de 122 artículos distribuidos en siete capítulos¹⁰¹.

Este reglamento no organizaba toda la hacienda municipal —como puede desprenderse de su título¹⁰²—, pero sí su grueso. De la globalidad de los ingresos faltaban los propios y arbitrios por un lado, y por otro los ingresos de alumbrado. Pero como ya es conocido éstos no suponían gran cosa.

¿Cómo organiza este reglamento esta importante parcela de la hacienda? Existía —como ya ocurría— una diferencia nítida entre la estructura política y la administrativa. La primera estaba representada por la Comisión de hacienda; la segunda por una serie de oficinas y empleados en cuya cúspide se encontraba el administrador principal.

Entre el administrador y la Comisión existía una comunicación abierta que sustentaba la hacienda del municipio¹⁰³. Cuanto tenía que comunicar la Comisión a todos los empleados, lo hacía por medio del secretario y a través del administrador principal, y viceversa. Sólo en los casos de queja contra el administrador, o de inacción de éste, podían presentarse directamente a la Comisión.

a) *La comisión de hacienda municipal*

La Comisión de hacienda municipal tenía a su cargo, con arreglo al artículo

⁹⁹ Artículo 50. Junto a ella y en clara dependencia aparecía la de depositaria, que era responsable de la clasificación de los pagos y la ejecución de ellos; de velar sobre las operaciones de la depositaria; de disponer e inspeccionar la formación de las cuentas que deban rendirse; y por último cuanto sea relativo a la distribución de los caudales comunes; artículo 51.

¹⁰⁰ El 5 de octubre lo presentó a la municipalidad y esta acordó sacar copias para su estudio (LA 253, 5.X.1821). En sucesivas sesiones se discute el articulado propuesto (LA 253, 26.X; 9.XI; 23.XI; 27.XI, etc.) El 30 de noviembre terminó la discusión del reglamento. El 14 de diciembre se aprobó el reglamento y se mandó imprimir 500 ejemplares (LA 253, de esa fecha).

¹⁰¹ En el impreso (AVM-S 2-310-3) aparecen numerados sólo seis capítulos, ello se debe a que el capítulo tercero aparece repetido y por lo tanto en realidad son siete los que lo forman. El capítulo primero trataba de disposiciones generales (arts. 1-9). El segundo de la administración principal (arts. 10-20); de la contaduría principal (arts. 21-23); del agente (arts. 24-26); y del portero (a. 27). El tercero de la administración interior (arts. 28-29); del administrador (art. 30); del interventor (arts. 31-32); del de positario (arts. 33-36); de los vistas (arts. 37-41); del fiel romana (arts. 42-44); de los ordenanzas (arts. 45-49); del alcaide (arts. 50-57); y de los mozos (arts. 58-59). El cuarto —tercero en el impreso— de los administradores de puertas (arts. 60-81). El quinto —cuarto en el impreso— de casas rastro y matadero (arts. 82-88). El sexto —quinto en el impreso— de la visita (arts. 89-105). Y el séptimo —sexto en el impreso— del cuerpo de celadores de los derechos municipales (arts. 106-122).

¹⁰² Obsérvese que los derechos de puertas, antes llamados sisas, se denominan ahora derechos municipales, al dejar la Hacienda de recaudar los suyos.

¹⁰³ Artículos 5 y 11.

50¹⁰⁴ del reglamento interior del ayuntamiento, y bajo la autoridad superior de éste¹⁰⁵, la dirección de las rentas que correspondían a la villa por adeudos de derechos en las puertas de la misma y cupo de consumo¹⁰⁶. El secretario del ayuntamiento lo era también de esta Comisión¹⁰⁷.

Al margen de las sesiones extraordinarias, la Comisión se reunía al menos una vez a la semana para tratar de los ramos relativos a estas rentas. En estas reuniones el administrador principal informaba de las ocurrencias sucedidas y de cuanto fuera útil al aumento de los productos y su buena administración¹⁰⁸.

Para cumplir sus cometidos la Comisión tenía las siguientes facultades y obligaciones¹⁰⁹:

1. Velar sobre todas las oficinas y empleados de las rentas municipales sin restricción, ni limitación alguna.

2. Nombrar mensual o semanalmente uno de sus individuos con el encargo de celar e inspeccionar las operaciones de las oficinas de cada puerta.

3. Resolver por sí todas las dudas u ocurrencias relativas a la conservación del sistema establecido y demás sucesos comunes.

4. Determinar asimismo en caso de urgencia cualquier cosa cuya decisión corresponda al ayuntamiento, dando cuenta en el primero que se celebre del hecho y de los fundamentos de la determinación.

5. Proponer y consultar al ayuntamiento en todos los casos arduos y extraordinarios lo que estime conveniente para la resolución oportuna.

6. Formar presupuesto de cada año económico, y extender la memoria correspondiente de los medios de cubrirlo, cuyos trabajos presentará al ayuntamiento para la resolución que estime.

7. Poner el páguese en todas las nóminas de sueldos que devenguen los empleados en la recaudación.

8. Llevar un registro de los méritos y servicios de todos los empleados para los efectos convenientes.

9. Presentar su informe con arreglo al artículo 58¹¹⁰ del Reglamento interior,

¹⁰⁴ El art. 50 dice así: «Pertenecen a la comisión de Hacienda municipal todos los asuntos relativos no sólo a proponer el repartimiento y recaudación de las contribuciones impuestas al pueblo, llevando a efecto su cobranza; sino también cuanto se refiera a la administración de los caudales comunes; y además el examen de las cuentas después de formadas.»

¹⁰⁵ Ya se explicó arriba que las comisiones son unidades técnicas que carecen de poder, que reside en la municipalidad. De ahí que funcionen bajo la autoridad superior de ésta.

¹⁰⁶ Artículo 1.

¹⁰⁷ Artículo 2. En el artículo 64 del Reglamento interior se dice: «A las comisiones de Hacienda municipal y de Gobierno interior asistirá siempre el secretario en calidad de tal. A cada una de las demás...»

¹⁰⁸ Artículo 3. En los casos de entidad las propuestas las hacía por escrito.

¹⁰⁹ Artículo 4.

¹¹⁰ El art. 8 del Reglamento: «Siempre que haya de proveerse un empleo, la comisión del ramo a que pertenezca deberá presentar un informe o calificación de los sujetos que estime más aptos para obtenerlo, por las razones que manifestará.»

siempre que ocurra la vacante de algún empleo, en el concepto de que no podrá proveer por sí ninguno por ínfima que sea su dotación.

10. Conceder un mes de licencia a los empleados, que no podrán ausentarse por más tiempo sin obtenerla del ayuntamiento.

La Comisión examinaba todas las cuentas y estados que presentase la contaduría principal por medio del administrador, y las pasaba a la contaduría de cuentas del ayuntamiento para su liquidación¹¹¹.

b) *La administracion de derechos municipales*

Por otro lado estaba la administración de puertas, todo un entramado de oficinas y empleos dirigidos a recaudar los derechos municipales, donde se intentaba que no quedase ningún cabo suelto.

Para evitar fraude estaba prohibido a los traficantes o comerciantes de géneros incluidos en la tarifa ser empleados en la administración y recaudación de los derechos municipales¹¹².

i) *La administracion principal*

El administrador principal tenía a su cargo la dirección inmediata de todas las oficinas y la inspección del cuerpo de celadores de derechos municipales y visita.

El administrador principal recibía los acuerdos de la Comisión de hacienda, para circularlos entre las dependencias, teniendo al efecto un libro registro de órdenes¹¹³. Por otro lado informaba a la Comisión de la marcha de la administración¹¹⁴.

Debía determinar, con arreglo a lo establecido por la Comisión, los pagos de nóminas y libramientos de gastos con la distinción de fondos a que competan; así como visar todas las cuentas, estados mensuales y cuantos documentos girados por la contaduría ocasionaran gastos; quedando responsable como el contador de los libramientos que se expedieran y no fueren con arreglo a lo acordado por la Comisión¹¹⁵.

Asimismo tenía que consultar y proponer a la Comisión de hacienda las variaciones que —según las épocas— conviniera hacer en algunos artículos del arancel¹¹⁶.

El administrador, en unión con el contador principal y el comandante del cuer-

¹¹¹ Artículo 6. La esencia de la Comisión hace que esta no llevara una relación de sus acuerdos, pues en sus reuniones tomaba una serie de resoluciones que o bien eran de trámite o bien elevaba al ayuntamiento para su aprobación. Por ello de la lectura de los libros de acuerdos del ayuntamiento no podemos deducir en que medida cumplía todas sus prerrogativas, aunque a lo largo de la exposición veremos que se puede concluir afirmativamente.

¹¹² Artículo 9.

¹¹³ Artículo 11. Esto está en relación con lo que dice el art. 5 del mismo reglamento. También le competía expedir las órdenes, informes y demás relativo a la ejecución del Reglamento u órdenes de la Comisión.

¹¹⁴ Artículo 17.

¹¹⁵ Artículo 12.

¹¹⁶ Artículo 13.

po de celadores, decidirían, en presencia del interesado a quien se acusase de fraude, si se había cometido o no realmente¹¹⁷.

Cuando lo considerara oportuno visitaría por sí o por el contador las administraciones de las puertas, para informarse de sus trabajos y tomar las medidas más oportunas para la mejor recaudación. Igualmente inspeccionaría los registros, regulaciones y adeudos que hicieran los vistas en la administración interior¹¹⁸.

Todos los meses presentaría a la Comisión las cuentas y estados para su examen. Oportunamente pasaría a su conocimiento todos los expedientes e informes que exigieran su resolución¹¹⁹.

Cuando resultase alguna vacante en las oficinas de su administración presentaría a la Comisión de hacienda una lista de los que debían optar; con el correspondiente informe de su aplicación, servicios y desempeño¹²⁰.

El administrador principal por sí o a propuesta de los respectivos jefes podría suspender en los casos urgentes a los empleados subalternos, dando cuenta por escrito a la Comisión en el preciso término de veinticuatro horas para que determinase lo que tuviese por conveniente¹²¹.

ii) *La contaduría principal*

Esta contaduría constaba de un contador —que era el jefe—, cuatro oficiales, dos escribientes primeros, dos segundos y dos aspirantes o meritorios¹²².

Eran obligaciones de la contaduría bajo la responsabilidad de su jefe¹²³:

1. formalizar todas las cuentas y estados que debían presentarse a la Comisión de hacienda;

2. llevar el libro maestro de cargo y data en que debería extenderse con separación la cuenta particular de cada puerta, así diaria como mensual, la de la administración interior, la reunión de éstas y el cargo particular de la depositaria principal de la villa;

3. liquidar diariamente las relaciones de los productos de las seis administraciones y formar sus resúmenes por especies y clases según los que resulten recaudados;

4. levantar los «mapones» necesarios para la formación del estado mensual estadísticamente;

5. anotar las cartas de pago y libramientos en los respectivos asientos;

6. formar las nóminas y liquidar las de las puertas, cuerpo de celadores y visita;

7. comprobar los libros de las seis administraciones;

8. liquidar el valor de las aprehensiones para conocimiento de la Comisión;

9. formar a cada empleado la liquidación de su haber;

¹¹⁷ Artículo 15.

¹¹⁸ Artículo 16.

¹¹⁹ Artículo 18.

¹²⁰ Artículo 19.

¹²¹ Artículo 20.

¹²² Artículo 21.

¹²³ Artículo 22.

10. desempeñar todo cuanto pertenezca a cuenta y razón.

El contador por medio del oficial mayor distribuía los trabajos de la contaduría y lo supervisaba ¹²⁴.

iii) *El agente*

El agente de la administración y contaduría principal tenía a su cargo la compra de material ¹²⁵, impresiones, asuntos contenciosos que ocurran en la recaudación de los derechos y aprehensiones, etcétera ¹²⁶.

Todos los meses rendía cuenta a la contaduría principal con documentos justificativos; para que después de liquidada por ésta se le hiciese el descargo correspondiente, obteniendo certificación de finiquito para su resguardo ¹²⁷.

iv) *El portero*

Existía un portero para el servicio de la administración y contaduría principal, a cuyo cargo estaba la limpieza y aseo de estas oficinas, y las provisiones de utensilios que necesitasen. De esos gastos rendirían cuenta mensualmente con los documentos justificativos.

Además estaba a su cargo cerrar las oficinas, en los horarios correspondientes. Asimismo tenía la custodia de papeles, libros y documentos; para evitar que nadie los tomara, leyera ni examinara. Obedecería las órdenes de la administración y contaduría respectivas al servicio ¹²⁸.

v) *La administración interior*

La administración interior se componía de un administrador, un interventor, un depositario, un escribiente, un vista primero y uno segundo, un fiel romana, un alcaide con un ayudante, un portero cedulaero y tres ordenanzas que no eran dependientes del cuerpo de celadores ¹²⁹.

A esta administración correspondía recaudar los derechos de todos los géneros de adeudo que se introducían en ella; asistir al recuento, valuación y repeso de ellos; arreglar los derechos que les pertenecían; recoger y despachar los registros; remitir diariamente a la contaduría principal una copia exacta de los asientos del libro de intervención, con lo demás que se expresaba en las obligaciones respectivas de cada empleado ¹³⁰.

vi) *El administrador*

El administrador procuraría que los asuntos de su oficina tuvieran la más pronta

¹²⁴ Artículo 23.

¹²⁵ Todas las compras o contratas debían tener la providencia del administrador intervenida por el contador. Artículo 25.

¹²⁶ Artículo 24.

¹²⁷ Artículo 26.

¹²⁸ Artículo 27.

¹²⁹ Artículo 28.

¹³⁰ Artículo 29.

expedición, para el mejor servicio del público. Son sus obligaciones¹³¹:

1. inspeccionar todas las valuaciones, recuentos y graduaciones que hagan los vistas y conocimiento de los pesos del fiel romana;
2. arreglar los derechos con el interventor, haciendo que en el libro de éste se extendieran todas las partidas adeudadas con expresión del sujeto, número o peso del género y el importe de sus derechos;
3. firmar los libros de la intervención y depositaría, y la relación que debía pasar aquella a la contaduría principal de los géneros adeudados diariamente.

vii) *El interventor*

Correspondía a éste¹³²:

1. intervenir todas las operaciones del administrador, vistas y fieles de romana, y llevar en los libros todos los asientos de los individuos que adeuden derechos, procurando que sean con limpieza, claridad y sin enmiendas;
2. liquidar en todas las hojas de registro los adeudos que detallasen los vistas, expidiendo la correspondiente papeleta de salida y expresando en cada una el número de bultos que se extrajeran y los sujetos a quienes correspondieran para la liquidación del cargo del alcaide;
3. confrontar diariamente su libro con el de la depositaría y verificar el arqueo del caudal recaudado para su debida comprobación, remitiendo el libro al fin de cada mes a la contaduría principal para su examen y liquidación¹³³.

viii) *El depositario*

Realizaba la recaudación de los derechos indicados en las hojas de registros y liquidados por la intervención. Para ello llevaba un libro donde anotaba las partidas recaudadas, en los mismos términos que el de la intervención; al fin de cada mes lo pasaba a la contaduría principal para su examen y comprobación¹³⁴.

El depositario pagaba los libramientos expedidos por la contaduría principal y las nóminas de los empleados en la recaudación, siempre que constase el «visto bueno» del administrador principal y el páguese de la Comisión. A fin de mes entregaba en la depositaría principal de la villa las cantidades sobrantes¹³⁵.

Era el responsable de los caudales que entraban en su poder, por ello tenía que prestar una fianza¹³⁶.

ix) *Los vistas*

Los vistas recontaban, reconocían, probaban y valuaban los géneros presentados

¹³¹ Artículo 30.

¹³² Artículo 31.

¹³³ Artículo 32.

¹³⁴ Artículo 33. Todos los días haría la correspondiente comprobación del libro con el de la intervención, aclarando cuantas dudas surgiesen. Artículo 35.

¹³⁵ Artículo 34.

¹³⁶ Ésta dependía de los ingresos que previsiblemente se recaudaran y del tiempo que esos caudales permanecieran en su poder. Artículo 36.

al despacho; de esta forma la administración interior no tenía duda para la recaudación¹³⁷.

En los casos equívocos y aprehensiones debían dar cuenta al administrador principal; mientras no se deliberase lo que correspondía hacer, se suspendía todo procedimiento¹³⁸.

En el libro de registro se expresaría por días el número de los bultos, peso del género y el sujeto a cuyo nombre se hallaba adeudado¹³⁹.

x) *El fiel romana*

El fiel romana se encargaba de pesar los géneros que lo necesitaban¹⁴⁰. Esta operación la realizaba diciendo en voz alta el de cada bulto, para que el administrador interior, el vista y el interesado pudieran oírlo. El vista que lo presenciaba apuntaba exactamente el romaneo¹⁴¹.

Si existía sospecha de que el romaneo estaba mal hecho, se verificaba nuevamente. Si resultaba ocultación maliciosa en la operación se daba parte al administrador principal, para que la Comisión de Hacienda tomase cartas en el asunto. Si el fiel romana reincidía en el fraude perdía su destino¹⁴².

xi) *Los ordenanzas*

Existían tres ordenanzas para presenciar el descargo de géneros en la administración interior, examinando y recontando los bultos con las hojas de registro. Se hacía cargo de la mercancía en su estancia en la administración¹⁴³. También escoltaban los géneros de salida¹⁴⁴.

Uno de los ordenanzas estaba de guardia día y noche; sin salir del recinto de la administración ni para comer. Vigilaba las puertas, que sólo se abrían en las horas de oficinas y cuando los registros de las puertas remitieran algún efecto. Si un individuo del cuerpo de celadores llevaba una aprehensión podía franquear la entrada pa-

¹³⁷ Artículo 37.

¹³⁸ Artículo 38.

¹³⁹ Artículo 40.

¹⁴⁰ En caso de enfermedad sería sustituido por el ayudante del alcaide, y viceversa. El ayudante será sustituido por uno de los mozos de más confianza que señalase el alcaide. Artículo 44.

¹⁴¹ Artículo 42.

¹⁴² Artículo 43.

¹⁴³ También cuidarán de que el patio estuviese ordenado, de que no se detenga nadie que no lleve objeto conocido, ni llegue a los fardos sin anuencia del administrador. Además observarían la conducta, porte y operaciones de los mozos para evitar todo abuso. Artículo 45.

¹⁴⁴ Acompañaban hasta fuera de las puertas los géneros que salían de esta corte y los carros y caballerías que los conducían; en terandose por las papeletas del número de cabos que salen, para que en las administraciones de entradas se hiciera la comprobación y en su presencia se pusiera «salíó», con la correspondiente firma. Las papeletas se presentaban en la administración interior para la competente toma de razón de salida, entregándolas al alcaide. Cuidaban con el mayor esmero que los conductores no se detuvieran dentro del pueblo, ni se descaminasen de la vía recta. No consentirían que al paso descargasen cosa alguna, ni admitirían propina o emolumento por este trabajo. De no cumplir estas prescripciones serían despedidos.

ra depositarla. En este caso se avisaba al alcaide para que se hiciera cargo de lo que se introducía¹⁴⁵.

xii) *El alcaide*

A su cargo estaba todo cuanto se introducía en la administración interior y el manejo de todos los cabos¹⁴⁶. Debía comprobar que las hojas estaban conformes con el número de fardos, bultos, cajones, etc. Esto se hacía en presencia del conductor, del dependiente que le hubiere acompañado y del ordenanza.

Si no existía novedad ponía en la hoja la expresión «entró» y su media firma¹⁴⁷. Si había alguna diferencia entre los bultos que expresaban las hojas de registro y los que resultaban al descargarlos, se daba parte por escrito al administrador interior¹⁴⁸.

Si durante el horario de cierre llegaban géneros, el alcaide conservaba las hojas de registro en su poder hasta el instante de abrirse la administración, en que les daba el curso debido; cuidando de que nadie —ni aun el dueño de los efectos— tuviera acceso a ellos sin conocimiento de la administración¹⁴⁹.

xiii) *Los mozos*

Los mozos no tenían sueldo, sino que cobraban por cada bulto conducido¹⁵⁰. Si abusaban en el cobro eran despedidos¹⁵¹.

Ningún mozo «de los de afuera de la administración interior» podía entrar a realizar el servicio por los perjuicios posibles. En caso de que los dueños quisieran valerse de ellos, éstos no podrían pasar de las rejas, hasta cuyo punto los conducían los de adentro, exigiendo por este trabajo la mitad de lo señalado¹⁵².

xiv) *Los administradores de puertas*

En cada puerta había una administración subalterna, compuesta por un administrador, un interventor, un depositario, un escribiente, tres aforadores y un mozo¹⁵³.

Las obligaciones de estas administraciones eran: el reconocimiento, recuento, prueba y peso de los géneros que adeudaban derechos; la intervención de éstos y

¹⁴⁵ Artículo 46.

¹⁴⁶ El reglamento utiliza aquí esta palabra con su significado aduanero, es decir semejante a fardo, aunque en sentido estricto algo más pequeño que éste.

¹⁴⁷ Artículo 51.

¹⁴⁸ Artículo 52.

¹⁴⁹ Artículo 55.

¹⁵⁰ Por cualquier bulto de peso hasta un quintal, un real de vellón; por el que excedía de un quintal y hasta dos quintales, dos reales; y así en proporción, sin perjuicio de las propinas.

¹⁵¹ Artículo 58.

¹⁵² Artículo 59.

¹⁵³ Excepto la de Toledo que —por tener más trabajo— estaba formada por un administrador, un interventor, un oficial de libros, dos escribientes, cuatro aforadores y un depositario con un ayudante propuesto por él y pagado de su sueldo. Artículo 60.

remisión a la administración interior de los que debía reconocer¹⁵⁴ —según detallaba el arancel—, como asimismo los que venían de tránsito¹⁵⁵.

Los administradores eran los jefes de las puertas, con sujeción inmediata al administrador principal. Cuidaban de que todos los empleados cumplieran sus obligaciones¹⁵⁶, atendía cualquier duda de los trágneros y velaba por el trato correcto que se debía a estos¹⁵⁷.

Presenciaba los aforos; recibía las papeletas que se expedían por la intervención; distribuía las tareas a los oficiales de libros y escribientes para el más pronto desempeño y expedición de los asuntos¹⁵⁸.

Estas oficinas y las puertas se abrían en todo tiempo al amanecer, en cuyo momento comenzaba el despacho. Éste continuaba durante todo el día sin interrupción y concluía al toque de oraciones, siendo la última operación la del recuento de caudales y comprobación de los libros de recaudación e intervención¹⁵⁹.

Todos los géneros se debían presentar en la administración de cada puerta a las horas del despacho; estaba absolutamente prohibida la entrada de ellos a otras horas y por otros parajes¹⁶⁰.

A fin de evitar el fraude que podía resultar de la mala graduación de los aforadores por acuerdo con los introductores¹⁶¹, los administradores de las puertas —en el

¹⁵⁴ Los géneros que según la tarifa debían presentarse en la administración interior, aquellos que sus dueños quieran que se reconozcan en ella y los que lleguen de tránsito para otros destinos, después de contados los cabos se encaminarían por los administradores a la interior. Irían acompañados de las hojas de registro correspondientes y del dependiente del cuerpo de celadores que sea demás confianza. A éste se le entregaría numerados, procurando expresar el número y clase de cabos con que se hubiesen presentado los introductores, anotando en un libro que expresamente debía llevar con este objeto, todas cuantas expidan con expresión del interesado, número y clase de bultos, para que se pueda comprobar la entrada de los géneros en la administración interior. Artículo 66.

¹⁵⁵ Artículo 61.

¹⁵⁶ En los casos de desobediencia o falta de asistencia y desempeño de los empleados que se hayasen a sus órdenes; de insultos al público; de aprehensiones hechas por el cuerpo de celadores, o de otro cualquier motivo que interrumpa el orden, debía dar parte inmediatamente al administrador principal para las providencias a que hubiese lugar. Artículo 78.

¹⁵⁷ En la puerta de cada administración se fijaría para conocimiento del público el estado o tarifa de los derechos municipales y cupo de contribución de consumos aprobado por las Cortes. De forma que a todos constase lo que se debían pagar por lo que introducían y nadie pudiese alegar ignorancia (art. 63).

¹⁵⁸ Artículo 76. El administrador de la Puerta de Toledo asistía un día a la semana, sin que le esperen los subalternos del rastro y matadero, a presenciar los romaneos de las carnes (art. 77).

¹⁵⁹ Artículo 62.

¹⁶⁰ Artículo 65. Cuando se encontraba género ocultado con malicia, o de otra clase que la declarada por el introductor en perjuicio de los derechos, se cobraría el triple de ellos y el recargo se distribuirá por partes iguales entre los individuos que hubieran descubierto el fraude u ocultación. En este caso y no excediendo el valor de 500 reales —según prevenía el art. 15— el administrador, el interventor y el teniente de la puerta decidirían. Si el dueño de lo aprehendido o el teniente del cuerpo de celadores no se convinieren, se practicaría lo señalado para estos casos en la Memoria (art. 67).

¹⁶¹ Los aforadores debían aforar precisamente lo justo y sólo a los administradores pertenecía hacer la gracia que a propuesta del administrador principal acordase la Comisión. Por todo aforo que

caso que lo juzguen oportuno— designarían quién debía hacer el aforo¹⁶².

Todos los asientos relativos a los adeudos se estampaban por la intervención en los libros que recibían de la contaduría principal para este objeto, bajo ningún pretexto se podía hacer en papeles sueltos¹⁶³. En los asientos se anotaba el número de la cédula, su fecha, la cantidad de los artículos despachados y los derechos exigidos¹⁶⁴. Las equivocaciones cometidas en los asientos se aclaraban por notas al fin de cada día y no con enmiendas en los guarismos¹⁶⁵.

El interventor realizaba diariamente una factura exacta de los géneros adeudados en el día, visada por el administrador y depositario. Igualmente dirigiría a la contaduría de la villa una nota de valores del día. Terminado el mes, los libros de intervención y depositaría pasaban a la contaduría principal para su liquidación y comprobación¹⁶⁶.

Para un mejor servicio, los administradores vivían en la inmediación de su puerta y en las casas que se proporcionaban al efecto. En las horas de comer cuidarían que siempre hubiera en la oficina dos jefes con dos aforadores, de forma que en ningún momento se retrasase el despacho, ni faltese la debida intervención¹⁶⁷.

Los depositarios de las puertas darían las fianzas necesarias a juicio del ayuntamiento y según lo que se previese recaudar, y el tiempo que debía subsistir en su poder¹⁶⁸.

xv) Casas rastro y matadero

En cada una de estas casas había un alcaide; en la del rastro dos fieles romanas; y uno en la del matadero¹⁶⁹.

El ganado vivo que venía para matarse entraba por la puerta de Toledo, por razones de salubridad¹⁷⁰. Era reconocido por los mayoresales destinados a este objeto, en presencia del administrador o de la persona que éste designase. Se extendía una

estuviese equivocado por los aforadores en mas de un diez por ciento se exigiría responsabilidad al aforador, suspendiendole el administrador principal y dando cuenta a la Comisión. Artículo 69.

¹⁶² Artículo 68. Además de ninguna forma, en estos empleos como en los demás en que deba mediar intervención, podían colocarse a los que tengan entre sí parentesco hasta en tercer grado de afinidad o consanguinidad. Artículo 64.

¹⁶³ Artículo 70.

¹⁶⁴ Para el más pronto despacho del público se excusaría las cédulas para los adeudos que no llegasen a medio real de vellón, pero se formarían sus asientos en el libro auxiliar de menudo que se debía llevar para este objeto. Excediendo de esta cantidad se expedía la correspondiente cédula, según se ha dicho, firmada por el interventor y el depositario con expresión del pago. Artículo 72.

¹⁶⁵ Artículo 71.

¹⁶⁶ Verificada esta operación se devolvían para continuar la cuenta en el mes siguiente, con la correspondiente certificación de finiquito. Artículo 75.

¹⁶⁷ Artículo 73.

¹⁶⁸ Artículo 80.

¹⁶⁹ Artículo 82.

¹⁷⁰ Ya que era la más cercana, artículo 83.

cédula numerada que expresaba la fecha, el nombre del introductor, el número de cabezas y clases de ganados, firmada por el interventor y por el oficial de libros, quienes tomarían razón de ella en el libro destinado a este objeto¹⁷¹.

Los alcaides de los mataderos eran los jefes y dependían directamente del administrador de la puerta de Toledo. Al llegar el ganado lo reconocían y encontrándolo conforme con las papeletas ponían en ellas «entró», con su firma; y las devolvía a la administración de la puerta, anotándolas en el libro que debía llevar el alcaide para este fin¹⁷².

Cuidarían del aseo y policía de las casas y serían responsables de los ganados que entrasen en ellas, encargándose también de vigilar el romaneo y no permitir entrar en las casas sino a la gente indispensable para el servicio¹⁷³.

Al final de la semana los fieles de romana formaban las correspondientes certificaciones del número de cabezas matadas, el peso en libras y el sujeto a cuyo nombre se despacharon las papeletas; liquidando los derechos a pagar. Una vez visadas por los alcaides se remitían a la administración de la puerta de Toledo para la recaudación de sus respectivos derechos¹⁷⁴.

Cuando los interesados realizaban el pago, que debía hacerse dentro de la semana, se les expedía la correspondiente papeleta de haber hecho el pago¹⁷⁵.

xvi) *La visita*

La visita estaba compuesta de un visitador jefe, un teniente montado, dos desmontados, cuatro dependientes montados, diez a pie y un escribano¹⁷⁶.

Su obligación era celar y vigilar sobre las operaciones de todos los empleados¹⁷⁷; evitar todo depósito, almacén, puesto y casa de venta de las afueras¹⁷⁸.

El visitador detallaba todo el servicio que debían hacer sus subalternos y cuidaría del cumplimiento de sus obligaciones¹⁷⁹.

La visita tenía facultad para reconocer a los introductores hasta cincuenta varas de los registros¹⁸⁰. Siempre con el debido respeto¹⁸¹.

¹⁷¹ Artículo 84.

¹⁷² Artículo 85.

¹⁷³ Artículo 86.

¹⁷⁴ Artículo 87.

¹⁷⁵ Artículo 88.

¹⁷⁶ Artículo 89.

¹⁷⁷ Tanto en la recaudación, intervención y cuerpo de celadores de los derechos municipales en las puertas, casas matadero y rastro, portillos y puntos avanzados.

¹⁷⁸ A no ser que constase que tenían hecha en la administración principal la obligación del pago de los derechos de consumos que se hayan graduado por razón de venta en los cuatro ramos de vino, vinagre, aguardiente y aceite; artículo 90.

¹⁷⁹ Artículo 100.

¹⁸⁰ Para ello podían exigir las cédulas con que hubiesen sido despachados los géneros introducidos, confrontarlas en caso de duda con los libros de la intervención y depositaría de la puerta respectiva para ver si coincidían con sus asientos. Así como examinar la asistencia y desempeño de los empleados tanto de las puertas como del cuerpo de celadores de derechos municipales.

¹⁸¹ Artículo 92.

Todas las noches la visita salía a rondar la cerca y parajes sospechosos de las afueras: unas veces unida, otras dividida en mitades; unas a caballo y otras a pie; a diferentes horas; por distintas puertas; deteniéndose donde lo creía necesario o andando. Sus exámenes debían realizarse de tal forma, que los defraudadores y los empleados y cuerpo de celadores de derechos municipales estuviesen en continua vigilancia. También realizaría de día el mismo cometido¹⁸².

El visitador llevaba un pliego para la firma de los dependientes celadores y cabos que rondaban, expresándose el día y hora en que se les había presentado la visita, y el número de individuos que la componían. Igualmente firmaba la visita en otro pliego que los cabos y dependientes del cuerpo de celadores tenían siempre dispuesto en los mismos términos que lo han hecho ellos¹⁸³. Los pliegos eran recogidos diariamente por uno de los individuos del cuerpo de celadores de los derechos municipales¹⁸⁴.

Los pliegos que llevaba la visita se entregaban al administrador principal para que cotejándolos con los recibidos se viera si el servicio se hacía bien por todos¹⁸⁵.

Los introductores que no llevaban papeleta y portasen géneros o efectos que adeudaban derechos serían detenidos. Se les conducía con las mercancías a la administración de la puerta por donde hubiesen entrado, para exigirles el doble de la cantidad debida. Ese monto se repartiría entre los que le habían detenido¹⁸⁶. Se examinaba la forma de entrada para castigar las omisiones o complicidad que pudiera existir¹⁸⁷.

Si en las papeletas del registro que llevaban los introductores resultaba diferencia notable en el género que introducían, los haría volver a la administración de la puerta que las haya expedido. El introductor debía pagar la diferencia, y el doble de toda la cantidad. El recargo se repartirá entre los aprehensores, quienes darían cuenta a su jefe respectivo y éste al administrador principal para que se tomen las debidas providencias contra los que hubieren hecho mal aforo¹⁸⁸.

Si las cédulas fueran defectuosas en cosa leve, sin malicia de los empleados de las puertas, ni de los introductores, sólo se corregía los defectos¹⁸⁹.

Si en los libros de intervención y depositaría no constase el asiento de la papeleta de algún introductor que la llevaba, se daría noticia puntual del suceso¹⁹⁰.

Siempre que el administrador principal lo estimase necesario el visitador se pre-

¹⁸² Artículo 93. Todas las mañanas antes de amanecer, se reunirán en el paraje que señale el visitador; desde el que pasarán unidos o divididos a visitar las puertas, portillos o parajes que señale aquel. Artículo 94.

¹⁸³ Artículo 101.

¹⁸⁴ Artículo 102.

¹⁸⁵ Artículo 103.

¹⁸⁶ En caso de que los introductores hubiesen entrado por algún portillo u otro paraje, se les exigirá cuatro veces el tanto de derechos; que se distribuirá del mismo modo.

¹⁸⁷ Artículo 95.

¹⁸⁸ Artículo 96.

¹⁸⁹ Artículo 97.

¹⁹⁰ Artículo 98.

sentaría en su oficina; además lo haría cada dos días para despachar con él: recibiría las instrucciones que debía darle para el mejor servicio; daría cuenta de todas las observaciones sobre el trabajo de los empleados y conducta de los aforadores¹⁹¹.

xvii) *El cuerpo de celadores de los derechos municipales*

El cuerpo de celadores de los derechos municipales y cupo de contribución de consumos de Madrid estaba compuesto de un comandante, un teniente segundo de éste, montado, con ocho dependientes montados, dos cabos montados, nueve tenientes, seis cabos o subtenientes, ciento cincuenta y ocho celadores, seis supernumerarios, dos escribanos y un suplente¹⁹².

El jefe inmediato del cuerpo de celadores de derechos municipales era el comandante, quien dependía directamente del administrador principal, con quien despacharía semanalmente¹⁹³.

Todos los individuos del cuerpo de celadores debían tener conocimiento exacto de las afueras y rondas de esta corte, instruyéndose de los parajes por donde podía hacerse el fraude y de los medios y ardides de que los defraudadores se valían para cometerlos¹⁹⁴.

El teniente de cada puerta al entrar de servicio haría saber al administrador de ella, que estaba allí con todo su piquete¹⁹⁵. Las obligaciones de los piquetes eran: celar que no se introdujeran géneros que adeuden derechos sin verificar el pago de ellos; que no hubiera reuniones, alborotos ni disensiones en el distrito, y acompañar a la administración interior los efectos que debían ir a ella; para esto había en la misma puerta los dependientes celadores necesarios que harían los registros con agujas de cala y cata; otros inmediatos a la administración para dirigir a ellas los introductores, velando no pasase nada sin ser reconocido é intervenido¹⁹⁶.

Si los piquetes de las puertas hacían alguna aprehensión de géneros ocultos maliciosamente, se repartían el recargo de los derechos entre el piquete y el teniente, en presencia del administrador¹⁹⁷.

Los individuos que se estuvieran de guardia no podían acostarse y tenían obligación de rondar su distrito a distintas horas; visitando con frecuencia los parajes sospechosos de sus términos¹⁹⁸.

El comandante del cuerpo de celadores de derechos municipales disponía las rondas de día y de noche, de modo que los defraudadores no pudiesen perjudicar a los derechos municipales, ni sus dependientes faltar al exacto cumplimiento de sus deberes para el mejor servicio¹⁹⁹. El comandante informará cada tres meses al ad-

191 Artículo 99.

192 Artículo 106.

193 Artículo 107 y 111.

194 Artículo 109.

195 Artículo 113.

196 Artículo 114.

197 Artículo 115.

198 Artículo 119.

199 Artículo 120.

ministrador principal de la aptitud y robustez de los seis celadores supernumerarios, a fin de que poniéndose en noticia de la Comisión de hacienda se determinara si eran o no útiles para el servicio²⁰⁰.

6. EL TERCER AÑO ECONOMICO

El dos de marzo de 1822 el Jefe político pidió con la mayor brevedad el presupuesto al ayuntamiento, éste lo comunicó a la comisión de hacienda²⁰¹. El 15 de abril se discutió; para gastos de ayuntamiento se pedían cien mil reales. Para alumbrado los mismos que el año anterior. Se aprobó todo, excepto el ramo de obras públicas y lo que convenía resolver acerca de establecimientos de beneficencia. Como habían mandado las Cortes en el Decreto de 29 de junio, el 30 de abril de 1822 la municipalidad presentó otra Memoria a la Cortes sobre el estado de su presupuesto en los ocho primeros meses del segundo año económico, adjuntando el presupuesto para el tercer año económico. Esta vez el impreso era mucho más reducido, sólo 24 páginas, pues ya no se trataba de discutir sobre tal o cual sistema de recaudación, ni sobre la mejor forma de acuerdo con el sistema de libertades establecido para llevarlo a cabo. Establecido el sistema de recaudación sólo había que perfilarlo²⁰².

Los ingresos en las puertas en los ocho primeros meses ascendían a 14.080.050, que deduciendo 769.121 invertidos en su administración durante ese tiempo dejaba un importe líquido de 13.310.929 reales; lo que suponía en el año completo 19.966.393, de forma que el déficit respecto a lo presupuestado era mínimo²⁰³. Del importe ingresado, 5.366.848 reales se entregaron en las tesorerías general y de provincia por cuenta del cupo de consumos que tocó a la corte. Éste cupo había sufrido cierto incremento, lo que provocó la queja de la municipalidad, que veía en él una carga excesiva en relación con el resto de las provincias²⁰⁴.

²⁰⁰ Artículo 121.

²⁰¹ La comisión de hacienda manifestó que para hacer el presupuesto del tercer año económico —que comenzaba el 1 de julio— con brevedad, necesitaba que las comisiones que tenían a su cargo obras públicas, fontanería, empedrado y alumbrado y limpieza dijeran que cantidades necesitaban (LA 254, 2.III.1822).

²⁰² A las 24 páginas de la Memoria se adjuntaban una serie de estados o documentos sobre los contenidos de ésta. Uno sobre los géneros que se habían introducido en la corte en esos ocho meses, con los derechos municipales que habían adeudado. Aparecía la clase de producto, el número, medida y peso. Una tabla muy ilustrativa sobre la vida cotidiana madrileña. El segundo era un estado comparativo del presupuesto de los propios y arbitrios, e impuesto del alumbrado. En él aparecía el producto que habían tenido en los ocho primeros meses del segundo año económico. El tercero sobre el servicio atrasado y extraordinario. El quinto que comprendía los gastos municipales en los ocho meses del segundo año económico, comparados con los señalados en el presupuesto. Y el quinto y último era un balance de los fondos municipales en estos ocho meses.

²⁰³ Tan sólo 233.607 reales, que no era significativo quedando todavía cuatro meses para terminar el año económico.

²⁰⁴ El cupo había sido graduado por la Comisión de las Cortes al tiempo de dar el Decreto de 29 de junio en 6.419.985 reales. Al hacerse el reparto se vió incrementado hasta 6.949.690. La municipalidad consideraba excesivo esto, ya que el cupo suponía casi el 7 por 100 de los 100 millones

Los demás arbitrios y propios, incluido el impuesto para el alumbrado de la villa, habían ingresado en las arcas municipales 1.015.599, 66.399 más de los 949.200 presupuestados. Además se habían conseguido 7.944 reales en descuento de letras y beneficios eventuales.

Por otro lado el ayuntamiento había sido invitado por el gobierno a tomar parte en el empréstito de la Nación de junio de 1821, para lo cual se utilizó lo presupuestado para el pago de intereses de la deuda municipal y para el fondo de amortización. Con los beneficios del préstamo²⁰⁵, la municipalidad quería hacer frente al exceso del cupo de la contribución nacional; y con el importe de las acciones que se habían suscrito el pago de lo presupuestado para los réditos de los efectos de villa y la cantidad establecida de amortización²⁰⁶; pero la realidad era que no se había hecho ningún avance en lo relacionado con la deuda.

Además a 1 de julio de 1821 existían en caja 1.374.116, pertenecientes al servicio atrasado con inclusión del extraordinario de la Milicia Nacional Local, que era de 400.000 reales. A primero de marzo quedaba todavía 521.959 reales, que se consumirían en gran parte por las cantidades de esta clase que restaban por pagar.

a) *La ejecución del presupuesto*

En esos ocho meses se habían gastado 6.954.341 reales en lugar de los 7.971.294 presupuestados. Para los cuatro meses que faltaban para terminar el año económico se calculaban unos ingresos totales de 8.228.816²⁰⁷; frente a unos gastos de 8.267.207²⁰⁸. La pequeña diferencia que se apreciaba pensaba el ayunta-

impuestos a toda la Nación, cuando su población sólo representaba el 1,19 de ésta. Lo que significaba que cada uno de los madrileños pagaban casi seis veces más que la media del Estado; en concreto, cada individuo de la capital pagaba 49 reales y 22 maravedís por contribución de consumo al año, y el resto de la Península sólo 8 reales y 3 maravedís. Hasta aquí los datos presentados por el ayuntamiento, luego habría que ver de donde procedía este dinero, ya que Madrid aportaba más pero consumía más del presupuesto nacional, sobre todo en sueldos para sus innumerables funcionarios. Esto sin contar toda la riqueza generada por la capitalidad.

²⁰⁵ En el momento en que se redactó la Memoria los beneficios que habían resultado del préstamo eran: 225.000 reales cobrados por los intereses del primer semestre; 375.000 del beneficio del 4 por 100 de comisión de las 3.000 acciones suscritas, más un sexto de intereses del primer semestre. Lo que hacía un total de 600.000.

²⁰⁶ Las 3.000 acciones suscritas tenían un coste de 4.532.527 reales, incluidos 32.527 por el descuento de las letras que pagó el ayuntamiento para poder satisfacer esta cantidad; y 990.000 por los 4.500.000 en créditos sobre el 4 por 100 para completar el préstamo; siendo el total desembolsado de 5.522.527, que representaba el importe de las 3.000 acciones o 9.000.000 reales en que se había interesado el ayuntamiento. Estas acciones graduadas por el valor mínimo que en el día podía suponerse en un 63 por 100, representarían un capital metálico de 5.670.000; con los que se aseguraba el pago de los 2.844.715 reales del presupuesto para los réditos de los efectos de villa, el del millón para la amortización, los 990.000 valor de los 4.500.000 de crédito, con lo que quedaría un sobrante de 835.285 reales.

²⁰⁷ De estos 6.655.465 corresponderían a lo que las puertas podían producir en el último tercio del año; 1.065.553 existían en valores; 507.798 de los propios y arbitrios, incluido el alumbrado.

²⁰⁸ De los que 3.985.647 correspondían a lo presupuestado para los cuatro meses que restaban; 2.410.000 en letras que había que pagar antes de 20 de mayo; 288.720 de la mesada de febrero de la beneficencia y educación; 1.582.840 para completar el cupo de la contribución de consumos.

miento recaudarla mediante las contribuciones directas previstas en los presupuestos, como también con lo que se pudiera gastar a cuenta del servicio atrasado y extraordinario; y en el caso de faltar algo se pagaría con el fondo sobrante invertido en el préstamo.

Por otro lado no veía la municipalidad ninguna dificultad en cubrir el presupuesto en todas sus partes, respecto que el 1.016.953 gastado de menos se reducía a 728.233 si se tenían en cuenta los 288.720 de la mesada que estaba por pagar a la beneficencia. Además lo aplicado al préstamo nacional, que importaba 4.532.527 reales, suponían 687.812 más que los réditos de sisas y amortización —que eran 3.844.715—, de forma que los presupuestos quedaban cubiertos prácticamente. Faltaba la pequeña diferencia que había entre los 728.233 y los 687.812, lo cual no era apreciable. De esta forma el ayuntamiento quería hacer valer su esfuerzo por sanear las finanzas municipales y administrar los medios que las Cortes habían puesto a su disposición.

Efectivamente, se habían atendido los cuantiosos gastos que exigían la limpieza y la «comodidad del público», en las obras públicas²⁰⁹ se habían invertido durante estos ocho meses la suma de 2.048.323 —con lo que esto generaba de empleo en la población—, se había socorrido a los establecimientos de beneficencia²¹⁰, y se pensaba concluir el año económico aplicando al fondo de amortización no sólo el 1.000.000 destinado por las Cortes a ese objeto, sino también alguna parte de los 687.812 invertidos de más en el préstamo nacional.

b) *El presupuesto de gastos del ayuntamiento para el tercer año económico*

Las cantidades que el ayuntamiento después de un prolijo examen conceptuaba necesarias para hacer frente a sus obligaciones ascendían a un total de 14.791.248 reales; de los cuales correspondían a limpieza, 1.118.000; a alumbrado, 817.882; educación, 524.000; beneficencia, 1.500.000; deuda, 3.766.645; obras públicas, 4.200.000; urbanismo y mantenimientos, 565.000; teatros, festividades, eventuales y extraordinarios, 386.600; para los juzgados de primera instancia, 250.000; para sueldos y oficinas, 939.364; para la diputación, 220.000; cesantes y viudas, 191.828; Milicia Nacional, 250.000; víctimas del 2 de mayo, 20.088; censos, 41.841.

Aparte el importe de cupo de consumos que ascendía a 6.949.690; y que se cubría íntegramente de las cantidades recaudadas en las puertas.

²⁰⁹ Entre estas obras tal vez destaque la Puerta de Toledo, monumento emblemático del Madrid sur. Pero también estaban otras, tal vez menos visibles pero no por eso menos importantes: el portillo de la Vega, la alcantarilla de Recoletos, el camino de la puerta de Toledo a la de Segovia, el que rodeaba las tapias del Retiro, las obras de la plaza de la Constitución.

²¹⁰ En los dos primeros tercios del segundo año económico se habían suministrado 2.067.685. Además las operaciones de adelantos por cuenta de las contribuciones nacionales hechas con la tesorería general habían proporcionado al hospital la cobranza regularizada de 360.000 reales por cuenta de las estancias militares. El ayuntamiento vió frustradas sus aspiraciones de reformar los establecimientos de beneficencia. Distintas dificultades habían impedido a la Junta provisional de beneficencia realizar sus proyectos y sólo permitieron las meras funciones de un pagador o cajero. Sin embargo se pesaba que con la nueva ley de beneficencia podría solucionarse esto.

Para cubrir estos gastos el ayuntamiento contaba fundamentalmente con lo que producían las puertas de acuerdo con la tarifa aprobada por las Cortes, casi 13 millones de reales. El resto lo producirían los propios, 250.000 reales; los arbitrios, 357.507; el alumbrado, 660.000; y el alquiler de los teatros, 86.600. Con esto faltaba todavía casi medio millón de reales para cubrir las necesidades del municipio. Analizando los ingresos en las puertas, la municipalidad observaba que los géneros de primera necesidad habían adeudado más que en los años anteriores; mientras que los artículos de algún lujo lo habían hecho al contrario. Comprobaba cómo la baja en los adeudos había contribuido a disminuir el contrabando de productos y por lo tanto a una mayor declaración de éstos. Ahora bien, veía en éste —el contrabando— el mayor peligro para el éxito del sistema, del único sistema capaz de sufragar los gastos del cupo nacional y de las necesidades municipales. De ahí que Madrid propusiera declarar la guerra al fraude, para lo que veía necesario en primer lugar desmontar los depósitos y almacenes cercanos a las puertas, pues era evidente que éstos sólo servían para burlar a las finanzas municipales. Con el aumento de los valores que se produjese al desaparecer esta vejación, se cubriría el déficit de 496.489 reales antes aludido.

Por todo lo dicho el ayuntamiento proponía a las Cortes los siguientes puntos:

1. Que se aprobase el presupuesto municipal de 14.791.248.
2. Que para cubrir esta cantidad y lo que correspondiese a Madrid por la contribución nacional de consumos se autorizase al ayuntamiento a cobrar, durante el siguiente año económico, los derechos de la tarifa que en ese momento venía exigiéndose con pequeñas modificaciones ya mencionadas²¹¹.
3. Que para que no sufrieran perjuicios los valores del impuesto sobre consumos, se despachase con prontitud el expediente del señalamiento de término de la villa, según había propuesto el ayuntamiento y apoyado la diputación provincial.
4. Que se prohibiese la existencia de depósitos y almacenes de efectos sujetos a los derechos de puertas en las inmediaciones de la corte, para evitar el contrabando.

Por último la que iba acompañada de un escrito, de fecha 1 de abril, en el que el ayuntamiento exponía sus dificultades respecto a los efectistas. Para cumplir lo mandado en el Decreto de 29 de junio de 1821²¹² se necesitaba una clasificación

²¹¹ El cacao de Caracas que pagaba un real pasaría a 25 maravedises y medio en cada libra; el cacao de Guayaquil pasaría de 25 y medio a 17 maravedís; en el clavillo de un real y 25 maravedises y medio, se pasaba a un real con 17 maravedís por libra; en el azafrán se bajará de 3 reales por libra a 2; el café de un real a 17 maravedís en libra.

²¹² Como se recordará respecto a la deuda municipal el Decreto exponía: «3º El capital de los 100.473.571 reales impuesto sobre las sisas de Madrid; pero a beneficio de la Nación, pasará al Crédito Público con los intereses que devengaren desde 1º de Julio de 1821 en adelante. 4º Los intereses de esta capital devengados hasta último de Junio del presente año de 1821, serán de cargo de la Villa de Madrid. 5º Se procederá a una liquidación general entre la Hacienda nacional y el Ayuntamiento de Madrid: el alcance contra la Hacienda nacional lo reconcerá el Crédito Público, y entregará al Ayuntamiento acreedor las correspondientes certificaciones segun está mandado por punto general. 6º Con estas certificaciones pagará el Ayuntamiento los atrasos por réditos de capitales, conforme está convenido con los tenedores de estos créditos segun manifiesta en su Memoria.»

de los capitales e intereses debidos; tarea no tan fácil como a primera vista pudiera parecer, por lo que la municipalidad veía demorar su conclusión más de cuatro meses; y una vez terminada, la liquidación con las oficinas generales de la Nación se hizo mucho más trabajosa. De esta forma resultó una situación embarazosa, si el ayuntamiento procedía a la satisfacción de réditos a los efectistas municipales y desatendía a los recién convertidos en nacionales, se produciría una grave injusticia ya que el crédito público aún no reconocía a éstos, con lo que era imposible que cobrasen. En un intento de solucionarlo, el ayuntamiento acudió a la diputación el 15 de diciembre para que se le autorizase a distribuir entre todos los efectistas la cantidad del primer semestre del año económico. Pero la diputación no se veía con facultades para aprobar semejante proposición. De ahí que se acudió a las Cortes, para que viera lo más conveniente.

7. LA INSTRUCCION PARA EL GOBIERNO ECONOMICO-POLITICO DE LAS PROVINCIAS DE 1823

Por Decreto XLV, de 3 de febrero de 1823, las Cortes extraordinarias aprobaron una nueva Instrucción para el gobierno económico-político de las provincias²¹³. A pesar de su escasa aplicación, esta disposición era la expresión más importante de la concepción del municipio que existía en el Trienio liberal.

Se delimitaban una serie de competencias —dentro de un esquema claramente centralizador— propias del municipio: económicas y políticas. Se establecía un organigrama en el que el ayuntamiento tenía a la diputación como superior y el alcalde al jefe político, que era quien presidía la diputación.

En lo que se refiere a la hacienda, se establecía que cada ayuntamiento tendría a su cargo la administración e inversión de los caudales de propios y arbitrios, conforme a las leyes y reglamentos que estaban vigentes²¹⁴.

En los ocho primeros días de cada año el ayuntamiento tenía que nombrar un depositario, que sería quien custodiase los caudales de propios y arbitrios, y quien libraría las cantidades debidas²¹⁵. Cuando fuera conveniente y aunque no hubiese transcurrido el año, se podía remover al depositario²¹⁶.

En el mes de octubre de cada año debía remitirse a la diputación provincial el presupuesto de los gastos públicos ordinarios del año siguiente, con el parecer del síndico o síndicos²¹⁷. En él se incluía también el valor de los propios y arbitrios. Si no alcanzasen para cubrir los gastos, se propondría a la diputación los nuevos arbitrios que se estimasen convenientes²¹⁸.

²¹³ Esta Instrucción ha sido tratada por J. GARCIA, *El origen...* y C. DE CASTRO, *La Revolución...*

²¹⁴ *Instrucción...*, capítulo I, artículo 27.

²¹⁵ Cap. I, art. 28.

²¹⁶ Cap. I, art. 29.

²¹⁷ Cap. I, art. 32.

²¹⁸ Cap. I, art. 30.

La discusión de los presupuestos era pública, para lo que se haría en día festivo, a puerta abierta, en una hora cómoda, y anunciándolo con tres días de anticipación. Los vecinos podían por lo tanto presenciar la sesión sin voz activa, y enviar a la diputación lo que estimasen conveniente²¹⁹.

Si el ayuntamiento necesitase para algún cargo más cantidad de la presupuestada, tenía que formar un acuerdo sobre ello, con la publicidad debida y con un dictamen de los síndicos²²⁰. Si la cantidad necesitada fuese menor o igual al número de vecinos en pesetas, si podía hacer el gasto sin otra aprobación, siempre que el informe de los síndicos fuese positivo, aunque sí se informaría a la diputación²²¹. De lo contrario se tenía que acudir a la diputación provincial²²².

Ahora bien, esto suponía reequilibrar el presupuesto, si se habían aumentado las partidas de gastos, tenían que aumentarse los ingresos en el caso de que estos no fuesen suficientes. Para ello se establecerían los arbitrios menos gravosos, que se discutirían en el ayuntamiento, con la publicidad propia de las cuestiones económicas y con el parecer de los síndicos²²³.

Si el gasto no necesitaba aprobación de la diputación, tampoco el arbitrio. En este caso se entendía dado el consentimiento de la diputación para poder usar del arbitrio, con la calidad de interino, mientras recaía resolución de las Cortes, bajo la responsabilidad de los capitulares, y remitiéndose el expediente a la diputación provincial²²⁴. Pero si la suma exigía aprobación de la diputación, el arbitrio también²²⁵.

El ayuntamiento tenía que publicar en los primeros cuatro días de cada mes un estado de entrada, salida y existencia de sus fondos. Información que se colgaría en la puerta de la sala capitular, donde permanecía hasta ser sustituida por la del mes siguiente²²⁶.

Antes del diez de enero de cada año el depositario de propios y arbitrios tenía que presentar las cuentas correspondientes al ejercicio anterior²²⁷. El ayuntamiento, con asistencia del síndico o síndicos, examinaría esas cuentas²²⁸. Éstas, con los dictámenes correspondientes, se elevarían a la diputación provincial, siempre dentro del mes de enero²²⁹.

Al mismo tiempo se enviaría a la diputación el diez por ciento impuesto sobre los productos de propios y arbitrios para obras públicas de la provincia y a los establecimientos de beneficencia²³⁰.

²¹⁹ Cap. I, art. 31.

²²⁰ Cap. I, art. 33.

²²¹ Cap. I, art. 34.

²²² Cap. I, art. 35.

²²³ Cap. I, art. 36.

²²⁴ Cap. I, art. 37.

²²⁵ Cap. I, art. 38.

²²⁶ Cap. I, art. 39.

²²⁷ Cap. I, art. 40.

²²⁸ Cap. I, art. 41.

²²⁹ Cap. I, art. 43.

²³⁰ Cap. I, art. 44.

Es decir, la nueva Instrucción mantenía prácticamente intacta la centralización económica. C. de Castro apunta como causa de ello los conflictos municipales por el manejo de las propiedades y fondos concejiles²³¹. Pero tal vez esto fuera la excusa, y el verdadero motivo haya que buscarlo en la ideología centralista dominante.

8. ¿UNA «ÉPOCA DORADA» PARA LA FISCALIDAD MUNICIPAL?

Se puede decir que el Trienio supuso una época dorada para la hacienda madrileña, el ayuntamiento recuperó la administración de sus propios y arbitrios, diseñó mediante un presupuesto las necesidades de ingresos y gastos municipales, tuvo cierta autonomía en el manejo de los fondos, se pusieron las bases para solucionar el problema de la deuda.

En cuanto a la estructura del ingreso apenas existió variación, los antiguos propios y arbitrios continuaron funcionando y las sisas, en forma de derechos de puertas, tuvieron una nueva tarifa, muy parecida a la que venía cobrándose. La desamortización municipal apenas tuvo incidencia, se vendió algún terreno²³², pero fue algo simbólico.

Cuando tras la muerte de Fernando VII se plantearon nuevas reformas, el modelo del Trienio estuvo en la mente de los liberales madrileños, que querían volver a esa situación tal vez mitificada.

²³¹ *La revolución...*, p. 101. Cuenta como los dos grupos liberales del parlamento se mostraron unánimes en mantener el control central.

²³² Así una porción de terreno junto a Puerta Cerrada el 13 de mayo de 1820, véase el LA 252, en esa fecha.

Capítulo V

OTRA VEZ EL MODELO TRADICIONAL

Con la vuelta del gobierno absoluto se dismanteló rápidamente la organización liberal. El Decreto de 9 de junio de 1823 volvía a la realidad existente antes de la reforma de Garay¹, y se derogaron con efecto inmediato todas las establecidas por los liberales; lo que tenía claras consecuencias municipales.

Efectivamente, el 23 de mayo de 1823, se puso en ejecución la real Orden de 25 de agosto de 1818 y la Instrucción aprobada por la misma. El 24 de mayo comenzó la recaudación según este sistema²; el cual estuvo vigente poco tiempo, hasta fin de junio.

En cumplimiento de lo mandado por la regencia del Reino en su Decreto de 9 de junio de 1823, las rentas reales y municipales debían volver a la forma que tenían en 30 de mayo de 1817, gobernándose por las leyes, instrucciones y reglamentos que regían en dicha época³. Desde el uno de julio se operó el cambio del método de recaudación, y se restablecieron las rentas provinciales y equivalentes, en donde las había, y las estancadas. Volvían a regir las leyes, instrucciones y reglamentos vigentes antes del 30 de mayo de 1817, en que se estableció la contribución general.

Para el cumplimiento de lo establecido, el superintendente general de sisas de la villa, restableció las administraciones y demás oficinas a la forma que tenían en di-

¹ El Decreto se debe a Juan Bautista Erro. En el largo preámbulo de éste se «aborrecía» de las tres contribuciones directas que habían existido: Cádiz, Garay y Canga Argüelles.

² Para ello el ayuntamiento acordó el 26 de mayo que se formara por los contadores una relación de las dependencias de Madrid y de sus empleados —con sus dotaciones—, según se encontraba a principios de marzo de 1820. También se pedía información de las alteraciones de empleados y sueldos que hubieran ocurrido durante la vigencia del ayuntamiento constitucional. Esos cambios se tenían por no efectuados y así cuantos habían sido nombrados por dicho ayuntamiento quedaban excluidos de sus destinos. Empezaba de esta forma el tiempo de las «purificaciones». El 7 de junio de 1823 el corregidor interino ordenó a los contadores que en cumplimiento de lo mandado por «el gobierno provisional de España e Indias» debían reponerse las cosas al ser y estado —como se decía en la época— que tenían antes del «desgraciado día» 7 de marzo de 1820. En su virtud, ese día se instaló la Junta directiva de derechos de puertas de Madrid, tal y como se prevenía en la Instrucción de 25 de agosto de 1818 (AVM-S 3-295-124).

³ AVM-S 3-294-39; el real Decreto se publicó el 14 de junio en el *Diario de Madrid*.

cho año; y nombró a los empleados necesarios⁴, que deberían dar fianzas para el desempeño de su cargo⁵. El pago de las fianzas ocasionó numeroso papeleo, pues en una época de escasez como la que se vivía, adelantar esas sumas no era tarea sencilla.

El ayuntamiento pasó a la Junta de propios y sisas esta nueva organización, para que ella como órgano directivo a nivel municipal diera el visto bueno; y completara los cargos de la administración de su hacienda.

Sin embargo todo esto no sirvió para mucho, pues el 15 de agosto la regencia del Reino dió una resolución por la que los arbitrios municipales pasarían a la administración de la real Hacienda⁶, en conformidad a lo dispuesto en el real Decreto de 26 de enero de 1818 —que era calificado por la municipalidad de muy perjudicial a los intereses de Madrid—, así como en la Instrucción de 25 de agosto de 1818⁷.

⁴ El 30 de junio, y de forma interina, el corregidor comunicó a las contadurías el nombramiento de los sujetos que debían desempeñar las administraciones y recaudación de sisas desde el uno de julio. Con posterioridad se hace ya de manera definitiva, el 29 de julio de 1823. En el expediente AVMS 3-294-39 aparece el nuevo «organigrama» de la administración y recaudación de sisas. Ésta se ordena en una contaduría de valores, compuesta por un contador, un oficial mayor, uno oficial segundo, otro tercero, cuarto, quinto y sexto, un agregado, y un portero; la administración del vino, con su administrador; la administración del aceite y carnes, con el suyo; el administrador del azúcar y cacao; el administrador del jabón y pescados; el administrador de hielo y nieve; el escribano de sisas y del casco; un alcaide; un portero; la ronda del casco, compuesta por un visitador, teniente, y visitador particular; la Puerta de Toledo, con un registrador de sisas mayores y otro de menores; la puerta de Atocha, con registrador de sisas mayores y otro de menores; la Puerta de Alcalá, con registrador de sisas mayores y otro de menores; la Puerta de la Vega, con un registrador para las sisas mayores y menores; la Puerta de San Fernando, con un registrador para las sisas mayores y otro para las menores; administradores, fieles y alcaides del rastro y carnicería, compuesta del administrador de la casa rastro, dos fieles de romana en el matadero y un fiel de romana en el rastro; por último el alcaide de la casa rastro.

⁵ En AVMS 3-294-39 aparece la nota de las fianzas que tenían que dar los registradores de sisas mayores y menores. El de azúcar y cacao, 80.000 reales; el de jabón y pescados, 22.000; el de hielo y nieve, 12.000. En la Puerta de Toledo, el registrador de sisas mayores, 55.000; el de menores, 22.000. En la Puerta de Atocha, el de sisas mayores, 55.000; el de menores, 22.000. En la Puerta de Alcalá, el de sisas mayores, 55.000; el de menores, 22.000. En la Puerta de la Vega, el de sisas mayores y menores, 20.000. Y en la Puerta de Santo Domingo, el de mayores y menores, 20.000 reales.

⁶ Este cambio puede ser fruto del repartimiento de 270 millones que se realizó entre las provincias, cantidad que se obtendría gravando el consumo de aquellos artículos —vino, vinagre, carnes, aceite y jabón— que tradicionalmente se venían utilizando para recaudar los servicios de millones. Lo ingresos obtenidos por este medio se completaban con un reparto proporcional a la renta. Sobre esto véase M. ARTOLA, *Progresistas...*, p. 115. De ser esto así sería la primera junta, y no la segunda, la que propuso dicha solución.

⁷ Efectivamente el 26 de agosto se comunicó al ayuntamiento por el intendente la real Orden de 15 del mismo, por la que la Regencia del Reino había resuelto poner en vigencia lo dispuesto por el real Decreto de 26 de enero de 1818. El ayuntamiento acordó hacer una representación exponiendo su disconformidad con esta medida. El uno de septiembre se comunicó a la municipalidad un oficio del corregidor que acompañaba una real Orden comunicada por el ministerio de Hacienda, en la que se ordenaba la ejecución en Madrid de la citada real Orden de 15 de agosto, sin que para ello fuese obstáculo que el ayuntamiento hubiese establecido sus administraciones. El ayuntamiento estudió el asunto al día siguiente, y acordó su cumplimiento, sin perjuicio de hacer una representación al monarca. De esta forma el corregidor —el día 3 de septiembre— pasó a nombrar interinamente a los empleados que fueran necesarios para la intervención, con arreglo a lo dispues-

Desde el uno de septiembre se unieron los derechos reales a los municipales, y se hizo la recaudación por mano de los empleados de la real Hacienda⁸. Madrid apenas tenía una intervención aparente en las puertas y ninguna en la aduana; y la municipalidad se quejaba de que no se realizaba lo previsto para erradicar el contrabando⁹.

El producto de los arbitrios que correspondían a la villa debían ser entregados puntualmente, al igual que a los demás partícipes, como se disponía en el real Decreto y ahora se recordaba¹⁰.

Se observó una oposición más o menos tenaz, pero general en todas las puertas, de los empleados de la real Hacienda a que se interviniesen los géneros que se introducían y los derechos que satisfacían su introducción; hasta el extremo de que en alguna puerta se negaron a realizar la comprobación de los asientos con la presencia de los interventores. A fuerza de constancia y prudencia —según la municipalidad— se logró hacer respetar su cometido y poder desempeñar sus funciones¹¹. No es posible determinar si esa oposición era fruto de los subalternos o era producida por alguna indicación superior. Lo que sí es posible probar¹² es que la junta directiva de puertas no se estableció y que la contaduría no logró intervenir en la aduana los géneros que adeudaban derechos municipales en ella hasta el año 1828¹³.

⁸ El 4 de septiembre se comunicó al corregidor por el ministerio de Hacienda una real Orden para que se interviniese por los empleados de la villa con arreglo a lo dispuesto en el artículo 6 del Real Decreto de 26 de enero de 1818. Al mismo tiempo el 16 de septiembre se comunicó por la Dirección una Orden mandando entregar puntualmente al tesorero de la villa los arbitrios que le correspondían. Cualquier empleado de la real Hacienda que entorpeciese esta tarea sería penado con privación de empleo y sueldo (AVM-S 3-29 5-124).

⁹ Se trataba, como ya se ha dicho, de aplicar la abundante legislación dirigida a reprimir los abusos, fraudes y establecer la recta recaudación y la intervención: la Instrucción de 16 de agosto de 1766; el real Decreto de 11 de julio de 1735, inserto en la real Provisión de 12 de agosto; las reales Ordenes de 30 de julio y 12 de septiembre de 1750; la Orden del Consejo de 14 de mayo de 1754; la real Orden de 27 de septiembre de 1763; la real Orden de 6 de febrero de 1802; la real Orden de 12 de marzo de 1805; los bandos de los intendentes de 12 de marzo de 1805, 3 de marzo de 1808, 28 de junio de 1814, 10 de enero de 1815 y 9 de julio de 1823; la real Instrucción de 25 de agosto de 1818.

¹⁰ Esto se disponía en el real Decreto de 26 de enero de 1818, y ahora se recordaba en un oficio de los directores de rentas reales, de fecha 16 de septiembre de 1823. Se decía que se aplicaría la pena de privación de empleo y sueldo a cualquier empleado de la real Hacienda que impidiera, entorpeciera o demorase la entrega de lo que a la villa y demás partícipes correspondiese (AVM-S 3-29 5-124).

¹¹ Con el paso del tiempo la comunicación de los empleados de ambas rentas se fue haciendo más familiar, aunque siempre sin mezclarse los municipales en el despacho de los géneros que sólo adeudaban derechos reales. La Instrucción general para la recaudación, distribución y cuenta de la real Hacienda de 3 de julio de 1824 no estableció nada que se opusiera a la intervención de dichos derechos, pero no se mandaba expresamente que se intervinieran por los empleados municipales (AVM-S 3-295-124).

¹² AVM-S 3-295-124.

¹³ AVM-S 3-295-124 y 53. El 4 de diciembre de 1827 preguntó el corregidor al contador de intervención de los derechos de puertas si se estaba realizando la intervención en la real aduana por la contaduría, y el 7 del mismo se comunicó que no se hacía a causa de la fuerte oposición que desde el principio manifestaron el administrador y contador de rentas, lo que se comunicó en su mo-

1. LA INSUFICIENCIA DEL MODELO TRADICIONAL

De esta forma en tres meses se presenciaron tres modificaciones de la forma de recaudar los derechos de puertas; a esto no eran ajenos los productos que se estaban recaudando, sino que eran el problema fundamental. La vuelta del gobierno absoluto, era una vuelta cargada de deudas y necesidades, como era habitual ya en este primer tercio del siglo XIX, y lo fundamental era encontrar la forma de conseguir el mayor ingreso posible.

La primera vuelta al sistema de 1818 era lógica, se trataba de volver a la manera anterior al sistema constitucional¹⁴. A raíz del Decreto de 9 de junio se volvió otra vez a aquella Instrucción de 1766, que había sido durante mucho tiempo el camino «seguro» para las finanzas municipales. De ahí que se cogiera la reimpresión que se había hecho en 1813 de esta Instrucción, y se repartiera otra vez entre todos los dependientes de uno y otro ramo en la aduana y en las puertas.

Pero las cosas no mejoraron y se seguía pensando que el problema era la inexactitud en el cumplimiento de la Instrucción¹⁵. Las reiteradas instancias de los contadores dieron ocasión a la publicación de los bandos del intendente¹⁶ de 28 de junio de 1814 y 10 de enero de 1815. Se pensaba que con esto se cortarían los numerosos abusos que se venían cometiendo, que no existía otro remedio que la rigurosa observancia de todos y cada uno de los capítulos de la instrucción y bandos del intendente; de nuevo la ingenuidad tardoilustrada.

Se calculaba que el fraude restaba dos millones de reales a los derechos municipales; lo que representaba algo más del 15 por 100 del total. Para solucionarlo los contadores propusieron que los celadores, ayudantes y mozos del alumbrado, y también los celadores de la policía urbana pudieran aprehender cualquier género que fuese introducido por la noche sin pagar los derechos. Deducidos éstos, todo el género aprehendido sería para el empleado en cuestión. De esta forma, cediendo al

¹⁴ Aunque autores, como M. Artola, que han estudiado esta etapa de la Hacienda no mencionan que la legislación de Garay volviese a estar vigente, sino que del sistema liberal se pasó —a raíz del Decreto de 9 de junio— a las antiguas rentas —provinciales, estancadas, etc.—. La realidad municipal, según la documentación disponible, fue otra.

¹⁵ Así por lo menos pensaban los contadores de villa (AVM-S 4-4-25).

¹⁶ Reproducidos en el Diario de Madrid, 10 de julio de 1823, 2-4. En el se decía que restablecido por el Decreto de la regencia del Reino de 9 de junio de 1823 el antiguo sistema de rentas conforme con el Decreto de 23 de junio de 1814, y siendo tantas las variedades que había sufrido desde que se proyectó el ensayo de la contribución directa por el de 30 de mayo de 1817, y más particularmente en el tiempo del gobierno revolucionario, en el cual se sucedían rápidamente las novedades, de manera que apenas podía ya conarse si existía ningún sistema; se había creído indispensable recordar las antiguas leyes fiscales, para que no pueda excusar la ignorancia. De esta manera se recuerda que existían en toda su fuerza y vigor la recaudación de todos los derechos reales que se conocían con el nombre de alcabalas, millones, cientos y demás comprendidos bajo la acepción de rentas generales y provinciales, y también los de sisas y derechos municipales. Por lo mismo se debía observar con exacta escrupulosidad todos los bandos publicados en esta capital, relativos a impedir los fraudes. Junto a los dichos arriba se reproducían también uno dado numerosas veces, la última el 15 de febrero de 1820, prohibiendo la conducción en vegigas de aguardiente, aceite u otros líquidos que adeudaban derechos de entrada en las puertas. Y otro de 15 de febrero de 1815 relativo a la fabricación de naipes.

interés personal se pensaba que sería más eficaz el control nocturno, ya que los dependientes de la visita eran pocos y era palpable la cantidad de género que se introducía a esas horas.

A todo esto, como ya se indicó arriba, el 15 de agosto se comunicó al ayuntamiento que desde el uno de septiembre otra vez estaría vigente la Instrucción de 1818. El 29 de agosto la municipalidad hace una representación a la regencia del Reino exponiendo los males y perjuicios que causaría a Madrid esa disposición, por lo que se pedía su suspensión, o al menos que se atrasara hasta uno de enero de 1824 su cumplimiento, para que el ayuntamiento pudiera así hacer un estudio más detallado del impacto que ese modo de recaudación supondría para las arcas municipales.

La regencia no contestó al escrito municipal, y ante el asombro de las autoridades locales y de los empleados de las puertas el uno de septiembre los empleados de la real Hacienda en las puertas despojaron a los de Madrid, haciendo por sí solos la recaudación¹⁷. El ayuntamiento decidió esperar una contestación a la representación hecha, y el 4 de septiembre se expidió por la regencia del Reino un Decreto que mandaba que se cumpliera exactamente el real Decreto de 26 de enero de 1818 y que en consecuencia no se mezclasen los dependientes de Madrid en la recaudación de los derechos municipales, pero que tampoco se impidiera a su ayuntamiento poner la intervención de la que hablaba el artículo 6 de la citada disposición.

Para cumplir esto, el corregidor —como superintendente general de sisas que era— dio las oportunas disposiciones para que desde el 8 de septiembre los individuos nombrados para la intervención ejercieran sus funciones. Se trataba de una nueva organización de los empleados municipales para que éstos ejercieran la intervención que correspondía al ayuntamiento¹⁸, cesando en la recaudación, lo que suponía una disminución notable del número de empleados necesarios.

El 16 de septiembre se expidió una orden de la dirección general de rentas por la que se mandaba a los dependientes de la real Hacienda que entregasen puntual-

¹⁷ En AVM-S 3-294-39 aparece una nota del registrador de sisas reales y municipales en la puerta de Alcalá en la que comunicaba al ayuntamiento el 31 de agosto su sorpresa por el anuncio de «despojo» que un empleado de la real Hacienda le había hecho.

¹⁸ La nueva organización estaba formada por los siguientes cargos con sus dotaciones. Contaduría de Aduana: contador (21.000 reales); oficial primero (12.000); oficial segundo (10.200); oficial tercero (9.000); oficial cuarto (8.400); escribiente (6.000); vista (12.000); fiel de romana (7.200). Intervención de la Puerta de Toledo: interventor (11.400); oficial primero de libros (7.200); oficial segundo de libros (6.600); dos aforadores (6.600). Intervención de la Puerta de Segovia: interventor (10.200); oficial primero de libros (6.600); oficial segundo de libros (6.000); dos aforadores (6.000). Intervención de la Puerta de Atocha: igual que la anterior. Intervención de la Puerta de Alcalá: interventor (9.000); oficial de libro (6.000); aforador (5.400). Intervención de la Puerta de Santo Domingo: igual que la anterior. Visita municipal: visitador (11.400); teniente visitador (9.600); dos aforadores (8.400); cuatro guardas (6.000). Casa rastro: alcaide fiel de romana (7.200). Matadero: alcaide (7.200). Posteriormente —el 12 de septiembre— se nombró un tesoroero para que recibiera los fondos semanalmente (AVM-S 3-294-39).

mente al comisionado del ayuntamiento lo que semanalmente correspondiese, aplicando la pena de privación de empleo y sueldo a cualquier empleado de la real Hacienda que impidiese, entorpeciese o demorase dicha entrega¹⁹.

Pero la intervención no fue tampoco una actividad pacífica, sino que se vió dificultada por los empleados de la real Hacienda, aunque no es posible saber si esta oposición se debía a ordenes superiores o sencillamente a cuestiones de ordinaria administración; aunque fácilmente por lo generalizado del asunto se pueda deducir lo primero.

El corregidor protestó ante el ministerio de Hacienda por este motivo²⁰, y señaló que aparentemente existía ánimo de defraudar. Si se acude a las cuentas realmente es así, aunque una deducción objetiva sea difícil porque pudieron intervenir otros factores. En los meses de julio y agosto entraron en la tesorería municipal 2.400.134 reales, es decir 1.200.067 al mes. En septiembre, con el nuevo método de recaudación se ingresaron 984.441 reales, es decir 215.625 menos, lo que supone una rebaja de casi un 18 por 100.

Además existían otras disputas no pequeñas sobre los fondos, como era el pago de la consignación para el resguardo de la real Hacienda, que costaba a Madrid 600.000 reales al año²¹.

Ni el sistema de 1818, ni el anterior, fueron capaces de remontar una situación insostenible. Se presentaron dos propuestas o planes ante las autoridades, una directamente encaminada a solucionar problemas existentes en el cobro de los derechos —la de José Dueñas—, y la otra encaminada a acabar con la administración fiscal pública. Conviene detenerse y profundizar en su explicación, no por las solu-

¹⁹ Ya el uno de septiembre, el secretario de Estado y del Despacho de Hacienda emitió un oficio para que cada sábado se ingresara al tesorero el importe semanal de la recaudación (AVM-S 3-294-39).

²⁰ En un oficio de 4 de septiembre de 1823 (AVM-S 3-294-39).

²¹ AVM-S 3-294-40. El administrador general de aduanas y derechos de puertas de la capital envió al ayuntamiento el 20 de agosto de 1823 un escrito en el que exponía que refluendo en beneficio de los derechos municipales el servicio que ejecutaba el resguardo de la real Hacienda era ajustado que pagase mensualmente 50.000 reales para ayudar a pagar los sueldos de los individuos. Se pedía por tanto el pago de lo correspondiente a mayo (desde el 24 en que se puso en planta la recaudación), junio y julio. Los contadores municipales explicaron que en virtud del reglamento del Consejo de 1766 estaba consignado sobre los productos de sisas para el pago de los sueldos del resguardo 342.003 reales anuales, lo que correspondía a 28.500 mensuales. Por real Orden de 8 de septiembre de 1789 se aumentó esa cantidad a 396.142 reales anuales, esto es 33.011 mensuales. Posteriormente, por acuerdo de la Junta directiva de derechos de puertas de 7 de septiembre de 1818 se aumentó a 600.000 anuales, es decir 50.000 mensuales. Según esto los contadores calculaban que se debía abonar desde 24 de mayo y hasta fin de junio 62.465; y a partir de julio que estaba vigente el método del año 1817, sólo 33.011. Lo que hacía un total de 95.477. Sin embargo el intendente decía que el servicio del resguardo era igual en todo tiempo, y que se debía pagar por todos los meses 50.000 reales. La disputa continuó hasta que una real Orden de 30 de junio de 1824 ordenó que desde 1 de junio de 1823 la villa debía satisfacer 50.000 reales mensuales. En diciembre de 1824 todavía no se había pagado nada, se adeudaba 950.000 reales. Pero estaba claro que el ayuntamiento tenía todas las de perder. A partir de enero de 1825 se le retuvieron 75.000 reales mensuales: 50.000 por el pago corriente y 25.000 por la deuda.

ciones que aportaron o los resultados obtenidos, que no se obtuvo ninguno, sino para conocer la mentalidad que existía en la municipalidad y en el gobierno. El adentrarse en estas iniciativas arroja luz sobre los problemas y los modos de solución de la hacienda madrileña.

a) *La propuesta de José Dueñas*

Quizá movido por esta frustración, un vecino —José Dueñas— envió una serie de observaciones al corregidor, en las que apuntaba los abusos que había advertido en la administración y recaudación de sisas y demás derechos municipales, con los medios, que en su opinión, serían oportunos para corregirlos²². Este papel no pasó inadvertido, sino que ocasionó un extenso expediente sobre el particular.

Por un lado, los contadores se sintieron heridos por esta propuesta, ya que decir que las cosas no funcionaban y que tenían solución, era una afrenta personal a su competencia. De ahí que con urgencia²³, comunicasen al corregidor que las observaciones de José Dueñas siendo ciertas, eran escasas, y por lo tanto faltaban a la verdad. Consideraban que las medidas expuestas no eran suficientes, y que la solución a los problemas se encontraba en los informes elaborados por ellos en los años 1805, 1808, 1812, 1813, 1814, 1815 y 1817; que entre otras cosas motivaron la reimposición en 1813 de la Instrucción para el despacho y recaudación de derechos —piedra clave de toda la organización— y la nueva publicación de los bandos aparecidos en el *Diario de Madrid*.

Sin embargo, lo dicho no convenció a José Dueñas, que en virtud de cierto encargo del corregidor —que no se especifica en la documentación— volvió a exponer su parecer. Las medidas manifestadas por los contadores —interesantes en lo concerniente a los celadores y serenos— carecían, según este vecino, de referencias a la «dispensación de gracias», punto principal de la reclamación. Existía una gran arbitrariedad a la hora de agraciarse a unos introductores más que a otros con rebajas y otros privilegios, de forma que los arrieros iban de una puerta a otra buscando la más barata. Es decir, en la práctica no existía un precio fijo a pagar, y entre lo estipulado y la realidad existía una diferencia que era aprovechada por los especuladores.

Por otro lado, de poco servía la prontitud con la que se despachaba al trajinero en las puertas si se le obligaba a acudir a la aduana para pagar en ella los derechos que adeudaban sus géneros, teniendo que dejar mientras como «prenda pretoria» una cantidad excedente en el registro, que no recuperaba hasta que acreditase haber satisfecho dicho adeudo. Es decir el tiempo que se ahorra en la puerta, se perdía con aumento posteriormente. Y además se entorpecía la movilidad de la mercancía.

En la práctica, para evitar esta demora, se había introducido la corruptela de pagar en el registro el justo derecho y dejar una pequeña cantidad para que el escri-

²² Todo lo referente a esta propuesta, mientras no se diga lo contrario, en AVM-S 4-4-25.

²³ En escrito de 11 de agosto de 1823.

biente llevase la cédula a la aduana. Pero ello sólo ofrecía un medio más de aumentar la contribución a los arrieros, siendo indiferente que éstos o el escribiente del registrador se presentasen a despachar sus cédulas y hacer el pago. Resultaba así el perjuicio de que la tesorería general no recibía diariamente las cantidades que se recaudaban, produciéndose un rodeo que aumentaba las cuentas y los gastos.

Para solucionarlo proponía reducir los dos registros existentes en cada una de las tres puertas de Toledo, Atocha y Alcalá a uno sólo. Éste estaría a cargo de un administrador o fiel registrador, que se encargaría del peso de todos los artículos que adeudaban derechos por sisas o por otro concepto correspondiente al ayuntamiento. Para ello debería tener un libro de tamaño folio, donde hiciera cada día los asientos de los géneros que adeudasen derechos, con expresión de cantidades y precios sacando al margen la suma de cada adeudo.

También existiría un depositario recaudador, quien estamparía en otro libro semejante el número, género y cantidad recaudada por cada partida en el acto de presentarse el arriero con la cédula de la administración. Sería responsable, al igual que el registrador, de los adeudos que no fueran conformes con lo señalado en los aranceles de derechos. Los dos libros serían cotejados una vez que el registro se cerrase. Al día siguiente, cada depositario remitiría a la tesorería la factura y caudales recaudados el día anterior; y cada registrador, una certificación por clases de todos los géneros que adeudasen derechos, firmadas respectivamente.

De esta forma se beneficiaría a los trajineros, y existiría más expedición y sencillez en el despacho; pues no se equivocarían los registros como sucede frecuentemente a primera hora, porque no todos los dependientes del resguardo conocían la distribución de ambos registros de sisas, y solían dirigir mal a los arrieros. Además, cada puerta estaría bajo la dirección de un sólo jefe superior del que dependerían todos los demás empleados en cuanto a sus obligaciones; y no de dos como se venía haciendo.

b) *La petición de Orfila*

Un particular, mahonés, Antonio de Orfila Rotger, también aportó una iniciativa para el arreglo de estos ramos: propuso hacerse cargo mediante arrendamiento de los derechos de puertas²⁴. Efectivamente, en un escrito de 15 de mayo de 1824 expuso una serie de consideraciones sobre los males de parte de las rentas de la real Hacienda, y para solucionarlos opinaba que lo más conveniente era que él se encargase por un tanto alzado y por administración de los productos de los derechos de puertas de Madrid²⁵, tanto en lo correspondiente a la real Hacienda como a la villa.

²⁴ Sobre el plan de Orfila AVM-S 3-294-44 y 4-330-29.

²⁵ Esta propuesta iba acompañada de un alegato sobre los beneficios de la gestión privada frente a la administración pública.

Orfila propuso una serie de condiciones para la realización del contrato²⁶. Pensaba mejorar la administración reduciendo los gastos de explotación, aumentando los ingresos mediante la lucha contra el contrabando, con una mayor vigilancia y con una modificación en la tarifa, para lo que se reservaba el derecho de disminución de impuestos en los artículos que la experiencia demostrase su necesidad. Esto además aumentaría los consumos, por la disminución del precio de los géneros. En cuanto a los trabajadores, continuarían los necesarios y los restantes podía el gobierno emplearlos en otra cosa o pagarles los retiros necesarios con el dinero de más que iba a recibir con el arriendo. Por ello el proponente sólo veía ventajas en su plan: el «Estado» vería incrementados con seguridad sus ingresos, los consumidores se verían beneficiados con la disminución de algunos impuestos, los trabajadores mantendrían su puesto de trabajo o serían indemnizados. Cabe la pregunta de si el arrendador tenía capacidad para hacer todo lo que proponía y, sobre todo, si tenía capital para hacer frente a posibles déficits.

²⁶ 1. El arriendo se haría por seis años de duración, empezando a contar el uno de julio de 1824, y se haría conforme a lo establecido en la tarifa vigente. 2. El precio anual del arriendo se establecería tomando por base los productos netos de los derechos de puertas en el año que concluía a finales de junio, aumentándose en un cinco por ciento. 3. El arrendador pagaría cada quince días y por adelantado. 4. Además del arriendo pagaría a la real Hacienda una parte de su beneficio neto. 5. El gobierno cedería a la nueva administración las oficinas de recaudación, almacenes y depósitos, así como los efectos existentes en ellos bajo inventario y la obligación de devolver el todo cuando concluya el arriendo; igualmente concederá el gobierno todo su protección y auxilio cuando lo pida para reprimir abusos y fraudes. 6. Habría en la administración un interventor nombrado por el gobierno, quien vigilaría por los intereses públicos, revisaría las cuentas de la administración y cuidaría que la recaudación se hiciera de acuerdo a la tarifa. 7. A fines de cada año se establecerían y arreglarían las cuentas de la administración, y después de deducir al bruto anual el importe del arriendo y los sueldos de los empleados y demás gastos de administración se obtendrá el beneficio neto. Éste se repartiría de la siguiente forma: el primer año un cuarto para la real Hacienda y tres cuartos para el arrendador; el segundo año un tercio para la real Hacienda y dos tercios para el arrendador; el tercer, cuarto, quinto y sexto año a partes iguales. 8. Los sujetos empleados en la percepción de los derechos de puertas serían colocados con preferencia en la nueva administración. El arrendador se reservaría la facultad de darles el destino que fuera más adecuado, como igualmente sustituirlos por otros si no cumplieren con sus obligaciones. 9. En el caso que se anula-se la contrata de arriendo, se tendría que abonar al arrendador en calidad de indemnización una suma equivalente a la sexta parte del arriendo anual. 10. El arrendador tendría la plena facultad de alterar la tarifa de derechos, siempre que tratase de hacer disminuciones en los de algún género, con la única obligación de comunicarlo al gobierno. 11. El gobierno no podría introducir variaciones en los derechos de puertas vigentes sin el consentimiento del arrendador. Si éste se negase, podría el gobierno anular la contrata. 12. El arrendador elaboraría un reglamento, que sometería a la aprobación del gobierno, para determinar las bases de la administración y garantizar los intereses de los contribuyentes. Este reglamento, una vez aprobado, sería público. 13. Si, terminada la contrata, conviniese al gobierno continuar la administración de los derechos de puertas por arriendo, las proposiciones del infrascripto debería preferirse a otras en condiciones de igualdad. 14. El proponente anticiparía una suma que sería determinada por el Ministerio de Hacienda, cantidad que será descontada a tanto por mes de los ingresos de las puertas. 15. Para seguridad y garantía del cumplimiento de la obligación del proponente, ofrecerá sólida e idónea caución, que determinará en su momento.

El monarca pidió a la dirección general de rentas que informara sobre la conveniencia del arriendo. Ésta pidió diversas noticias para poder realizarlo; así el 30 de junio de 1824 pasó al ayuntamiento el plan de Orfila para que éste dijera lo que estimase conveniente. El ayuntamiento pidió a los contadores de Madrid información sobre ello, el 6 de julio.

Los contadores antes de proceder a analizar las condiciones que Orfila había fijado para la realización del arriendo, se manifestaron sobre los considerandos de este individuo; y es que lo expuesto, que era una crítica a la gestión realizada, era peyorativo para los empleados municipales, algo que éstos no estaban dispuestos a dejar pasar pacíficamente.

Orfila había dicho que a nadie le pasaría inadvertido que otros reinos después de años de tranquilidad habían dado preferencia a la gestión particular para la recaudación de los tributos y regalías. Los contadores ponían en duda semejante afirmación, argumentando que el Reino de Francia propuso a Enrique II que le quitase los exactores y las rentas se situarían en los niveles necesarios. En el mismo sentido el político Saavedra dijo «que el mayor inconveniente de los tributos y regalías está en los receptores y cobradores, porque a veces hacen más daño que los mismos tributos, y ninguna cosa llevan más impacientemente los vasallos que la violencia de los ministros en la cobranza. Que de ellos y por ellos se quejó Dios por la boca de Ysaías, que habían despojado su pueblo. *Populum meum exactores sui spoliaverunt*». Y que de ellos y por ellos —según argumentando los contadores— dijo Casiodoro «los negociantes y usureros no menos despojan la nave que llega al puerto que el naufragio, y como los vandoleros desnudan al caminante que pasa de un confín a otro. *Portus nostros navis veniens non pavercat, ut certum mautis posit esse naufragium, si manus non incurrerint exigentium: quos frequenter plus affligunt damna, quam solente nudare naufragia*».

Todos estos principios sólo son adaptables —según el parecer de los contadores— al particular, que sólo el interés particular tiene por móvil de todas sus operaciones o exacciones. Por ello otros reinos que por vía de ensayo, habían adoptado —después de una serie de años de tranquilidad— la preferencia a la «industria particular» tuvieron después que abandonarla, por aquello de receptores y cobradores violentos, despojadores del pueblo y exactores usureros. Más valdría por tanto que España no siguiera aquel ejemplo, sino el de la República romana —dijeron— que atenta a su reputación como pocas, ordenó que los mismos pueblos beneficiasen y cobrasen sus tributos. De forma que los contadores optaron por el sistema que estaba vigente, con sujeción a los prescrito en los aranceles y reales órdenes, y con suavidad y decoro en la cobranza.

Como pretexto secundario, Orfila decía en segundo lugar que los trastornos y desórdenes que por desgracia había sufrido el país por las convulsiones políticas, forzosamente habían de sentirse en la administración de las rentas, desordenando y haciendo muy embarazoso y difícil el arreglo. Sin embargo, los contadores dicen que desde 1813, en que salieron los franceses, y hasta 1824, a pesar de esos períodos revolucionarios, la hacienda siempre había contado con un marco claro de ac-

tuación y continuamente se había vuelto al orden anterior, de forma que no se podía admitir ese caos que imputaba Orfila.

Pero como decían los contadores lo importante era el numerario que ofrecía este particular, que ciertamente —al menos en teoría— parecía ventajoso para la Hacienda real y municipal. Lo nocivo estaba, para estos empleados, en lo que esta propuesta encubría. Su autor sabía muy bien que en el año que terminó en junio de 1824 no estuvo vigente la tarifa de derechos a la que se refiere, y que por ello, entre otros motivos, los productos municipales rindieron cerca de tres millones de reales menos de lo que debían producir. Por ello la pretensión de Orfila de querer fijar el presupuesto para los seis años con el producto neto del que terminaba en junio de 1824 hablaba ya de falta de rectitud de intención. Además, exigir que en cualquier tiempo que se anule la contrata se le abone por vía de indemnización una suma equivalente a la sexta parte del arriendo anual, que durante el arriendo se le autorizase plenamente para alterar la tarifa de derechos —siempre que fuera para bajarlos— sin otra obligación que la de ponerlo de antemano en noticia del gobierno, y que esto mismo no pueda el gobierno verificarlo sin expreso consentimiento del arrendador, significaba para los contadores como afirmar que la empresa nunca podía perder, siempre ganar y además granjearse el aplauso del pueblo con la bajada de derechos en algún género —desautorizando así al gobierno—, se blindaba así unas expectativas de ganancias.

Era tal el celo de los contadores por la administración municipal, y tan seguros se encontraban de lo benéfico de las condiciones del contrato, que proponían a la municipalidad que en caso de que el gobierno accediese a la petición de Orfila, el ayuntamiento debía subrogarse en la petición y ser él el arrendador de estos derechos.

Con ello se creía agotado el tema, pero como se había pedido un informe sobre las proposiciones del asentista los contadores pasaron a analizar una por una las condiciones propuestas. Se tomó como fundamento el Decreto de 31 de diciembre de 1814, en el que se ordenaba que las ciudades, villas y lugares se encabezasen con la real Hacienda por lo respectivo a las rentas provinciales. De esta regla se exceptuaban los puertos habilitados o que se habilitasen para el comercio con Europa y América, y la villa y corte de Madrid, que seguiría con la administración mientras se determinase lo más conveniente. También se mandaba en ese Decreto que los encabezamientos se realizaran por un año, y no más, concluyendo el cual podrían los pueblos renovar o permanecer en administración según les conviniera a ellos y a la real Hacienda. Esto porque se pensaba que si el encabezamiento fuese de mayor duración habría una alteración notable de los datos en los que se fundan, es decir en las condiciones en virtud de las cuales se estipulaba el encabezamiento; de forma que en el transcurso del tiempo se rompería el justo equilibrio que era el principio del Decreto. Por lo tanto el tiempo propuesto por Orfila para el arriendo —seis años— no era admisible en esta inteligencia de los datos. Ese período suponía una notable alteración de los presupuestos, y al fin de él podían existir tantos almacenes de géneros dentro de la población que aunque se pensase volver a la ad-

ministración, esta idea sería imposible por la seguridad de falta de ingreso en el año o años siguientes y por lo mismo no era admisible la primera condición para estos empleados municipales.

Por otro lado el producto neto obtenido por los derechos de puertas en el año que finalizó en junio de 1824, no podía tomarse como base para fijar el producto del arriendo. Durante ese período la recaudación no había tenido un método constante y fijo. Desde finales de mayo a primero de julio de 1823 se recaudó bajo la forma prescrita en la Instrucción de 1818. Desde 1 de julio hasta 31 de agosto bajo la forma que se observaba antes de 30 de mayo de 1817. Desde 1 de septiembre en adelante por otro método, es decir en unión los derechos reales con los municipales, por mano de los empleados de la real Hacienda. Y debido a que en este último tiempo Madrid no había tenido más que una intervención aparente en las puertas y ninguna en la aduana, no haberse cumplido todo lo prescrito para evitar el contrabando y hacer productivos los derechos, ni haberse fiado su recaudación —por lo menos en lo que respecta a los derechos municipales— a sujetos dedicados a su exactísima cobranza, los municipales habían producido dos millones menos.

En la tercera condición proponía el interesado pagar cada 15 días y por anticipado 1/24 parte del precio del arriendo anual. Para Madrid era más favorable y útil el pago semanal, como estaba vigente. E incluso mejor el diario, como sucedería si el arriendo de derechos se concediese a Madrid, o administrase los suyos. Lo llamativo del asunto de todas maneras, para los contadores, era que Orfila no proponía una caución por incumplimiento de lo estipulado.

En la cuarta ofrecía abonar a la real Hacienda una porción de los beneficios netos que resultasen de su administración a fin de cada año. Omite sin embargo, si esa cantidad sería tanto para los derechos reales, como para los municipales.

En la quinta pedía que el gobierno cediese las oficinas de recaudación, almacenes y depósitos, así como los efectos existentes en ellos bajo inventario y la obligación de devolver el todo cuando concluyese el arriendo. Además exigía del gobierno toda su protección y auxilio, cuando fuera necesario para reprimir abusos, fraudes, etc. Lo referente a los fraudes es considerado justo por los contadores. En cuanto a lo primero —las oficinas— el gobierno tendría que resolver lo que creyera conveniente, pero Madrid en ningún caso debía ceder sus edificios o habitaciones; sino que el arrendatario debía pagar un alquiler por ellos, igual que con los efectos y enseres.

Los directores generales de rentas, con fecha de 28 de abril de 1825, comunicaron mediante real Orden que se había denegado a Antonio Orfila Rotger el arrendamiento de la recaudación de los derechos de puertas, por no creerla ventajosa ni fundada en datos fijos con los que puedan regularse los resultados.

2. LAS REFORMAS DE LOPEZ BALLESTEROS

En diciembre de 1823, López Ballesteros fue nombrado titular de Hacienda, cargo que desempeñó hasta octubre de 1832. Por lo tanto, este ministro prácticamente

se mantuvo en todo el espacio de tiempo que la historiografía liberal ha denominada década ominosa.

El 16 de febrero de 1824 el nuevo ministro ponía en marcha, mediante un paquete de Decretos²⁷, su plan de Hacienda²⁸, que establecía un doble sistema de tributación. Brevemente, se trataba de sustituir la contribución directa por cuatro contribuciones diferentes, cada una con un ámbito territorial distinto: rentas provinciales en Castilla; equivalentes en Aragón; servicio en Navarra; donativo en las Provincias Vascas. Además se añadían otras contribuciones: derecho de puertas en todas las ciudades con más de 3.000 vecinos; contribución de frutos civiles; paja y utensilios; subsidio de comercio.

El 3 de julio de 1824 se publicó la Instrucción general para la recaudación, distribución y cuenta de la real Hacienda. Mandada observar por real Orden de 9 de diciembre de dicho año a partir de 1 de enero de 1825. Y el 10 de noviembre de 1824 se daba la Instrucción para el establecimiento, recaudación y administración de los derechos de puertas²⁹. En ella se decía que en subrogación de las rentas provinciales y Agregadas y de sus equivalentes, la real Hacienda exigiría derechos de puertas en las capitales de provincia, puertos de mar habilitados y pueblos que llegasen a tres mil vecinos³⁰. También se establecía la posibilidad de encabezarse o arrendar los derechos de puertas³¹.

Posteriormente, en la Gaceta de Madrid de 27 de junio de 1826, apareció publi-

²⁷ Real Decreto de 16 de febrero de 1824, estableciendo la renta de salinas. Acompaña la instrucción mandada observar por la Dirección general de rentas en lo concerniente al ramo; Decretos del rey nuestro señor don Fernando VII, tomo VIII, Madrid, 1824, 140-145. Real Decreto, sobre el restableciendo la renta de Tabacos; *Decretos...*, tomo VIII, 146-149. Real Decreto ampliando la real Cédula de 3 de julio de 1794 sobre el uso y clases del papel sellado; *Decretos...*, tomo VIII, 149-172. Real Decreto arreglando el sistema de contribuciones y rentas reales, y estableciendo derechos de puertas en varios pueblos donde no los había —éste es el que más interesa para el objeto de esta investigación—; *Decretos...*, tomo VIII, 172-181. Real Decreto restableciendo la renta de aguardiente y licores; *Decretos...*, tomo VIII, 181-186. Real Decreto mandando que subsista la contribución de paja y utensilios, que se cobró hasta el real Decreto de 30 de mayo de 1817; *Decretos...*, tomo VIII, 186-187. Real Decreto restableciendo la contribución de frutos civiles acordada por Carlos III en 29 de junio de 1785 con las modificaciones establecidas en 11 de junio de 1787; *Decretos...*, tomo VIII, 187-191. Real Decreto por el que se manda contribuir al comercio con 10 millones de reales anuales bajo el nombre de subsidio del comercio, *Decretos...*, tomo VIII, 191-192. Real Decreto concediendo al Reino de Navarra desde el presente año Cortes anuales, según sus antiguos fueros; *Decretos...*, tomo VIII, 192-195. Real Decreto pidiendo a las Provincias Vascongadas el donativo de tres millones de reales anuales, debiendo durar por tres o cuatro años dicho donativo; *Decretos...*, tomo VIII, 195-197. Real Decreto estableciendo en los dominios de Europa la renta del bacalao; *Decretos...*, tomo VIII, 198-200. Real Decreto sobre el arreglo de varios ramos; *Decretos...*, tomo VIII, 200-203. Real Decreto sobre que se forme de nuevo la Junta de aranceles; *Decretos...*, tomo VIII, 203-204.

²⁸ Una explicación de esta reforma en ARTOLA, *Progresistas...*, 113 y ss.; J. FONTANA, *Hacienda y Estado en la crisis final del Antiguo Régimen español, 1823-1833*, Madrid, 1973; F. SUAREZ, «Introducción» a López Ballesteros y la *Hacienda entre 1823-1832*, 5 vols., Pamplona, 1970.

²⁹ *Decretos...*, tomo 9, pp. 337-356.

³⁰ Artículo 1.

³¹ Artículos 111 a 119.

cado un real Decreto fechado el 22 de junio que modificaba el de 16 de febrero de 1824 en la parte relativa a los derechos de puertas³². Se decía en él que habiendo oído el dictamen del Consejo de Estado, se había resuelto que los derechos de puertas únicamente subsistirían en los pueblos en que los había antes de 7 de marzo de 1820, cesando desde luego en todos los demás en que se había ampliado su establecimiento. Al mismo tiempo se establecía la prohibición de arrendar a particulares los derechos de puertas; quedando, en todo lo demás, vigente el real Decreto de 1824 y la Instrucción de la materia de 10 de noviembre de 1824.

Por real Decreto de 3 de abril de 1824 se creó la dirección general de los Propios y Arbitrios del Reino. Conociéndose la necesidad de que la administración de los ramos de propios y arbitrios del Reino se despachasen con rapidez³³, después de oír al Consejo de Ministros, el monarca vino a crear una dirección general con inmediata y única dependencia del secretario de estado y del despacho de Hacienda; a su cabeza estaría un director general³⁴. Ésto suponía que el Consejo real dejaba de tener competencias en los expresados ramos. Los negocios contenciosos que se suscitasen en las provincias se determinarían por los intendentes de ellas, con las apelaciones del Consejo de Hacienda en sala de Justicia.

Por real Orden del día siguiente se encargó al director general que en comisión de propios y arbitrios del Reino propusiera la planta que podía darse a la oficina de la misma dirección, a la contaduría general y oficinas subalternas. Mientras se formaban los reglamentos convenientes, las funciones de los contadores serían desempeñadas por los oficiales de las contadurías de propios. Los ayuntamientos y juntas de aquellos ramos debían seguir como hasta el momento, observándose las instrucciones y órdenes que regían; y entendiéndose con los intendentes, quienes obedecerían cuanto les encargase el Director.

3. LA INSTRUCCION DE 1828

El real Decreto de 13 de octubre aprobaba y mandaba observar la *Instrucción para el arreglo de la administración y de la cuenta y razón general de los propios y arbitrios del reino*³⁵. Estas disposiciones —el Decreto y la Instrucción— venían a concretar el real Decreto de 3 de abril de 1824, que creaba —como ya se explicó— una dirección que se ocupaba en exclusiva de los propios y arbitrios, sin otros cometidos

³² Curiosamente ni M. Artola (*Progresistas...*, pp. 117 y ss.), ni F. Estapé (*La reforma...*, pp. 151 y ss.), ni J. Martín Niño (*La revolución...*, pp. 297 y ss.) hacen referencia a este Decreto, lo que lleva a una serie de conclusiones equivocadas. Para M. Artola los derechos de puertas se extenderían por 73 nuevas poblaciones, y J. Martín Niño constata que el impuesto de puertas nunca llegó a alcanzar el ámbito geográfico previsto en el Decreto de 1824.

³³ Como últimamente se había recordado en el Decreto de 30 de agosto de 1796 y en el de 15 de noviembre de 1818.

³⁴ En AVM-S 2-499-16 y 2-171-10 aparece la creación de una Dirección general de propios del Reino y el nombramiento de Niceto Larreta. En AVM-S 2-499-13 aparece el nombramiento del Tesorero de la Dirección general, hecho en Santiago López Regañón.

³⁵ Ejemplares impresos del real Decreto y la Instrucción en AVM-S 1-219-31 y 6-141-30. También aparece en *Decretos...*, tomo 13, pp. 320-349.

que pudieran distraerla de este importante ramo. Ahora se aprobaba la Instrucción o Reglamento de la organización general del ramo, para mejorar el régimen administrativo de éste, como decía el nuevo real Decreto³⁶.

a) *Una nueva organización*

La Instrucción encargaba al gobierno de los propios y arbitrios a una Dirección general, en conformidad con lo que disponía el real Decreto de 3 de abril de 1824. Esa dirección constaba de un director general, con su secretaría; y de una contaduría general³⁷.

Existía un archivo, común para dichas oficinas³⁸. Los sueldos y gastos de estas oficinas generales serían satisfechos por un pagador, que también estaría encargado de recibir los fondos destinados a este fin por el director general³⁹.

Para solucionar los conflictos jurídicos que surgieran en el desarrollo de su funcionamiento, la dirección contaría con un abogado consultor⁴⁰.

En cada provincia existía un subdelegado, para el gobierno de los propios y arbitrios de esos lugares. La subdelegación estaba formada —además de por el intendente— por un contador principal, un tesorero y un visitador⁴¹.

La administración inmediata de esos ramos continuaba en los pueblos a cargo de los ayuntamientos y juntas —que ahora se diseñaban como dependientes de los cabildos—, tal y como se disponía en la Instrucción de 30 de julio de 1760⁴².

b) *El director general*

El director general era la autoridad superior directiva y gubernativa del ramo, en dependencia directa de la secretaría del despacho de Hacienda⁴³. Era también el conducto ordinario de comunicación entre el ministerio y los encargados del gobierno de los propios y arbitrios⁴⁴. En su ausencia era sustituido por el contador general⁴⁵. Para realizar su cometido contaba con el auxilio de la contaduría general, siempre que fuese necesario o preceptivo⁴⁶.

³⁶ La Instrucción era un impreso largo, de 25 páginas apretadas; se dividía en nueve capítulos, más uno introductorio, de ocho artículos. El primero trataba sobre el director general, siete artículos. El segundo de la Contaduría General, ocho artículos. El tercero del pagador de las oficinas generales, sólo uno. El cuarto del archivo general, dos artículos. El quinto de los subdelegados, nueve artículos. El sexto de los contadores principales, cinco artículos. El séptimo de los tesoreros, seis artículos. El octavo de los visitadores, seis artículos. El noveno de los ayuntamientos, catorce artículos.

³⁷ Disposiciones preliminares, a. 1. Estas oficinas contaban con los empleados necesarios para su funcionamiento. Disposiciones preliminares, a. 2.

³⁸ Disposiciones preliminares, a. 3.

³⁹ Disposiciones preliminares, a. 4.

⁴⁰ Disposiciones preliminares, a. 5.

⁴¹ Disposiciones preliminares, a. 6.

⁴² Disposiciones preliminares, a. 7.

⁴³ Capítulo I, a. 1.

⁴⁴ Capítulo II, a. 2.

⁴⁵ Capítulo I, a. 5.

⁴⁶ Capítulo I, a. 3.

De esta forma sus facultades eran amplísimas, el artículo 6 del capítulo primero señalaba hasta 37 distintas, en un intento de agotar la discrecionalidad, que señala al director como el responsable del correcto desenvolvimiento de los propios y arbitrios de los distintos pueblos del Reino⁴⁷.

Por otro lado se le encargó que formara un reglamento para el gobierno interior de su secretaría y del archivo⁴⁸.

c) *La contaduría general*

La contaduría general era la autoridad superior en todo lo relativo a la contabilidad, fiscalización e intervención de la administración, recaudación e inversión de los fondos de propios y arbitrios. Estaba bajo las órdenes del director general, sin perjuicio de dirigirse inmediatamente al ministerio en determinados, así como exigir directamente los documentos y noticias que le fueran necesarias para el desempeño de sus funciones⁴⁹, como eran los distintos datos económicos⁵⁰.

⁴⁷ Era el responsable de que los jefes y empleados en los ramos de su dependencia cumplieran con sus obligaciones; debía circular los reales decretos, órdenes, instrucciones y reglamentos que se expedieran para el gobierno de los propios y arbitrios; tenía que promover —proponiendo al ministerio las reformas y medidas que estimase oportunas— el aumento de sus valores, la mejora de sus fincas y de su administración, así como la reducción de sus cargas o gravámenes; examinar el número y clase de los predios rústicos y urbanos que en cada pueblo correspondan a los propios; idem de los censos u otros derechos que haya en favor de los propios; exigir relaciones de los débitos existentes a favor del ramo; tomar conocimiento de los arbitrios concedidos a los pueblos; cuidar de que se renueven y rectifiquen los apeos, deslindes y amojonamientos de las fincas pertenecientes a estos ramos; disponer el nuevo reconocimiento de los censos que existan a favor de los citados propios; examinar el estado de los arrendamientos de sus fincas; hacer que se pongan en arrendamiento todas las fincas pertenecientes a estos ramos, sin permitir se pongan en administración; disponer que se pongan en arriendo los arbitrios concedidos o que se concedan a los pueblos en que no haya establecida administración; reconocer los reglamentos vigentes en que se determinan los gastos que pueden hacer los ayuntamientos de los caudales de los propios y arbitrios; impedir que los ayuntamientos y juntas graven dichos fondos, concediendo jubilaciones a los empleados o sirvientes asalariados de los pueblos, señalando pensiones a las viudas o pupilos de los mismos, ect; enterarse del número, calidad e importe de los censos que se hallen impuestos sobre los propios y arbitrios; formar un expediente para averiguar las fincas de propios que se hubiesen vendido desde 1808 sin las debidas facultades; procurar que se active todo lo posible la renovación de los reglamentos existentes de los pueblos; adoptar los medios para que se forme el patrimonio de los pueblos para reglamentarlo; aprobar los gastos de las oficinas de las provincias; señalar las cantidades con que deben afianzar los empleados que manejen caudales sus responsabilidades; librar contra el pagador de las oficinas generales el importe mensual de sus sueldos y gastos; resolver todos los asuntos relativos a dotaciones de sirvientes de los pueblos; tener conocimiento del número, clase y circunstancias de los empleados efectivos, cesantes y jubilados de estos ramos; cuidar de que a dichos empleados se les guarden las honras y distinciones que les correspondan; proponer sujetos idoneos para los empleos; supender de empleo y sueldo a los empleados cuando proceda; proponer las jubilaciones y traslados de empleados, así como conceder las licencias oportunas, etc.

⁴⁸ Capítulo I, a. 7.

⁴⁹ Capítulo II, a. 1.

⁵⁰ Noticias de fincas, derechos y pertenencias de estos ramos; y los valores o productos que rindieren, al igual que las obligaciones y cargas que tuvieran. Capítulo II, a. 2.

Dadas estas características se deducían unas facultades amplias en materia contable para la contaduría⁵¹. También debía formar y modificar cuando fuese conveniente su reglamento de gobierno interior⁵².

d) *El pagador de las oficinas generales*

El pagador de las oficinas generales se encargaba de cobrar las libranzas que expedía el director general contra las dependencias de las provincias; y pagar los libramientos por sueldos y gastos de las oficinas. Obviamente debía llevar cuenta de estos cobros y pagos, realizar arqueos, y rendir cuenta⁵³. También nombraba al cajero⁵⁴.

e) *El archivo general*

El archivo se configuraba como una oficina auxiliar de la dirección y contaduría general, para facilitar el trabajo de éstas⁵⁵. El archivero proponía los empleados que necesitase, así como el reglamento para su funcionamiento⁵⁶.

f) *Los subdelegados*

Los intendentes, como subdelegados de la dirección general, eran en sus respectivas provincias la autoridad superior en todo lo relativo al gobierno, administración, recaudación, distribución, conservación y fomento de los propios y arbitrios. Así como los jefes de los empleados en todo lo concerniente al desempeño de sus obligaciones⁵⁷.

Estos subdelegados eran el conducto de comunicación entre la dirección general y las dependencias de propios y arbitrios de las provincias en todos los asuntos gubernativos y generales⁵⁸. En su ausencia o enfermedad era sustituido por los contadores principales⁵⁹.

⁵¹ Llevar cuenta formal de los ramos; practicar los repartimientos entre provincias de las contribuciones que por cualquier calamidad pública o necesidad urgente hubiere que cargar sobre los fondos municipales; examinar y rectificar los repartimientos que formen las contadurías para los cupos de los pueblos de cada una; pasar cada mes de junio al director general, para que lo pase al ministerio, un estado del ramo; formar cada cuatro meses tres estados del producto del contingente, lo invertido en sueldos y gastos de oficina, y lo ingresado en la real caja de amortización; dar un dictamen acerca de los gastos extraordinarios que pudieren ocurrir en las oficinas de las provincias y a favor del pagador de aquellas; asistir a los arqueos mensuales y anuales de la pagaduría de las oficinas generales; vigilar que se verifique con puntualidad la presentación de cuentas anuales por los ayuntamientos y juntas de propios en las oficinas de las provincias; cuidar de sus empleados; y otras muchas en unión con las del director general. Asimismo cuidará de que éste cumpla con sus obligaciones. Capítulo II, a. 4.

⁵² Capítulo II, a. 5.

⁵³ Capítulo III, a. 1.

⁵⁴ Capítulo III, a. 2.

⁵⁵ Capítulo IV, a. 1.

⁵⁶ Capítulo IV, a. 2.

⁵⁷ Capítulo V, a. 1.

⁵⁸ Capítulo V, a. 2.

⁵⁹ Capítulo V, a. 6.

Por su condición poseían también un amplio abanico de facultades para desarrollar esa función de bisagra⁶⁰.

Cuando las medidas tomadas para resolver los asuntos de propios y arbitrios no eran suficientes se procedía judicialmente⁶¹.

g) *Los contadores principales*

Los contadores principales tenían en sus respectivas provincias el doble carácter de jefes de la contabilidad e intervención del ramo, por un lado; y por otro el de secretarios de los subdelegados en todo lo concerniente a la parte gubernativa y directiva de los mismos⁶². Sus funciones iban encaminadas en esa doble perspectiva⁶³.

h) *Los tesoreros*

Los tesoreros de rentas eran al mismo tiempo en cada provincia responsables de los caudales de propios que se destinaban a la real caja de amortización, establecimientos u objetos públicos del Estado, y al pago de sueldos y gastos de los empleados y oficinas⁶⁴.

Llevaban la cuenta y razón de la entrada y salida de dichos fondos, y hacían los arqueos correspondientes⁶⁵. No recibían cantidad alguna sin emitir un recibo⁶⁶, ni hacían ningún pago sin el correspondiente libramiento⁶⁷. Los tesoreros tenían que rendir cuenta anual en los veinte primeros días de enero⁶⁸.

⁶⁰ Eran los encargados de comunicar los reales decretos, órdenes, instrucciones y reglamentos, así como las providencias de la Dirección general; aprobar todos los repartimientos, tallas o derramas que se concedan a los pueblos; expedir los apremios y ejecuciones para la cobranza de los débitos que resulten; providenciar lo necesario para que las cuentas de propios y arbitrios se presenten en la forma y épocas prefijadas en la Instrucción de 30 de julio de 1760; conceder el correspondiente permiso a los pueblos para invertir hasta la cantidad de mil reales en gastos urgente; invertir cantidades de propios en ellos mismos para evitar un daño grave; librar los pagos de empleados; conceder licencias; suspender de empleo y sueldo; y muchas otras competencias que ayuden al gobierno de estos ramos por parte de la Dirección central (capítulo V, a. 7).

⁶¹ Capítulo V, a. 8.

⁶² Capítulo VI, a. 1.

⁶³ Entre sus facultades estaba excitar el celo del subdelegado en el cumplimiento de sus funciones, llevar la cuenta formal de los valores y cargas señaladas en los reglamentos particulares de cada pueblo; cuidar que los productos en granos y otros frutos procedentes de los arrendamientos de las fincas de propios se vendan en los tiempos oportunos; asistir a los arqueos mensuales y anuales de los caudales de la tesorería; examinar y reparar las cuentas, formando los resúmenes que se han de enviar a la contaduría general; hacer presente al subdelegado el estado de la cobranza de débitos; expedir las certificaciones de débitos para el despacho de apremios y ejecuciones; tomar razón de las libranzas expedidas por la Dirección general contra las existencias de propios en su respectiva provincia; formar e intervenir las nóminas de sueldos de los empleados y los libramientos de gastos ordinarios y extraordinarios; evacuar los informes que se les pida; corregir «gubernativamente» a los empleados de su dependencia; y otras muchas en unión con el subdelegado en función de sus responsabilidades. Capítulo VI, a. 2.

⁶⁴ Capítulo VII, a. 1.

⁶⁵ Capítulo VII, a. 2.

⁶⁶ Capítulo VII, a. 3.

⁶⁷ Capítulo VII, a. 4.

⁶⁸ Capítulo VII, a. 6.

i) *Los visitadores*

En cada provincia existía un visitador de propios y arbitrios a las inmediatas órdenes del subdelegado⁶⁹; el objeto de estos empleados era impedir cualquier malversación o perjuicio a los propios y arbitrios, y celar sobre la exacta observancia de las normas que existían para su gobierno y administración⁷⁰.

Sus facultades y obligaciones se vinculaban a esas funciones⁷¹. Del resultado de cada visita tenía que formar un expediente, que una vez concluido debía remitir al subdelegado⁷².

j) *Los ayuntamientos*

Los ayuntamientos eran los encargados de la administración de los propios y arbitrios, y de la recaudación e inversión de sus productos, con entera sujeción a los reales decretos, instrucciones y órdenes⁷³. Continuaban existiendo las Juntas establecidas por reales Instrucciones de 3 de febrero de 1745 y 30 de julio de 1760, para hacer más fácil esta administración; pero en representación del ayuntamiento, del que es parte y al que ha de dar mensualmente conocimiento de todas las operaciones realizadas, y presentar a fin de año la cuenta para su examen y aprobación⁷⁴.

Los ayuntamientos dependían de los subdelegados de propios y arbitrios, y facilitarían a estos y a los visitadores cuantos documentos y noticias pidieren⁷⁵.

Eran responsables mancomunadamente de la legítima inversión de los productos de propios y arbitrios, igualmente que de la buena conservación de las fincas⁷⁶.

No podían establecer arbitrios, los que fueran necesarios para cubrir sus atenciones municipales tenían que ser solicitados por conducto del subdelegado, con justificación de la necesidad⁷⁷.

Los ayuntamientos nombraban un depositario de los caudales de propios y arbitrios, que era quien realizaba los libramientos expedidos por la Junta⁷⁸.

⁶⁹ Capítulo VIII, a. 1.

⁷⁰ Capítulo VIII, a. 2.

⁷¹ Eran entre otras: visitar todos los pueblos de la provincia por el orden que señalare el subdelegado, examinando en cada uno si por el ayuntamiento o junta de propios y arbitrios se observan con exactitud las reglas establecidas para la administración de estos ramos e inversiones de sus productos; averiguar si en los reglamentos se encuentran todas las fincas de propios; formar relaciones estadísticas de dicho ramo; investigar si las cantidades que los ayuntamientos o juntas datan en sus cuentas han sido realmente invertidas en sus objetos; examinar la legitimidad de los gastos aprobados para obras públicas u otros objetos de utilidad común; reconocer todos los libros y documentos que tengan relación con dichos ramos; asistir cuando lo viese conveniente a los remates que se celebren en los pueblos para hacer arriendos de fincas de propios u otros de arbitrios, con la facultad de suspender el acto si notare falta de cumplimiento a las formalidades prevenidas por las leyes y órdenes. Capítulo VIII, a. 3.

⁷² Capítulo VIII, a. 4.

⁷³ Capítulo IX, a. 1.

⁷⁴ Capítulo IX, a. 2.

⁷⁵ Capítulo IX, a. 3.

⁷⁶ Capítulo IX, a. 4.

⁷⁷ Capítulo IX, a. 6.

⁷⁸ Capítulo IX, a. 13.

A excepción de las fincas destinadas a uso público, todas las demás tenían que estar arrendadas, y solamente se pondrían en administración cuando no hubiese arrendador que ofreciera precio justo⁷⁹. Esos contratos se harían por dos, cuatro o seis años⁸⁰. De los remates realizados se remitía testimonio al subdelegado⁸¹. Los arrendadores y administradores tenían que dejar una fianza para el desempeño de su cargo o contrato⁸².

4. LA INSTRUCCION Y EL AYUNTAMIENTO MADRILEÑO

El 18 de noviembre de 1828, el ayuntamiento madrileño comunicó mediante un oficio dirigido al director general de propios y arbitrios del Reino que era consciente de lo que disponía la nueva normativa, y pedía más ejemplares de la Instrucción para cada uno de los capitulares y oficiales principales⁸³. Como era habitual siempre que se trataban asuntos hacendísticos, se pidió el parecer de los contadores. Éstos afirmaron⁸⁴ que cuanto se decía en la Instrucción no era más que una «bien coordinada Recopilación de lo que sabiamente estableció el Supremo Consejo Real de Castilla, para la administración, gobierno y distribución de los propios y arbitrios del Reyno, bajo su dirección y conocimiento en diferentes órdenes e instrucciones⁸⁵». Sí existía alguna novedad como era el establecimiento —con lo que se aumentaba el control— de la secretaría, pagaduría y archivo de la dirección general de Propios, y la creación de visitadores; pero en lo esencial era una continuación de lo que el Consejo venía diciendo.

A pesar de ello los contadores consideraban que el real Decreto era para la generalidad del Reino, pero no para Madrid; y que éste debía continuar sin cambio, a pesar de lo dicho en el real Decreto. Y esto porque esa disposición no distingue cualquier aldea de Madrid, que era villa y capital del Reino. De ahí que Madrid debía seguir dependiendo del ministerio de Gracia y Justicia, y no del de Hacienda.

El ayuntamiento, después de haber estudiado los pareceres del personero y del procurador general, se reunió el 24 de enero de 1829 y acordó que la administración de los propios y arbitrios debía continuar como hasta el momento. El ayuntamiento debía seguir en la posesión en que se hallaba de su administración, recaudación y distribución, hasta que se hiciese constar expresamente que el reglamento —la Instrucción de 1828— también debía aplicarse a Madrid, derogándose por tanto cuantas leyes especiales tenía concedidas.

Aparecía así Madrid a los ojos de los munícipes como una ciudad con un estatu-

⁷⁹ Capítulo IX, a. 9.

⁸⁰ Capítulo IX, a. 10.

⁸¹ Capítulo IX, a. 11.

⁸² Capítulo IX, a. 12.

⁸³ Habían enviado 20 ejemplares y ahora se pedían 36 más (AVM-S 1-219-31).

⁸⁴ En un dictamen fechado el 29 de noviembre de 1828.

⁸⁵ Estas órdenes eran fundamentalmente las de 3 de febrero de 1745; 30 de julio de 1760, con los adicionales de 8 y 13 de diciembre del mismo año; 14 de febrero de 1761, etc.

to jurídico especial, dotado a través de los años, por su peculiaridad de ser la capital del Reino⁸⁶. De ahí que, en vez de las 52 leyes que sobre los propios y arbitrios aparecían en la Novísima Recopilación y que eran para todo el Reino, el Consejo de Castilla, conociendo la diversidad de este ayuntamiento, sus fondos y estar cerca de la «Morada de los Augustos soberanos» le dotara en 1766 de un reglamento particular especialísimo y diverso en parte de dichas leyes, y que le permitía hacer frente a sus peculiares cuidados y atenciones⁸⁷.

De esta forma Madrid aparecía a la vista del ayuntamiento regida por leyes y decretos dirigidos sólo a Madrid; situación jurídica que la nueva Instrucción no podía alterar, a menos que así se dijera específicamente: Madrid por su propia constitución estaba exento de la regla general.

Pero si hubiera que aplicar este reglamento, se consideraría: «deprescino de su Gefe, Ayuntamiento y Junta de Propios; impracticable en la Corte; destructor de los privilegios y Reales órdenes con que apoya el sistema judicial y gubernativo de sus fondos; absorvedor de una suma considerable con que se destruye a los Acreedores de Madrid, por sisas, Refacción, Hospitales, Casas de Misericordia, y otros que no deven sufrir un 4 por ciento con que la Yntendencia se incautará; y finalmente, demostrará que anonada a V. E. hasta el estado de sufrir el yugo más pesado que jamás ha tenido, y sin conseguir el beneficio de la causa pública, que es en todas ocasiones el desvelo de esta corporación.»

Y todo esto en una situación en la que se arrastraba anualmente un déficit de cuatro millones de reales, según el procurador.

El problema estaba, decían los contadores, en lo que disponían los capítulos cinco —sobre facultades de los subdelegados—, seis —de los contadores principales de las provincias— y siete —de los tesoreros de las mismas—. Es decir, los capítulos más novedosos y que suponían —esta era la realidad del rechazo— la edificación de una trama de control y administración de las rentas municipales al margen del ayuntamiento, pues aunque este aparecía en el nuevo organigrama lo hacía como el último eslabón, con competencias prácticamente residuales. El subdelegado, el contador y el tesorero iban a ser los protagonistas, los que manejaban la hacienda municipal y no Madrid.

La municipalidad no se había relacionado con esas instancias nunca, sino siempre con el Consejo y con la contaduría general de propios y arbitrios del Reino. Y desde abril de 1824 con el director general, con entera sujeción a los reales decretos, instrucciones, órdenes y reglamento aprobados por el rey y comunicados por el ministerio de Estado de Gracia y Justicia.

El hecho fue que la Instrucción de 1828 no se aplicó en Madrid, y éste siguió rigiéndose por la de 1818 hasta que a uno de marzo de 1830 comenzó a funcionar la Empresa de derechos de puertas. Hasta ese momento siguió por lo tanto con la sola

⁸⁶ Sobre esa peculiaridad, Carmen DE LA GUARDIA, *Conflicto y reforma...*, p. 80.

⁸⁷ Esto decía el ayuntamiento, pero reglamentos de ese tipo hubo cerca de 14.000 y no sólo el de Madrid.

intervención de los derechos de puertas, exceptuando la recaudación que hacía de los arbitrios para acopio de trigo⁸⁸, que habían sido concedidos por real Orden de 20 de diciembre de 1825. El sistema siguió funcionando mal⁸⁹ y la recaudación dejaba que desear, los ingresos se dañaban⁹⁰.

5. EL PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS DE LA MONARQUÍA PARA 1830: CONSECUENCIAS MUNICIPALES

En la *Gaceta* del 26 de enero se publicaron una serie de reales Decretos con fecha de 31 de diciembre de 1829 que establecían nuevas imposiciones para cubrir el presupuesto general de gastos de la Monarquía para 1830. Entre otras medidas para socorrer la deuda del Estado se fijaba desde uno de enero una imposición temporal consistente en la exacción del cinco por ciento del producto de las rentas y oficios enajenados de la corona, y del de los arbitrios municipales o particulares⁹¹.

Los contadores opinaban que el Decreto no afectaba a Madrid por varias razones⁹². En primer lugar porque para que tuviera pleno efecto no era suficiente que apareciese en la *Gaceta*, sino que era necesario que se diera a conocer por el ministerio de la real Hacienda, dirección general de rentas o intendentes⁹³ al ayuntamiento, real junta de hospitales, inspector general del benemérito cuerpo de voluntarios realistas y protector general del real canal de Manzanares. Además existía una real Orden de uno de abril de 1829 para que ninguna de las disposiciones que se tomaran sobre los ramos relacionados con los arbitrios hicieran innovación sin ponerse antes de acuerdo con el corregidor. Por otro lado el ayuntamiento era el administrador de los derechos de sisas y éstas se hallaban libres de toda contribución y repartimiento con arreglo al privilegio de Enrique IV dado en Toro el 15 de julio de 1465, y confirmado por los Reyes Católicos. La real Junta de hospi-

⁸⁸ Con ocasión de los nuevos arbitrios que se impusieron por real Orden de 20 de diciembre de 1825 para acopio de trigo se mandó hacer la recaudación de éstos a los empleados municipales en las intervenciones, a partir de 1 de abril de 1826. Esto se hizo sin la menor oposición de los empleados de la real Hacienda, y se hizo hasta el comienzo del arriendo. Por real Decreto de 18 de febrero de 1829 y real Cédula del Consejo de 8 de marzo comunicada en 6 de abril se consignó al ayuntamiento de Madrid para la traída de aguas el arbitrio de la mitad del impuesto de cuatro reales en arroba de vino, aguardiente y licores, que estaba destinado a obras de la plaza, y se encargó su recaudación exclusivamente a los empleados municipales, pero no se verificó (AVM-S 3-295-124).

⁸⁹ Un informe pedido por el corregidor a la visita en 11 de octubre de 1828 se manifestaba ese estado de abusos, y demás corruptelas. Un ejemplo que ilustra, es que como consecuencia del informe se procedió a la jubilación del interventor de la Puerta de Toledo, hombre de avanzada edad que se hallaba ciego: poca intervención podría hacer (AVM-S 3-295-124).

⁹⁰ AVM-S 3-295-98, se dieron una serie de disposiciones para que los derechos menores de villa se pudiesen en las administraciones de puertas en unas cajas separadas, en un intento de uniformar la recaudación y mejorarla.

⁹¹ AVM-S 3-296-88.

⁹² AVM-S 3-296-21.

⁹³ El intendente era el corregidor y superintendente general de sisas.

tales se hallaba interesada en los derechos de puertas que cobraba Madrid y le pertenecían⁹⁴ por repetidas reales Órdenes. Lo mismo ocurría con los voluntarios realistas y obras del real canal de Manzanares.

El real Decreto decía que el cinco por ciento era del producto y para saberse el producto era necesario deducir las cargas y formar la liquidación con acuerdo de los interesados, cosa que no se había hecho. Además no se habían comunicado las reglas que tenían que proponerse para su recaudación.

Pero ante la perplejidad del ayuntamiento se le retuvo automáticamente el importe. Éste elevó una súplica al rey, en la que exponía la penuria de medios en la que se encontraba el municipio, y que era ocasionada por los crecidos tributos que sobre los derechos de puertas se habían impuesto desde 1805; situación que esta exacción agravaba.

Pero las necesidades de la real Hacienda eran lo primero⁹⁵ y por real Orden comunicada el 15 de septiembre de 1831 se resolvió que los referidos arbitrios de sisas debían satisfacer el expresado cinco por ciento, bajo las reglas prescritas en el artículo 16 de la Instrucción de 29 de julio de 1830.

Estas mismas necesidades motivaron la creación el mismo año de la contribución conocida con el nombre de paja y utensilios, por la cantidad de 2.126.550 reales cada año, que era el cupo repartido a Madrid; con esto la penuria no hacía sino aumentar. El ayuntamiento reclamó que se modificase la cuota, o que se sustituyese con otros arbitrios, pero no hubo respuesta. Con fecha 28 de marzo de 1835 el ayuntamiento debía por este motivo 11.255.519 reales⁹⁶.

6. LA NUEVA EMPRESA DE LOS DERECHOS DE PUERTAS

El secretario de estado y del despacho de Hacienda comunicó, el 15 de febrero de 1830, a la dirección general de rentas una real Orden en la que se expresaba el arriendo general de los derechos de puertas y de los arbitrios municipales y particulares que se cobran en las capitales de provincia y puertos habilitados, celebrado por esa dirección y por el contador general de valores con Felipe Riera⁹⁷. El monarca aprobó la escritura de arriendo en todos sus puntos, y mandó que se llevase a efecto de inmediato, en los términos y bajo las condiciones pactadas.

Felipe Riera era, como ha explicado J. Fontana⁹⁸, un hombre de negocios que había mantenido numerosos tratos con el gobierno. Propuso arrendar por cinco

⁹⁴ En el aceite, carnero y vaca.

⁹⁵ Hasta tal punto que en un pago de atrasos del año 1829 se cargó también este 5 por 100, lo que ocasionó la protesta de la contaduría por ser anterior a la vigencia del Decreto (AVM-S 3-296-88).

⁹⁶ Cantidad que empezó a descontarse de los derechos de puertas (AVM-S 4-4-8).

⁹⁷ La real Orden se remitía a un oficio del director general y del contador general, de fecha 13 de febrero de 1830, comunicado al secretario de estado y despacho de Hacienda, sobre la escritura de arriendo. Sobre el arriendo, mientras no se diga lo contrario, me remito a AVM-S 3-296-87.

⁹⁸ *Hacienda y Estado...*, pp. 101 y 102.

años la percepción de los derechos de puertas, dando a la Hacienda 40 millones de aumento sobre lo que importase el año común del último quinquenio, además de pagar a los ayuntamientos y demás partícipes. Se discutió en un consejo de ministros ampliado, donde el propio López Ballesteros aprobó el arriendo con la finalidad de poder conocer cuánto podía rendir en realidad esta imposición, para aprovechar esta experiencia⁹⁹.

a) *Las condiciones del arriendo*

En estas condiciones se determinaba que los directores generales de rentas y el contador general de valores, en nombre y representación de la real Hacienda daban, y Felipe Riera recibía en arrendamiento, por término de cinco años, los derechos de puertas que se cobraban en todas las capitales de provincia y puertos habilitados, donde se hallaban establecidos, o debían establecerse, con inclusión de los derechos municipales y arbitrios locales y temporales que la real Hacienda, o cualquier corporación o persona administraba y recaudaba en dichas capitales y puertos¹⁰⁰.

Con ello, y como ha dicho Artola¹⁰¹, «después de casi un siglo de administración fiscal pública, se volvía al negocio de los particulares sin librarse por entero de dudas y vacilaciones...»

El arriendo general era una empresa, al cargo de Felipe Riera, que se denominaba *Empresa de los Derechos de Puertas*. Empezó a funcionar el uno de marzo de 1830, y el arriendo finalizaría a fin de febrero de 1835¹⁰².

Felipe Riera pagaría a la real Hacienda, por precio de este arriendo, la cantidad anual que resultase como valor líquido de lo que hubieran tenido dichos derechos reales en el año común de un quinquenio, que se formase desde 1825 a 1829¹⁰³.

El mismo Felipe Riera pagaría también a las corporaciones, o particulares, partícipes de los derechos municipales y arbitrios locales y temporales, la cantidad que resultase del año común del mismo quinquenio, o cuatrienio, trienio, bienio o época de donde se pudiera deducir un producto común, según el tiempo que llevasen de ejercicio esas concesiones reales¹⁰⁴.

La contaduría general de valores era la encargada de realizar los citados quinquenios, con el conocimiento del empresario, y con las distinciones que estuvieran convenidas¹⁰⁵.

No se incluían en el arriendo los derechos que se cobraban del aguardiente y li-

⁹⁹ J. Fontana explica que el rendimiento bruto de los derechos en un año común era de 53.4 millones de reales. Riera pagó 60, a pesar de que Zaragoza y Santander pudieron eludir su inclusión en el arrendamiento general.

¹⁰⁰ Primera condición.

¹⁰¹ ARTOLA, *Progresistas...*, 122.

¹⁰² Segunda condición.

¹⁰³ Tercera condición.

¹⁰⁴ Cuarta condición.

¹⁰⁵ Quinta condición.

cores, como renta separada. Ni tampoco los que correspondían a otras rentas diferentes¹⁰⁶.

El pago del valor del arriendo se realizaría en mesadas adelantadas, que ingresaría en los ocho primeros días de cada mes, en las respectivas tesorerías o depositarias¹⁰⁷. Y, en las mismas condiciones se haría la entrega a los partícipes¹⁰⁸. Mientras no se hicieran los quinquenios, los pagos de las mensualidades se harían por lo que existía en el momento en la contaduría general de valores¹⁰⁹.

En el pago de los derechos municipales y locales, la empresa se limitaría a entregar la totalidad de su importe, aunque en la exacción llevase cuenta separada del mismo. La liquidación y distribución respectiva a los mismos partícipes, según las concesiones que disfrutasen, eran del cargo de las oficinas de rentas¹¹⁰.

De esta forma lo que hacía la empresa era subrogar en la acción y funciones a la real Hacienda. Por ello el gobierno dispensaba a la empresa toda la protección y auxilio de que gozaban los empleados de la real Hacienda¹¹¹. La exacción de los derechos de puertas y de los arbitrios tenía que sujetarse absolutamente a las tarifas y aranceles aprobados por el rey. Y su administración a la Instrucción de 10 de noviembre de 1824, Adicional de 4 de enero de 1830 y reales Órdenes antiguas no derogadas¹¹². La empresa no podía por lo tanto modificar los derechos señalados en las tarifas y órdenes, ni para aumentar, ni para disminuir las cuotas¹¹³.

En las guías que se expedían por la administración de rentas para los movimientos de los géneros, frutos y efectos, el representante de la empresa tenía la misma intervención que hasta el momento venían desempeñando los administradores del derecho de puertas. Para obtener la guía era imprescindible que los géneros se presentasen en la administración¹¹⁴.

Las capitales que se encontraban encabezadas, subsistirían sin variación hasta el final del encabezamiento¹¹⁵.

Si el monarca viera oportuno hacer alguna exención en el derecho de puertas, se haría la indemnización necesaria a la empresa¹¹⁶.

¹⁰⁶ Sexta condición.

¹⁰⁷ Posteriormente por real Orden de 24 de junio de 1830, y mediando consentimiento voluntario de Felipe Riera, se mandó que semanalmente se liquidase lo que correspondía a los partícipes de arbitrios en las puertas, con arreglo al real Decreto de 26 de enero de 1818 y otras órdenes posteriores (AVM-S 3-295-112). Aunque esto luego no se cumplió y las entregas se hicieron mensuales, de forma fraccionada y cuando el arrendador tenía numerario disponible (AVM-S 3-295-84 y 3-296-87).

¹⁰⁸ Séptima condición.

¹⁰⁹ Condición ventidós.

¹¹⁰ Octava condición.

¹¹¹ Condición ventitrés.

¹¹² Novena condición.

¹¹³ Décima condición. Por ejemplo, una vez efectuado el arriendo la empresa pidió reducir los derechos de entrada del cordero a diez reales por cabeza, y por real Orden de 1831 se le autorizó (AVM-S 3-296-17).

¹¹⁴ Condición once.

¹¹⁵ Condición doce.

¹¹⁶ Condición trece.

Era competencia de la real Hacienda acabar de fijar la línea de circunferencia o radios de las capitales de provincia y puertos habilitados, donde no se hubiese cumplido con lo que previniese el artículo 9 de la Instrucción de 10 de noviembre de 1824¹¹⁷.

La empresa tenía que hacerse cargo de todos los empleados que trabajaban para la real Hacienda en las fieldades, intervenciones, visitas y dependencias de las puertas; abonándoles las dotaciones que disfrutaban y percibían de la real Hacienda. Estas nóminas podían ser alteradas para su aumento, pero nunca para disminuirlas, mientras permanecieran los empleados en servicio activo¹¹⁸. La empresa podía por contraposición ocupar a los empleados que quisiera, y encargarle lo que considerase útil y conveniente para el mejor servicio de la administración, recaudación y visita de puertas, mudándolos a los puntos que le acomodase dentro de la capital o puerto¹¹⁹.

Los servicios prestados por los empleados de la real Hacienda a la empresa, serían considerados como prestados a la real Hacienda¹²⁰. A los empleados a quienes la empresa no diera ocupación se les abonaría las dos terceras partes de su sueldo mientras ella o el gobierno no los destinasen a algún cometido¹²¹.

Las instrucciones para la mejor recaudación, que se habían puesto en marcha en las capitales de provincia y puertos habilitados, con arreglo al a. 20 de la Instrucción de 10 de noviembre de 1824, sufrirían las modificaciones que determinase la empresa¹²².

Para la recaudación de los derechos sobre artículos que por su naturaleza tenían que adeudarse en la aduana o en la administración, y no en las mismas puertas, se haría el reconocimiento de los géneros y efectos al mismo tiempo que los vistas de las aduanas hicieran el correspondiente a las rentas generales¹²³.

b) *El arrendamiento en el municipio*

La dirección y contaduría general se encargaron de disponer lo necesario para el cumplimiento de lo acordado¹²⁴. El 24 de febrero López Ballesteros escribió al corregidor para que hiciera lo necesario de forma que el uno de marzo todo estuviera en orden.

El 23 de febrero la municipalidad estudió la real Orden y pidió a los contadores que informaran sobre la misma. El ayuntamiento madrileño encargó al corregidor para que, como superintendente de sisas, se encargase de dar las órdenes oportunas para el cumplimiento de lo acordado¹²⁵.

¹¹⁷ Condición catorce.

¹¹⁸ Condición quince.

¹¹⁹ Condición dieciseis.

¹²⁰ Condición diecisiete.

¹²¹ Condición dieciocho.

¹²² Condición veinte.

¹²³ Condición ventiuna.

¹²⁴ El 16 de febrero de 1830 (AVM-S 3-296-87).

¹²⁵ El 26 de febrero.

La contaduría de intervención de arcas de la tesorería general de la villa, en unión con la de rentas de la provincia, formó un estado¹²⁶ en que se manifestaban los productos que habían tenido, desde 1 de enero de 1825 hasta 31 de diciembre de 1829, los derechos municipales de puertas, impuesto de 4 reales en arroba de vino, aguardiente y licores, arbitrios de voluntarios realistas (por carnes y carbón, y por aguardiente), y los concedidos por el rey para acopio de trigo. Éstos vienen señalados del uno al seis respectivamente en el cuadro de la siguiente página. También se facilitó un cuadro resumen, que aparece a continuación del otro.

Los contadores acompañaron estos estados con una nota, donde explicaban que los productos de los excesos de los permisos de las comunidades del año 1829 aún no habían sido liquidados, ni realizado su cobro, por lo que los resultados del quinquenio se verían aumentados. Tampoco se habían realizado otros ingresos¹²⁷, pero que por ser del interior de la población pensaba la contaduría no se incluirían en el arriendo. El aguardiente tampoco lo estaba, aunque como se explicó, por la condición sexta, se prescribió que se expresase en el estado.

Mientras, el arriendo comenzó a funcionar, y a 29 de abril de 1830 se habían ingresado en la tesorería de la villa 2.354.431 reales, correspondientes a los meses de marzo y abril. De ellos 1.354.431 correspondían a marzo, por razón de los derechos municipales, el impuesto de 4 reales en arroba de vino y arbitrios de voluntarios realistas. El millón restante correspondía a dichos ramos en el mes de abril, del que faltaba por entregar 371.958 reales. Lo correspondiente a los arbitrios para el acopio de trigo quedaba en suspenso. Desde el 10 de abril la empresa de arriendo se hizo cargo de ellos por virtud de la real Orden de 5 de abril.

El 30 de abril al ayuntamiento pidió al tesorero general que reclamase a la empresa lo que restaba por abonar. La empresa, a 26 de mayo, había abonado 4.063.295 reales, a razón de 1.354.431 mensuales. Pero la municipalidad hizo ver que según el quinquenio que ella había formado debía recibir del intendente cada mes 1.363.194, y por lo tanto en estos tres meses restaba por ingresar 26.287 reales, a razón de 8.762 mensuales.

El director general de la empresa de derechos de puerta, Felipe Riera¹²⁸, decía que había entregado hasta el momento en la tesorería de esa provincia las mensualidades que se le habían señalado con provisionalidad, para el pago de los derechos de puertas y arbitrios sujetos a la contrata. La diferencia que el ayuntamiento señalaba, debería refundirse en la liquidación definitiva del quinquenio, cuando se hiciera con documentos auténticos y en presencia de la empresa, según lo que estaba estipulado en las condiciones del arriendo. Hasta ese momento, el empresario veía

¹²⁶ De fecha 20 de abril de 1830.

¹²⁷ La mitad de los derechos del azúcar de Manila despachada en la real aduana en 1829, mandada satisfacer por real Orden de 4 de febrero de 1830. Los 8 maravedís en azumbre de cerveza de la que se elabora dentro de esta capital. Los 10 reales para sisas y otros 10 para arbitrios del trigo impuestos en cada cabeza de ganado de cerda de las que crían y degüellan en sus casas los vecinos de esta corte.

¹²⁸ En una exposición suya de 29 de mayo.

	1	2	3	4	5	6	TOTAL
1825	13.514.121	2.469.867	300.094	918.783	75.010	–	17.277.877
1826	13.357.328	2.465.282	294.312	865.726	73.545	–	17.056.195
1827	13.064.168	2.287.505	212.156	848.090	53.009	2.067.715	18.532.645
1828	12.286.126	2.096.097	225.584	838.052	56.402	2.003.745	17.506.009
1829	13.607.760	2.305.586	226.183	867.164	56.593	2.258.881	19.322.169
TOTAL	65.829.505	11.624.338	1.258.330	4.337.818	314.561	6.330.341	89.694.897

	cantidades a percibir	en un año	al mes
derechos municipales puertas	65.829.505	13.165.901	1.097.158
impuesto de 4 rs en arroba de vino	11.624.338	2.324.867	193.738
por los arbitrios de realistas en carnes y carbón	4.337.818	867.563	72.296
por los concedidos para acopio de trigo	6.330.341	2.110.113	175.842
total de todos los ramos	88.122.004	18.468.446	1.539.037

que lo correcto era facilitar las sumas señaladas por la dirección general de rentas y contaduría general de valores, a quienes debían dirigirse en cualquier caso las quejas. Ya que la empresa sólo estaba obligada a pagar las cantidades que provisionalmente se le había señalado, y después las que con su conocimiento se determinasen como precio fijo del arriendo; sin que le fuese permitido entenderse con ninguno de los partícipes para el pago del equivalente a sus arbitrios.

Los contadores de villa respondieron que el estado de los ingresos había sido formado con las certificaciones de los valores que Madrid tenía que recibir, que constaban en la contaduría general de rentas de la provincia. Por indicación del empresario se revisaron y no se modificaron en nada.

Con estas noticias el ayuntamiento escribió al director general de rentas mostrándole el interés de la municipalidad en conocer definitivamente la cantidad que le correspondía mensualmente.

Otro problema era el momento del cobro, pues estaba estipulado en los ocho primeros días del mes y de una vez, condición que no se cumplía en absoluto. De ahí que el ayuntamiento pidiera al intendente que tomase cartas en el asunto. El intendente contestó que no podía facilitar las cantidades de esa forma porque la empresa pasaba a tesorería las entregas en varias partes, lo que por supuesto multiplicaba el trabajo. Así a 17 de junio Madrid, sólo había recibido 1.104.108 reales.

A pesar de todo esto el arrendamiento fue funcionando y dadas las circunstancias se puede decir que bastante bien para lo previsible en el momento. A finales de junio de 1833 el ayuntamiento madrileño había recibido 61.211.134 reales; 612.060 menos de lo estipulado¹²⁹, esto es 61.823.194. Lo que suponía una rebaja inferior al uno por ciento¹³⁰. De esta cantidad correspondía al ayuntamiento por los derechos municipales, esto es sisas, por certificación del intendente¹³¹, la cantidad anual de

¹²⁹ Ese déficit se dividió entre los partícipes: al impuesto de cuatro reales correspondía 110.920; a los arbitrios para el cuerpo de voluntarios realistas 277.693; a los arbitrios para acopio de trigo 4.368; a los derechos municipales 219.078, de los que había que deducir lo que correspondía a los reales hospitales por los 53 maravedís que disfrutaban en arroba de aceite.

¹³⁰ Los datos en AVM-S 3-296-49. Se trata de un oficio del intendente para que el ayuntamiento prestase su conformidad a la cuenta que acompañaba de lo percibido por derechos de puertas desde 1 de marzo de 1830 hasta fin de junio de 1833, conforme a la liquidación practicada por la contaduría general de valores; con la que muestra su conformidad. La municipalidad hizo para ello una cuenta con fecha 30 de julio de 1833, con arreglo al quinquenio formado por la contaduría general de valores. Según esta cuenta el ayuntamiento debía recibir por todos sus derechos por los tres años cumplidos desde 1 de marzo de 1830 a fin de febrero de 1833 a 18.546.958 reales cada uno, 55.640.875. Por los cuatro meses desde 1833 a fin de junio del mismo, 6.182.319. Lo que hacía un total de 61.823.194. Y según la liquidación presentada había recibido 61.972.811 reales. Más el abono de 231.393 que resultaban en la empresa por el acopio de trigo; y 6.924 entregados por el contador de la villa en la real aduana por los productos de ella recaudados en la misma desde 10 de abril hasta 9 de junio de 1830, en que cesó la villa en su recaudación, daban un total de 61.211.134. Con lo que resulta, como se ha dicho arriba un déficit de 612.060 hasta fin de junio de 1833.

¹³¹ Ramón Santillán, intendente honorífico de provincia y contador de todas las rentas de la de Madrid certificaba que en las cantidades anuales señaladas a los diferentes partícipes de los derechos de puertas de esta capital en el quinquenio formado por la Contaduría general de valores, correspondía al ayuntamiento las cantidades dichas (AVM-S 3-296-49).

13.165.901. Monto que se veía aumentado por la quinta parte de 159.656 de excesos de permisos de comunidades devengados en 1829, es decir 31.930 reales. Y también la quinta parte de 56.426 de los derechos de azúcar de Manila correspondiente a 1829, 11.285 reales. Lo que hacía un total de 13.209.116 reales¹³².

En agosto en una real Orden se hacía hincapié en la eficacia de esta empresa de recaudación, que —según ese texto— había establecido una administración más productiva para el real Erario, y que realizaba con puntualidad los ingresos reales. Se puede decir que la real Hacienda estaba contenta con la empresa, otra cosa sucedía en el municipio¹³³.

c) *Los empleados municipales*

Al ponerse en funcionamiento la Empresa de derechos de puertas, se prohibió a los empleados de villa en ellas cualquier función¹³⁴, así como a los de aduana¹³⁵; a pesar de algunos intentos por parte del corregidor en contra¹³⁶. De forma que quedaron cesantes¹³⁷, y fueron agregados a los demás dependientes, mediante las necesidades manifestadas por las distintas dependencias del ayuntamiento. En total eran 39 empleados cesados que sumaban unos sueldos de 302.700 reales, que ten-

¹³² Al impuesto de cuatro reales en arroba de vino correspondía al año 2.358.132. A los arbitrios para el acopio de vino correspondían 2.111.468 reales. Y a los realistas 868.241. Todos habían sufrido un aumento por la quinta parte del exceso de permisos de comunidades devengados en 1829.

¹³³ Esa real Orden, de 18 de agosto de 1831, era para comunicar a todas las autoridades varias disposiciones adoptadas para evitar ciertas palabras contra la Empresa de arriendo de los derechos de puertas. Se habían oídos frases como: ¡Muera la Empresa de arriendo de los derechos de puertas!. A las personas que hacían semejantes declaraciones, la Orden los tildaba de enemigos del trono y de la prosperidad de la Nación (AVM-S 2-167-9).

¹³⁴ En la Junta de propios y sisas de 25 de mayo de 1830 el corregidor hizo presente in voce que a virtud de real Orden comunicada por el ministerio de Gracia y Justicia se había mandado por el rey cesar a los empleados de Madrid en las cinco puertas, y en su cumplimiento se hizo el día 22 (AVM-S 2-190-85).

¹³⁵ Se prohibió a los empleados de villa en la real aduana realizar cualquier recaudación, y tuvieron que abandonar el local en que estaban establecidos porque era necesario para la Empresa (AVM-Cr 1-164-48).

¹³⁶ El corregidor quería que los empleados de la villa permanecieran en las puertas no ya como recaudadores, sino como custodios y vigilantes de lo concerniente a policía, seguridad y salubridad de los géneros. Pero se les contestó por real resolución que esas funciones no las hicieran en las puertas (AVM-Cr 1-164-51).

¹³⁷ Los empleados cesados fueron los siguientes (AVM-S 2-190-85). En la contaduría de intervención de derechos de puertas en la real aduana: un contador, un oficial mayor, un oficial segundo, un oficial tercero, un oficial cuarto, escribiente, vista y fiel de Romana. En la intervención de la puerta de Toledo: interventor, oficial primero de libros, oficial segundo, aforador primero, aforador segundo. Intervención de derechos de la puerta de Atocha: interventor, oficial primero de libros, oficial segundo, aforador primero, aforador segundo. Intervención de la puerta de Alcalá: interventor, oficial de libros, interino. Intervención de la puerta de Segovia: interventor, oficial primero, oficial segundo, aforador primero, aforador segundo. Intervención de la puerta de San Fernando: Interventor, oficial de libros, aforador. Visita municipal: visitador, teniente, aforador primero, aforador segundo, tres guardas, escrivano de sisas. Casa rastro: alcaide y fiel de romana (un solo empleado). Casa matadero (de vacas): alcaide y fiel de romana (un solo empleado).

dría que seguir abonando la municipalidad, en contra de lo que ocurría con la real Hacienda.

7. UN INTENTO DE REFORMA MUNICIPAL EN EL OCASO DEL REINADO

La creación de la secretaría de despacho de estado del Fomento General del Reino, el 5 de noviembre de 1832, supuso que «el gobierno económico y municipal de los pueblos» se incardinó entre sus atribuciones. El nuevo ministerio tomó inmediatamente una serie de medidas encaminadas a efectuar una reforma municipal.

Por el real Decreto de 29 de noviembre de 1832, se ordenó suspender las elecciones hechas por los tribunales territoriales, y que por el momento continuasen en ejercicio las justicias y oficios municipales de ese año¹³⁸.

Otro real Decreto, de 2 de febrero de 1833, mandó proceder a las elecciones de ayuntamientos, permitiendo cierta participación de los vecinos, pues se establecía que las propuestas de individuos enviadas a los tribunales territoriales o capitanes generales para su elección, serían hechas por los individuos del ayuntamiento y por un número igual de vecinos electores que serían los mayores contribuyentes de la población.

Esto supuso, como tantas veces en el periodo ilustrado la petición de informes, cuentas, etc. que nos permiten conocer bien la situación del ayuntamiento y de su hacienda al final del antiguo régimen.

a) *Estado de las cargas, fondos y déficit en 1830*

Según un estado mandado hacer¹³⁹, la villa tuvo unos ingresos totales en 1830 de 15.555.286 reales¹⁴⁰. Y unas cargas de 19.773.409 reales¹⁴¹. Lo que daba un déficit anual de 4.218.122.

¹³⁸ Esta orden se inserta en la inteligencia de la real Cédula de 17 de octubre de 1824, que suprimió toda participación popular en la elección de justicias y cargos municipales, correspondiendo la provisión de éstos a los tribunales territoriales, quienes elegían entre unas ternas propuestas por los ayuntamientos.

¹³⁹ «Estado circunstanciado de los productos en efectivo que ha tenido Madrid en 1830, según el resultado de la cuenta general del señor tesorero de la misma con exclusión de los créditos en papel contra el Estado, cantidades cobradas de atrasos que no pueden servir de presupuesto para un año común y del producto de los ramos que se hallan aplicados a objetos reservados, como son los dos reales en arroba de vino aguardiente y licores para la traída de aguas, el arbitrio de tabernas y derecho de romanas aplicado para la construcción de una casa de corrección, y los que están señalados para el cuerpo de voluntarios realistas. De los gastos comunes ordinarios y extraordinarios que se hallan dotados en el reglamento vigente o en virtud de órdenes posteriores y del déficit que resulta en el día para cubrir dichas cargas» (AVM-Cn 4-155-4, documento 18). Esta memoria se hizo en virtud de acuerdo de 12 de noviembre de 1831 en el que se pedía que la tesorería informase de «los productos, gastos, déficit, causa que lo produce y economías y arbitrios que se podían adoptar» y está fechada en Madrid a 31 de diciembre de 1831.

¹⁴⁰ Productos: fincas de propios, 535.785; bancas y baños, 22.943; cajones, 152.762; memorias aplicadas a la cárcel de villa, 927; memorias aplicadas a la cárcel de corte, 40.571; contraste, 50.747; almotacén, 58.955; alhóndiga, 1.836; peso real, 10.970; censos de fuentes, 17.513; sillas del Pra-

b) *Las causas del déficit*

Las causas del déficit estaban según los contadores en que desde 1805 el municipio había visto aumentar sus gastos, mientras sus rentas no habían tenido apenas modificación. Las nuevas cargas eran muy variadas, los contadores detallaban hasta treinta y dos distintas¹⁴². La mayoría de estos gastos eran directa o indirectamen-

do, 3.500; poda de árboles, 5.323; efectos del pósito, 58.477; prorrato de las alcantarillas, 2.819; décimas de los juzgados, 80.167; intereses de vales, 676; pies de sitio vendidos, 29.009; ventas de plantas del vivero, 3.795; redención de un censo, 4.936; reintegros al caudal común, 43.476; reintegros de la superintendencia de policía, 32.000; derechos de puertas, 13.741.719; ganado de cerda, 2.400; cerveza, 11.501; alumbrado público, 640.769; heces de aceite, 1.700.

- ¹⁴¹ Cargas: por cargas dotadas en el Reglamento de 1766 y consignadas posteriormente en virtud de órdenes reales y del consejo, y «las que por un juicio prudente pueden acontecer anualmente según lo que ha sucedido en otros años de extraordinarios por ocurrencias muy señaladas con autorización real», 18.635.893; 1.171 reales de rédito anual del censo creado a cargo de esta villa a favor del vínculo que posee Antonia Martínez Larraga por el terreno que quedó a beneficio del público en la plazuela del oriente y cuyo primer pago empezó en 1831; el aumento de dos mil reales semanales hecho a la consignación de fontanería en virtud de real orden de 10 de abril de 1831, 104.000; el sueldo del director facultativo del arbolado de Madrid con diez mil reales anuales creado por real provisión de 15 de octubre de 1831, 10.000; los cinco reales diarios a cada uno de los diez porteros supernumerarios que acompañan por las noches a los celadores del alumbrado a consecuencia de real orden de 19 de julio de 1831, 18.250; pensión de tres mil reales señalada a la viuda de don Antonio López Aguado, arquitecto mayor que fue de Madrid en virtud de real orden de 29 de agosto de 1831, 3.000; pensión que goza de tres reales diarios don Vicente Rosado en virtud de real orden de 9 de diciembre de 1830, 1.095; los teatros en administración por Madrid tenían un déficit anual de 1.000.000.

- ¹⁴² 1. Los 70.588 reales y 8 maravedís que desde uno de mayo de 1807 dejó de pagar la real Hacienda a esta villa anualmente por el ajuste alzado de la contribución de ocho mil soldados que cobraba de los pueblos de esta provincia y Madrid quedó con la carga del pago a los interesados efectistas en dicha sisa. 2. La refacción de la tropa de la guarnición de esta plaza que se impuso a Madrid por real orden de 23 de agosto de 1806 y la real Hacienda cobraba o retenía de los derechos de puertas que correspondían a Madrid, y ascendía a la cantidad de 1.733.316 reales. 3. La extinción de los abastos de Madrid cargó sobre los fondos públicos los sueldos y pensiones de sus empleados por virtud de real orden de 10 de septiembre de 1806, anualmente suponía 38.267 reales, más 27.210 que importaban al año los censos que gravitaban sobre el edificio del pósito y sus fincas, lo que hacía un total de 65.477 reales. 4. El aumento de sueldo de los dos tenientes de corregidor, que en el año de 1805 sólo era de 7.700 cada uno y por reales órdenes de 11 de enero y 24 de abril de 1815 se consignaron 36.000 a cada uno de ellos siendo anualmente dicho aumento de 56.600 reales. 5. En 1810 el gobierno intruso impuso a Madrid la carga de los gastos de la manutención de presos pobres de la real cárcel de corte, después de deducidos los productos importaba 100.000 reales. 6. Los 8.511 reales que importaban los réditos de los cesos impuestos sobre el casino de la reina, y que Madrid pagaba desde 1818. 7. Los 120.000 reales señalados a la real casa inclusa de esta corte por vía de consignación extraordinaria por real orden de 31 de diciembre de 1824, 20 de abril y 24 de junio de 1825. 8. El medio sueldo que disfrutaba el «teniente que fue de corregidor» hasta que se le coloque según la real orden publicada en el Consejo en 17 de octubre de 1824: 18.000 reales. 9. El mayor gasto que sufría Madrid por sueldos de los alguaciles, porteros y escribanos del crimen de los juzgados de villa, que en el año de 1830 ascendían a 115.000 reales cuando los productos de décimas aplicados a este objeto que entraron en tesorería en el mismo año solo era de 80.167, resultando haber suplido los fondos públicos 34.832 reales. Esta carga se impuso a Madrid por real orden de 17 de mayo de 1826 mandando que lo que faltase para esta atención se supliere de los fondos municipales. 10. El producto —que antes gozaba Madrid para sus atenciones— de los arbitrios de tabernas y romanas, se hallaban aplicados

te para sanear la Hacienda real: la refacción de tropa, la cárcel real, el cinco por ciento para la real Hacienda, el pago del resguardo, franquicias para hospitales y colegio de niños doctrinos, etc; y otros para aumento de sueldos, nuevas pensiones o necesidades de causa pública.

El total de esas partidas se calculaba en 5.598.053 reales¹⁴³. De ellos aproximadamente el 70 por 100 —casi cuatro millones— correspondían a cargas no munici-

al establecimiento de una casa de corrección en esta corte en virtud de real orden de 17 de diciembre de 1828. En 1830 produjeron 781.905 reales. 11. El importe del cinco por ciento que retenía la real hacienda sobre los derechos municipales de puertas, por real Decreto de 31 de diciembre de 1829, y que ascendió en 1830 a 653.038 reales. 12. El aumento de dos mil reales semanales que se había hecho al ramo de fontanería en virtud de real Orden de 10 de abril de 1830, sobre los doce mil semanales que estaban consignados anteriormente y que asciende anualmente dicho aumento a 104.000 reales. 13. El sueldo de diez mil reales anuales al director facultativo de los arbolados creado en virtud de real provisión expedida por el rey y el Consejo en 15 de octubre de 1830. 14. El de los diez porteros de vara supernumerarios que en virtud de real orden de 19 de julio de 1830 se nombraron para acompañar por las noches a los celadores del alumbrado con el objeto de mantener la tranquilidad pública, a razón de cinco reales diarios cada uno importaban al año 18.250. 15. El pago —en virtud de real Orden de 8 de junio de 1827— de los alquileres del local que ocupaba la casa galera ascendía al año a 17.500 reales. 16. El aumento a la consignación del resguardo, que hasta el mes de agosto de 1818 eran 396.142 reales anuales y desde entonces se satisfacía anualmente a la real Hacienda 600.000 reales; lo que suponía un aumento de 203.858 reales. 17. Los sueldos a los cuatro empleados de la villa que se encontraban cesantes desde el año de 1823, importaban anualmente 46.072 reales. 18. Doce empleados de esta villa que no obstante haber sido impurificados desde 1823, fueron agraciados por el rey con parte del sueldo que disfrutaban con anterioridad, importando anualmente 25.744 reales. 19. La franquicia de derechos de puertas concedida al hospital de incurables por real Orden de 6 de marzo de 1826, ascendía por ajuste alzado 7.088 reales anuales. 20. La franquicia del colegio de niños desamparados por ajuste alzado en virtud de real Orden de 14 de marzo de 1805, importaba anualmente 19.272 reales. 21. El sueldo de jubilado al administrador que fue de las sisas del vino, según acuerdo del ayuntamiento de 24 de noviembre de 1818, ascendía a 28.000 reales. 22. Las pensiones a nueve viudas y un pupilo de empleados que fueron de esta villa ascendían a 19.890 reales. 23. Los sueldos a los empleados en la secretaría del corregimiento de la villa en virtud de real orden de 29 de septiembre de 1814 importaban al año 47.250 reales. 24. Los sueldos de los dependientes del ramo de fontanería según el acuerdo de 20 de agosto de 1823, y que anualmente ascendían a 21.900 reales. 25. Los sueldos de los de la real alhófga por acuerdo de 22 de julio de 1814, sumaban al año 10.900 reales. 26. Las pensiones concedidas a las viudas y parientes más cercanos de las «ilustres víctimas del dos de mayo de 1808», según real orden y plan aprobado por el rey en 23 de abril de 1816, importaban anualmente 13.140 reales. 27. El sueldo anual del arbolista del paseo del Prado según acuerdo de 17 de mayo de 1825 ascendía a 4.400 reales. 28. El del sobrestante de dicho paseo a razón de 15 reales diarios, por acuerdo de 20 de mayo de 1815 suponía un total de 5.475 reales anuales. 29. Al sobrestante de obras de Madrid a razón de 12 reales diarios por acuerdo de 15 de julio de 1808 se le abonaban 4.380 reales anuales. 30. El gasto para el sostenimiento de la compañía de ópera y dos de verso que tenía en sus dos teatros era de 1.000.000 reales. 31. Los 148.342 reales que ha dejado de entregar la tesorería de provincia a la de Madrid por importe de los derechos de puertas en el primer año de la empresa conforme al quinquenio formado por los comisionados. 32. El aumento anual de la consignación de causa pública que por orden de 7 de noviembre de 1829 se cifró en 200.318 reales.

¹⁴³ Aunque las causas del déficit importaban 1.379.930 reales más, ya que los contadores ofrecían los productos y gastos de un año común; y por lo tanto no aparecían deudas a Madrid o gastos imprevistos.

pales, es decir, impuestos para beneficio de la real Hacienda: las causas del déficit eran claras.

c) *Arbitrios y economías que se proponían para cubrir dicho déficit*

Los contadores propusieron los arbitrios y economías que creían necesarias para cubrir el déficit. Aunque señalaban que eran conscientes de que el vecindario de Madrid se encontraba cargado de impuestos y por lo tanto no era oportuno añadir otros nuevos. Por otro lado la reducción del gasto no se presentaba como algo pacífico.

i) *Arbitrios*

Los contadores propusieron una serie de nuevos arbitrios, cuarenta y seis en total¹⁴⁴. De la suma de todos estos nuevos arbitrios se estimaba un ingreso de 3.902.737 reales.

¹⁴⁴ 1. Se proponían arbitrios sobre 27 artículos a la entrada de las puertas, lo que se estimaba que reportaría 1.749.690 reales. 2. Una contribución sobre los 752 aguadores que existían en las fuentes públicas de Madrid, a 80 reales al año cada uno: 60.160 reales. 3. Cada nueva entrada de un aguador se cifraba en 320 reales, calculando en 94 las anuales daba un total de 30.080. 4. Por el alquiler del edificio del pósto que era propiedad de Madrid se conseguirían 20.000 reales. 5. El pago, por la comisión de cuarteles de esta corte, del alquiler de los locales que ocupan serían 68.837 reales. 6. Los atrasos por la comisión de cuarteles: 115.723. 7. La anualidad de la sisa de ocho mil soldados que se había dejado de satisfacer a Madrid desde 1808: 70.588. 8. El arbitrio de 100 reales anuales por cada almacén, tienda, puesto público y demás como se exigió por orden de 13 de julio de 1815 para la Junta de ree plazos de Cádiz: 175.400. 9. 100.000 reales anuales del fondo de penas de cámara. 10. Por atrasos de la manutención de los presos de la de corte: 337.096. 11. Por reintegro de lo que se debe a Madrid por los voluntarios realistas: 120.000. 12. Arbitrio de 20 reales anuales por razón de empedrado, sobre los edificios de esta villa, a tenor del número de faroles que tenía consignados cada uno: 1 51.470 reales. 13. La exoneración del pago a la real Hacienda del 5 por ciento sobre el 1.733.316 reales correspondientes a la franquicia de la tropa establecida por real Orden de 23 de agosto de 1806. Pues aunque el real Decreto de 31 de diciembre de 1829 estableció el tributo del 5 por ciento de los derechos municipales y particulares, no es conforme que Madrid pagase dicho cinco por ciento de una cantidad que no cobraba, ni retenía: 86.665. 14. La exoneración del pago de 23.387 reales que retenía la real Hacienda de los derechos de puertas de esta villa por vía de cinco por ciento impuesto sobre los derechos municipales y particulares en el citado real decreto de 31 de diciembre de 1829, y corresponde a los 467.742 reales que según la liquidación de un quinquenio tocaba de la refacción del clero regular y secular: 23.387.15. Igualmente la retención de 8.622 reales que corresponden al cinco por ciento de los 172.443 reales que perciben anualmente de la tesorería por franquicia de derechos de puertas la real casa hospicio, el hospital de incurables y el colegio de niños desamparados de esta corte. 16. Abstenerse de pagar, mientras subsista la Empresa de derechos de puertas, los 50.000 reales mensuales para el resguardo, que hacían al año 600.000 reales. 17. Por lo recibido de menos de la empresa en el primer año de arriendo: 148.342; y por los diez meses discurridos desde 1 de marzo hasta fin de diciembre de 1831: 27.262. 18. También se proponía que a los distintos efectistas de esta villa, que en virtud de reales Ordenes cobran corrientemente los réditos de sus imposiciones sobre sisas, se les retenga de ellos a la manera que cobren, el cinco por ciento que sobre las mismas sisas en que tienen su hipoteca y son los derechos municipales de puertas: 6.810 reales. 19. Que cada cerdo que naciese, criase o matase en la villa, pagase 20 reales sobre los 10 contribuía, lo que se calculaba en 2.600 reales.

ii) *Economías*

Además de los arbitrios los contadores propusieron una serie de «economías» para paliar la crítica situación en la que se encontraba el municipio¹⁴⁵, que suponían —fundamentalmente— un mayor ajuste en sueldos y empleos, un mayor control en el alumbrado y la subasta del servicio de limpiezas. La suma de todas estas economías hacían un total de 2.532.352 reales.

d) *Adición*

Después de la memoria de 31 de diciembre de 1831, con fecha de 23 de febrero de 1832 los contadores realizaron una adición a la misma con otros arbitrios y economías que los contadores proponen a la Junta de propios y sisas. Los arbitrios propuestos suponían un ingreso adicional de 358.024 reales, y las economías un ahorro de 195.280 reales; lo que suponía un total de 553.304 reales.

Se trataba —por el lado de los arbitrios— de adecuar la refacción de tropa a la existencia real de contingente, con lo que se calculaba un ahorro de unos 300.000 reales; y los 58.024 sobre arbitrios de carnes.

Las economías iban por el lado de rebajas de sueldos, retener al hospital de Antrón Martín, casa Inclusa, real colegio de niños desamparados, casa recogidas y canal de manzanares, lo que corresponde al 5 por 100 de sus derechos en virtud de resguardo.

Es decir se iba por la vía de apurar al máximo el modelo existente, con una mejor gestión y un control axfisiante de las distintas partidas.

8. UNA VALORACION

La vuelta al modelo tradicional, fue la vuelta al sistema Garay, que permaneció pese a las reformas de López Ballesteros, por las particularidades de Madrid. Sin embargo el municipio no pudo escapar del arriendo con Felipe Riera, lo que cambió considerablemente las cosas.

¹⁴⁵ Esas economías eran: 1. Suspender temporalmente la provisión de cualquier empleo; 2. Promover con más eficacia de la que se hacía el pago del alumbrado público de Madrid por los edificios reales, de la real hacienda, casas embargadas, cuarteles, cárcel de corte y mostrenco, cuyo descubier-to ascendía a 31 de diciembre de 1829 a 134.325 reales; 3. Cobrar otros descubiertos de alumbrado que importaban 631.937 reales; 4. Sustituir el sueldo fijo del administrador del alumbrado por un tanto por ciento de lo recaudado, con lo que se estimaba un ahorro de 1.500 reales; 5. Se calculaba un ahorro de 18.250 reales por rebaja de varios sueldos; 6. Por supresión de otros empleos 57.300 reales; 7. Por rebaja en la consignación de fontanería se suponía 104.000 reales; 8. Por la supresión del sueldo del arbolista del Prado se ahorraría 4.400 reales; 9. El gasto de la extinguida contaduría de intervención de derechos de puertas eliminaría 1.431 reales; 10. Reducción de gastos extraordinarios y eventuales por importe de 40.000 reales; 11. Que las casas que disfrutaran agua «de pura gracia y mientras no hiciese falta a Madrid» pagasen en total 15.000 reales; 12. Reducir a un solo teatro las representaciones de ópera y verso, y eliminar sus consignaciones ahorraría 1.000.000 reales; 13. Suspender toda obra que recaiga sobre los fondos públicos eliminaría un gasto de 200.000 reales; 14. Dar en pública subasta las limpiezas de esta villa llamas de día y de noche ahorraría 300.000 reales.

El arriendo suponía un grado más del despojo madrileño. Sin dirección en sus rentas, sin su administración, ahora perdía también la intervención, porque perdía cualquier derecho sobre ellas, se había producido una permuta de éstas por un importe mensual.

El problema de la empresa no era tanto que realizara la recaudación, privando a Madrid del manejo inmediato de sus ingresos. El problema principal estaba en que el contrato con Riera lo hizo la real Hacienda y por lo tanto Madrid quedaba ajeno a sus intereses. Era la Hacienda quien ponía las condiciones, la duración, las contraprestaciones, etc. Por eso cuando se pidió una subida de las cantidades a ingresar, se hizo de la parte que correspondía a la Hacienda, que era lo que más le apremiaba, la necesidades municipales quedaban en un segundo o tercer plano.

En el fondo era como una consignación encubierta. El municipio cobraba una cantidad fija, no del Estado, sino de un intermediario, y no tenía ningún derecho sobre sus rentas, que en la práctica habían dejado de existir.

Lo que Madrid no consentía era eso, ver que se había convertido en un cero a la izquierda, que recibía una cantidad pero que no era actor, que no era sujeto, que era un puro subalterno. Ese era el drama que para el ayuntamiento suponía la existencia de la contrata. De ahí que no asumiera su nuevo estatus, y que en los resúmenes, informes, etc. continuase hablando de sisas o derechos de puertas, y no de la Empresa.

Capítulo VI

LA HACIENDA DE LA VILLA TRAS LA MUERTE DE FERNANDO VII: UN EPÍLOGO

Con la muerte de Fernando VII los problemas de la Hacienda se incrementaron como consecuencia de la guerra, lo que ocasionó un nuevo descuento en los ingresos de la villa. Mediante las reales Órdenes de 6 de febrero y 27 de julio de 1834 se dispuso que el diez por ciento de los arbitrios municipales se ingresaran en la real Hacienda. A pesar de las súplicas de Madrid, la reina gobernadora desestimó eximirle de tal pago¹.

Por otro lado se dieron algunas disposiciones sobre los municipios², y continuó el arriendo que se realizó con Riera; aunque comenzó a trabajarse en el día después, es decir en qué hacer al terminar la contrata.

A finales de 1834 la contaduría de Madrid evacuó un expediente en el que prevenía al ayuntamiento de la conclusión de la contrata de la Empresa de derechos de puertas a fin de febrero de 1835. Según los contadores las oficinas de rentas reales se ocupaban de un nuevo plan de derechos de puertas que entraría en vigor a uno de marzo de 1835. En él se despojaba a Madrid de los derechos que se cobraban en sus puertas³, es decir se volvía a la situación anterior al arriendo.

Por ello creían necesario elevar al rey una instancia exponiendo los perjuicios que ese plan ocasionaría a la villa, al privarla de la administración de los arbitrios que le fueron concedidos por los reyes antecesores en recompensa de muy repetidos y señalados servicios que les prestó para graves necesidades del Estado.

El ayuntamiento pedía que mediante real Orden se dispusiese que la Junta de propios y sisas⁴ verificase por sí y por sus propios dependientes la recaudación de

¹ Mediante real Orden de 28 de julio de 1835 (AVM-S 1-216-28).

² El real Decreto de 10 de noviembre de 1833 contenía una Instrucción sobre la forma de constituirse los ayuntamientos, que quedaban bajo la tutela del ministerio de Fomento. Éste completaba el de 2 de febrero de 1833, dictado por Fernando VII, en el que se mandaba proceder a las elecciones de ayuntamientos. Los Decretos de 23 de octubre y 30 de noviembre de 1833 ponían al frente de la provincia al subdelegado de Fomento.

³ AVM-S 4-13-59.

⁴ Ya que la Junta era la encargada de la recaudación, administración y distribución de estos efectos, los derechos de puertas.

los derechos de sisas, según se hacía antes de ponerse en práctica la Instrucción de 1818⁵.

En los años de la Empresa de derechos de puertas el ayuntamiento tenía que conformarse con una dotación fija, que no admitía mejoras. Mientras que la real Hacienda exigió del empresario un diez por ciento de aumento sobre el valor del quinquenio, el municipio continuó igual. Además la real Hacienda se había desvinculado de sus dependientes, el empresario los empleaba o se hacía cargo de sus nóminas; mientras que Madrid debía hacerse cargo de los suyos.

El municipio quería administrar sus arbitrios, no quería manos extrañas. Argumentaba que el interés individual —del municipio en este caso— era el agente más poderoso. Quitarle la administración era una opresión. Decía además que la única forma de poder pagar sus deudas con los efectistas era recuperar la administración.

No era Madrid el único municipio que planteaba esta exigencia, el ayuntamiento de Barcelona también envió una representación al rey pidiendo que al concluir la empresa su contrata se le concediera la administración de sus derechos, a través de un encabezamiento con la real Hacienda⁶.

Sin embargo la realidad fue otra. Con fecha 16 de enero de 1835 se dió una nueva *Instrucción para la exacción de los derechos de puertas*, que comenzaría a regir el uno de marzo de 1835, fecha en la que concluía la contrata⁷. La Instrucción derogaba la de 10 de noviembre de 1824 y su adicional de 4 de enero de 1830. Los derechos de puertas o de entrada que se cobraban en Madrid no estarían comprendidos —por su diversa naturaleza— en esta disposición, así como no lo habían estado en la de 1824 y adicional.

Madrid continuó con el sistema anterior a la contrata, y los contadores se apresuraron a recordar que se continuase con la intervención⁸. Lo que sí cambió en la villa fue el nuevo *Arancel de los derechos reales y arbitrios municipales que se cobran en las puertas de Madrid*⁹.

⁵ Instrucción que como se sabe prescribió la recaudación mixta: los empleados de la real Hacienda se hicieron cargo de todos los derechos tanto reales como municipales y particulares, y los empleados municipales realizaban la intervención con calidad de haber de presentar a final de año la cuenta de productos y gastos para su repartimiento entre los partícipes, deduciéndose lo que se hubiese recibido de más y abonándose lo entregado de menos. Aunque desde que se dió la Instrucción no se había presentado ninguna cuenta, por lo que se ignoraba si el repartimiento que se hacía entre los partícipes a cuenta de las cantidades recaudadas, sería de más o de menos (AVM-S 4-13-59).

⁶ Este papel fue recibido también por el ayuntamiento de Madrid (AVM-S 4-13-60). Y éste le comunicó tener los mismos sentimientos. El de Barcelona se quejaba de las consecuencias funestas que habían sufrido los pueblos por la arbitrariedad de un arrendador en la exacción del derecho de géneros exentos.

⁷ AVM-S 2-166-139 y 2-167-86.

⁸ AVM-S 3-295-132 y AVM-Cr 1-138-10. En una exposición se decía que aunque Madrid no tuviera la plena administración que tuvo hasta fin de agosto de 1818 y durante el tiempo constitucional de 1820-23, al menos no se impidiera la intervención que se expresa para todo partícipe de puertas en el decreto de 26 de enero de 1818, orden de 6 de abril de 1818, Instrucción de 10 de noviembre de 1824, 28 de julio de 1825 y orden de 8 de noviembre de 1826, y la Instrucción especial de 1818 que fue observada hasta la empresa de Riera.

Por real Orden¹⁰ se dispuso que la real Hacienda no entregase a los partícipes de los derechos de puertas más cantidad que la que repartía la empresa, lo que se haría a fin de cada mes. Los superávits que se obtuvieran quedarían en las tesorerías. Asimismo se decía en esa disposición que la contrata había servido para conocer los vicios y abusos existentes en la recaudación.

Desde el uno de marzo que comenzó la recaudación por los empleados de la real Hacienda hasta septiembre hubo, según los contadores de la villa, un superávit entre 600.000 a 700.000 reales¹¹. Pero parecía claro que Madrid no iba a beneficiarse de ese numerario.

El 23 de julio de 1835 se dió un real Decreto para el arreglo provisional de los ayuntamientos, en el que se estableció un mayor control sobre la hacienda municipal; y en noviembre de ese año se procedió a celebrar elecciones municipales. Como consecuencia de esta nueva ordenación se suprimió la Junta de propios y sisas el 5 de noviembre de 1835, casi setenta años después.

Con la vuelta definitiva a la legalidad constitucional en 1836 se restableció la Instrucción de 1823¹² —lo que ponía en vigencia la obligación del presupuesto anual¹³— y el ayuntamiento quiso recuperar la recaudación de los derechos de puertas, como había sucedido «época dorada» del trienio liberal¹⁴. Esto no se produjo, por el contrario Madrid perdió sus sisas, que fueron sustituidas por una consignación, con posterioridad las recuperó, después la Hacienda realizó un nuevo arriendo,... pero esto —como suele decirse— es otra historia, que espero poder escribir en otro momento.

⁹ AVM-S 4-4-14. Era un impreso de 41 páginas, en él aparecían los artículos ordenados alfabéticamente y a cada uno se le fijaba los derechos que tenía que pagar: reales, municipales, impuesto de vino, aguardiente, trigo y cuarteles. Dentro de los municipales se incluían los que la villa exigía en algunos artículos pertenecientes a hospitales, peso real y alhóndiga.

¹⁰ Publicada en el Boletín oficial de Madrid de 2 de abril de 1835 (AVM 3-295-138).

¹¹ AVM-S 1-216-38.

¹² La Ley de 15 de octubre de 1836 relativa al gobierno económico-político de las provincias, para que no hubiera duda, restablecía en su fuerza y vigor la Ley de las Cortes de 3 de febrero de 1823. Se suspendía el a. 245 relativo a los sueldos de los jefes políticos, que debían seguir disfrutando de los que cobraban en el día; y el a. 44 sobre el tanto por ciento que debía remitirse a la diputación. Véase sobre esto lo que se dice en el capítulo V de este volumen.

¹³ El presupuesto para 1837 en AVM-S 4-4-8, sobre la propuesta de presupuesto AVM-S 2-356-41, sobre su elaboración AVM-S 4-14-1 20.

¹⁴ Así lo hizo saber el ayuntamiento en una exposición a S. M. de fecha 18 de noviembre de 1836 (AVM-S 1-219-9).

Segunda parte

LOS INGRESOS Y GASTOS

Capítulo I LOS INGRESOS MUNICIPALES

En este capítulo se intenta analizar cuáles eran los ingresos con que contaba el municipio madrileño para hacer frente a sus necesidades. Como es obvio, estos ingresos —el sistema de ingresos— varían con el tiempo, y en la primera parte de este trabajo se han visto distintos modelos que configuran ese sistema. Ahora se trata no tanto de analizar esa estructura sino de estudiar la realidad concreta; es decir, en que consistían esos conceptos utilizados, cómo funcionaban en la sociedad madrileña.

Aparece de esta forma lo que puede llamarse el rostro humano de la hacienda, en él interesa sobre todo aclarar los conceptos y mostrar la realidad singular de los ingresos; pero con frecuencia se introduce —fundamentalmente en las notas— rasgos de lo que se podría denominar vida cotidiana madrileña del primer tercio del siglo XIX, que es la historia de una miseria.

Los ingresos municipales en el antiguo régimen pueden clasificarse, como lo hace Carmen García¹, en nueve grupos:

1. Propios y comunes;
2. Rentas procedentes del arrendamiento o administración de determinados monopolios (derechos exigidos por pesar —peso real—, algunos oficios comerciales, etc.);
3. Réditos de censos que los municipios tenían a su favor sobre casas o fincas particulares; fincas de propios gravadas por censos o hipotecas a favor de particulares; juros;
4. Derechos de carácter señorial;
5. Rentas por arrendamiento de determinados oficios públicos: almotacén;
6. Cuotas exigidas a título de privilegio real como el uso de determinados servicios (pontazgo, barcaje) o el mero tránsito a través de la jurisdicción concejil (pontazgo, peaje);
7. Rentas exigidas a los comerciantes por el derecho de poder vender en su jurisdicción, o por multas;
8. Impuestos indirectos sobre el consumo, adoptando muy frecuentemente la forma de sisas;

¹ *La administración de rentas municipales en el Antiguo Régimen. La contaduría general de propios y arbitrios (1760-1824)*, Memoria de licenciatura inédita, UAM, 1984.

9. En zonas rurales eran frecuentes los repartimientos o derramas para hacer frente a una necesidad.

Esta clasificación es descriptiva, lo que permite esbozar en casi toda su extensión los ingresos concejiles durante el antiguo régimen; por lo tanto ilustra. Pero si se analizan estos apartados, si se va al núcleo de ellos, se puede reducir en su complejidad a esos grandes conceptos conocidos por los nombres de propios y arbitrios; de hecho la autora avanzando en su explicación también afirma esto. Efectivamente los ocho primeros clasificados se encuadran en estas figuras, y la última podía adoptar distintas formas impositivas.

Ahora bien la delimitación de ámbos términos en la práctica no es tarea fácil, y lo que en un municipio se considera como propio en otro puede hacerse como arbitrio. Baste como ejemplo los pastos, pueden ser «propios apropiados» o «comunales arbitrados con facultad real» y debían considerarse como propios o arbitrios respectivamente². Quizás esta confusión se deba a la finalidad recaudatoria de ambos elementos, lo que hacía que se denominasen conjuntamente —propios y arbitrios—, y que cuando se hablaba de los propios generalmente se estaba haciendo referencia a los dos términos. Éstas realidades se contemplaban desde la perspectiva de que eran los ingresos municipales, sin dar importancia a otros aspectos³.

¿En qué consiste la diferencia de una y otra figura? Puede decirse que es la necesidad o no que tienen los municipios de pedir licencia real para poder utilizar estas fuentes de ingresos; y en su duración. Los propios son los bienes o derechos que los municipios poseen en propiedad y pueden explotarlos hacendísticamente sin el permiso de las instituciones centrales de la Monarquía. Sin embargo, para utilizar los arbitrios, los pueblos han de recurrir —al menos teóricamente— a estos organismos para obtener la facultad⁴.

De aquí que los arbitrios puedan ser tanto contribuciones indirectas sobre el consumo, como el uso por parte de los concejos —con el fin de obtener rentas—

² Carta del contador general de Propios de 7 de junio de 1765, que confirmaba la declaración de 20 de abril de 1761, en CPAR, número 19; cito por R. L. DOU I BASSOLS, *Instituciones...*, tomo V, p. 111.

³ En este sentido se comprende que CANGA ARGÜELLES sólo introdujera —en su *Diccionario de hacienda para el uso de los encargados de la Suprema Dirección de ella*, tomo IV, Londres, 1827— una voz, propios y arbitrios, y que la definición fuera de lo más confusa: «Son los fondos o rentas peculiares de los pueblos de España, que se sacan del arrendamiento de las dehesas propias; o de la sisa de algunos géneros necesarios para la vida; de las utilidades de las posadas y mesones que pertenecen a los pueblos; o de los arrendamientos de algunas tiendas en donde se permite la venta exclusiva de vino, aceite y otros artículos. Los rendimientos de estas fincas y arbitrios se aplican al pago de los gastos de policía de los pueblos, de la enseñanza pública, composición de puentes y otros de utilidad y aún de devoción de los mismos. [...]» Y también las imprecisiones que Jesús MARINA BARBA ha observado en los escritos municipalistas decimonónicos (*Poder municipal...*, 209 y ss.).

⁴ Sobre esto interesa, Bartolomé CLAVERO, «Hispanus fiscus, persona ficta: concepción del sujeto político en la época barroca», en *Tantas personas como estados. Por una antropología política de la historia europea*, Madrid, 1986, 53-105.

de determinados derechos, o tierras, etc. Estos arbitrios se concedían para un periodo concreto, pero fácilmente se convertían en perpetuos y terminaban asimilándose a los propios⁵. Esto se verá al hablar de los propios madrileños, los contadores de villa, cuando dan una relación, incluyen rentas a las que llaman arbitrios unas veces y otras propios, con lo que se comprueba que no existía una terminología pulida, sino que era algo tosca⁶.

Además algunos ayuntamientos, como el de Madrid, tenían otros ingresos por prestaciones especiales, como era el caso del alumbrado, que no estaba incluido en la relación de ingresos del Reglamento del Consejo de 1766, pues era considerado como un negocio autónomo. Pero poco a poco se fue considerando como un servicio municipal más, y en los periodos constitucionales aparece dentro del presupuesto municipal como un ingreso más, y como gasto.

1. LOS PROPIOS Y RENTAS MUNICIPALES

Los bienes de propios —ya se ha dicho— constituían el patrimonio municipal. Desde un punto de vista jurídico hay que distinguir los propios en sentido estricto de los bienes comunales y los baldíos⁷.

Dou i Bassols señaló que por propios del común se entendía «qualquier especie de bienes, que tiene el común, por cualquiera título, del modo que tienen los particulares las cosas debaxo de su dominio y posesión⁸».

Patrimonio privativo, por lo tanto, llamado así por abarcar los bienes propios del

⁵ Carmen García dice que también se observa el caso opuesto.

⁶ Quizá esté motivada esta imprecisión por la misma realidad epistemológica premoderna. Las grandes síntesis, interpretaciones, conceptualizaciones, clasificaciones... son un producto moderno e ilustrado. Con anterioridad prevalecía lo concreto, y esto hacía que se diera prioridad a las soluciones puntuales. Lo importante no era tanto los diseños programáticos, sino la solución concreta de unos problemas, en este caso hacendísticos.

⁷ Junto a los propios aparecían los baldíos, que eran determinados bienes raíces no susceptibles de apropiación, cuyo uso se reservaba a la colectividad y eran de aprovechamiento gratuito. Su titularidad jurídica era conflictiva, la Corona había reivindicado en todo momento la propiedad eminente sobre esas tierras. Pero como ha señalado J. Fontana sería inadecuado a comienzos del siglo XIX diferenciar los baldíos de los restantes bienes concejiles, ya que en último término lo que contaba era su aprovechamiento colectivo y gratuito, que seguía manteniéndose vivo. Lo que diferenciaba los propios de los baldíos era ese uso gratuito, por lo que éstos no rentaban para el municipio. Véase sobre esto J. FONTANA y R. GARRABOU, *Guerra...*, pp. 131 y ss.; y A. NIETO, *Bienes comunales*, Madrid, 1964.

⁸ R. L. DOU I BASSOLS, *Instituciones...*, tomo V, pp. 107 y 108. Además de los que tiene cualquier pueblo, existían algunas órdenes que declaraban a determinadas cosas como pertenecientes, ellas o su valor, a los propios. Así por Decretos de 11 de febrero y de 13 de mayo de 1761 se declaró por valor de propios el sobrante de renta de aguardiente pagada la cuota a la Real Hacienda, exceptuándose los pueblos en que se haya dado otro destino. También se declaró valor de los propios el sobrante de las penas de cámara y de justicia después de pagar el encabezamiento (Adición al párrafo tercero de la Cédula de 30 de julio de 1760). Con Real Cédula de 4 de julio de 1780 se mandó que los caudales procedentes de las diversiones públicas se pusieran en el arca de tres llaves de propios y arbitrios.

pueblo, cuyos caudales le pertenecen, como su dote propia, como lo señalado para sostener las cargas públicas⁹. Por tener esta naturaleza, no podían ser enajenados, sino que se encontraban vinculados al municipio. Éstos son muy variados, como se desprende de la relación de los madrileños¹⁰. Hecho que es necesario recalcar, pues con frecuencia, al hablar de ellos sólo se alude a fincas urbanas y rústicas, sin incluir otros derechos y oficios que también eran bienes de propios¹¹.

Los productos de los propios eran los que procedían de los que poseía Madrid en fincas, de lo que rendían las bancas y baños, de los réditos de los cajones, de los efectos de las cárceles de villa y corte, del fiel contraste, del almotacén, de la real alhóndiga, del peso real, de los censos de fuentes, de las sillas del Prado y de la venta de leñas procedentes de la poda¹².

a) Tierras

La fincas que poseía la villa fuera de su término consistían en ocho sotos, conocidos con los nombres del Porcal, Negrалеjo, Cuevas y Orillas, Migas-Calientes, Congosto, Teja, Salmedina y Herrero.

Solían estar arrendados para pasto y leña. Algunos eran de gran extensión como el del Porcal, otros en cambio como el de Cuevas y Orillas eran muy reducidos. La opinión de algunos regidores es que —en su mayor parte— podían rendir más de lo que hacían, siempre que se introdujeran algunas mejoras.

También pertenecían a los propios de Madrid las dehesas de Arganzuela, Cepe-da, Barrancos, la Serena —que se encontraba en Extremadura—, Amanuel, Bolaños¹³. También se pensaba que podían rendir más.

En cuanto a prados, poseía el llamado del Corregidor. En Getafe, en el sitio llamado Arenales de Getafe, poseía 161 suertes de tierra de diferentes cabidas de 1, 2, 3, 7 y más fanegas¹⁴. En los términos de Vicálvaro, Ambroz y Coslada poseía Madrid 104 suertes de tierra labrantía numeradas de 2, 5, 6 y más fanegas cada una, y

⁹ En este sentido Lorenzo de SANTAYANA BUSTILLO, *Gobierno de los pueblos de España*, 1742. Utilizo la edición de Tomás y Valiente, Madrid, 1979, pp. 79 y ss.

¹⁰ En el Reglamento del Consejo de 1766 —véase el anexo documental— aparecía la descripción de los propios madrileños en esa fecha, y en la copia de 1832 se actualizó esa relación, de forma que con ese documento se puede tener una idea cabal de estos bienes municipales.

¹¹ En este sentido C. DE CASTRO, *La revolución...*, p.31; que sólo alude a éstas fincas. En contra J. INFANTE, *Nuevos datos...*, p. 175 y ss.; que al explicar los propios de Salamanca divide éstos en diversos derechos y bienes, casas y tiendas, tierras y censos, etc.

¹² AVM-S 6-214-3, se trata de una memoria sobre el estado económico del municipio publicada en 1835, pero que incluye información que se empezó a recoger en 1832, por lo que es muy útil para comprender la importancia de los propios. Mientras no se diga otra cosa cito por este expediente.

¹³ Era una posesión pequeña que producía a Madrid 88 reales y 8 maravedís anuales, que pagaba perpetuamente la villa de Alcobendas por el derecho de martiniega en virtud de sentencia y concordia de 2 de mayo de 1483.

¹⁴ Algunas estaban plantadas en viña y dadas a censo a varias personas. Otras, por haberlas dejado las que las tenían perdieron sus viñas y se sembraron de retama.

otras sin numerar¹⁵. En la jurisdicción del lugar de las Rozas pertenecían a los propios 173 suertes de tierra¹⁶. La Cañada de los Carabancheles eran 104 suertes de tierra de 1, 6, 8 y más fanegas situadas en los términos de los dos Carabancheles y Húmera¹⁷. En ese mismo terrazgo había nueve charcas formadas de tierra para el lavado de ropa, que producía cada una entre 20 y 25 reales. En el término y jurisdicción de Velilla de San Antonio tenía Madrid un terrazgo con el nombre de Tomillares¹⁸. Madrid dió a San Sebastián de los Reyes 14 yuntas de tierra en los Linares, con el canon anual de 70 fanegas de pan por mitad de trigo y cebada, que «se reducían a dinero todos los años, según el precio que tuviesen los granos el día de Santa María de Agosto». En Fuente del Fresno ocurría lo mismo con 60 fanegas que también se reducían a dinero.

En el término del lugar de Paracuellos correspondían a Madrid 42 fanegas y media de tierra, que se encontraban arrendadas. En el despoblado de Humanejos pertenecían a Madrid 137 fanegas y un celemin. En el Prado Longo correspondían 10 celemines, todos dados en censo. Además correspondían a Madrid media fanega contigua al puente de Toledo; 5 fanegas y 11 celemines en la fuente de la Teja; 20 fanegas, 10 celemines y 4 estadales en los sitios de Santa Ana y Amaniél; 42 y 6 celemines tituladas del Santo Angel de la Guarda en varios pedazos; 12 y medio en el arroyo Bayonés o Cochineros, 5 y 3 celemines y 6 estadales frente a la fuente de Recoletos; una fanega en la Vega de las Parras; 2 en la fuente Castellana; 186 y 17 estadales en Balfrio; 3 y 6 celemines y 7 estadales en la fuente del Berro; 2 fanegas en el Arroyo Abroñigal, y unos trozos de praderas desde el puente de Toledo al portazgo de Aranjuez. También contaba con el llamado terreno de la Tela, que servía para los carreteros y demás forasteros que venían con efectos para la corte. La huerta contigua a Nuestra Señora del Puerto se utilizaba para el cultivo de hortaliza.

Además de estas propiedades, a Madrid le habían usurpado un número considerable de fanegas de tierra en diferentes puntos; que se intentaban recuperar, pero que de hecho no aportaban nada a las arcas municipales.

b) *Barcas*

Otro propio era la barca que Madrid poseía en el soto del Negralejo, llamada de Arrebatocardos, situada sobre el Jarama. Y la mitad de la de Arganda, colocada sobre el mismo río, que pertenecía a las dos villas de Madrid y Arganda¹⁹.

¹⁵ Todas se habían dado a censo perpetuo a diferentes personas, aunque algunas se habían abandonado.

¹⁶ Eran pocas las que estaban labradas.

¹⁷ Muchas de ellas estaban sembradas de retama, y las restantes eran erial.

¹⁸ Parte de él estaba plantado de viña, dado en arrendamiento sin tiempo limitado. Otra parte se encontraba sin cultivar por falta de sujetos que lo quisieran.

¹⁹ Real Cédula de Felipe II fechada en San Lorenzo el 27 de agosto de 1570, refrendada por su secretario Martín de Gastelú, con firmatoria de la escritura otorgada en Madrid el 16 de agosto de 1570 ante Alonso García del Castillo, escribano de S. M. En ella consta el convenio celebrado por el licenciado Juan Díaz de Fuenmayor del Consejo y comarca de S. M. y Francisco de Garnica su contador mayor a nombre de S. M. entre la Villa de Madrid y el lugar de Arganda, sobre la barca del río Jarama.

La explotación del producto de esas barcas solía estar arrendada²⁰, por un monto anual; a cambio el arrendatario cobraba un arancel de los derechos de barcaje²¹. La municipalidad corría con las reparaciones²², mantenimiento²³, etc. ya que se trataba de un servicio municipal. Y esto era importante, porque las condiciones climáticas²⁴ —lluvias torrenciales propias del lugar—, y las políticas²⁵ —el distinto paso de ejércitos en estos años— ocasionaron constantes destrozos en las barcas, con los subsiguientes gastos de reparación, que muchas veces supusieron tener que construir de nuevo este medio de transporte²⁶.

La edificación del puente de Arganda, ocasionó la rescisión del arrendamiento²⁷ de esa explotación por su inutilidad.

c) Pontazgo

El pontazgo era el derecho que se cobraba por la municipalidad en los puentes propios de ella. Como las demás rentas municipales, ésta podía ser administrada por la villa o arrendada. En la documentación de la época sólo aparece un puente propiedad de Madrid, o mejor dicho propiedad compartida entre Madrid y Arganda, sobre el río Jarama.

Este puente de madera, construido por cuenta de los ayuntamientos de Madrid y Arganda se estrenó el 22 de noviembre de 1818²⁸. Desde esa fecha se explotó mediante administración de ambos municipios²⁹. Ya con la municipalidad constitu-

²⁰ En 1824 se subastó el aprovechamiento de la barca de Arrebatacardos, por 6 años. El remate se hizo en favor de Juan Ruiz, vecino de Mejorada, en 7.200 reales anuales. Se admitió la mejora del cuarto, y el nuevo remate recayó en Manuel García, también vecino de Mejorada, por la cantidad de 9.020 reales anuales (AVM-S 1-215-30).

²¹ Se conserva el arancel de derechos de barcaje de la de Arrebatacardos, aprobado por la Junta de propios y sisas el 14 de enero de 1790. La misma Junta acordó el 22 de junio de 1831 su reimpresión.

²² Estas también se solían hacer por subasta. Así en 1809, se publica el 22 de marzo un anuncio en el Diario de Madrid para quien quisiere encargarse de la reposición de tablones y habilitación de la barca de Arrebatacardos (AVM-S 3-113-31).

²³ Además durante el tiempo que queda inutilizada la barca por estas circunstancias, la municipalidad sufre una disminución del precio del arrendamiento (AVM-S 3-113-37).

²⁴ En 1816 el visitador de Propios expone la necesidad de reparar la barca de Arrebatacardos por las frecuentes avenidas de este año (AVM-S 3-113-36).

²⁵ En enero de 1809 se extrae de su sitio la barca de Arrebatacardos para el paso de tropas. Después el arrendador tiene que colocarla en su lugar y reclama los gastos (AVM-S 3-113-7). En 1812 tiene que repararse por haberla dejado inutilizada las tropas inglesas (AVM-S 3-113-34).

²⁶ En AVM-S 3-113-37 y 3-113-39 aparece la nueva construcción de la barca de Arrebatacardos por la cantidad de 14.700 reales, debido al mal estado que tenía, según una exposición del visitador de Propios.

²⁷ El arrendatario presentó un recurso pidiendo la exoneración del contrato con motivo del nuevo puente construido a dos leguas de distancia (AVM-S 3-113-37).

²⁸ AVM-S 3-23-10.

²⁹ Desde el 22 de noviembre en que se estrenó hasta finales de julio de 1820 se recaudaron 140.324 reales y 8 maravedís. A esta cantidad hay que deducir 27.149 reales de gastos, de forma que quedaban líquidos para ambos ayuntamientos 113.130 reales y 5 maravedís. Desde primeros de agosto hasta 14 de octubre se recaudaron 3.953 reales y 12 maravedís; de los que había que deducir 2.557 reales y medio, quedando líquido 561 reales (AVM-S 2-23-10).

cional se procedió a la subasta del mismo³⁰ y a uno de noviembre de 1820 comenzó el régimen de arrendamiento³¹. Se firmó la escritura correspondiente y se envió impreso con los aranceles a los contadores de Madrid³². El 28 de julio de 1822, el arrendador dijo que no podía pagar debido a la poca recaudación ocasionada por la sequía, pero el ayuntamiento de Madrid no cedió a la pretensión³³.

A este arrendamiento sucedieron otros, hasta que en abril de 1831 una avenida se llevó el puente y por lo tanto desapareció —al menos por el momento— este derecho³⁴.

d) *Bancas y baños*

Las bancas y baños eran un arbitrio³⁵ concedido a Madrid por Felipe V en real Orden de 19 de enero de 1750 para que pudiese atender al pago de sueldos de los porteros del ayuntamiento³⁶, y consistía en exigir 2 maravedís por cada banca de

³⁰ Se dictaron las condiciones de la subasta, donde se indicaba que el arancel era el mismo que los comisionados de las villas establecieron el 10 de noviembre de 1818. Las municipalidades estudiaron el rendimiento de la explotación del pontazgo desde el 22 de noviembre de 1818 hasta 14 de octubre de 1820. El ayuntamiento de Arganda manifestó que no debía admitirse postura inferior a 60.000 reales anuales.

³¹ El 19 de octubre de 1820 se realizó la subasta. Comenzó con una puja de 40.000 reales de Juan de Riaza, y concluyó con una de 66.020 reales de José Milano Yepes; que presentó como fiadores a su hermana y a Juan Riaza —es de suponer que el mismo que hizo la primera puja. Antes de su toma de posesión se realizó un inventario de las existencias del propio.

³² En AVM-S 3-23-9 aparece ese impreso.

³³ La Comisión de hacienda dijo que ese problema no era asunto suyo y lo trasladó a la Diputación. Ésta desestimó la petición, dejando libertad al Ayuntamiento para resolver lo que viera conveniente. Madrid desestimó la demanda del arrendador. Sin embargo el 23 de noviembre de 1822, la Diputación —a instancia de la municipalidad de Arganda, y por tanto sólo afectando a esta— decidió rebajar 8.000 de los 16.000 reales que proponía el alcalde segundo, el regidor sexto y el procurador síndico de Arganda.

³⁴ AVM-S 3-24-12.

³⁵ Otras veces se dice que Madrid tenía como propio los lavaderos y baños situados en el río Manzanares (AVM-S 3-27-47).

³⁶ El 27 de febrero de 1611 se proveyó auto por el corregidor de Madrid ordenando que las personas que tuviesen lavaderos entre los puentes de Toledo y de Segovia exhibiesen los títulos y comprobantes de su propiedad, con mandato de proceder en justicia contra los que no lo ejecutasen. Y que los poseedores de lavaderos desde el puente nuevo hasta la Casa de Campo, los quitasen y demoliesen. En 1615, un vecino pretendió se le vendiese por Madrid un lavadero inmediato al puente de Segovia. La Villa hizo consulta al Consejo y éste decretó no haber lugar, mandando que se devolviera a sus propios los lavaderos vendidos y se restituyese el precio (AVM-S 3-25-7). En 1719 se pensó por primera vez en arreglar lavaderos y construir algunos por parte de la Villa (AVM-S 3-24-26). En 1749 acordó Madrid el arbitrio. Destinando el producto al pago de salarios de los trece porteros maceros y a la construcción de casillas para hacer coladas y guardar ropas. Por real orden de 1750 el rey aprobó este acuerdo. El regidor comisario del ramo, para ponerlo en práctica, otorgó las escrituras de arrendamiento de 1.080 bancas. De ellas 586 —que constituían la clase primera— habían de satisfacer a los Propios de Madrid los dos maravedís del impuesto. Las 494, clase segunda —incluidos 24 banquillos—, fueron objeto de algunas diferencias en sus contratos por parte del municipio en razón de las circunstancias espaciales y poco ventajosa posición de los arrendatarios. 64 se concedieron por el tiempo de la voluntad del corregidor a la terce-

las situadas en la orilla del río Manzanares todos los días de trabajo³⁷, y 20 reales por cada baño de los que se establecían en dicho río en la temporada de verano.

i) *Las bancas*

Los arrendamientos de bancas se hicieron en su origen por años, y sus pagos tenían lugar por tercios y por semestres anticipados. Más tarde se alteró esta costumbre por ruego de los arrendatarios que atravesaban una gran crisis³⁸. Por real Orden de 1753 quedaron sujetas al mismo impuesto las bancas de particulares³⁹. En otro momento se arrendó el arbitrio⁴⁰ y, a través de los años, fue variando el número de las bancas⁴¹.

ra clase, o sea a las personas pobres. De forma que el producto era de 1.048 reales y dieciocho maravedís al mes y 12.581 reales y veintiséis maravedís anuales. Estas bancas se situaron desde el puente de Segovia y ermita de la Virgen del Puerto hasta la huerta de los cipreses. Debiendo sumarse a su producto, y al de segunda clase, el de los baños establecidos durante la temporada de verano en aquellos sitios. Estos baños rindieron en 1750, por cuota voluntaria —ya que nada se resolvió en el asunto—, 798 reales. En 1753 por un acuerdo con el Príncipe Pío aumenta la disposición de tierra de Madrid (AVM-S 3-24-28). Para los antecedentes de este arbitrio, además de los expedientes antes dichos es útil la consulta de AVM-S 9-329-23. Es una copia de un informe del archivo del ayuntamiento. Aunque en los índices del archivos e indica que no tiene año, en el interior del expediente aparece que está hecho en 1871.

³⁷ Bajo este concepto se concedió licencia a los colonos que quisieron establecer lavaderos, contando cada vara de terreno lineal a la margen del río por cabida de una banca, y por el número de varas a razón de 2 maravedís cada una. Siendo de cuenta de los colonos habilitar el terreno y proveerlo de los útiles necesarios para su servicio como también la casilla para guardar las ropas que dejan las lavanderas, y otros efectos. Es decir el arbitrio consiste en dos maravedís diarios —excepto en los días feriados, esto es 290 hábiles frente a los 75 restantes— por cada banca. En 1749 no se pagaba absolutamente nada por dichas bancas, y sólo con la licencia que daba el Corregidor a unos —y otros tomándosela por sí mismos— se ponían en la rivera, y llevaban por cada banca 3 y 4 cuartos a la mujer que iba a lavar. Acosado Madrid en ese tiempo por los porteros acordó su Junta imponer 2 maravedís en cada banca, se envió a S. M. que lo aprobó (AVM-S 3-27-47). Por lo que se refiere a los baños se explica más abajo.

³⁸ Por sentencia de 29 de agosto de 1752 se declaró que todos los banqueros debían pagar el ochavo por banca cada día, excepto los días de domingos y fiestas de precepto (AVM-S 9-329-23).

³⁹ Más tarde, por Real Orden de 1760 se resolvió que todos los lavaderos situados desde el puente de Segovia al de Toledo pagas en el arbitrio, exceptuando solamente a los que pertenecían a comunidades u hospitales, por servir para el uso de sus dueños (AVM-S 3-24-29).

⁴⁰ En 1762 se arrienda por seis años al precio anual de 16.200 reales el producto de bancas, casillas y baños del río; siendo por cuenta del arrendador los gastos. En aquella fecha producía el arbitrio a Madrid 17.818 reales año: 16.458 las bancas y 1.360 los baños (AVM-S 3-24-29).

⁴¹ Por Real permiso de 1773, Madrid aumentó considerablemente el número de sus bancas. En 1777 se otorgaron escrituras de arrendamiento por cuatro años, anticipándose —por vía de fianza— la renta de medio y estableciéndose servidumbres públicas de paso y yerbas libres para el ganado del abasto (AVM-S 3-25-28). Por orden del rey fechada en 1783 se construyó a expensas del patrimonio de la corona algunos lavaderos abiertos en la orilla oriental del Manzanares para hacer menos penosa la suerte de las lavanderas pobres. En esa fecha había en las dos orillas del río 58 lavaderos: 42 en la orilla oriental y 16 en la occidental. En 1791 existían 26 en la occidental y diez menos en la opuesta. De los 58, 21 eran de comunidades y particulares, y 37 de Madrid. En 1802 se arrendaron 35 lavaderos que produjeron al año a los Propios 31.388 reales, que con 2.814 que rentaban los toldillos eran 34.202 reales. A esto había que sumar los baños (AVM-S 3-25-34).

En 1802 se hizo una medición y arreglo de todos los lavaderos que pertenecían a Madrid en el Manzanares. Se demarcó el sitio que cada uno debía ocupar. Con arreglo a las varas, se fijó el número de bancas que habían de satisfacer en los 290 días que se conceptúan útiles⁴².

En la Florida, donde existían algunas islas, también se realizó la medición y se encabezó en su pago con el nombre de «toldillos». Teniendo presente que estos sitios en tiempos de crecidas del río no podían utilizarse, se fijó sólo la mitad de las rentas que a las bancas de la ribera⁴³.

En 1810 se establecieron 9 lavaderos nuevos⁴⁴. De forma que en 1811 los lavaderos de Madrid en la pradera del Corregidor eran 17, que tenían 1.006 bancas de pago y rentaban 17.161 reales anuales. Los del paseo de la Florida 16, con 651 bancas y 343 toldillos, que rendían 14.447 reales y 20 maravedís. Junto a la Virgen del Puerto tres, con 140 bancas y 2.348 reales con 5 maravedís de producto. En el puente de Toledo otros tres, con 120 bancas y 2.047 reales con 12 maravedís.

En total existían 39 lavaderos, que rendían 38.104 reales con 15 maravedís. En 1829 llegaron a 45, y el rendimiento en el quinquenio 1826-30 fue de 41.787 reales anuales⁴⁵.

Desde el arreglo de 1802 estos se encontraban arrendados⁴⁶. El contrato se renovaba cada seis años, con la condición de que aunque por avenidas, incendios u otros casos el lavadero disminuyera de valor, no pidiera minoración ni rebaja en el pago de la renta que les estaba señalada.

Cada arrendatario llevaba por una banca dos cuartos, por el tendedero otros dos y tres por guardar la ropa; lo que hacía siete en total, mientras que Madrid —como ya se ha dicho— sólo recibía el ochavo que le dio Felipe V⁴⁷.

El producto de este ramo rindió relativamente⁴⁸ hasta 1808, cuando se vió afec-

⁴² Se descuentan los 75 restantes por «feriados».

⁴³ Este arreglo sigue al menos hasta 1828 (AVM-S 3-27-47). Existe una excepción en la concesión en 1815 a seis lavaderos que están inmediatos a la fuente de la Teja. Se les rebaja una cuarta parte de la renta que tenían asignada en atención a que carecían del auxilio de poner baños por ser posesión del monasterio de San Jerónimo de Madrid toda la caja del río, que está a orillas de estos lavaderos. Y en el lavadero señalado con el número 20, que está a la parte de la Florida se le concedió también la gracia por el Ayuntamiento en 1811, de que pagase sólo 140 bancas en lugar de las 199 en que había sido fijado en el nuevo arreglo en atención a que carecía del suficiente sitio para tendederos.

⁴⁴ Uno más arriba de la fuente de la Teja, otro al final de los de la Florida y siete a la orilla del paseo de Nuestra Señora del Puerto; con ellos ha tenido un aumento el propio de 5.800 reales vellón cada año (AVM-S 3-27-47).

⁴⁵ AVM-S 6-214-3.

⁴⁶ En las escrituras de arrendamiento aparecen los arrendadores, descripción del lugar, la duración —seis años—, el monto global, la prohibición de poner más bancas y de realizar traspaso, su conservación, etc. (AVM-S 3-27-86, por ejemplo).

⁴⁷ Esto además de que hay en cada lavadero más bancas que las que paga este derecho, y que Madrid no recibe nada por el tendedero y nada por las casas (AVM-S 3-27-47).

⁴⁸ En 1752 ya se atrasaron algunos arrendatarios. En 1754 ya se debían 500 bancas. Desde 1780 hasta 1800 siempre se propuso en Junta la necesidad de mejorar este arbitrio y evitar los monopolios que había (AVM-S 3-27-47).

tado por las circunstancias políticas⁴⁹. A raíz de ellas, la municipalidad acordó una rebaja de la cuarta parte que pagaban los colonos⁵⁰. A finales de 1813 la deuda de los 35 lavaderos importa un total de 49.945 reales⁵¹.

Esta situación ocasionó una serie de medidas propuestas por el administrador⁵², entre las que sobresalía el nombramiento del comisario del ramo⁵³. Aunque la solución no fue fácil, todavía en 1819 se intentaba el cobro de atrasos⁵⁴.

Para el manejo del ramo no había ningún empleado con sueldo, sí un recaudador de las bancas y baños a quien se le abonaba por razón de su trabajo el diez por ciento. Los asuntos gubernativos se despachaban por los regidores comisarios de propios, sin asignación ni emolumento alguno. Las únicas cargas de este arbitrio eran el 6 por ciento por frutos civiles.

ii) Los baños

Los baños no pagaban una cantidad fija: los situados en el Soto de Migascalientes 20 reales cada uno por la temporada, los inmediatos a la Fuente de las Damas 50 reales y los de la Virgen del Puerto 10 reales. Todo esto se recauda según lo acordado por Madrid en 1803⁵⁵, y desde esta fecha no hubo nada significativo —en cuanto a su número y distribución— hasta 1830⁵⁶, cuando se levantó un nuevo plano de los lavaderos de la villa⁵⁷. En conjunto rendían unos cuatro mil reales en la temporada⁵⁸.

⁴⁹ El administrador del ramo informa al comisario de los lavaderos y baños de que en el mes de enero de 1812 acudieron los colonos de los lavaderos de la pradera del Corregidor y los tres que están junto al puente de Toledo manifestando la decadencia en que se hallaban por las muchas vejaciones que habían sufrido en los saqueos efectuados por las tropas francesas en sus entradas y salidas de la capital. Además la falta de habitantes que se nota en la población hace que día a día disminuyese el número de lavanderas (AV M-S 3-26-44 y 45). También AVM-S 3-26-97 sobre quejas de los arrendatarios de los lavaderos y baños de que las tropas francesas que bajan al río cometen algunos excesos por lo que dejan de concurrir las gentes a bañarse. Esto ocasiona que se destinen baños específicos para las tropas (AVM-S 3-26-85 y 3-27-28).

⁵⁰ Con la condición de satisfacer el resto en ocho meses. Sin embargo nada se adelantó. Ni lo atrasado, ni lo corriente dio cantidad alguna, a pesar de las diligencias judiciales y extrajudiciales que se practicaron (AVM-S 3-26-44).

⁵¹ De esos 35 lavaderos, 33 son deudores. Los otros dos no, ya que la escritura de arrendamiento se otorgó dicho año (AVM-S 3-26-44).

⁵² El administrador dijo que para la dirección y gobierno de estos establecimientos había habido siempre un individuo de la municipalidad con el título de comisario del ramo. Este era el que otorgaba las escrituras de arrendamiento, daba las licencias para la posición de baños en la temporada de verano e igualmente remediaba las disputas que solían suscitarse entre los colonos, especialmente en la temporada de baños. Dada las circunstancias es urgente su nombramiento (AVM-S 3-26-45).

⁵³ Por acuerdo de la junta de propios y sisas (AVM-S 3-26-45).

⁵⁴ De ese año es un acuerdo de la junta de propios y sisas sobre que el administrador del ramo active el cobro de los atrasos —especialmente los más morosos, cuyos nombres se incluyen— y presente la cuenta (AVM-S 3-26-76).

⁵⁵ AVM-S 3-27-18.

⁵⁶ Según informe de 1828 dado por el procurador síndico general y personero, se hace referencia a esta continuidad (AVM-S 3-27-47).

⁵⁷ AVM-S 3-27-63 y 3-27-43.

Hay que preguntarse por la concesión a Madrid de dos maravedís por banca o vara de sitio ocupado, ¿puede considerarse como expresión del producto de su propiedad sobre los terrenos del río Manzanares, o más bien como un arbitrio sobre el uso de las aguas? Un informe del procurador síndico general de Madrid —fechado en 1791— apuntaba que la contribución de todas las personas que tienen bancas, sin excepción de los dueños de los terrenos, nos habla de que es el agua el objeto esencial de esta facultad⁵⁹.

iii) *El Reglamento*

Desde tiempo inmemorial —por usar expresión de la documentación— existía un Reglamento u Ordenanza para la policía urbana de los lavaderos y baños. Debido al paso del tiempo y las variaciones consecuentes, en 1811 se dictó uno nuevo por la municipalidad⁶⁰, que estuvo vigente hasta 1829, cuando fue sustituido por otro nuevo⁶¹.

e) *Fiel contraste y almotacén*

Se trataba de los oficios de fiel contraste marcador de pesos, pesas, romanas y marcos; y almotacén de medidas. Las medidas y pesos eran propios antiquísimos, por los que se daba fe pública en los mercados y tiendas⁶². Estos oficios estuvieron

⁵⁸ Esta cantidad es aproximada, pues todos los años variaba el número de los que se ponían y por lo tanto no era un producto fijo. Desde el último arreglo se pagaba 20 reales por cada uno en la temporada, los que se ponen por los colonos de los lavaderos. Los que se ponen en el Soto de Migas Calientes por el guarda de él, o por otros sujetos en el vado de los Aveneros a 40 reales (AVM-S 3 -27-47).

⁵⁹ AVM-S 9-329-23.

⁶⁰ Reglas que deben observar los dueños o colonos de los lavaderos situados en la Rivera del río Manzanares para la mejor servidumbre de dichos lavaderos, y de los baños que se ponen en la temporada de verano igualmente para evitar las quejas y desavenencias que suelen ocurrir entre los mismos dueños o colonos por no tener un verdadero conocimiento de sus respectivas obligaciones (AVM-S 3 -27-27). El reglamento —fechado en 8 de junio de 1811— estaba dividido en 18 artículos sobre el funcionamiento rutinario del ramo, pero que no entraban en su vertiente hacendística, o —en palabras de la época— intereses del Propio. Cabe destacar la existencia de cuatro comisionados —dos por cada trozo en que está dividida la ribera—, nombrados por la municipalidad, o por su comisión o director de Propios. Son los responsables de la observancia de estas reglas. No tenían otra recompensa que la confianza depositada en ellos; a. 1. Como principal función han de convocar a los dueños o colonos para repartir las aguas; a. 2. También cuidarán todo lo relativo a higiene (AVM-S 3-27-27).

⁶¹ Así lo explicó el administrador del ramo en 1828. El reglamento que se formó en 1811 continuaba vigente, aunque como se formó en tiempo de revolución y no se había autorizado en el tiempo del gobierno «legítimo» desaparecieron las copias que se habían dado a varios colonos para que hicieran observar a los demás las reglas (AVM-S 3-27-47). En 1828 los colonos de lavaderos pidieron copia del reglamento del año 1811. A consecuencia de ello se vio más oportuno formar otro nuevo por la comisión y lo aprueba la Junta de Propios en 30 de junio de 1829 (AVM-S 1-238-33). Este nuevo texto es más extenso y pormenorizado (AVM-S 3-27-48).

⁶² No así en privado. Esto se aprecia con claridad en AVM-S 3-404-20. Antes de la invasión de los franceses los vecinos de Madrid vendían cebada en sus propias casas, con licencia del ayuntamiento. Las medidas del oficio de almotacén se destinaban para los arrieros y trajineros que conducían cebada a la plazuela de este nombre. Verificada la invasión francesa, los comisarios de

unas veces bajo administración municipal y otras bajo arriendo, desde 1784 se tenía en administración⁶³.

En 1810, la municipalidad josefista mandó que el director de propios viese el medio de subastar el aprovechamiento de estos oficios⁶⁴. Pero nadie hizo proposición y la Junta municipal acordó seguir con la administración⁶⁵. Sin embargo en 1813 se arrendaron las medidas de madera que el oficio de almotacén tenía en la plazuela de la Cebada para arrendarlas a los trajineros⁶⁶. En 1823 se realizó una nueva subasta⁶⁷, y otra en 1825⁶⁸.

La administración de estos oficios estaba bajo las inmediatas órdenes de los comisarios de propios.

Los productos de la administración del contraste de pesas y romanas en el quinquenio de 1827 a 1831 fueron de 74.944 reales, procedentes de los tres ramos que comprendía: venta, alquiler y sello. Los gastos de sueldo de empleados, jornales de operarios y compras de materiales, herramientas, etc. ascendieron a 36.238 reales. De forma que cada año medio resultaba un superávit de 38.702 reales.

Las obligaciones de esta dependencia eran el alquiler de pesos y pesas a las personas que lo necesitasen, el vender pesos, pesas y romanas a quien lo pidiese, el reconocer esto mismo en Madrid en los meses de enero, mayo y septiembre, en los días comprendidos entre 1 y 21; y en los lugares de la jurisdicción no exentos, una vez al año, todo con el propósito de conservar la más exacta fidelidad y arreglo en el peso. La instrucción o reglamento que rige en esta administración era el de 1788, y el arancel de los precios que se observa estaba aprobado por el Consejo en auto de 16 de diciembre de 1789.

Los productos de la administración del fiel almotacén en el quinquenio de 1827

policía concedieron licencia a los vecinos y dueños de los cajones que existían en dicha plaza para vender cebada, lo que antes no ocurría. Surgió un pleito porque se dice que no pueden usar de medidas propias mientras no se verifique que la venta de la cebada la hacen en sus casas.

⁶³ En el año de 1778 estaba decidido el ayuntamiento a la subasta de los oficios de fiel contraste y fiel almotacén. A este efecto extendieron las correspondientes condiciones y aranceles: se formalizó el remate del oficio de contraste y verificó en Manuel Sanz, maestro cerrajero y romanero en precio de 37.000 reales al año. Sin embargo esta acta sufrió mil contradicciones (unos pleitos sobre un arrendamiento anterior, unos privilegios existentes, etc.) y al fin no tuvo efecto el remate celebrado. El procurador síndico general llamó la atención sobre los excesos cometidos por el arrendamiento de este oficio: falsificación de cédulas, violencia sobre los tratantes de cebada para que tomaran la media fanega, y cualquier otra que aumentara el propio beneficio. De ahí que se inclinase a que se estableciese la administración por la preferencia que merecía la legalidad pública al interés que reportase el arriendo a los propios. Al menos durante dos o tres años para comprobar el producto con el conseguido mediante arriendo. La administración de los tres ramos tuvo principio en 1784. El valor que produjo la administración en los cinco años sucesivos, sirvió para la aprobación de aranceles y reglamentos en 16 de diciembre de 1789 y mandar que Madrid administrase dichos tres ramos en virtud del privilegio del rey Felipe III (AVM-S 3-29-30).

⁶⁴ AVM-S 3-404-7 y 3-29-30.

⁶⁵ AVM-S 3-29-30.

⁶⁶ AVM-S 3-404-11.

⁶⁷ AVM-S 3-404-21.

⁶⁸ AVM-S 3-404-26.

a 1831 en los ramos de venta, sello, arreglo y alquiler que comprende el producto fueron en el año común de 72.758 reales. Los gastos de sueldos de empleados, compra de medidas y oficina ascendieron a 26.420. De forma que la diferencia positiva era de 46.338 reales.

La obligación de este establecimiento era arreglar todas las medidas que fueran necesarias para los vendedores de la villa y pueblos sujetos al corregidor de Madrid; reconocerlas tres veces al año en los meses de enero, mayo y septiembre, desde el día 1 al 20, y en los pueblos de la jurisdicción una vez al año, para que con ello se conservasen las medidas con fidelidad y se alquilaran las que necesitasen los trajineros de granos y demás.

La municipalidad estaba preocupada por el fraude⁶⁹, algunos herreros, cerrajeros, hojalateros y otros artistas construían pesos, romanas, romanillas y medidas y las vendían sin presentarlas a los oficios de fiel contraste y almotacén⁷⁰.

El Consejo, en auto de diciembre de 1789, aprobó los aranceles de precios de la administración del oficio del fiel almotacén y del oficio de contraste marcador. Estos aranceles están vigentes todavía en 1830, cuando la Junta de los oficios del contraste y almotacén acuerda reimprimirlos⁷¹.

f) *Peso real*

Felipe III concedió a Madrid el peso real⁷². En 1756 se aprobó una ordenanza para este propio, y se estableció un arancel de los derechos que se debían exigir en las cinco puertas reales a los introductores⁷³. Existía también un plan de tarifas que devengaban los puestos cedidos a los expendedores. En 1787 el Consejo aprobó una nueva regulación⁷⁴.

Con la municipalidad josefina se procedió a dar una nueva forma al gobierno de este propio, para ello se dictaron unas nuevas Ordenanzas⁷⁵. Esto se hizo *ad experi-*

⁶⁹ La municipalidad tenía constantemente un regidor en el repeso, que vigilaba sobre este ramo de policía como sobre los demás de su competencia; y otro encargado de la recaudación de sus propios. En los meses de enero, mayo y septiembre de cada año se hacía una inspección, previo el correspondiente aviso (AVM-S 3-29-36).

⁷⁰ Se dio una Orden, publicada en el Diario de Madrid, domingo 15 de abril de 1810 (AVM-S 3-29-29).

⁷¹ AVM-S 3-404-31.

⁷² Mediante privilegio de 13 de junio de 1615 (AVM-S 2-491-20).

⁷³ *Ordenanzas, que manda S.M. observar para el Gobierno, y Administración del Peso Real, propio de esta Villa de Madrid.* Están divididas en diecisiete disposiciones (AVM-S 3-38-17 y 2-487-18, también AVM-R 19-5).

⁷⁴ Instrucción y reglas que debían observarse en la administración del peso real aprobadas por el Consejo en su auto de 16 de noviembre de 1787 (AVM-R 19-3). Las obligaciones del establecimiento eran abrir y cerrar sus puertas a las horas prefijadas por estatutos, que variaba según las estaciones; cobrar dos maravedís por arroba de cuanto se pesa en su balanza; rendir sus cuentas al ayuntamiento e ingresar en la tesorería sus fondos; cuidar del orden y tranquilidad del recinto, así como de su aseo y de que no hubiese fraude.

⁷⁵ Se trata de un *Arancel que comprende los derechos, almacenaje y puestos del Real Peso de Madrid, Instrucción particular que contiene las obligaciones de los mozos del Peso Real, y lo que han de exigir por su trabajo y Ordenanzas para gobierno del real peso de Madrid.* Todo con fecha de uno de mayo de 1810 (AVM-S 2-487-18, 2-490-41, 2-173-117, 2-173-119, 2-173-121 y AVM-R 25-5).

mentum, con la urgencia de poner inmediatamente al propio en estado de producir todo lo posible⁷⁶. Se definía el propio como un monopolio municipal por el que ninguna persona, por privilegiada que fuera podía, en las plazas o plazuelas, llevar romana suya para pesar el género que comprase o vendiera⁷⁷.

Madrid cobraba por arroba pesada⁷⁸, aunque no fuera género comestible⁷⁹. Cualquiera podía llevar el género comestible introducido por las puertas reales a las plazuelas, a su casa o donde quisiera, sin necesidad de ir al peso real, como ocurría anteriormente⁸⁰. Para lo cual en cada una de las puertas de registro, por cuenta del producto del peso, había una persona encargada de aforar los géneros comestibles y cobrar allí mismo⁸¹.

Durante esta municipalidad se va a proceder al arrendamiento del peso⁸². Con la vuelta de Fernando VII la administración del peso real volvió a la forma que tenía en 1808, cesando el arrendamiento⁸³. En 1816 se aprobó un nuevo arancel para este propio⁸⁴.

⁷⁶ Así lo dice la documentación, y refleja muy bien el estado de penuria de las arcas (AVM-S 2-490-41).

⁷⁷ Pero todo vecino es libre en su casa o almacén al uso de utilizar romana o balanza propia, estando sellada y reconocida por el fiel contraste. *Ordenanzas...* (1810), a. 3. De ahí que se entendiera por peso real no sólo el sitio del edificio de la Panadería que llevaba este nombre y el almacén habilitado debajo, sino también toda la plaza mayor y plazuelas donde se vendieran géneros comestibles. En esos sitios debía haber pesos y romanas para servicio público. La ampliación de esta demarcación se remonta a 1756. *Ordenanzas...* (1756).

⁷⁸ Las cantidades a pagar vienen expresadas en el *Arancel...* (1810), que no modifica lo que se venía pagando al peso, *Ordenanzas...* (1810), a. 8. Se establecen tres tarifas: un maravedí por arroba para géneros comestibles como arroz, almendras, pasas, lentejas, jamones, tocino, miel, dulces, pescados, etc.; 12 maravedís por carga mayor y 9 maravedís por la menor de verduras y frutas; 16 maravedís por carga mayor y 8 maravedís por la menor de huevos, leche, ternera o cerdo.

⁷⁹ *Ordenanzas...* (1810), a. 5: en este caso tres maravedís por arroba. Aunque lo normal es que el comprador haga este pago, los interesados pueden acordar lo que vean conveniente.

⁸⁰ *Ordenanzas...* (1810), a. 7.

⁸¹ Se llevaba un libro donde se sentaba la partida que se introducía con el nombre del arriero y los maravedises que adeudaba —como se expone en el arancel. *Ordenanzas...* (1810), a. 8. Todo arriero forastero que voluntariamente quiera llevar sus géneros comestibles al edificio del peso real, para custodiarlos y venderlos en él, ha de pagar por vía de almacenaje y puesto. *Ordenanzas...* (1810), a. 9 y *Arancel...* Para ayudar a estos menesteres habrá doce mozos, que se denominarán «del número». *Ordenanzas...* (1810), a. 13 y la *Instrucción particular...*

⁸² En la junta municipal que Madrid celebra el 18 de julio de 1810, se ve una proposición solicitando el arrendamiento del aprovechamiento del peso real de esta corte, ofreciendo 66.000 reales en moneda metálica. Después de distintos informes, donde se analizan la ventajas y desventajas de esa posibilidad, el 28 de julio se acuerda sacar a pública subasta el propio, lo que ocurre el 4 de agosto. Y se adjudica al interesado en la cantidad de 66.500 reales, con una duración el arriendo de ocho años (AVM-S 2-491-1).

⁸³ El uno de septiembre de 1814 se nombró administrador, interventor y escribiente (AVM-S 2-491-5). El administrador se encarga de llevar el libro en que se han de sentar todos los géneros que se introduzcan por las cinco puertas reales que adeuden derechos para el peso real (AVM-S 1-242-2). A partir de 1824 de este menester se encargará el interventor (AVM M-1º-584). También se nombró mayordomo de propios, de forma que el administrador del peso tiene que entregar los productos —con la nómina de los sueldos de sus dependientes— a él, en vez de hacerlo a la contaduría (AVM-S 2-491-3).

⁸⁴ AVM-S 2-491-7.

En el trienio se realizó un nuevo arriendo⁸⁵, y tras esta experiencia revolucionaria se ordenó la vuelta al estado que tenía en 1816⁸⁶. Así permaneció hasta la realización de una nueva subasta en 1826⁸⁷.

En el quinquenio de 1827 a 1831 este establecimiento rindió 64.226 reales. Los sueldos de los empleados⁸⁸ y oficina⁸⁹ ascendieron a 54.329 reales, de forma que el producto fue de 9.897 reales⁹⁰.

g) *Puestos para la venta de agua de cebada, horchata de chufas y nieve*

Lo específico de estos puestos era su eventualidad, por su objeto sólo permanecían abiertos la temporada de verano, es decir de mayo a septiembre⁹¹.

Existían dos tipos de puestos: los principales y los subalternos⁹². La diferencia entre unos y otros —con la documentación que se tiene— no es muy clara, al margen de la recaudación —los principales producían mucho más—, la diferencia podía estar en su tamaño o material de construcción, y a veces se hace referencia a su antigüedad.

i) *Puestos subalternos*

Tradicionalmente se establecían por licencia del corregidor, sistema que estuvo vigente hasta 1809, cuando la Junta de Propios en sesión de 13 de julio acordó formar una lista o matrícula de los 23 puestos⁹³ que existían colocados en ese momento, de los 54 que hubo en los años anteriores, graduándolos a 2.910 reales anuales y comisionando al alguacil mayor para su recaudación y para que los entregase en la tesorería.

⁸⁵ AVM-S 2-491-17. El 14 de enero de 1823 comunicó la junta de propios y sisas al administrador del peso real —denominado ahora nacional o público— una orden en que se mandaba observar varios capítulos que formaban una especie de reglamento, que fijaba las reglas necesarias para mantener el orden, limpieza, horario y método con que los vendedores y compradores efectuaban sus tratos.

⁸⁶ Se nombra administrador, interventor y escribiente (AVM-S 2-491-21).

⁸⁷ AVM-S 2-491-33.

⁸⁸ Los sueldos de los empleados en el referido quinquenio ascendían a 51.726 reales: 22.000 al administrador interino, por cinco años a razón de 4.400 en cada uno; 4.950 al oficial de libros por año y medio que estuvo, a 3.300 anuales; 8.286 a los mismos que desempeñaron este encargo por dos años y medio y cuatro días a razón de los dichos 3.300 reales; 3.650 a cada uno de los cuatro mozos de número; 904 a otro de igual clase que murió el 28 de marzo de 1828; y 986 a otro que falleció el 3 de abril del mismo año.

⁸⁹ Fueron 2.603 reales de gastos de oficina.

⁹⁰ Este establecimiento tenía mayores beneficios cuando los cajones estaban en la plaza Real, y se sujetaban a él los géneros comestibles. Pero en ese quinquenio se habían establecido almacenes particulares dentro y fuera de las posadas, donde se vendían esos géneros.

⁹¹ No como los de verdura, etc. cuya temporada era anual (AVM-S 3-114-8, en este expediente se encuentra un informe del director de propios del que se desprende la diferencia entre propios y arbitrios eventuales y de dotación. Entre los primeros están los puestos públicos de agua de cebada, de nieve y horchata de chufas).

⁹² AVM-S 3-114-16.

⁹³ AVM-S 3-114-8.

En la temporada de 1810 se produjo la reforma de la administración del peso real, y según la nueva forma los puestos pasaron a ser un ramo suyo⁹⁴. En 1811 se colocaron treinta puestos, pero la graduación no llegó a más de 2.500 reales⁹⁵.

Con la vuelta del gobierno absoluto se volvió a la licencia del corregidor, aunque se anhelaba una contribución sobre este ramo⁹⁶. En 1818 comienza a gestarse la reforma, para lo que se hace un acopio de información. Los resultados no eran buenos: se estaban recaudando 4.402 reales, cifra algo mayor que la de 1811, pero todavía muy lejana de aquellos 12.000 reales de 1804⁹⁷.

Ante esta situación la municipalidad decidió sacar a subasta estos puestos por la temporada de verano⁹⁸. El total de la puja ascendió a 11.986 reales, con lo que prácticamente se conseguía el nivel de 1804.

El ayuntamiento constitucional siguió con la subasta anual⁹⁹. Pero la recaudación fue disminuyendo, llegándose a 6.262 reales en 1823. Esto ocasionó que, como era común en otros ramos, se realizara la subasta por cuatro años, para al menos en ellos asegurar un ingreso. El remate sumó en total 8.017 reales¹⁰⁰.

Transcurridos los cuatro años establecidos, en 1828 se procedió a una nueva subasta¹⁰¹, hubo problemas para realizar el remate de todos los puestos¹⁰². De ahí que se intentasen rematar de nuevo y que se nos ofrezca la lista de los puestos que según acuerdo de la Junta de 7 de mayo de 1830 debían subastarse, de los que se podían arrendar como eventuales y de los que se habían suprimido¹⁰³. En 1831 hay un nuevo intento por subastar aquellos puestos que aún no lo estaban¹⁰⁴. En 1832 se

⁹⁴ AVM-S 3-114-8. El director de Propios observando los mismos 23 puestos dice que se puede recaudar 100 reales más, esto es 3.010 reales, restando sólo la aprobación para proceder a su cobro. Sin embargo como indica el mismo director en un nuevo informe fechado en Madrid a 16 de julio de 1811, aunque se graduaron éstos en 3.010 reales no pudo completarse su percibo.

⁹⁵ En AVM-S 3-114-8 aparece la matricula de estos puestos. La baja se debe al impuesto de patentes. A esto se agrega, que alguno de ellos desconociendo el derecho de propiedad que tiene Madrid sobre las calles públicas, y la posesión en que siempre ha estado su Corregidor de designar y permitir tales puestos, no sólo no satisfacen el arriendo después de convenido, sino que resisten y desobedecen las providencias, con perjuicio de los intereses y autoridad de la municipalidad.

⁹⁶ En 1817 varios vendedores de agua de cebada y horchata solicitan licencia para continuar en los puestos que venían utilizando, junto a ellos aparecen peticionarios nuevos. La junta de propios y sisas acuerda en 7 de mayo que mientras recaiga resolución sobre el expediente, que obra en el Consejo acerca del asunto, se concedan por el corregidor las licencias. Se señala que sería necesaria aprobación del Consejo para imponerles contribución. Así también los alcaldes de corte, por informe de los de barrio, dieron licencia para varios puestos en las aceras (AVM-S 3-114-15).

⁹⁷ AVM-S 3-114-16.

⁹⁸ El anuncio en el Diario de Madrid de 24.IV.1819.

⁹⁹ AVM-S 3-114-18 y 22.

¹⁰⁰ Las condiciones de la subasta son de fecha 13 de mayo de 1824, aparecen en AVM-S 3-114-23, así como el aviso de la subasta y los distintos remates.

¹⁰¹ AVM-S 3-114-27.

¹⁰² AVM-S 1-238-6

¹⁰³ AVM-S 3-114-30. También se incluye un acuerdo de la Junta para que se arriende el puesto de la plazuela de Santa Ana a Luis Carratala por cuatro años en 100 reales cada uno, no teniendo efecto se arrienda por uno en 200 reales.

¹⁰⁴ AVM-S 1-238-4.

procede de nuevo a la subasta cuatrianual, con poco éxito para los Propios¹⁰⁵.

ii) *Puestos principales*

Los puestos principales eran arrendados por el ayuntamiento¹⁰⁶. La historia de este propio es la historia de esos arrendamientos y de sus dificultades¹⁰⁷, motivadas por la imposibilidad en la que con cierta frecuencia se encontraban los arrendadores para realizar el pago del contrato, y que se desencadenaba por la penuria de los tiempos¹⁰⁸. Ante esto la municipalidad intentaba, por todos los medios, mantener sus ingresos¹⁰⁹.

Tras la reforma de 1818 estos puestos siguen la dinámica de las subastas, con distintos episodios¹¹⁰.

El ayuntamiento constitucional tampoco alteró esta praxis. En 1821 subastó el puesto de agua de cebada de la plazuela de Santo Domingo por tiempo de seis años y 300 reales¹¹¹; el de la Red de San Luis por seis años en 700 reales¹¹²; y el de la plaza del Rastro también en 700 reales¹¹³. En 1822 se subastó el puesto de San Ildefonso por tiempo de seis años y 3.002 reales¹¹⁴.

¹⁰⁵ AVM-S 1-238-5.

¹⁰⁶ En 1808 el mayordomo de propios informó que el puesto a cargo de Pascual Miguel cumplía su arrendamiento en 11 de mayo. De ahí que aparezca un anuncio para una subasta en el *Diario de Madrid* del martes 3 de mayo de 1808. Se remató en 400 reales.

¹⁰⁷ En el *Diario de Madrid* del sábado 9 de junio de 1810, se anuncia la subasta del puesto de la plaza Mayor, por seis años. Se remató por 1.200 reales anuales (AVM-S 3-114-8). En 1811 se arrendaron los puestos de la puerta del Sol —por seis años, a 2.500 reales— y de Antón Martín —por seis años y 1.000 reales— (AVM-S 3-114-9). En 1812 el de la plaza Mayor, también por seis años y 1.000 reales (AVM-S 3-114-11). Otros arrendamientos de la plazuela del Rastro, San Ildefonso, Santo Domingo y Red de San Luis en AVM-S 3-114-12, 13 y 14.

¹⁰⁸ Francisco Canser en un escrito fechado en Madrid a 30 de agosto de 1810 agradece que se le haya rebajado a 1.000 reales lo que tiene que pagar pero indica que le es imposible hacerlo cuando está previsto, por las circunstancias familiares en que se encuentra; de ahí que se le rebaje el monto a 700 reales. Éste no era un caso aislado, en el mismo año el arrendatario de un puesto en la calle ancha de San Bernardo presentó a la Municipalidad un escrito demostrando lo excesiva que era la carga de los 200 reales que satisfacía cada año, solicitando por lo tanto se le minorase. El alguacil mayor y el director de propios informaron en su favor, y se acordó que por ese año pagase sólo 120 reales. En el mismo expediente aparecen cinco peticiones más parecidas (AVM-S 3-114-8). Tras la salida de los franceses existen otros casos (AVM-S 3-114-15 y 17).

¹⁰⁹ Vicente Canser, que había pagado a 16 de agosto de 1810 un año y se hallaba debiendo otro, pidió que se le minorase el arrendamiento o se le rescindiera el contrato. La junta municipal acordó exigir el pago, y ante la negativa del interesado se hizo una nueva subasta, en la que no hubo postor (AVM-S 3-114-9). Manuel Sancho, arrendatario del puesto de Antón Martín acude a la Junta y sugiere que se el perdone la tercera parte de los 900 reales que debe de atrasos desde el mes de abril de 1812 a igual mes de 1813, se desestimó (AVM-S 3-114-14). La penuria hizo que se llegase a decidir que Miguel Martínez regentase el puesto de la Plazuela de San Ildefonso a precio de un real diario pagado por adelantado por vía de fianza (AVM-S 3-114-12).

¹¹⁰ AVM-S 3-114-16.

¹¹¹ AVM-S 3-114-20.

¹¹² AVM-S 3-114-20.

¹¹³ AVM-S 3-114-20.

¹¹⁴ AVM-S 3-114-21.

En 1825 se remató el de la plazuela de Santo Domingo en 510 reales¹¹⁵. En 1826 se intentó la subasta del de la plaza Real por seis años, pero no hubo postor. En 1827 se concedió por 800 reales anuales¹¹⁶.

El mismo año se remató el puesto de la plazuela del Rastro por seis años y 1.568 reales¹¹⁷. También el situado en la Red de San Luis por tiempo de seis años en la cantidad de 3.010 reales¹¹⁸.

h) *El producto de las basuras*

La basura que se sacaba de las calles de la villa era otro propio de Madrid¹¹⁹; era vertida en los muladares, es decir la parte próxima a los muros de la población. Estos eran por antonomasia los ubicados en la Puerta de Toledo, en la de Santa Bárbara, en la de Conde Duque y otro cercano al portillo de Embajadores y Valencia¹²⁰.

Existían muladares en administración y otros en arrendamiento. En cuanto a los primeros, el producto era recaudado por los guardas y entregado al visitador general de policía; que a su vez lo enviaba a la depositaría, quedándose con un ocho por ciento de comisión. A partir de 1813¹²¹ los citados guardas hicieron las entregas a la administración general, donde era aplicado su ingreso a los gastos del ramo y la contaduría general de cuentas llevaba la intervención.

En cuanto a los arrendados, seguían el trámite habitual: se daba el correspon-

¹¹⁵ AVM-S 3-114-24.

¹¹⁶ AVM-S 3-114-26.

¹¹⁷ AVM-S 1-238-1.

¹¹⁸ AVM-S 1-238-2.

¹¹⁹ Así dice el Reglamento del Consejo de 1766 cuando describe en que consisten los propios y rentas de Madrid (AVM-S 7-206-5). En la glosa de 1832 a este particular, se hace referencia a que el propio es el producto de las basuras «de la Tela y de las calles», se resalta más el aprovechamiento de esas basuras que su entidad propia. Existía una resolución real aprobando los arbitrios destinados a este objeto fechada en 1754. La recogida de la basura, la construcción y mantenimiento de los muladares, los terrenos que estos ocupaban, etc. eran una fuente de gastos que debía satisfacer la hacienda del municipio; de ahí que por otro lado intentase obtener una serie de ingresos. El aprovechamiento de los muladares se materializaba en el estiércol para fertilizar las tierras, los pastos para el ganado de cerda y los trapos.

¹²⁰ Además había uno en la puerta de San Fernando, en la puerta Cerrada y otro al otro lado del puente de Segovia. A pesar de ello son numerosas las peticiones de nuevos espacios destinados a ese fin, realidad que debe vincularse con el movimiento poblacional de Madrid. En 1807 se pensó en hacer cuatro muladares cercados fuera de Madrid (AVM-S 3-358-63). Y en 1809 se consultó al Consejo de Castilla sobre ello (AVM-S 4-297-4). En 1813 varios agricultores pidieron la construcción de un muladar en una tierra propia de Madrid a la otra parte del puente de Segovia, para facilitar su aprovechamiento como abono. Y así se hizo. El uso de la basura era asunto de importancia: si no existía demanda, el ayuntamiento no ingresaba dinero y además los muladares se colapsarían rápidamente (AVM-S 3-121-26). En 1818 se pidió un muladar dentro del cuartel de guardias españolas, para facilitar la limpieza; y así se realizó (AVM-S 3-121-37).

¹²¹ El 14 de diciembre de 1813 la comisión de limpiezas acordó proceder a la extinción del administrador de muladares (AVM-S 3-1 21-26).

diente aviso¹²², se celebraba la subasta y el arrendador se comprometía en escritura a cumplir una serie de condiciones¹²³. Existieron numerosos arredamientos: 1809 y 1810¹²⁴, 1811¹²⁵, 1813 y 1814¹²⁶, 1816¹²⁷, 1823¹²⁸, 1825¹²⁹, 1826¹³⁰, 1829¹³¹.

Para los vecinos de Madrid existía un precio especial en las basuras¹³², con ello se intentaba fomentar el consumo de basura, para evitar los problemas que acarrearían su acumulación¹³³. Pero a pesar de ello la demanda iba gradualmente a menos¹³⁴.

¹²² Un ejemplo de aviso es el siguiente: «Aviso al público. Quien quisiere tomar en arrendamiento por tiempo de cuatro años el aprovechamiento de pastos para el ganado de cerda, que produzcan los muladares de las puertas de Toledo, Santa Bárbara y Conde Duque y el del portillo de Embajadores donde se vierten las basuras que sacan los carros de la limpieza, acuda a la secretaria de la Municipalidad del cargo de don Juan Villa y Mier, en el término de 15 días contados desde esta fecha, donde se admitiran las posturas que se hicieren siendo arregladas y enterará de las condiciones con que se subastan. Madrid 25 de Enero de 1813».

¹²³ Así para el remate del aprovechamiento de pastos de los muladares de las puertas de Toledo, Santa Bárbara, Conde Duque, y portillo de Embajadores, en 1813 se fijaron las siguientes: 1. Que el arrendador en cuya cabeza se rematase alguno de dichos muladares, ha de permitir a todo vecino el que lleve a él su ganado moreno, cobrando por cada cabeza cinco reales mensuales. 2. Que este arriendo ha de ser por tiempo de cuatro años, pagando uno adelantado por vía de fianza, o dando fiador abonado a satisfacción de la municipalidad. 3. Que ha de ser de cuenta del arrendador cualquier perjuicio que se experimente en el ganado de cerda, mediante que debe cuidarle el pastor o pastores que tenga el arrendatario. 4. Que las basuras se han de llevar por los carros y operarios de Madrid a los citados muladares en los días y términos que es costumbre y se ha practicado siempre. 5. Que el arrendador ha de tener obligación de dar cuenta a la municipalidad cuarenta días antes de que cumpla cualquier arrendamiento que se haga de dichos muladares.

¹²⁴ Del muladar inmediato a los portillos de Valencia y Embajadores (AVM-S 3-121-21).

¹²⁵ De los muladares de la puerta de Toledo y el de Conde Duque (AVM-S 3-121-24).

¹²⁶ De los de las puertas de Toledo, Santa Barbara, Conde Duque y portillo de Embajadores (AVM-S 3-121-24).

¹²⁷ AVM-S 4-297-4.

¹²⁸ De la puerta de los Pozos (AVM-S 3-121-44, 46 y 47).

¹²⁹ AVM-S 4-297-4.

¹³⁰ De la puerta de los Pozos (AVM-S 3-122-5).

¹³¹ De la puerta de San Fernando (AVM-S 3-358-48).

¹³² En 1811 Los vecinos labradores de Leganés piden que se les hiciese gracia en el precio de las basuras cual se había concedido a los de Villaverde. La Junta municipal acuerda, el 14 de junio de 1811, que el precio se rebaje en medio real carro de par de mulas, dos cuartos en carga mayor, uno la menor; quedando reducido a 2 reales y medio por el carro de par de mulas, 3 reales por el de bueyes, 8 cuartos por cada carga mayor y 4 por la menor. Esto por justicia se extiende a todos los labradores y hortelanos de la jurisdicción de Madrid (AVM-S 3-121-23).

¹³³ De lo contrario debido a que de tres años a esta parte ha disminuido la venta de basura sería forzoso arrendar otras tierras para echar basuras de las calles y portales, especialmente en el departamento alto (AVM-S 3-121-23).

¹³⁴ AVM-S 3-121-25, donde aparece un acuerdo de la Junta de propios y sisas para que el administrador general de limpiezas formara los presupuestos aproximados de las salidas de carros de basuras para que sirviesen de base al tiempo de las subastas que debían hacerse. Y el 15 de mayo de 1818 indica lo siguiente: carros de basura sacados de esta población y que entraron en los cuatros muladares los años indicados, según calculo aproximado: 1807, 56.575 carros; 1808, 55.480; 1809, 54.750; 1810, 36.500; 1811, 29.200; 1812, 18.250; 1813, 22.995; 1814, 25.062; 1815, 30.974; 1816, 31.850.

Con motivo de las subastas del año 1818 la comunidad de labradores propuso arrendar los muladares para evitar la especulación de los negociantes¹³⁵, en consecuencia la Junta de Propios y Sisas emitió una nota de los precios que debían exigirse¹³⁶. En 1821 se revisaron a la baja los precios¹³⁷, y en 1826 volvieron a reducirse¹³⁸.

Sin embargo esto no fue suficiente y la junta de propios y sisas acordó en 1828 una nueva reducción¹³⁹. Como esto no relanzó la demanda, en 1829 se redujo el precio a la mitad¹⁴⁰.

Producto de basuras 1815-1819

1815	15.807	7.714	10.372	11.204	45.033
1816	12.338	9.878	5.644	17.686	45.547
1817	13.165	16.766	5.394	13.215	47.942
1818	17.195	33.091	5.878	9.873	65.978
1819	18.727	13.400	2.331	6.833	41.293
TOTAL	77.228	80.251	29.502	58.813	245.794

En las seis columnas se especifican de izquierda a derecha los siguientes datos: año, muladar de Puerta de Toledo, de Puerta de Embajadores, de Santa Barbara, del Conde Duque y el producto total por años. La última fila contiene los totales en reales de los cinco años. No se han incluido los maravedíes. En cuanto al producto del pasto, los de Toledo y Embajadores produjeron en esos cinco años 22.320 reales, Santa Barbara y Conde Duque —hasta su supresión— 3.850. Lo que hacía un total de 26.170 reales, y era en un año común 54.392 reales.

¹³⁵ AVM-S 3-121-25.

¹³⁶ Nota de los precios que deben exigirse por las basuras desde 1 de marzo de 1818: por cada carro de mulas no pasando estas de cuatro, 6 reales; por cada carro de par de bueyes, 8 reales; por cada carga de caballería mayor, 1 1/2 reales; por cada carga de caballería menor, 1 real (AVM-S 3-121-25).

¹³⁷ Cada carro de mulas no pasando de cuatro y el de bueyes de un par a 5 reales por cada carga mayor y un real y medio por la de menor (AVM-S 3-121-25).

¹³⁸ Carro de bueyes o de 4 mulas a 4 reales; cada carga de caballería mayor a 6 reales y cada carga de menor a 3 cuartos (AVM-S 3-122-4).

¹³⁹ Que para ese momento se diese el carro a dos reales, la carga mayor a cuatro cuartos y la menor a dos cuartos (AVM-S 3-122-8).

¹⁴⁰ Según acuerdo de la junta de propios y sisas de 28 de octubre de 1829, y con la calidad de que la saca se hiciera antes de las 11 de la mañana, para evitar olores (AVM-S 3-122-9).

i) *Las sillas del paseo del Prado*

Para comodidad del público y evitar el embarazo que suponía el aumento de bancos fijos, se situaban en el paseo del Prado y otros sillas de paja¹⁴¹. El gasto que suponía se obtenía de los propios usuarios, quienes pagaban ocho maravedís por cada persona y silla que ocupasen.

El arbitrio solía arrendarse¹⁴², aunque su cobro no fue siempre fácil; del arrendamiento efectuado en 1807 se cobró el primer año, que cumplió en 1808, y se perdonó el que cumplió en 1809. Los avatares políticos de la época no permitieron el desarrollo pacífico de este arrendamiento, y pronto los asentistas pidieron una indemnización por los perjuicios que esos acontecimientos les habían causado¹⁴³.

Las estrecheces económicas hicieron que el ministro de Interior diese orden sobre reclamación de los interesados con motivo de los que estaban debiendo y moderación del pago de lo que faltaba de arriendo. Concluido el plazo del arriendo, se procedió a otro¹⁴⁴ y así sucesivamente¹⁴⁵.

¹⁴¹ AVM-S 2-173-108.

¹⁴² En 1807 se arrendó el aprovechamiento de las sillas del Prado por seis años. El arrendamiento se realiza a favor de Isidro Díaz y Francisco Herranz, en precio de 7.030 reales al año por adelantado y sin perjuicio de fianza particular (AVM-S 1-119-44).

¹⁴³ Así, piden que se les perdone el año de arrendamiento que terminó en 4 de julio de 1810 y que por lo respectivo a los tres años que restan de arrendamiento hasta 3 de julio de 1813 satisfagan al respecto de cinco mil reales cada año en lugar de los 7.030 que debían pagar; entregando los cinco mil respectivos a este año para fin del mes de octubre próximo y los dos años siguientes a principio de cada uno con arreglo a la Escritura (AVM-S 1-119-44).

¹⁴⁴ El 1 de mayo de 1813 se publicó un aviso para la subasta del producto de las sillas del paseo del Prado (AVM-S 1-119-63). Nuevo aviso en 1 de julio. Entre tanto en la Junta de propios y sisas celebrada el 13 de julio de 1813 se vieron tres memoriales de María Sáchez, María Ocharas y Miguel Alonso, solicitando permiso y licencia para poner sillas por la noche en la plazuela de Santa Ana. María Sanchez —la María dice el expediente— ofrecía 60 reales por la temporada, Miguel Alonso 4 reales diarios hasta San Miguel. La Junta acordó subastar este arbitrio. Se inserta en el *Diario de Madrid* de 14 de julio y se señala el 20 para su remate. Por distintas dificultades se repite el 23, y luego el 27 y al final se suspende la subasta por lo bajo de las posturas (AVM-S 1-119-65). En cuanto al producto de las del Prado, hay un nuevo aviso el día 19. Al final se adjudica por tiempo de tres años que dieron principio en 5 de julio de 1813, y hasta igual día de 1816. El remate se realizó a favor de Isidoro Díaz y Francisco Herranz, que eran los asentistas de este arbitrio hasta ese momento. El nuevo precio fue de 2.500 reales al año. Por lo que respecta a los 5.100 reales que aún debían por el arrendamiento anterior, se convino en pagar en tres plazos de iguales pagas, verificando el primero en ese año (AVM-S 1-119-63).

¹⁴⁵ En 1816 se anunció una nueva subasta (AVM-S 1-119-87). Entre las condiciones se señala que el arrendamiento será por tres años; el arrendatario se obliga a poner el número de sillas necesarias para la comodidad del público y cuidar su conservación, cobrando para ello ocho maravedís por silla (AVM-S 1-119-87). En 1822 la comisión de hacienda acordó sacar a pública subasta el arbitrio, por tiempo de seis años, con unas condiciones semejantes a las anteriores. El remate se realizó a favor de Isidro Díaz y Francisco Herranz, en 2.500 reales anuales (AVM-S 1-203-35). Por muerte del arrendatario se procedió a un nuevo arriendo en 1823, que se hizo por seis años que cumplían en 29 de julio de 1829, en Josefa Sanz y Agustina Dueñas, viudas de los anteriores arrendatarios, en 3.300 reales en cada uno de dichos años. En 1829 el arrendamiento se hizo por el corregidor por corresponderle como director del Presidio Correccional; en este sentido AVM-S 1-118-19. Sin embargo la subasta de 1835, vuelve a hacerla el ayuntamiento (AVM-S 1-160-17). Este fue en las mismas asentistas, por tiempo de seis años, en la cantidad de 3.500 rea

Un problema de este arbitrio eran las quejas continuas de los asentistas por los destrozos en las sillas. Problema que se agravó con la entrada de tropas francesas, inglesas y portuguesas¹⁴⁶. La municipalidad intentó poner orden en el asunto mediante la publicación de bandos, que se fijaban en los lugares públicos¹⁴⁷.

j) *El privilegio de recoger caballerías*

Desde tiempo inmemorial existía el privilegio de recoger las caballerías, de los trajineros que diariamente conducían comestibles a la villa, en la plazuela de la Cebada¹⁴⁸. El nombramiento de la persona que explotaba este derecho dependía del corregidor¹⁴⁹.

Estaba arrendado a Elías Hernández, que lo heredó de su padre¹⁵⁰. El arrendamiento consistía en el pago de ocho reales diarios, sin embargo no se desenvolvió pacíficamente¹⁵¹. Esto hizo que en abril de 1817 se sacase a subasta dicho privilegio¹⁵², pero tampoco se solucionó el problema¹⁵³. A pesar de ello el arrendamiento continuó hasta 1825, año en el que se hizo una nueva subasta¹⁵⁴.

k) *El barrido de la plaza y plazuelas*

El barrido de la plaza Mayor y plazuelas también se arrendaba¹⁵⁵. El contrato solía hacerse por cuatro años. El arrendador se comprometía al pago de una cantidad diaria y a mantener la limpieza y recoger los animales muertos. A cambio percibía

les cada uno (AVM-Cr 1-129-9). Ese año se produjo una real Orden para que no se colocasen sillas en la plaza de Oriente (AVM-Cr 1-222-14).

¹⁴⁶ Así en 1813 se quejan los asentistas que estas tropas, establecidas en el Retiro, utilizan las sillas para sus acampadas sin devolverlas ni pagar un maravedí (AVM-S 1-119-63).

¹⁴⁷ Para estos bandos AVM-S 1-119-43, 2-173-108, 2-175-42, 2-178-33, 1-119-84, 2-175-73, 2-178-44, 1-126-19, 2-175-75, 2-176-31, 1-119-96, 2-175-74 y 4-299-12.

¹⁴⁸ Así se evita que estuviesen en plazuelas, plaza Mayor y calles inmediatas.

¹⁴⁹ AVM-S 3-358-63.

¹⁵⁰ A la muerte de su padre —que tenía el derecho— se celebró la escritura de arriendo en su nombre (AVM-S 3-458-63).

¹⁵¹ Elías Hernández pagó puntualmente hasta que advirtió que todo el que quería hacía lo mismo sin pagar nada. En distintos momentos acudió a la Junta de propios y no tuvo respuesta (AVM-S 3-107-1).

¹⁵² Queda rematado en favor de Manuel Gutiérrez, por mote «peluquilla», por tiempo de seis años —desde 30 de abril de 1817—, en la cantidad de 18 reales y medio diarios (AVM-S 3-107-6).

¹⁵³ Manuel Gutiérrez era un testaferro en este arrendamiento, como generalmente lo eran todos los tratantes, que no sólo no tenían lo que aparentaban, sino que jamás cumplían lo que ofrecían con religiosidad (dice el mayordomo de propios). El que seguía disfrutando el privilegio era Elías Hernández quien debía a los propios la cantidad de 13.872 reales (AVM-S 3-107-2).

¹⁵⁴ El arrendamiento cumplía en 30 de abril de 1823 y debía desde 31 de octubre de 1819 hasta 30 de abril de 1823 —incluyendo el tiempo que ha continuado en el arriendo— 27.028 reales y 17 maravedís (AVM-S 3-107-6).

¹⁵⁵ En 1809 se celebra una, en la que se adjudica a José Berruero —en quién estaba muchos años—, por 42 reales y medio (AVM-S 1-36-67). En 1814 vuelve a hacerse otra a favor de Julián Inglés, en precio de 60 reales diarios y se prórroga un año más (AVM-S 1-3 9-16). Desde el 24 de enero de 1819, recae en Angel Izquierdo en 100 reales (AVM-S 1-40-32). Y en 1823 se subasta en Eusebio Rodríguez Estremera y Manuel Marín, 176 reales y cuarto (AVM-S 1-41-22).

de cada persona que ocupaba un asiento o puesto para vender géneros o comestibles cuatro maravedís¹⁵⁶. Debía afianzar su pago con la entrega de una mesada adelantada, aunque también aquí hubo los problemas para cobrar la renta municipal¹⁵⁷.

1) *El arrendamiento de las romanas*

Las romanas del peso real, plazuelas y calles de Madrid comenzaron a arrendarse en 1809 por un acuerdo de la Junta de 31 de julio de ese año¹⁵⁸. Antes el aprovechamiento era explotado por los mozos del peso real, que obviamente no asistieron mudos a este «despojo»¹⁵⁹.

Tras varios intentos, el remate se celebró en 20 de noviembre de 1809. El arrendamiento se hizo por seis años y en 47.050 reales cada uno¹⁶⁰.

La implantación de lo acordado no fue pacífica, en contra de lo pactado en la escritura el administrador del contraste dió una romana a un individuo, con la que había pesado 88 canales de tocino en perjuicio del privilegio. La municipalidad pasó oficio recordando esa exclusividad¹⁶¹.

A ésta siguieron otras muchas reclamaciones que condujeron a que el arrendador formase una demanda sobre nulidad del arriendo por la imposibilidad que hallaba en el cumplimiento de la condiciones con que lo tomó¹⁶².

¹⁵⁶ Si no le pagan podrá acudir al corregidor o juzgado del repeso mayor para que les obligue a ello (AVM-S 1-36-67). Y de hecho estos conflictos no son imaginarios (AVM-S 1-39-16).

¹⁵⁷ Así por ejemplo, Julián Inglés debía desde 24 de enero hasta 26 de febrero de 1814 la cantidad de 11.220 reales (AVM-S 1-39-16). Y en 1823 el administrador de los propios comunicó a la comisión de hacienda que Angel Izquierdo y Felipe Jiménez debían 18.900 reales. Además los arrendadores presentaron una lista de morosos (AVM-S 1-41-24).

¹⁵⁸ En 1805 el personero de Madrid pasó oficio al monarca para que la utilidad que rendían las romanas llamadas del peso real, de que se aprovechaban los mozos ordinarios de él, ingresasen en los fondos públicos de la villa. Estos mozos no cobraban una tarifa sino que era un acto voluntario pagar por los pesos que se hacían con ellas. Junto a éstas, existían otras romanas que dependían de la administración del fiel contraste. El asunto pasó al Consejo de Castilla, pero no se llegó a resolver nada (AVM-S 3-39-23).

¹⁵⁹ AVM-S 3-39-1.

¹⁶⁰ Se dió aviso al público en el que se informa que la municipalidad de esta villa había subastado, como propio que le pertenecía, el aprovechamiento de las romanas de la plaza Mayor y plazuela, y la balanza del real peso. El asentista se hallaba autorizado para exigir a los tragineros y tratantes tres maravedís en arroba, sin que persona alguna pudiera entorpecer el uso de dichas romanas al citado arrendatario, ni el exigir los tres maravedís en arroba, y menos valerse de romana que no fuera de las de este asentista. El corregidor velaría por ello (AVM-S 3-39-1).

¹⁶¹ AVM-S 3-39-1.

¹⁶² La municipalidad deseosa de evitar todo pleito y recurso, dió comisión al director de propios, para que tratase con aquel a fin de arreglar amistosamente el asunto, sin que mediara perjuicio para los fondos públicos ni para el obligado. En la junta municipal que se celebró en 26 de este mes, el director expuso que después de algunos debates que había tenido con Alfonso Gómez, verdadero arrendatario del arbitrio, aunque bajo el nombre de Juan Soto había convenido en que el precio del arrendamiento había de quedar reducido a 25.000 reales de vellón anuales, en lugar de los 47.050 reales en dinero metálico, que el primer año integro que cumplía en 16 de diciembre lo había de entregar integro, que para adelante y sin perjuicio de la fianza que tenía dada ha-

Con la vuelta de Fernando VII se cuestionó la subasta del romaneo. La junta de propios acordó que la romana y balanzas correspondientes al peso real recuperaran su antiguo estado del año de 1808¹⁶³.

Las romanas se pusieron en poder de los doce mozos de número del peso real para que saliesen a hacer ese servicio a la plaza Mayor y plazuelas, según lo practicado en 1808¹⁶⁴. Pero las necesidades numerarias del ayuntamiento reabrieron el debate y en 1816 —tras una larga reflexión— la corporación manifestó que las romanas debían estar arrendadas al mejor postor.

El Consejo autorizó el arriendo con fecha 6 de noviembre de 1819, a través de la contaduría general de propios del Reino; pero las circunstancias que sobrevinieron en 1820 impidieron cualquier modificación¹⁶⁵.

Con el ayuntamiento constitucional, la comisión de hacienda —en un informe fechado en Madrid a 28 de noviembre de 1822— propuso que para aumentar los fondos públicos se sacase a pública subasta el aprovechamiento de las romanas del peso; que éstas se unificasen con las del contraste¹⁶⁶. En ayuntamiento celebrado el 30 de noviembre de 1822 se aprobó lo propuesto, y el 13 de diciembre de 1822 se anunció la subasta¹⁶⁷. Esta novedad trajo la habitual resistencia¹⁶⁸.

Tras el trienio liberal se ordenó la vuelta al sistema anterior. El visitador de propios recordó la orden del Consejo de 6 de setiembre de 1819, y los mozos del peso real presionaron sin ninguna suerte para no perder su privilegio¹⁶⁹.

bía de pagar siempre por mesadas anticipadas, y que el plazo que antes era de seis años había de ser de ocho, contados desde la misma época y que había de ceñirse en el aprovechamiento del arriendo según la escritura (AVM-S 3-39-1).

¹⁶⁴ AVM-S 1-215-1. Igualmente se oficia al administrador del contraste, don José Rosado, con el objeto de que por su parte recoja de dicho arrendatario otras romanas que como a tal le había entregado. Por lo que respecta a la balanza del edificio del peso real desde el dos de octubre se dió principio a pesar el género sin exigir ningún derecho, y con arreglo a lo que se practicaba antiguamente. Ésta se colocó en parage que debía ocupar, para vista del público. El contraste recibió las siete romanas y las puso en el ser y estado en que obraban en 1808.

¹⁶⁵ AVM-S 3-39-23.

¹⁶⁶ AVM-S 3-39-4. En el informe la comisión se hace eco de las innumerables peticiones que desde 1800 existían en pro de la subasta de este arbitrio, y de lo vejatoria que era la situación existente para los fondos municipales.

¹⁶⁷ AVM-S 3-39-4. Se subastó por tiempo de dos años el arrendamiento de las romanas siguientes: Herradores, San Miguel, Puerta Cerrada y Santa Cruz y Leña, en José Rodríguez en precio de 2.600 reales en cada año; Cebada, Paja y Rastro en Francisco de la Torre y precio de 21.140 reales año; Santo Domingo, Gato, San Ildefonso y sus agregados en José Rodríguez en la cantidad de 400 reales año; Antón Martín en el mismo Rodríguez en precio de 400 reales; Red de San Luis y Carmen en el precitado Rodríguez también con 400 reales.

¹⁶⁸ Por ejemplo, el arrendatario de la romana de la plaza de la Cebada y Rastro puso un recurso ante la resistencia del dueño del corral matadero de la Paloma a pagar los derechos a las reses que se matan en dicho corral. Ante lo cual el ayuntamiento ofició al regidor comisario del Cuartel de San Francisco, para que intermediara en el pago al asentista; ya que se trataba de un matadero ó mercado público y en nada se perjudica la propiedad, pues el pago que se reclamaba era por lo que allí se pesaba de otros particulares.

¹⁶⁹ AVM-S 3-39-8.

El dos de agosto en junta de propios y sisas se acordó celebrar la subasta¹⁷⁰, bajo las condiciones insertas en la Orden del Consejo¹⁷¹ y se dio aviso de ella por los medios habituales¹⁷². El remate se realizó en 50.560 reales, pero se admitió la mejora del cuarto a la cantidad dicha. El segundo remate se realizó el día 15 de septiembre de 1823, por 81.200 reales¹⁷³.

Al terminar el plazo del arriendo se acordó uno nuevo¹⁷⁴. Pero el arrendatario presionó para que se le renovara el contrato¹⁷⁵, y la junta de propios y sisas le concedió una prórroga de dos años¹⁷⁶. Y luego se produjo un nuevo arriendo.

Otro capítulo a tratar son los abusos cometidos por el arrendatario al no respetar los límites de sus competencias¹⁷⁷. Las quejas en este sentido son numerosas y se llegó a la vía judicial para solucionar esos conflictos¹⁷⁸.

II) *El producto de cajones*

Se trata de uno de los arbitrios concedidos por el rey a la municipalidad para sufragar los gastos de policía urbana. Consistía en «una moderada contribución sobre toda clase de tiendas y puestos públicos».

Los cajones, tinglados, puestos, etc. podían ser propiedad de Madrid o de particulares¹⁷⁹, los dos tipos tenían que pagar las cantidades establecidas; ya que el obje-

¹⁷⁰ AVM-S 3-39-8.

¹⁷¹ AVM-S 3-39-8.

¹⁷² AVM-S 3-39-8.

¹⁷³ AVM-S 3-39-7.

¹⁷⁴ AVM-S 3-39-9.

¹⁷⁵ AVM-S 3-39-8.

¹⁷⁶ El motivo aducido era que el interesado estaba corriente en el pago y que no eran tiempos buenos para subastas, además de que el arbitrio aún no estaba consolidado. El personero no estaba de acuerdo, el administrador de fiel había aconsejado dos años en vez de tres que pedía el arrendatario y que fue el tiempo por el que se prorrogó (AVM-S 3-39-9).

¹⁷⁷ No podía salir de las plazuelas y sus inmediaciones, cobrando el derecho sólo en los términos que estaba autorizado (AVM-S 1-214-133). En 1832 el director de la empresa del molino harinero y sierra mecánica de Aranjuez, solicitó al ayuntamiento que las harinas procedentes de la indicada fábrica sólo pagaran los ocho maravedís por arroba que señalaba el arancel. La contaduría informó que el arrendador no tenía facultad para pesar en puertas, sino en el mercado. También en ese año un regidor expuso que el arrendador traspasando sus límites exigía sus derechos en las puertas (AVM-S 3-39-20). En 1833, otro regidor introdujo por la puerta de San Fernando un carro con una porción de garbanzos vendidos en Madrid. Fue detenido por uno que se decía dependiente de los contratistas de las romanas de las plazas y plazuelas, exigiéndole el derecho que correspondía por dichas romanas, lo mismo ocurrió el año anterior y tuvo a bien el corregidor disponer se pudiese a la entrada de las puertas un cartel que expresaba que nada se debía satisfacer con dicho objeto y sí, en las plazas o plazuelas, evitando de este modo semejantes excesos (AVM-S 3-461-39).

¹⁷⁸ Existían varios pleitos pendientes, promovidos por diferentes sujetos que se negaban al pago de los 8 maravedís en arroba, de los géneros que se introducen en esta Corte, bajo diferentes protestas, contra el arrendatario de las romanas, habiéndose citado a Madrid en algunos de dichos pleitos (AVM-S 3-39-21).

¹⁷⁹ En el reinado de Fernando VII varios particulares compraron cajones a Madrid (AVM-S 1-177-74). Además la municipalidad encargó en 1819 al alguacil mayor la venta de los de Madrid por considerarse beneficiosa para los propios (AVM-S 1-177-34).

to del arbitrio está en la ocupación de terreno público.

Se procedía de la siguiente forma: el que tenía o quería colocar un puesto en las calles o portales, etc. había de pedir la respectiva licencia al corregidor¹⁸⁰.

El encargado de la recaudación del ramo de cajones era el alguacil mayor, con el abono del ocho por ciento de lo que entregase en arcas, siendo de su cuenta todo gasto que se causase en dicha recaudación¹⁸¹. Como en los otros ramos, anualmente se tenía que presentar la cuenta del producto¹⁸².

Cuando un propietario de un cajón quería venderlo, tenía que pedir licencia al ayuntamiento¹⁸³, ya que éste se encontraba en suelo de Madrid.

La administración josefista intentó por todos los medios que el arbitrio rindiera al máximo, para ello era prioritario conseguir una ocupación plena¹⁸⁴, además se dictó un reglamento¹⁸⁵ y se nombró un recaudador o depositario de la contribución¹⁸⁶.

Cuando en agosto de 1812 el «gobierno intruso» abandonó Madrid dejó de recaudarse el arbitrio municipal¹⁸⁷. El 7 de mayo de 1813, el corregidor interino anunció la vuelta de esta exacción¹⁸⁸. Las dificultades para su rendimiento continuaron¹⁸⁹.

¹⁸⁰ En el papel que se expide tiene que aparecer el nombre del interesado, la cantidad que pague, la época o temporada que abrace el trato que tenga y el sitio adonde ha de establecerse (AVM-S 1-177-45).

¹⁸¹ AVM-S 1-177-64. En 1812 se nombra alguacil mayor a Manuel de Toro y Fuente. El corregidor le comunica el cargo. Este individuo manifiesta que a dicha plaza ha estado aneja la recaudación del ramo de cajones y por acuerdo de la municipalidad de 23 de diciembre de 1812 se le confiere la recaudación del producto de los cajones de la plaza Mayor y plazuelas.

¹⁸² En 1819 hay un acuerdo de la junta de propios y sisas sobre el modo y tiempo en que el alguacil mayor debe presentar la cuenta. Se trata esencialmente de igualar los plazos de arrendamiento en fin de julio y diciembre (AVM-S 1-177-34).

¹⁸³ AVM-S 1-177-70.

¹⁸⁴ AVM-S 1-177-75.

¹⁸⁵ Reglamento que por ahora debe observarse en la oficina y demás dependientes que han de intervenir en la expedición de licencias y recaudación de la moderada contribución que han de pagar a la municipalidad para sus gastos de policía urbana todos los dueños de tiendas de comercio y todas las personas que tengan o coloquen puestos de venta u otro ejercicio en las calles, plaza o plazuelas de la población, sus paseos o avenidas, puertas de algunas tiendas o portales, y últimamente las que anden vendiendo comestibles por las calles sin sitio fijo, bien sea en todo el año o sólo alguna temporada: todo con arreglo al real Decreto de 27 de diciembre de 1811 (AVM-S 1-36-78). Con anterioridad existía un reglamento de 1800, ejecutado por orden del Consejo para la construcción y disfrute de cajones en la plaza Mayor (AVM-S 1-177-43). Además por el real decreto de 26 de noviembre de 1811 SM destina este arbitrio a las necesidades municipales.

¹⁸⁶ AVM-S 10-234-14. La penuria económica debe ser grande, pues se nombra a un jubilado para evitar el gasto.

¹⁸⁷ AVM-S 10-234-14.

¹⁸⁸ Y para que el público esté instruido de lo mandado y el recaudador no pueda excederse, se imprimen las tarifas y capítulos del bando publicado con ellas. Se trata de dos tarifas: una para puestos y otra para tiendas. El importe es anual, desde primero de enero hasta fin de diciembre de 1813, bien lo use todo el año o sólo alguna temporada. Se pagará por puesto, no por trato; y si tiene varios compatibles, por el de mayor contribución (AVM-S 2-365-1). Se deja de plazo ocho días para la petición de las licencias, imponiendo multas en su contrario.

¹⁸⁹ Entre otras cosas porque el alguacil mayor no ingresa todo el dinero que recauda y se va de la corte. Se hace responsable a su mujer, que paga algo, pero todavía en 1814 debe 1.796 reales y 16 maravedís (AVM-S 1-177-64).

Para la mejora del ramo se pidió en 1815 una razón del número de cajones de Madrid y particulares, con expresión de lo que pagaban y lo que se debía¹⁹⁰. De la cuenta de 1816 se deduce que el número de cajones era de 549, de los que 234 son de propiedad de Madrid y 315 de particulares. Cada uno de los cuales pagaba 200 reales al año, y los que hacían esquina 300. De forma que el total de esta contribución ascendía a 112.600 reales anuales¹⁹¹.

Otra medida que se tomó para esa mejora fue la prohibición del subarriendo de los cajones pertenecientes a la villa¹⁹².

Con posterioridad sólo cabe añadir como novedad el edicto dado por los alcal-des constitucionales de Madrid el 7 de febrero de 1822, de acuerdo con el ayunta-miento, por el que se mandaba que las carnes, embutidos y pan no se vendieran en tinglados sino en cajones¹⁹³. Esto ocasionará la protesta de varios vendedores¹⁹⁴.

El producto en el año común de 1826 a 1830 ascendió a 202.534 reales¹⁹⁵.

m) *Las multas de los repesos*

El objeto principal de los repesos era celar la cantidad y calidad del abasto diario¹⁹⁶: se reconocían los comestibles y líquidos que se denunciaban como malsanos o perjudiciales. Así sus competencias eran: cuidar de que los comestibles, líquidos y demás artículos que se expedían en los mercados públicos fueran de buena calidad; que sus pesos y medidas fueran exactas; dictar las providencias convenientes para el aseo de aquellos alimentos que por su clase estaban más fácilmente expuestos a corrupción¹⁹⁷.

También practicaban visitas domiciliarias en las fondas, cafés, botillerías y otros establecimientos en que podían reservarse alimentos o bebidas sobrantes del con-

¹⁹⁰ En junta de propios y arbitrios que Madrid celebró el día 23 de septiembre de 1815 (AVM-S 1-177-53). En 1817 todavía no se había recibido respuesta.

¹⁹¹ Esto en teoría pues en esa cuenta se indica que como los arrendamientos no vencen hasta fin de año, en la mayor parte no estaban cobrados (AVM-S 1-177-53).

¹⁹² Bando dado por el corregidor de la Villa a 28 de septiembre de 1815. En él —además de esta prohibición— recuerda la necesidad de la licencia, etc. lo cual puede indicar que estas regulaciones no se cumplían perfectamente (AVM-S 1-177-50). Cosa que se puede asegurar al comprobar que con fecha de 18 de julio de 1816, también por el corregidor se da un nuevo bando en los mismos términos y haciendo referencia al incumplimiento del anterior (AVM-S 2-175-70).

¹⁹³ AVM-S 1-177-25. Es de suponer que se trata de una medida fundamentalmente sanitaria y de policía urbana, como otras que apar ecen en el período, así AVM-S 1-177-51.

¹⁹⁴ AVM-S 1-177-25. Se trata de vendedores de despojos, tocino, pescados... que por su penuria económica no pueden construir cajones. Otros piden tiempo para hacerlo.

¹⁹⁵ AVM-Cn 4-155-5. En 1826 se ingresó por este ramo 167.332 reales; en 1827, 183.300; en 1828, 255.832; en 1829, 229.241; en 1830, 176.969.

¹⁹⁶ AVM-S 3-406-29. Con anterioridad —el documento no especifica fecha, pero posiblemente sea antes de las reformas carolinas— también eran objeto de estos las posturas y precios. Así en una representación a S. M. de 1814 se hace un esbozo histórico desde el s. XV de cómo los monarcas han cuidado contra la avaricia de revendedores y a favor del abasto de los pueblos (AVM-S 3-406-27).

¹⁹⁷ Para todos estos detalles es interesante el *Reglamento para el Repeso de esta Villa*, la copia que se conserva (AVM-S 2-271-5 2).

sumo diario, examinando las vasijas y demás útiles destinados al despacho y condimento ordinario.

El teniente de alcalde de repeso podía imponer las multas¹⁹⁸ que en su juicio y discreción merecieran los delitos y excesos sobre los cuales hubiere de tomar providencia.

Del importe de las multas se hacían tres partes. Una se entregaba al particular que había denunciado, otra a instituciones de beneficencia y la tercera a los regidores, como fieles ejecutores. Sin embargo también tradicionalmente se venía consignando voluntariamente esta tercera parte para establecimientos piadosos¹⁹⁹. Aunque esto no debía ser unánime²⁰⁰.

En 1822 se suprimió el juzgado del repeso por no considerarlo la municipalidad conforme al sistema constitucional²⁰¹; lo que se comunicó al público para su conocimiento²⁰². Con la vuelta al gobierno absoluto se restauró esta institución.

¹⁹⁸ Así en el periodo analizado aparecen varias multas a diferentes panaderos por falta de peso en el pan (AVM-S 3-406-23).

¹⁹⁹ Al menos desde 1813. En esa fecha el ayuntamiento constitucional debate acerca el destino que se debería dar a las multas. Y se acuerda que las dos partes correspondientes al juez y a los establecimientos piadosos se remitan a la depositaria de villa para invertirlos en dichos establecimientos de beneficencia. Esto tanto si la multa es en metálico, como en especies (AVM-S 3-406-23). De nuevo se debate esto en ayuntamiento de 13 de agosto de 1815, ya a la vuelta de Fernando VII. Un individuo del mismo hace presente que aunque la tercera parte de denuncias y condenas que producen los juzgados de fieles ejecutores del repeso mayor y menores, cuya distribución corresponde practicar en la forma establecida por el corregidor y los capitulares regidores que les toca por turno las semanerías, no se ha hecho otro uso de ella en lo general, por los capitulares que la aplicación a la hospitalidad, comunidades, casas de la caridad y beneficencia; ha llegado a entender que se ha alterado este noble sistema, y que no se ha seguido el uso de tan piadoso objeto por alguno o algunos caballeros. El ayuntamiento acuerda que en lo sucesivo la tercera parte de las denuncias, penas pecuniarias o cualquiera otra que corresponda a los fieles ejecutores en los juzgados del repeso, se pase integra al mayordomo del colegio de San Ildefonso. A esto, otro capitular dice que las leyes conceden a los regidores, como fieles ejecutores, la tercera parte de las condenas exigidas en todos los repesos, aunque los actuales regidores la consignan voluntariamente (AVM-S 3-406-29).

²⁰⁰ En 1820 el ayuntamiento aprueba la proposición del conde de Noblejas sobre que los regidores no cobrasen parte de las multas que se exigían en el repeso y que en lo sucesivo no se hiciese mención de ello en los libros de dicha oficina (AVM-S 3-404-69, este documento ha desaparecido por el momento, pero además del acuerdo en el correspondiente libro existe un extracto del documento en los libros de índice).

²⁰¹ AVM-S 2-189-48. A partir de ese momento cada regidor comisario de cuartel ha de cuidar en su respectivo distrito no sólo de la buena calidad y peso de los comestibles, sino también de las demás funciones que se ejercían en los repesos.

²⁰² En el aviso se dice lo siguiente: «Habiendo tomado en consideración el Excelentísimo Ayuntamiento Constitucional de esta muy heróyca Villa las funciones que egercían los señores Regidores en el Repeso mayor, titulado de Villa; y observando que alguna de ellas no están conformes al actual sistema que felizmente nos gobierna, ha acordado suprimirle, y que cada señor Regidor comisario de cuartel cuide en su respectivo distrito, no sólo de la buena calidad y peso de los comestibles, si también de que las vasijas de que se hace uso en las fondas, hosterías, bodegones, botillerías y demás casas en que se vendan comestibles y bebidas, se hallen arregladas a las leyes de policía de salubridad que tratan de la materia. Lo que se avisa al público para su inteligencia. Madrid, 7 de mayo de 1822.» (AVM-S 3-406-33).

n) *Las medidas de madera*

Se trataba del aprovechamiento de las medidas de madera —que tenía el oficio de almotacén, en la plazuela de la Cebada, perteneciente a los propios de Madrid— para arrendarlas a los trajineros. Este aprovechamiento se realizaba mediante subasta, generalmente por tiempo de tres años.

En 1814 recayó el remate en Águeda de Pedro Sanz, por 8.850 reales cada año²⁰³. Al terminar este arrendamiento, el remate se hizo en Eusebio Rodríguez Estremera, en 9.200 reales cada año²⁰⁴. Después en Juan Heredia, en 9.600 reales²⁰⁵.

Aquí los problemas para el rendimiento del arbitrio son dos: el pago por los arrendadores²⁰⁶ y el pago por los trajineros²⁰⁷; es decir, los problemas de siempre.

ñ) *Los menuderos, mesas y bancas en las plazuelas*

Durante el período de tiempo que se estudia, en el patio de la demolida carnicería mayor se custodiaban todas las mesas y bancas de los menuderos de la plaza. Madrid jamás había sacado utilidad de este arbitrio²⁰⁸, pero se devengaba en una posesión suya, y aquellos muebles se guardan con puertas y llaves que costea la municipalidad. Este servicio lo hacía el hombre que cuidaba el repeso mayor, por cuyo cargo cobraba 20 reales mensuales y por esto al menos dos cuartos por mesa. De ahí que se vea la injusticia que se provocaba.

Hablado esto con el mozo del repeso²⁰⁹, éste ofreció cuatro reales diarios por el permiso y el director de propios se dirigió al ayuntamiento para que se aprobase el aprovechamiento de este arbitrio²¹⁰. Y esto hasta que se trasladaron a la plaza de San Miguel. Habiendo vuelto, se obligó por el ayuntamiento constitucional al pago²¹¹. Con el regreso de la antigua municipalidad en 1814, pidió se le repusiera en el disfrute y aprovechamiento del arbitrio, pero se acordó que se sacase a pública

²⁰³ Da comienzo el 17 de junio de 1814 y cumple en igual día de 1817 (AVM-S 3-33-12).

²⁰⁴ Comienza el 18 de junio de 1817 y termina igual día de 1820 (AVM-S 3-33-13).

²⁰⁵ AVM-S 3-33-14 y 3-33-15, también por tres años.

²⁰⁶ Águeda de Pedro Sanz, cuando tenía que pagar la segunda anualidad, presenta —para evitar su ruina— petición de rebaja; no se le concedió (AVM-S 3-33-12).

²⁰⁷ Dos tratantes en Cebada con cajones en la plaza de Cebada solicitaron al ayuntamiento constitucional de 1820 permiso para vender con medidas propias y que se suspendiera el remate de estas; y se les negó la petición (AVM-S 3-33-14). Por otro lado el arrendador se quejaba de los malos tratos que sufría de los dueños de los cajones existentes en la plaza de la Cebada que se resistían al pago de los derechos (AVM-S 3-33-15), y el asunto terminó en el juzgado (AVM-S 3-33-16).

²⁰⁸ Pero tratándose de la administración de los fondos públicos nada debe parecer pequeño, y más cuando la calamidad de los tiempos hace que a medida que se aumentan las necesidades disminuyan por otra parte los socorros —se razona en un informe— (AVM-S 3-10 7-7).

²⁰⁹ Que dice que desde 1796 en que fue nombrado para servir la plaza de mozo del repeso mayor, se le concedió por vía de dotación el producto de encerrar las mesas en el patio de las carnicerías (AVM-S 3-107-9).

²¹⁰ AVM-S 3-107-7.

²¹¹ Tomás Inglés, vecino de esta corte y mozo del repeso mayor, acudió a la junta de propios y sisas el 26 de julio solicitando licencia que se le concede para encerrar en el patio de las carnicerías las mesas con la obligación de pagar a los propios 4 reales diarios (AVM-S 3-107-8).

subasta²¹². Se remató en Tomás Inglés y su mujer en 12 reales diarios²¹³. Sin embargo el contrato se rescinde por el cambio de ubicación de los menuderos²¹⁴.

Con posterioridad, en 1821, la comisión de hacienda se planteó exigir algún derecho por las mesas que se establecía en la plazuela de la cebada para la venta de tocino fresco. Pero aunque se observaba que sería justo por ocupar suelo de Madrid, no se hizo por la experiencia anterior, la pobreza de los vendedores y la existencia de la contribución de patentes²¹⁵.

o) *El arbitrio de tabernas*

Este arbitrio tiene su origen en 1748²¹⁶, y consistía en el pago diario de cuatro reales por cada tabernero y puesto de vino generoso²¹⁷. Esta cantidad se redujo hasta quedar en dos reales los taberneros, y real y medio los puestos de vino generoso. A partir de esa fecha volvió al ayuntamiento, para obras públicas²¹⁸.

La recaudación del referido arbitrio desde su origen hasta fin de noviembre de 1806 —en que se extinguieron los abastos— se ejecutó por su tesorería. Desde uno de diciembre del referido año por un tesorero recaudador, nombrado por el corregidor y con el sueldo del tres por ciento del producto del arbitrio, suprimiendo las dotaciones y gratificaciones que se daban a la extinguida contaduría y tesorería de abastos²¹⁹.

El ayuntamiento —en una exposición del 11 de abril de 1807 dirigida al monarca— manifestó que el corregidor tomando por pretexto la extinción de la contaduría de abastos con motivo de la libertad de estos, juzgó extinguida la contaduría del real arbitrio de tabernas, y se llevó los libros y papeles de esta a su casa despacho; nombrando a su sobrino recaudador. Además presentó un nuevo reglamento de ta-

²¹² AVM-S 3-107-9.

²¹³ AVM-S 3-107-11. Se subasta en un tal Pascual, que días más tarde dice que obraba en nombre de Tomás Inglés y mujer. Los procuradores no ven inconvenientes.

²¹⁴ AVM-S 3-107-12.

²¹⁵ AVM-S 3-463-53.

²¹⁶ Por reales ordenes expedidas a consulta del Consejo de Castilla y de la junta de abastos, y particularmente por una de 19 de marzo de 1748 se crea el arbitrio que debía pagar cada tabernero; empezando a correr el arbitrio el 8 de junio del referido año. Al año siguiente se extiende a los puestos de vinos generosos (AVM-S 3-13-10).

²¹⁷ La Junta de abasto propuso en 1755 que el arbitrio se redujera a 3 reales diarios los taberneros y uno y medio los de los puestos de vinos de Peralta y extranjeros, lo que así se hizo. Otra real resolución, también a consulta de la propia Junta redujo a 2 reales los tres de los taberneros desde 1 de abril de 1757 (AVM-S 3-13-10). Desde 1 de mayo de 1762 hasta 30 de junio de 1769, su importe se destinó a la real Hacienda. En 21 de octubre de 1761 se comunicó una real orden por el Marqués de Esquilache a la junta de abastos para que diese noticia de cuanto producía el arbitrio, etc. y el 22 de junio de 1762 por real resolución se mandó que en lo sucesivo se pusiese en tesorería general (AVM-S 3-13-10).

²¹⁸ Para mantener las obras públicas correspondientes a la mayor hermosura, aseo de las calles y paseos de esta corte, que la hiciesen digna habitación de su monarca —dice la documentación— (AVM-S 3-13-10).

²¹⁹ AVM-S 3-13-10.

bernas, sin contar con la Junta de Propios que era a quien correspondía la administración y recaudación de dicho arbitrio.

Tras distintas gestiones de trámite entre el ayuntamiento, la Junta, el corregidor y el consejo, se acordó un nuevo método que era en esencia el puesto por el corregidor. Este nuevo método giraba en torno a la figura del recaudador²²⁰, que tenía la obligación de entregar en el día 10 de cada mes los productos del anterior, en la tesorería de arcas de Madrid. La remuneración del trabajo consistía en el tres por ciento de la cantidad recaudada.

Respecto al recaudador provisional, fue nombrado formalmente por la junta de propios y sisas, y tuvo que dar una fianza de 40.000 reales —que era más de lo que se recaudaba en un mes—.

La contaduría de cuentas de Madrid continuó llevando la cuenta y razón del arbitrio —como lo había hecho practicar el corregidor y se hacía en las demás rentas de Madrid— y su tesorería recibía los caudales de mano del recaudador.

Las licencias se daban por la sala de alcaldes y debía tomarse razón por la contaduría de cuentas de Madrid, para que de este modo pudiese formar mensualmente una relación exacta que entregaría —como se hacía hasta entonces— al recaudador para el cobro de su importe y hacerle el cargo correspondiente²²¹.

Por real resolución a la consulta de 9 de enero de 1808²²² se ordenó restablecer la recaudación del impuesto —así dice la documentación— de tabernas. Y que cuando todo estuviese en orden se subastase dicho impuesto, dividiéndose en cuatro cuarteles con conocimiento de las tabernas y puestos que existían en cada uno.

En la cuenta general de 1807, que estaba entregada a la Junta, aparecía que en ningún mes había habido retraso, y que el producto era de 399.375 reales, lo que importaba 89.618 reales de aumento²²³. Sin embargo esta forma de recaudación —que era la menos mala— era costosa²²⁴, fundamentalmente por la existencia de

²²⁰ Junto al recaudador existen 4 alguaciles y 4 escribanos —para diligencias que suelen ocurrir de embargar y hacer obligaciones—, que —según se presenten vacantes— han de reducirse a dos de cada clase. Además, los visitadores, que son los que celan las tabernas existentes y quienes cerraban y abrían, requerirlos que acudiesen a pagar a principio de mes y dar listas duplicadas mensualmente a contaduría.

²²¹ Obviamente para que la contaduría pudiese formar esa relación mensual se pasaría a la misma, por el encargado de la recaudación, una nómina certificada de todas las tabernas existentes.

²²² Esta resolución es comunicada al corregidor el 24 de febrero de 1808 y se da cuenta de ella en la Junta de Propios y Sisas celebrada el 5 de marzo.

²²³ AVM-S 3-13-19. Los productos fueron en el año 1815, 326.945 reales; en 1816, 351.194; en 1817, 365.549; en 1818, 372.264; en 1819, 421.270. Y el total de los cinco años ascendía a 1.837.223 reales.

²²⁴ AVM-S 3-13-19, así lo expuso el secretario del Ayuntamiento en 1820. Y esto porque al recaudador le llevaban la contribución a su casa, sin hacer otra diligencia que recibir lo que le entregan y pasarlo a la depositaría de la villa. Con decir a los visitadores, escribanos y alguaciles que tal tabernero no ha pagado, cumple con su deber. En las demás recaudaciones las personas encargadas cuidan por sí o por persona de su confianza percibir de los contribuyentes lo que deben pagar, sin obligar a que se lleve a su casa. Por consiguiente el secretario opina que esta recaudación debe uniformarse a las demás de la Villa. Sin que el recaudador tenga auxiliar alguno pagado por el ramo.

doce empleados²²⁵.

La Junta manifestó el 22 de septiembre de 1808 al Consejo que estando ya arreglada la administración del arbitrio, era conveniente sacarlo inmediatamente a pública subasta. No hubo respuesta, seguramente por la situación política que se vivía en esos momentos²²⁶.

Muerto el recaudador, se nombró otro²²⁷. A este siguieron otros, cambios producidos muchas veces por los acontecimientos políticos²²⁸. Sin embargo en ese periodo la recaudación no funcionó todo lo bien que se esperaba²²⁹. De ahí que se buscara una forma más eficaz²³⁰, que concluyó en 1821 con la subasta del arbitrio²³¹. En esa fecha también se dieron unas instrucciones para la recaudación del arbitrio²³². Todo lo cual se comunicó para los efectos oportunos²³³.

Pero tampoco de esta forma se solucionó la explotación, tal vez el periodo revolucionario que se vivía no fuese el más propicio para estas novedades. El hecho es que el arrendador no va a poder realizar la recaudación²³⁴. A pesar de anuncios al

²²⁵ AVM-S 3-13-19. El total de sueldos era de 40.300 reales al año.

²²⁶ En este sentido se pronuncia el secretario de la municipalidad el 19 de septiembre de 1820 (AVM-S 3-13-19).

²²⁷ AVM-S 3-13-21, el 10 de abril de 1809.

²²⁸ Por separación de éste —a virtud de acuerdo de la Junta de 26 de septiembre de 1812— lo fue Diego Romero de Anaya, hasta el 15 de noviembre de 1812, ya que el 16 fue repuesto Manuel de Toro y Fuente. Por dimisión de éste la municipalidad nombró el 23 de diciembre de 1812 a Joaquín Gómez —secretario de corregimiento, sin que esto cause precedente y haciendo la correspondiente fianza (AVM-S 3-13-23). Estuvo hasta fines de 1813 en que se ausentó en compañía del ejército francés (AVM-S 4-1-46). Fue repuesto Diego Romero que la desempeñó hasta 20 de marzo de 1828 en que murió (AVM-S 3-13-22). Se le nombró sin más sueldo que los 18.000 reales que gozaba por jubilación. Tal vez su nombramiento se deba a un intento de ahorro (AVM-S 3-14-2). El ayuntamiento constitucional por acuerdo de 2 de octubre de 1813 suprimió esta plaza, y la entrega se hizo directamente en la depositaría municipal. Sobre los problemas que esto ocasionó véase AVM-S 3-14-5 y 3-14-6.

²²⁹ AVM-S 3-13-19. El recaudador manifestó el 28 de junio de 1820 el atraso que cometen los escribanos y visitadores para la entrega de las diligencias practicadas en el cobro de atrasos. Por ello la secretaría acordó presentar un plan de la forma que podía darse a dicha recaudación para que sea más económica y efectiva.

²³⁰ La secretaría opinaba que debía adoptarse la subasta. Los procuradores síndicos generales estudiaron el expediente sobre el nuevo sistema de recaudar el arbitrio en los años 1807 y 1808, y el proyecto presentado por la secretaría sobre este mismo objeto y determinan que es más ventajoso que se saque a pública subasta (21 de octubre de 1820).

²³¹ AVM-S 3-13-19. El 2 de noviembre de 1820 se anuncia la puja y en el segundo remate recae en Juan de Mendivil Ybarrola, por tiempo de dos años en la cantidad de 370.000 reales anuales. Se realiza la escritura del arriendo y se comunica a la contaduría. Se entrega al arrendatario una lista individual de todas las tabernas, tiendas de vinos generosos y bodegas que hay en la corte para que pueda realizar el cobro. En total aparecen: tabernas que pagan 2 reales diarios, 678; tiendas de vinos generosos a razón de un real y medio diario, 17; bodegas al respecto de 4 reales semanales, 5.

²³² AVM-S 3-13-19.

²³³ AVM-S 3-13-19.

²³⁴ AVM-S 3-13-19.

público realizados por la municipalidad, el cobro se paraliza²³⁵.

Consiguiente a lo resuelto por las Cortes en su decreto de 29 de julio de 1821 se sustituye este arbitrio por la contribución de patentes y consumos²³⁶. Ingresando su producto en la tesorería de Madrid y entregandolo esta misma a la Tesorería real, hasta 23 de mayo de 1823 en que volvió a la anterior forma.

Los productos de dicho arbitrio en el cuatrienio contado desde 1 de enero de 1824 hasta fin de diciembre de 1827 ascendieron a 2.237.899 reales, y el año común importaba 559.474 reales.

p) Otros

Existían otros propios como eran 19 casas; el producto de las hierbas de las laderas de los paseos; 19 censos perpetuos y 8 al quitar sobre casas²³⁷; 29 efectos sobre las sisas; el derecho de martiniega que pagaba el lugar de Alcobendas; los censos que pagaban por el agua corriente algunas casas de particulares; 2 oficios de receptor de los reales consejos; 136 acciones del banco español de San Fernando; un capital de 220.779 reales impuesto en los cinco gremios mayores de Madrid, etc.

2. LOS ARBITRIOS, IMPUESTOS Y SISAS

Se ha explicado que la insuficiencia de los bienes de propios, además de su mala administración, y el incremento de las cargas de los municipios motivaron la creación de los arbitrios, para obtener de esa forma el caudal que no se recaudaba de las rentas del patrimonio. Por otro lado, las necesidades financieras de la Corona también ocasionaron esta imposición.

²³⁵ A 28 de abril de 1821 este informa que el cobro de dicho arbitrio esta paralizado teniendo adelantado a la villa lo correspondiente a el mes de enero según contrata, no habiendo cobrado de los contribuyentes una sexta parte de lo que debían pagar. A este suceden otros, estos se motivan porque la contaduría al mismo tiempo va pidiendo las entregas al asentista. Éste había entregado el 15 de febrero la primera cantidad. El 15 de marzo no acudió a entregar el cupo correspondiente al mes de febrero, la contaduría envió un recado recordandole su obligación. Contestó que la recaudación se hallaba entorpecida sin culpa suya y de consiguiente que también él debía retrasar las entregas. El tres de abril se le pidió lo que correspondía a febrero y marzo. Amenazandole con entablar un juicio ejecutivo con arreglo a la condición segunda de la escritura. Ybarrola se presentó con el oficio y afirmó que los taberneros se resistían absolutamente a pagar la contribución y que así lo había hecho presente al ayuntamiento y que hasta que se resolviese lo conveniente no entregaría cantidad alguna.

²³⁶ En el decreto al arbitrio de tabernas se le denomina de cortina.

²³⁷ Con inclusión de las dos inmediatas a la Puerta de Toledo, y la señalada con los números 1, 2, 26 y 27 de la manzana 193 en la plaza Real.

²³⁸ En este sentido voz «arbitrio» en F. GOS-GAYON y E. CANOVAS DEL CASTILLO, *Diccionario manual de derecho administrativo español para uso de los funcionarios dependientes de los ministerios de Gobernación y Fomento, y de los alcaldes y ayuntamientos*, Madrid, 1860. Aunque en esta fecha la regulación es otra, los datos que se ofrecen son de lo que el diccionario denomina antiguos arbitrios, que son los que se están analizando. A partir de la reforma de 1824 la aprobación de los arbitrios recaía en el ministerio de Hacienda (AVM-S 2-167-42, 2-172-58 y 63).

a) *Concepto y naturaleza de los arbitrios*

Los arbitrios eran por lo tanto imposiciones o contribuciones, que se hacían por concesión particular de los reyes para ayudar a cubrir las atenciones municipales; en este sentido —en que eran caudal para sus necesidades— se asemejaban a los propios²³⁸.

Para que estas contribuciones fueran más llevaderas, o para que no parecieran lo que eran, la mayoría de los arbitrios se cargaron sobre algunos géneros o comestibles²³⁹: las sisas. El tributo unido al precio de las cosas se hacía menos sensible; el particular en apariencia no pagaba una contribución sino el valor de lo que compraba.

El pago de los arbitrios municipales recaía sobre todos los habitantes del municipio; también sobre los transeuntes, a quienes —según algunos autores— no correspondería pagar esas cargas de un cuerpo del que no eran miembros²⁴⁰.

Por el mismo motivo, no era justo gravar con dichas contribuciones a los militares, escolares y eclesiásticos. Por eso las leyes disponían «que a los expresados diessen los pueblos refacción en dinero de lo cobrado sobre el precio de la cosa arbitrada»²⁴¹.

Se puede decir que esta opinión era común entre los autores tradicionalistas, una visión distinta desde luego tenían los liberales. Para éstos se imponía la igualdad ante el tributo, y por lo tanto las refacciones eran consideradas como un privilegio inaceptable.

Además la doctrina tradicional era reacia al impuesto. Ya se vió como en la reforma carolina el ideal de hacienda era el patrimonio, y el arbitrio era concebido con suma cautela. Cuando el patrimonio no alcanzaba se prefería el repartimiento por equivalente, porque la imposición terminaría con la extinción de la industria del pueblo, además necesitaba empleados que los recaudaran, quitando esas manos de la labranza²⁴²; y sobre todo —aunque esto no se decía— recaía sobre las haciendas de la oligarquía urbana, que podía sin embargo manipular los repartos.

b) *Concepto y naturaleza de las sisas*

Las sisas o derechos de puertas²⁴³ constituían por lo tanto la parte más importan-

²³⁹ En este sentido R. L. DOU I BASSOLS, *Instituciones...*, tomo V, pp. 108 y 109.

²⁴⁰ R. L. DOU I BASSOLS, *Instituciones...*, tomo V, pp. 109 y 110.

²⁴¹ R. L. DOU I BASSOLS, *Instituciones...*, pp. 109 y 110: «Y es ciertamente duro que el pobre estudiante y soldado, sobre haberse de desterrar de su país, y dexar las comodidades de la patria, no pueda llevar ningún bocado a la boca, que no esté salado y picante con el tributo impuesto a favor de una población; en que no ha nacido y en que no vive ni quiere vivir, sino el tiempo que le precisa a ello la causa pública.»

²⁴² R. L. DOU I BASSOLS, *Instituciones...*, tomo V, p. 110.

²⁴³ Estas imposiciones recibieron distintas denominaciones en el periodo estudiado: sisas, derechos de puertas, derechos municipales. Parece ser que la palabra sisa procede de la francesa assise, como tributo surgió en Aragón y de allí llegaría a Castilla en tiempos de Sancho IV. En este momento consistiría esta técnica fiscal en «disminuir el tamaño de las medidas vigentes, de suerte que el vendedor abonaba a las autoridades el importe de la cantidad que pagaba, pero no recibía, el consumidor». C. DE LA HOZ GARCIA, «El sistema fiscal de Madrid en el Antiguo Régimen: las sisas», en *Anales del Instituto de Estudios Madrileños*, XXV, 1988, p. 382.

te de los ingresos de la municipalidad. Madoz denomina sisas a aquellos impuestos que en virtud de reales facultades se concedieron a Madrid para fundar censos, dar satisfacción a los réditos de los crecidos capitales que recibió su ayuntamiento, a fin de completar las cantidades que por servicios exigía la corona, o concedía el reino; para gastos de pública utilidad; para los de festejos o recibimiento de personas reales; atenciones locales, o para cubrir las cargas o empeños que con facultad real contraía también particularmente la corporación municipal²⁴⁴.

Pero con el nombre de sisa también —y sobre todo— se entiende un recargo en el precio de ciertos artículos de consumo. La modificación del contenido de esta figura impositiva pudo deberse a distintas causas, pero fundamentalmente a que era difícil reducir las medidas en la proporción que marcaban las necesidades numéricas; de hacerse esto, pronto existiría una gran diferencia entre la medida real y la fiscal, con los consiguientes problemas que esto tendría para el comercio²⁴⁵. Además era más fácil y barato aumentar el precio de los productos de consumo que ir manipulando los pesos y medidas.

En 1814 el contador del ayuntamiento constitucional de Madrid²⁴⁶, decía que la palabra sisa tenía varios significados, pero que desde el punto de vista fiscal, que era el que Madrid usaba en virtud de facultades reales, se refería a «una exacción o contribución extraordinaria en las cosas que se venden».

En definitiva, las sisas eran impuestos de carácter extraordinario sobre las cosas que se vendían, a veces consistían en disminuir el tamaño de las medidas y generalmente eran un recargo en el precio.

Tras la reforma de Martín de Garay, se produjo un cambio de denominación al crearse los llamados «derechos de puerta». Las antiguas sisas se integraron en esta nueva figura fiscal que comprendía todos los impuestos cobrados en las entradas de la población, de acuerdo con una tarifa aprobada. Esta novedad se producía unida a una nueva ubicación de estas exacciones en la trama fiscal de la monarquía, ya no se encontrarán unidas a las rentas provinciales, dentro de los servicios de Millones sino que aparecen como alternativa a la contribución general. Pero su identidad era clara, y los mismos contadores no dudaban en decir que las sisas eran los derechos de puertas²⁴⁷.

Luego cuando en el trienio se suprimieron los derechos de puertas reales o nacionales, se produjo la lógica reducción y se llamaron simplemente derechos municipales.

²⁴⁴ *Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de ultramar*, tomo X, Madrid, 1847, p. 986 y ss. Un año después, en 1848, se publicó el amplio artículo dedicado a Madrid en volumen aparte en edición ampliada con nuevos datos. Una reproducción facsimil de esta última ha aparecido en 1981 gracias a Ediciones Giner; las páginas correspondientes a lo que nos atañe son la 474 y ss., que vienen rubricadas con la entrada «consumos».

²⁴⁵ C. DE LA HOZ GARCÍA, *El sistema fiscal...*, p. 382.

²⁴⁶ AVM-S 3-289-70.

²⁴⁷ AVM-Cn 4-155-4, documento 18.

c) *Clases de sisas*

Las sisas que se cobraban en Madrid se dividían en reales o nacionales y municipales. Las primeras —reales o nacionales— eran las que «comprenden todo el Reyno por que junto en Cortes las concedió al Rey para urgencias de la Corona que son los servicios que se llaman de Millones»²⁴⁸.

Algunas de estas sisas reales pasaron a ser administradas por Madrid, el rey las segregaba de la Comisión de Millones a cambio de distintas sumas que Madrid había anticipado para gastos urgentes de guerra y otras necesidades de la Monarquía. Estas eran por lo tanto sisas reales concedidas a Madrid para que las utilizara como municipales, por lo tanto se podían considerar como municipales.

Las municipales eran las «limitadas para los pueblos a quienes se concedieron, ya fuesen temporales o perpetuas»²⁴⁹.

Es decir, unas eran recaudadas en todo el Reino, y otras concedidas a ciertos pueblos. Pero ocurría con frecuencia que las primeras se convirtieron en el medio de recuperar los préstamos o donativos hechos a la Corona, y en este sentido se podía decir que constituyeron una figura híbrida²⁵⁰.

d) *Las sisas madrileñas*

Para explicar cuáles eran las sisas de Madrid, pienso que es bueno recordar lo que Carlos de la Hoz adelantó en su día²⁵¹, que esa maraña en la que se había convertido la fiscalidad madrileña era fruto de un largo proceso impositivo que surgió a finales del siglo XVI, alcanzó su máximo en el XVII y permaneció inalterable en los siglos XVIII y primer tercio del XIX, con alguna excepción²⁵².

Una vez que se consolidó el sistema Madrid llegó a recaudar treinta y un impuestos, que eran en realidad más, pues cada uno de ellos podía estar compuesto por varios recargos. De ellos venticinco constituían las llamadas sisas de Madrid, que se diferenciaban de los otros por formar el Fondo de Capitales de Sisas. Es decir sobre esos venticinco impuestos pesaba la deuda madrileña.

Esas sisas se dividían —como ya se ha dicho— en reales y municipales, esto sólo hacía referencia a su origen, después constituyeron un fondo unitario. Pero la

²⁴⁸ AVM-S 3-289-70.

²⁴⁹ AVM-S 3-289-70.

²⁵⁰ En este sentido Madoz las llama mixta, terminología que Carlos de la Hoz no admite, ya que para este autor o eran ingresos para la Corona o lo eran para el municipio, y todo lo demás opina que son ganas de complicar.

²⁵¹ El sistema fiscal..., pp. 371 y ss.

²⁵² Así en un escrito de gobierno del Ayuntamiento fechado el 10 de septiembre de 1828 se dice que tras el Reglamento del Consejo de 16 de marzo de 1766, sólo la Real orden del impuesto para el cuerpo de voluntarios realistas. También existían otras dos Reales órdenes para la exacción de derechos en los jamones, chorizos y demás para la compra de trigo; y otra de cuatro reales en arroba de vino, aguardiente y licores para las obras de la puerta de Toledo, plaza Real y Canal del Manzanares. Pero en ellos ninguna intervención tiene el Ayuntamiento, ni su Junta, pues el rey nombró para ello una comisión formada por el Corregidor y dos o tres individuos del Ayuntamiento (AVM-S 3-296-37).

documentación entre los treinta y un impuestos distingue tres sisas reales²⁵³, cuatro sisas concedidas a Madrid para que las goce como las municipales²⁵⁴, dieciocho sisas municipales, y seis impuestos²⁵⁶.

Como ha explicado Carlos de la Hoz, los gravámenes municipales desglosados por artículos serían los siguientes: vino (10 reales por arroba); carnero (12,5 reales por cabeza ó 13 maravedís por libra); vaca (13 maravedís por libra); cerdo (10 maravedís por libra); cabrito (1,25 reales por cabeza); aceite (202 maravedís por arroba); cacao (1,25 reales por libra); azúcar (dos onzas por libra o la octava parte de su precio); hielo y nieve (50 maravedís por arroba).

Estas sisas se cobraban a la entrada de la población. La villa se encontraba cercada por una serie de muros que la rodeaban por completo. Éstos consistían en una serie de tapias desiguales en altura y de distintos materiales, en algunas partes eran de tierra, en otras de pedernal unido con argamasa, y en ciertos puntos servía de apoyo a las paredes de los edificios²⁵⁷.

Para entrar y salir de la ciudad existían cinco puertas llamadas reales o de registro de rentas²⁵⁸: Alcalá, Atocha, Toledo, Segovia y Bilbao o Fuencarral; y otras de segundo orden o portillos: puerta de Recoletos, de Santa Bárbara, de Fuencarral, portillo del Conde Duque, de San Bernardino, puerta de San Vicente, portillo de Gilimón, de Embajadores y de Valencia²⁵⁹.

En las puertas principales —que confluían en el mercado— existían unos fieles registros, donde se llevaba a cabo la mayor parte de la recaudación.

Paso ahora a hacer una breve descripción de cada una de las sisas madrileñas²⁶⁰.

²⁵³ Ocho mil soldados; carnicerías y aceite; nuevos impuestos.

²⁵⁴ Moderada de carnes; nueva de carnes; vino y aceite de tres millones; vino de quiebras de millones.

²⁵⁵ Ordinarias; cuarto de palacio; sexta parte; vino de la plaza; vino de la salud y primera blanca del carbón; carnero de hospitales; vino de Lérida; segunda blanca del carbón; carnero de quiebras; vino de Olivenza; tercera blanca del carbón; segunda onza de azúcar; vino bajada de medidas; cuarta blanca del carbón; vino error de medidas; renta del tabaco; cacao y chocolate; renta del hierro.

²⁵⁶ Carnero de fuentes; maravedí de la cárcel; vaca de hospitales; primer cuartillo de real en arroba de vino; segundo cuartillo; real en cabeza de cabrito.

²⁵⁷ Juan LOPEZ JAÉN, *Las murallas de Madrid*, Madrid, 1970.

²⁵⁸ Las puertas reales se denominaron nacionales en las etapas constitucionales, puede verse por ejemplo en una papeleta de 24 de julio de 1813 incluida en AVM-S 3-289-20.

²⁵⁹ Las denominaciones no son siempre las mismas, ya que coexistían formas tradicionales y de barrio con las oficiales.

²⁶⁰ Para ello además del artículo de Carlos de la Hoz contamos con la información que aparece en el Madoz, donde se recoge una historia de las sisas de Madrid sacada de la memoria presentada por el Ayuntamiento a las Cortes en la legislatura de 1820 a 1821 (Madrid..., p. 491 y ss.) y que corresponde a AVM-S 1-211-6, 3-293-3 y 26. En 1813 los contadores de Villa realizaron un extenso informe sobre las sisas que se encuentra en AVM-S 3-289-70. También existe un opúsculo de Hilario PEÑASCO DE LA PUENTE, *Las sisas de Madrid. Apuntes para escribir su historia*, Madrid, 1890. Se trata —como ha adelantado Carlos de la Hoz— de la transcripción de AVM-S 4-5-14, sin título; junto a una información sobre los antecedentes de los efectos de sisas, sacada de una Memoria de 1852.

i) *Ocho mil soldados*

Su nombre se debe a haber sido impuesta para pagar el sueldo de ocho mil soldados que ofreció el Reino para unas guerras. Se mandó para ello cobrar un real en cabeza de ganado rastreado; un maravedí en libra de cualquier carne y cuatro maravedís en arroba de vino.

Estas sisas se prorrogaron por el Reino en acuerdo de 25 de febrero de 1650.

Se dieron en empeño a Madrid por 220.000 ducados, en virtud de real facultad de 17 de noviembre de 1653, segregándolas de la Comisión de millones y dando su administración a Madrid.

Los principales importaban 5.982.735 reales y 10 maravedís, que correspondían a 195 interesados y sus intereses anuales al 3 por ciento eran de 179.482 reales.

ii) *Carnecerías y aceite*

Las sisas de tres maravedís en libra de vaca y carnero del que se consumía en carnicerías y de 160 maravedís en arroba de aceite eran parte del servicio de venticuatro millones concedido por el Reino el 18 de julio de 1650. Se dieron por empeño a Madrid desde 1 de abril de 1667 para pagar 350.000 escudos de a 10 reales de vellón tomados en virtud de real cédula de 5 de abril de 1667.

De esta sisa no se daba refacción al estado eclesiástico, pues había una bula, de forma que contribuían lo mismo que el seglar.

Los principales cargados sobre estas sisas importaban un total de 8.998.454 reales y sus intereses 303.040 reales y 8 maravedís, que correspondían a 251 individuos.

iii) *Nuevos impuestos*

Estas sisas eran parte del servicio de los venticuatro millones, y consistían en tres reales en cabeza de ganado rastreado, tres maravedís en libra de tocino, y ventiocho maravedís en arroba de vino.

Se dieron en empeño a Madrid desde uno de noviembre de 1678 por 800.000 ducados con que sirvió para la guerra de Flandes, Italia y Cataluña.

Subsistían 12.441.875 reales de principal, que correspondían a 335 interesados, y sus réditos al año importaban 373.256 reales. A estas sisas contribuía también el estado eclesiástico.

iv) *Moderada de carnes*

Esta sisa se impuso el uno de julio de 1656 en el Reino para pagar la mitad de los tres millones concedidos al monarca y consistía en cobrar cuatro maravedís en libra de carne y cuatro reales en cabeza de ganado rastreado, aunque posteriormente se redujo a la mitad, de lo que tomó el nombre.

El principal ascendía a 9.509.204 reales y 16 maravedís, que correspondían a 310 interesados y sus intereses importaban 285.276 reales y 4 maravedís.

v) *Nueva de carne*

Los dos reales en cabeza de ganado rastreado y los dos maravedís en libra de car-

ne que se suprimieron en la sisa de carnes impuesta por el Reino en 1656 —moderada de carnes— se mandaron exigir desde uno de agosto de 1661 con el nombre de Nueva sisa de carnes, para tomar 200.000 ducados para la campaña y ejército de Extremadura.

Los principales importaban 8.806.010 reales y 26 maravedís, pertenecientes a 316 interesados y sus réditos ascendían a 264.180 reales.

vi) *Vino y aceite de tres millones*

Por escritura que otorgó el Reino el 14 de julio de 1657, concedió al rey tres millones de ducados, y para su exacción impuso las sisas de 32 maravedís en arroba de vino, vinagre y aceite. Se desgajó de la comisión de millones y se dió a Madrid en administración primero, y luego en propiedad, al igual que la nueva de carnes y moderada de carnes por real Cédula de 19 de agosto de 1686.

Los principales que sobre ella subsistían importaban 13.402.926 reales, pertenecientes a 459 interesados, y los réditos 402.087 reales y 26 maravedís anuales.

vii) *Vino de quiebras de millones*

Desde uno de abril de 1665 se dieron a Madrid en empeño las dos sisas impuestas para el pago del repartimiento de los dos millones llamados de quiebras con que sirvió el Reino en 1637. Una de cuatro maravedís en azumbre de vino, y otra de dos maravedís; que luego pasaron a cobrar 69 maravedís en arroba de vino.

El principal ascendía a 23.474.746 reales y 30 maravedís, que correspondía a 609 interesados y la renta anual era de 704.242 reales y 13 maravedís.

viii) *Ordinarias*

Por real Provisión del Consejo de Castilla de 14 de noviembre de 1581 se concedió licencia a Madrid para que por dos meses pudiera cobrar las sisas de dos maravedís en azumbre de vino que había impuesto para defensa y guarda de la villa en tiempo de peste. El 31 de enero de 1582 se le permitió cobrarlas por todo ese año; y se impusieron también las sisas de un maravedí en panilla de aceite, dos en libra de tocino, dos en la de pescado seco o remojado de mar o río y uno en libra de abadejo, truchuela, tollo, mielga y otros géneros. Estas sisas se fueron prorrogando y en 1590 se añadió un maravedí en libra de carnero y vaca, un real en cada carnero rastreado, real y medio en cada macho, y un cuartillo de real en cada cordero y cabrito.

Se llaman ordinarias por ser las más antiguas y porque ordinariamente se prorrogaban todos los años. A ellas contribuía el estado eclesiástico regular y secular, ya que sus productos servían para «cosas del público, limpieza y empedrados».

Los capitales ascendían a 1.976.614 reales y 3 maravedís, cuyos réditos eran de 149.298 reales y 14 maravedís, que pertenecían a 200 interesados.

ix) *Cuarto de palacio*

Por provisión del Consejo de Castilla de 25 de octubre de 1608 se concedió a

Madrid licencia para que desde dicho día y por tiempo de tres años pudiese usar de una serie de arbitrios²⁶¹. La finalidad de estas sisas era conseguir 250.000 ducados para que volviese la corte a la villa, y labrar un cuarto en el palacio real para vivienda de la reina doña Margarita de Austria; de donde tomó el nombre.

Con posterioridad esta sisa quedó en un maravedí en libra de vara y carnero, el aprovechamiento de los cajones de la plaza, un cuarto y un medio por ciento del precio en venta de los pescados de mar, dos reales por arroba de barbos, peces y carpas.

El principal ascendía a 5.290.344 reales y 23 maravedís, y los intereses a 158.710 reales y 11 maravedís, que pertenecían a 153 interesados.

x) *Sexta parte*

Estas sisas tuvieron principio el uno de noviembre de 1611 por una provisión del Consejo de 24 de febrero de 1612 en que se concedió licencia a Madrid para imponer por sisa dos maravedís en azumbre de vino barato, y cuatro en el caro; otros cuatro en azumbre de aloja; una onza en libra de azúcar y de cera bajándolas de las pesas; y un real en cada arroba de miel. Con ellas se buscaba recaudar 250.000 ducados con que Madrid sirvió al monarca.

Desde uno de enero de 1639 se agregaron a estas sisas las de una onza en libra de cabrito y velas de sebo. También se les aplicó desde uno de octubre de 1645 la sisa de dos maravedís en libra de vaca.

El capital ascendía a 5.089.258 reales y 8 maravedís, y los réditos importaban 152.677 reales y 25 maravedís, que pertenecían a 222 interesados.

xi) *Vino de la plaza*

Para las obras de la plaza Mayor de esta villa se concedió licencia a Madrid el 30 de octubre de 1618 para imponer dos maravedís en azumbre de vino barato y caro. Después se utilizó para otros cometidos.

El capital ascendía a 4.632.413 reales y 5 maravedís y medio, cuyos intereses importaban 139.272 reales y 16 maravedís, pertenecientes a 181 interesados.

xii) *Vino de salud y primera blanca del carbón*

Se impuso para los gastos del resguardo de la peste, y consistía en dos maravedís en azumbre de vino; comenzó a recaudarse en 1637. La primera blanca en cada libra de carbón se mandó exigir por auto del Consejo de 4 de junio de 1643 para pagar a los obligados de este abasto 2.800.000 maravedís en que se ajustaron lo que se les había repartido de más en el derecho de alcabalas.

Por facultad de 19 de octubre de 1648 se consignaron en ella 35 censos, y se pa-

²⁶¹ El uno por ciento de los brocados, telas y pasamanos de oro y plata que se vendieran en la Villa; cuatro ducados de cada cajón de las fruterías y pescaderías; el arrendamiento de los lavaderos del río; el arrendamiento de los medidores de cebada en la plazuela de ella; la libra por arroba que se da de coste a los pescadores de pescados frescos y escabecheados; cuatro maravedís por persona que fuesen a ver las comedias; etc.

saron a las sisas ordinarias. En 1649 se unieron estas dos sisas y tomaron sobre ellas 140.000 ducados para los gastos de la entrada de la reina María de Austria.

El principal importaba 6.835.549 reales y 24 maravedís, y sus intereses 205.067 reales y 28 maravedís, que pertenecían a 231 interesados.

xiii) *Carnero de hospitales*

Por auto del Consejo de 23 de abril de 1644 se dió licencia a Madrid para que impusiera dos maravedís en libra de carnero.

En 1646 se mandó tomar sobre ella 140.405 ducados: 40.405 de un repartimiento y los 100.000 de la cantidad con que Madrid sirvió para la campaña en defensa de «estos Reinos».

Quedaban cargados sobre esa sisa 3.876.069 reales, cuyos intereses importaban 116.282 reales y 8 maravedís, que pertenecían a 146 interesados.

xiv) *Vino de Lérida*

Por real provisión de 23 de junio de 1644 se impusieron dos maravedís en azumbre de vino, para tomar 100.000 ducados para la guerra de Cataluña y sitio de Lérida —de donde tomó el nombre la sisa—.

De los principales que sobre ella se tomaron existían 3.669.369 reales, cuyos intereses importaban 110.080 reales y 32 maravedís, que pertenecían a 135 interesados.

xv) *Segunda blanca del carbón*

Por provisión del Consejo de 28 de junio de 1649 se impuso una blanca en libra de carbón, que tomó el nombre de segunda por existir una primera. El producto se destinó a la compra de medicinas, ropa y otras necesidades para la reparación del contagio que padecía la ciudad de Antequera, y después se aplicó para otros fines.

En 1651 se mandó tomar sobre ella 100.000 ducados para los gastos del sitio de Barcelona. De ellos y de otros venticinco por otras tantas facultades subsistían 2.818.017 reales y 28 maravedís, cuyos intereses importaban 84.540 reales y 18 maravedís, pertenecientes a 94 interesados.

xvi) *Carnero de quiebras*

Por real facultad de 28 de febrero de 1656 se dio licencia a Madrid para imponer la sisa de dos maravedís en libra de carnero, y se tomaron 150.000 ducados con que ofreció servir al monarca por la cantidad que se debía de los repartimientos de quiebras de millones, de cuyo origen tomó el nombre.

Subsistían cargados sobre ella 3.797.016 reales, cuyos intereses importaban 113.910 reales y pertenecían a 136 interesados.

xvii) *Vino de Olivenza*

Por real cédula de 14 de mayo de 1657 se concedió licencia a Madrid para imponer dos maravedís en azumbre de vino, para tomar sobre dicha sisa 200.000 ducados.

dos para el sitio de Olivenza y la guerra de Portugal.

En virtud de dicha real cédula y de otras ventidós posteriores se tomaron varios principales de los que subsistían 4.558.594 reales. Sus intereses importaban 136.757 reales y 27 maravedís, que pertenecían a 174 interesados.

xviii) *Tercera blanca del carbón*

Por real facultad de 2 de junio de 1660 se tomaron 200.000 ducados y 128.000 reales para la guerra y conquista de Portugal.

Los capitales existentes sobre esta sisa importaban 3.824.499 reales, y sus intereses 114.734 reales y 32 maravedís; que pertenecían a 127 interesados.

xix) *Segunda onza de azúcar*

En 1660 se impuso una onza en libra de azúcar, que tomó el nombre de segunda porque existía otra —en la sisa de sexta parte—. De su producto se mandaron pagar los intereses de 200.000 ducados tomados en virtud de dicha facultad para la guerra y conquista de Portugal.

Los principales importaban 770.000 reales, y sus intereses 23.100 reales; pertenecientes a 22 interesados.

xx) *Vino bajada de medidas*

Por real facultad de 27 de junio de 1665 se impuso la sisa de tres cuartillos y medio en arroba de vino. Se llamaba de bajada de medidas porque componiéndose la arroba de once azumbres menores y medio cuartillo, se bajaron las medidas y quedó la arroba en doce azumbres menores.

Sobre esta sisa se mandó tomar 500.000 escudos de a 10 reales, con que Madrid ofreció servir al rey para necesidades de la Monarquía.

Después se paso a cobrar para esta sisa 44 maravedís en arroba de vino. Existían 13.180.400 reales de principal, con unos intereses de 407.412 reales.

xxi) *Cuarta blanca del carbón*

Se impuso por real cédula de 15 de abril de 1666 para tomar 200.000 escudos de a 10 reales, con que Madrid sirvió al monarca para comprar granos y remonta de caballería.

Sobre esta sisa estaban cargados 113.431.112 reales de principal y los intereses eran 102.933 reales y 12 maravedís al año.

xxii) *Vino error de medidas*

En 1667 se impuso la sisa de tres cuartillos y medio en arroba de vino, que era el fraude y error que se había reconocido en las medidas de doce azumbres menores que hacía la arroba. Se dió para la satisfacción del servicio de 500.000 ducados.

Los principales que subsistían sobre ella importaban 14.408.680 reales, y sus intereses anuales 432.260 reales y 13 maravedís.

xxiii) *Renta del tabaco*

Por real cédula de 13 de noviembre de 1673 se dió a Madrid la administración de la renta del tabaco. Sobre su valor se tomaron 700.000 ducados para urgencias del Reino.

Después se mandó que la villa cesara en la administración de esta renta; y se consignó una cantidad anual para el pago de los intereses. En 1674 se impuso también para satisfacción de los réditos una sisa de dos maravedís en libra de hielo y nieve.

El principal ascendía a 31.646.216 reales y 30 maravedís, y el rédito importaba 949.386 reales y 16 maravedís.

xxiv) *Cacao y chocolate*

Por real facultad de 19 de febrero de 1676 se dió licencia a Madrid para imponer por sisa un real en cada libra de cacao labrado o por labrar, para tomar sobre su valor 500.000 ducados para gastos precisos de la Monarquía.

Subsistían 5.692.916 reales y 12 maravedís de principal, y la renta era de 170.787 reales y 16 maravedís.

xxv) *Renta del hierro*

Por real facultad de 8 de abril de 1679 se dió licencia a Madrid para imponer cuatro maravedís en libra de hierro, plomo, estaño, latón, bronce, cobre y alambre labrado y por labrar; y ocho maravedís en azumbre de cerveza, para tomar sobre el producto de uno y otro las cantidades necesarias para las fiestas por la boda de María Luisa de Borbón. Después sólo quedaron vigente los ocho maravedís en azumbre de cerveza.

De los capitales que se impusieron existían 5.926.252 reales, cuyos intereses importaban 177.687 reales y 19 maravedís.

xxvi) *Carnero de fuentes*

Por auto del Consejo de 16 de marzo de 1621 se permitió la exacción de un real en cabeza de carnero rastreado, con aplicación a las obras de las cañerías y fuentes de esta villa. Posteriormente, a partir de 1743, se redujo a un maravedí en libra.

xxvii) *Maravedí de la cárcel*

La sisa de ocho maravedís en arroba de vino por uno en cada azumbre de medida mayor, que llaman de la cárcel, se impuso en 1630 para la fábrica de la real cárcel de corte de esta villa. Luego se minoró a siete maravedís en arroba.

xxviii) *Vaca de hospitales*

Por auto del Consejo de 19 de junio de 1659 se impuso a beneficio de los reales hospitales generales de esta corte dos maravedís en cada libra de vaca.

xxix) *Primer cuartillo de real en arroba de vino*

Esta sisa consiste, como indica su nombre, en un cuarto de real por arroba de vino, y se impuso en 1690.

xxx) *Segundo cuartillo de real en arroba de vino*

Se impuso por real resolución de 1759, para los festejos de la jura de Carlos III, y luego se prorrogó.

xxxi) *Real en cabeza de cabrito*

Por resolución del Consejo de 28 de abril de 1739 se hizo la imposición de un real en cabeza de cabrito, para la manutención de los pobres presos de la cárcel de la villa.

Capítulo II LOS GASTOS MUNICIPALES

Procede analizar la estructura de los gastos del municipio. Otra vez aquí aparece el problema tiempo, ya que los gastos no eran inalterables y en el reinado de Fernando VII fueron adaptándose a las distintas circunstancias ya estudiadas. En la primera parte de este estudio se ha explicado esa evolución, y no tendría sentido volver a repetir esos resultados y los análisis porcentuales ya hechos.

Por ello brevemente se traza un esbozo de cuáles eran esos gastos, para pasar a analizar una serie de problemas —los grandes problemas del gasto— directamente relacionados con el déficit: la refacción, el fraude, los efectistas, las deudas y créditos del municipio, la beneficencia, etc.

1. La estructura del gasto municipal

Como ya se ha visto, durante este periodo histórico el gasto estaba condicionado por una situación continuada de penuria. La reflexión continua de estos años era qué hacer con unos ingresos que no alcanzaban los gastos imprescindibles. Gastos, que por otra parte, se intentaba reducir como fuera.

Pero el ayuntamiento era también consciente de que una parte considerable de la población vivía de sus arcas, y reducir gastos era no contratar jornaleros, que significaba aumentar la indigencia: el círculo vicioso de la miseria.

Aparte de los gastos de ordinaria administración —lo que hoy se denomina personal, mantenimiento, compras, etc.— interesa señalar que esta escasez estaba motivada por una política concreta. La estructura del gasto, aparte de esos capítulos difícilmente reducibles, obedecía a lo que desde el poder central se dictaba. El problema de la hacienda madrileña no era tanto un problema municipal, sino de la Hacienda real o nacional. La enorme deuda que arrastraba había sido ocasionada por la Monarquía, y era el poder central el que dictaba sus ingresos.

Al margen de este asunto, que es nuclear y que se detalla en el siguiente epígrafe, hay que dejar claro cuáles eran esos gastos. El principal era el pago de los intereses de la deuda; otros gastos importantes eran los establecimientos de beneficencia, los sueldos, la refacción del estado eclesiástico, la refacción de la tropa, las cárceles, el alumbrado, la limpieza, las obras de mantenimiento; menor dotación tenían las festividades, los teatros, el pago a jubilados y viudas; apenas incidencia tenía el gasto en material de oficinas.

Estas partidas estaban ordenadas por el Reglamento de 1766, que era sobre todo —y el tiempo así lo demostró— un reglamento de gasto. En él aparecían perfectamente determinados los reales y maravedís que podían gastarse en cada ramo. Cuando una partida quedaba corta, por alguna causa especial, y el gasto superaba en 100 reales lo previsto, se tenía que pedir al consejo de Castilla la habilitación de caudales necesarios. Esto ocurría con cierta frecuencia, sobre todo porque al realizarse el Reglamento los gastos se redujeron en el papel, así una partida como era la de causa pública necesitaba de continuas ampliaciones¹, hasta que en 1829 se aumentó²; lo que solía ocurrir también con los gastos eventuales³.

En los periodos en que el Reglamento no estuvo vigente, la ordenación del gasto se hacía por un presupuesto anual, como ya se ha explicado en la primera parte de este trabajo.

2. Los grandes problemas del gasto municipal

Hablar de los grandes problemas del gasto es hablar de una serie de partidas que provocaban el creciente déficit del municipio, y de otros factores que impedían que ingresos y gastos mostrasen un nivel equilibrado. No se trata de hacer un análisis exhaustivo —que exigiría volver a repetir lo dicho en la primera parte— sino de mostrar cuales eran los principales y situarlos en su contexto.

a) *La deuda municipal*

Al explicar las sisas se dijo que éstas surgen frecuentemente como medio para amortizar la deuda que contraía el municipio, generalmente para satisfacer las necesidades de la real Hacienda. Esta deuda fue creciendo hasta alcanzar más de 200 millones de reales, importe que correspondía a más de 6.000 títulos de la deuda, que en la terminología de la época se denominaban «efectos de Villa»; y a sus tenedores, «efectistas»⁴. Al recibirse el dinero se entregaba un efecto o título personal, en el que se expresaba la cantidad y la sisa a que correspondía.

El impuesto era por lo tanto la garantía del préstamo o censo. A estos préstamos se denominaban capitales de sisas. Eran generalmente comunidades religiosas, instituciones piadosas o particulares acomodados los que facilitaban el numerario necesario. De los 6.065 interesados efectistas de sisas que existían a mediados del

¹ Sobre las peticiones de habilitación de caudales para atender los gastos de causa pública: AVM-S 1-34-35, 1-38-14, 1-39-12, 1-38-58, 3-291-4, 1-39-43, 1-42-3, 1-42-59, 1-43-27, 2-409-7, 1-43-45 y 1-232-50. En este ramo se incluía la limpieza de calles; la limpieza de pozos; la compra de cebada; la compra de paja; los gastos de empedrado de las calles de la villa; gastos menores como hundi-mientos; incendios, composturas de bombas, aguzaduras de piquetas y escritorio; asignaciones de los comisarios cuarteleros; sueldo de los dependientes de policía; salarios de los mangueros.

² Por real Orden de 7 de diciembre de 1829 se mandó que la consignación de 1.128.686 reales hecha en el año de 1774 para gastos llamados de causa pública aumentase a 1.700.000. AVM-S 1-232-50.

³ AVM-S 2-409-6 y 8.

⁴ Algunas veces se habla también de censuistas, ya que los préstamos solían tener la forma de censos redimibles.

siglo XVIII, 3.094 eran eclesiásticos por capellanías y obras pías; 2.971 de la orden de seglares.

A estos préstamos se le asignaba un interés entre un 8 y 10 por ciento. Pero luego fueron rebajados hasta el 3 por ciento, en 1705, y en algunos casos a un 2 y medio.

En el siguiente cuadro se observa un resumen de la deuda en capitales de sisas, el número de la sisa corresponde al orden de exposición del capítulo precedente.

sisa	capital	rédito	títulos
1	4.976.614	149.298	200
2	5.290.344	158.710	153
3	5.089.258	152.677	222
4	4.008.258	120.247	181
5	6.835.594	205.067	231
6	3.876.069	116.282	146
7	3.669.365	110.080	135
8	2.818.017	84.540	94
9	5.982.735	179.482	195
10	3.797.016	113.910	136
11	9.509.204	285.276	310
12	4.558.594	136.757	174
13	13.402.926	402.087	459
14	3.824.499	114.734	127
15	770.000	23.100	22
16	8.806.010	264.180	316
17	13.580.400	407.412	431
18	23.474.746	703.232	609
19	3.431.112	102.933	91
20	8.965.454	268.963	251
21	14.408.680	432.260	394
22	31.646.216	949.386	711
23	5.692.916	170.787	115
24	12.441.875	373.256	335
25	5.926.252	177.787	116
	206.782.159	6.202.443	6.154

De esta forma el importe de los réditos de la deuda era el mayor gasto que tenía que afrontar la municipalidad, año tras año. En teoría no existía ningún problema, pues las distintas sisas que se habían impuesto eran suficiente para cubrir ese importe. Pero la realidad fue otra y las necesidades del municipio o de la Nación absorbían muchas veces las cantidades destinadas a los efectistas, de forma que el rédito debido pasaba de un año a otro, llegando incluso a superar el capital de sisas. En 1819 se debían por este concepto 142.660.478 reales, y a finales de 1834 la deuda en réditos de sisas ascendía a 190.332.702⁵; es decir que entre 1819 y 1834 se habían pagado 40 millones de los 90 presupuestados, menos de la mitad.

b) *Las refacciones*

El origen de las refacciones surgía en la idea de que ciertas personas o cuerpos eran inmunes a la imposición, estaban exentas de pagar impuestos. Al imponerse las sisas, se determinó devolver a esos habitantes una suma anual, que se calculaba por lo consumido de los géneros gravados⁶. En un principio se les daban permisos de introducción, o tenían puestos públicos de su cuenta; pero para evitar reclamaciones o fraudes, se optó por la devolución de una cantidad alzada⁷.

En un primer momento las refacciones eran varias: a los ministros y embajadores, a los escolares, a la tropa, al clero, a establecimientos piadosos. Como en Madrid no había universidad, no se aplicaba la de escolares; y la de ministros y embajadores dejó de existir en 1715⁸.

En el Reglamento del Consejo de 1766 se consignaron para las refacciones eclesiásticas 995.928 reales; de los que 556.174 eran para las ochocientas familias de eclesiásticos residentes en Madrid, que eran los de número de las parroquias y otras iglesias, y demás particulares que residían en Madrid; 167.555 para los cardenales, nuncios, arzobispos, obispos, ministros de los consejos, títulos de Castilla y demás personas del clero secular; 183.720 para las del cabildo de curas y beneficiados de las parroquias de la corte, reales capillas y congregación de presbíteros naturales de Madrid; y 88.477 para los conventos de religiosos de ambos sexos. En 1834, por disminución del número de personas del estado eclesiástico, se había reducido la refacción a 467.742 reales⁹.

La franquicia de la tropa fue establecida por real Orden de 23 de agosto de 1806, y suponía el pago o devolución, es decir un no ingreso, de 1.733.316 reales¹⁰. En 1835 se redujo a 1.600.000 reales. Desde 1815 se pagaba puntualmente¹¹.

Para los establecimientos piadosos se ajustó la franquicia de derechos de puertas en 172.443 reales, que se distribuían entre la real casa de Beneficencia —ordina-

⁵ M. CRISTOBAL Y MAÑAS, *La hacienda...*, p. 68.

⁶ M. CRISTOBAL Y MAÑAS, *La hacienda...*, p. 59 y ss.

⁷ AVM-Cn 4-155-4.

⁸ P. MADOZ, *Madrid...*, p. 476.

⁹ AVM-S 4-1-10 y 6-214-3.

¹⁰ AVM-Cn 4-155-4.

¹¹ Desde 1 de marzo de 1806 y hasta 1 de octubre de 1815 no se pagó.

riamente llamada Hospicio—, el colegio de Niños Desamparados y el hospital de Incurables. Estas franquicias se concedieron por reales Órdenes de 21 de julio de 1803, 14 de marzo de 1805 y 6 de marzo de 1826 respectivamente.

c) *La beneficencia*

Otra partida de gasto importante era lo destinado a la beneficencia, en ella tenemos que incluir el hospital general, la Inclusa, el colegio de Niños Desamparados, el hospital de Convalecencia y la casa de Recogidas. En el Reglamento de 1766 se consignaban para este ramo unos 700.000 reales.

Al margen de la visión tradicional del asunto, la Constitución de 1812, en su artículo 321 encomendaba la primera enseñanza y la beneficencia a los ayuntamientos, lo que suponía una mayor carga para las arcas municipales¹²; que además se había convertido en clave de la opinión pública del momento.

Los asuntos de beneficencia eran gastos que no podían aplazarse, como dijo el ayuntamiento «ni el enfermo en sus dolencias, ni el menesteroso en sus angustias, ni el huérfano en su impotencia, pueden esperar a los socorros de mañana»¹³.

Como se ha dicho el ayuntamiento constitucional se cree poseedor del monopolio de la beneficencia. Opina que debe existir una unidad en este ramo para realizar una tarea eficaz, ya que de lo contrario se «fomenta la pereza y apadrina los vicios, y a las solicitudes impertinentes de los que a la sombra de la pobreza atacan a las buenas costumbres. Si el desgraciado tiene el derecho de reclamar socorros, también para concederlos se necesita de una severa justicia». Con lo que se criticaba la «arbitrariedad en pedir y dar socorros» propia —siempre en opinión del ayuntamiento constitucional— del antiguo régimen¹⁴. Se podría decir que también en esto los primeros liberales son deudores de la Ilustración.

El ayuntamiento pensaba que podía solucionarse la miseria con la formación de un establecimiento general de beneficencia, que aumentase la clase propietaria y productora. Se trataba de transformar la beneficencia en una industria, que formase un capital que produjera y diera una renta. Es decir no tanto remediar la necesidad del momento, sino hacer un ciudadano útil y bueno.

En esta inteligencia se proponían una serie de medidas muy avanzadas. Entre ellas: «1. Que cuando falta a un hombre o a una familia trabajo, la administración debe proporcionársele pagando el salario corriente o algo menos hasta que pueda encontrar otro más ventajoso. 2. Cuando el producto de su trabajo no sea bastante

¹² El Ayuntamiento asume plenamente esas competencias, las veía como algo propio, algo que la Constitución le restituía y que «no corresponde ni puede corresponder a ninguna otra autoridad, ni menos ser entorpecido o contrariado por ningún elemento heterogéneo.» Memoria.

¹³ Memoria de 1821 (AVM-S 3-293-26).

¹⁴ Se decía que «para desterrar, pues cualquiera abuso de parte de la caridad indiscreta, o de la reclamación de una miseria fingida o viciosa, la administración municipal que vigila y observa la conducta de los habitantes que viven bajo de su protección, debe ser la única que distribuya los socorros con examen y conocimiento, estableciendo reglas seguras para mantener las relaciones recíprocas que debe haber entre el rico y el menesteroso, y que bien sostenidas pueden contribuir hasta un punto desconocido a la felicidad general» (AVM-S 3-293-26).

para cubrir sus necesidades naturales, y las de su familia, la administración debe suplir lo necesario.»¹⁵

Para ello se proponía una junta general de beneficencia, compuesta del jefe político, un alcalde constitucional, un síndico, varios regidores, y aquellas personas que se estimasen necesarias. Para cubrir los gastos se propondrían nuevos arbitrios. Pero no se produjo ninguna novedad.

d) *El fraude*

El fraude fue el problema que más inmediatamente repercutía en el ayuntamiento, ya que los efectistas, o la refacciones, escapaban de su ámbito de poder; y debían solucionarse desde arriba. Pero el fraude no, dependía de su celo y de su vigilancia; y además claramente influía en los resultados finales de cada año. Se calculaba que por esta razón los ingresos disminuían cada año un 15 por ciento, cantidad nada desdeñable.

A los regidores les parecía claro que era consecuencia de la política de recargos¹⁶. Por ello se intentaba encontrar un equilibrio entre el precio de mercado y el precio fiscal que no reportara suficiente interés para los defraudadores. Se comprobaba que cuanto más alto era el impuesto mayor era el fraude, y viceversa; cuando las ganancias se estimaban mínimas desaparecía todo aliciente para el contrabando. Pero por otro lado el ayuntamiento tenía que exigir la cantidad suficiente para cubrir sus necesidades, era pues un equilibrio difícil.

Las distintas instrucciones existentes sobre la forma de recaudar las sisas hacían hincapié en ello, y en el papel todo estaba atado y bien atado. Existía, como se ha visto al analizar las distintas disposiciones, todo un entramado de dependientes, vigilantes e inspectores, que intentaba no dejar grieta para el contrabando, pero éste se realizaba.

Esta hemorragia se intentó solucionar por distintos frentes: se procuró que los dependientes municipales no faltasen a su trabajo¹⁷, se rebajaron los derechos de algunos artículos¹⁸, se separaron algunos dependientes¹⁹, se prohibieron los puestos en las afueras de Madrid²⁰...

e) *Los créditos y las deudas con el Estado*

Lo paradójico de esta historia de miseria, porque como se ha visto en todo este tiempo no hay más que estrechez e impotencia para hacer frente a las necesidades

¹⁵ Memoria 64.

¹⁶ Así venía siendo desde antiguo, Ildefonso Pulido Bueno lo estudia en el siglo XVI, en la región andaluza, y en relación con el comercio exterior.

¹⁷ AVM-S 3-293-7, se exigió a los celadores y a la visita la presentación de certificación facultativa en caso de enfermedad.

¹⁸ AVM-S 3-293-60, se rebajó un cuartillo en los derechos de cada libra de cacao, ya que se veía que era el único medio de atacar el contrabando.

¹⁹ AVM-S 1-95-22 y 1-95-23, se separaron dos dependientes por abusos en el servicio e incumplimiento de las normas, así como favores a determinados individuos.

²⁰ Aparece en varios Decretos e instrucciones, también en AVM-S 1-99-36.

municipales, es que ocurra en un ayuntamiento potencialmente rico, y rico no sólo por la riqueza que circulaba en su término, sino que además poseía grandes sumas en créditos a su favor y contra el Estado.

Efectivamente, cuando en el trienio liberal se intentó poner orden en las cuentas, una de las cosas que se hizo fue aclarar las deudas y los créditos que tenía la municipalidad. Según esa relación²¹ las cantidades que la Hacienda nacional debía a Madrid ascendían a 218.758.985 reales²², y el ayuntamiento sólo debía a la Hacienda nacional 5.113.172 reales²³; de forma que resultaban a favor de la villa 213.645.813 reales.

Además de los créditos contra la Hacienda nacional estaban los créditos contra Francia que eran en total 5.498.350²⁴ reales; otros contra los extinguidos abastos, que sumaban 76.638.621 reales²⁵; otros contra distintos establecimientos, que hacían un total de 3.216.782 reales²⁶; y contra particulares 3.628.022 reales²⁷.

Por su lado el ayuntamiento adeudaba 142.660.478 reales a los censualistas y efectistas, por intereses hasta 31 de diciembre de 1819; al Banco Nacional de San Carlos, 1.300.000 reales; a establecimientos piadosos, 261.614 reales²⁸; por refacciones al clero, 348.812; por la sisa del maravedí de la cárcel, 526.926²⁹; a un particular, 170.039³⁰.

Esto suponía unos totales de: créditos a favor de Madrid, 307.740.763; créditos en contra, 150.381.045; diferencia a favor de la villa, 157.359.718 reales³¹.

²¹ Memoria de 1821, pp. 46-58. Mientras no se diga otra cosa la información se toma de aquí. Con posterioridad existen nuevas relaciones —1832, 1833 y 1834— pero no alteran en esencia lo expuesto en el Trienio. La información de esos años en AVM-S 9-449-23.

²² De ellos la mayor parte, más de 131 millones, correspondía a la Renta del Tabaco; el resto a otras rentas y peticiones hechas por la real Hacienda.

²³ Casi la mitad, 2.218.477 reales, correspondían a la franquicia para la tropa; otro capítulo importante en la deuda eran los atrasos en el consignación para el resguardo general de Rentas, 1.752.602 reales.

²⁴ Aunque estos eran muy superiores, sólo se habían podido documentar convenientemente los indicados.

²⁵ Correspondían a distintas cantidades sacadas de los fondos de sisas para las urgencias de los abastos.

²⁶ Se trataba del concejo de la Mesta, los hospitales General y de la Pasión, la cárcel de Corte y para la construcción del cementerio de la puerta de Fuencarral.

²⁷ Un antiguo cajero de la Villa, un administrador de sisas, las compañías cómicas, distintos arrendadores de los propios, etc.

²⁸ Al Colegio de los Desamparados se le debía parte de la consignación de 1808 a 1815, y parte de la franquicia. A la Inclusa, a la casa de Recogidas y a la de Beneficencia, también en esas fechas, parte de sus consignaciones.

²⁹ Esa sisa correspondía a la Cárcel de Corte.

³⁰ El corregidor en tiempos de la dominación francesa hizo varios anticipos a la municipalidad para atender sus gastos.

³¹ A 31 de diciembre de 1833 esta diferencia favorable se situaba en 140.007.094 reales; AVM-S 9-449-23.

PARA CONCLUIR

A lo largo de las páginas precedentes he intentado mostrar la realidad de la hacienda madrileña entre 1808 y 1833, una realidad de miseria y estrechez, motivada por las circunstancias políticas —la guerra y sus consecuencias—, pero motivada también por las realidades institucionales.

Una hacienda continuamente modificada, de un ayuntamiento ciertamente complejo. Hace falta profundizar más en la realidad municipal, hoy escasamente conocida³²; hace falta conocer un mayor número de haciendas de este periodo, para poder sacar conclusiones generales.

De momento me parece interesante reflexionar —a manera de conclusión— en torno a cuatro aspectos tratados en las páginas precedentes: por un lado la base de la hacienda, es decir en qué consiste ésta; por otro la ordenación del gasto; en tercer lugar, la autonomía de su administración; y por último, la eficacia de las medidas adoptadas en el reinado.

En cuanto a la base de la hacienda madrileña se observa una dicotomía entre el orden del antiguo régimen y el nuevo orden liberal; el primero es fundamentalmente patrimonial, el segundo impositivo. Este cambio era consecuencia de un nuevo modelo económico, que partía de un concepto de propiedad diferente, como ya se dijo.

El Decreto CCXIV de 4 de enero de 1813, que intentaba reducir los baldíos y otros terrenos comunes a dominio particular, supuso en este sentido un cambio decisivo, que luego en el Trienio liberal se intentó llevar a la práctica. De todas formas hubo que esperar a la desamortización municipal para que cristalizara este cambio. Pero doctrinalmente ya existía, y en ninguna disposición liberal se ordena el saneamiento del patrimonio municipal —con nuevas compras, etc. como ocurría en la legislación carolina—, sino todo lo contrario.

Además en el orden liberal sobraba la imposición sobre los géneros de consumo,

³² Además de las referencias parciales ya citadas oportunamente, habrá que esperar a la magna obra que realiza Pablo Baena Pinedo, pero que como toda obra importante tardará años en ver la luz. Puede aportar algo de luz mientras: P. BAENA PINEDO, M. MARTINEZ NEIRA, «El ayuntamiento de Madrid a finales del reinado de Fernando VII», *Anales del Instituto de Estudios Madrileños*, tomo XXXIV, Madrid, 1994, 543-563.

por parecer injustos y contrarios a la libertad de mercado; de ahí que se intentara eliminar estos impuestos que eran los más frecuentes en el Antiguo Régimen. Pero las dificultades financieras que esto suponía hicieron que los Decretos de las Cortes de 13 de septiembre y 21 de noviembre de 1813, sobre la necesidad de que cesase toda percepción de intereses en las puertas de las poblaciones, quedaran en mera utopía.

Otro aspecto, la ordenación del gasto, viene representado por el Reglamento de 1766, en los periodos en que estuvo vigente la regulación carolina. En los modelos constitucionales fue el presupuesto anual el que determinó los desembolsos. La Instrucción de 1823 fijó definitivamente este sistema. Es decir que en uno y otro caso el gasto municipal no se dejaba a la arbitrariedad, ni a la decisión de los regidores, sino que estaba reglado y cualquier gasto extraordinario necesitaba una aprobación de las esferas superiores.

Sin embargo, el presupuesto suponía un mayor orden y racionalización, ya que en el Reglamento no aparecían todos los ingresos ni todos los gastos, había entradas aplicadas a salidas concretas que no figuraban, como por ejemplo la no pequeña cantidad del alumbrado. En los presupuestos constitucionales, si aparecían todos los movimientos, es decir se unificaban las cuentas, y esto ayudaba en el gobierno; además reflejaban mejor la agilidad de los nuevos tiempos.

En cuanto a la autonomía de la gestión, existe una continuidad entre los postulados ilustrados y liberales que viene marcada por una creciente centralización.

La reforma carolina supuso un aumento cualitativo y cuantitativo del control sobre las haciendas municipales. La creación de la Contaduría general de propios y arbitrios del reino supuso de hecho despojar a los ayuntamientos de la dirección de sus haciendas, que pasó a estar en esta Contaduría —dependiente del consejo de Castilla— y de las Juntas de propios y arbitrios de cada municipio, presididas por el corregidor.

La época josefista indicó hasta donde se podía llegar en ese proceso centralizador; la consignación real supuso un total sometimiento del municipio a las necesidades del Estado; aunque la situación de guerra mitigó la transcendencia de la novedad.

La experiencia doceañista fue de continuidad con los planteamientos ilustrados, la administración estaba a cargo de los ayuntamientos, fiscalizada y gobernada por la diputación y las cortes.

La vuelta de Fernando VII fue el retorno del modelo carolino. Pero ante la insuficiencia de éste, pronto se intentó una reforma, la de Martín de Garay; con ella la parte más importante de la hacienda madrileña, las sisas, se convirtió en los denominados derechos de puertas, que fueron administrados por la hacienda real, y de los que Madrid sólo conserva una mera intervención: un paso más en el centralismo. Este modelo, que se regula en la Instrucción de 1818, estuvo vigente hasta la muerte de Fernando VII.

El trienio liberal trajo de nuevo la vigencia de la legislación doceañista, y constituyó —puede decirse así en el marco del reinado de Fernando VII— la época dorada de la hacienda madrileña; no tanto por la materialidad de la situación, sino sobre todo por su potencialidad. En esta época el Ayuntamiento recupera la administración de sus propios y arbitrios, en dependencia de la diputación y las cortes, pese a que la Instrucción de 1823, apenas aplicada, consagraba una hacienda centralizada.

Después se volvió otra vez al modelo tradicional, que era una vuelta a la Instrucción de 1818. En 1828 se intentó sustituir por otra; pero Madrid siguió igual hasta 1830, cuando se hizo el arriendo de los derechos de puertas a una empresa. Esto era una consignación encubierta y la pérdida por parte de la municipalidad de cualquier intervención en el ramo. Cuando acabó el arriendo, en 1835, se volvió una vez más a la Instrucción de 1818.

Por último, hablar de la eficacia de las reformas exige plantearse su finalidad, y aquí está la realidad de toda la problemática existente en torno a las haciendas municipales. El telón de fondo de dichas reformas no es el propio municipio, sino el poder central. La hacienda madrileña se endeudó para pagar gastos de la corona, sus ingresos servían muchas veces para necesidades de la monarquía, los problemas de la deuda —que como ya he dicho era el fundamental en Madrid— tenía ese origen. La crisis de las haciendas locales es la crisis de la hacienda real, buscar otras causas —aunque las haya— puede denotar una visión superficial.

De forma que la pregunta se traslada a la hacienda real, y ésta como se sabe no funcionaba. Ocurre que la formación de lo que se ha llamado Estado moderno suponía una inversión grande. La complejidad institucional y social en la que se avanzaba necesitaba más medios, más recursos; y no se supo dar con una solución para aumentarlos. Hay un problema de economía, de lo que es en esencia la economía: la distribución de una riqueza escasa para necesidades crecientes.

En el fondo late un modo para estructurar el poder público. Quien tiene el dinero, los medios, tiene el poder. La reforma carolina supuso un salto cuantitativo en el control. La experiencia de la consignación real durante la ocupación francesa fue un aviso de lo que sucedería con la instauración del Estado liberal. Quien da impone condiciones, quien pide ha de conformarse; con el liberalismo el municipio de Madrid se convirtió en una mera cadena de transmisión de lo que se decidía a nivel central, es por lo tanto una reproducción sin vida propia, y esto se observaba en sus finanzas.

En síntesis, frente al patrimonio, la imposición; frente a la pluralidad de cuentas, la unidad; en cuanto a la autonomía, crecimiento del centralismo; y siempre primacía de las necesidades de la hacienda central.

ANEXO

Los gráficos que aparecen a continuación son un resumen rápido de muchas de las páginas precedentes. De todas formas brevemente hago alguna indicación para facilitar su interpretación.

Comienzo con los datos del Reglamento de 1766, en proyección gráfica. Se observa la importancia de las sisas en los ingresos madrileños; y la sangría que suponía la deuda municipal para las arcas.

A continuación el año común sacado del quinquenio 1804-1808. En los ingresos apenas existe variación; en los gastos disminuye algo el tanto por ciento de la deuda debido al aumento de los otros gastos, fundamentalmente sueldos y causa pública.

De 1812 se ofrecen dos gráficos de ingresos y gastos conforme al plan de ese año, plan que como se sabe no se cumplió totalmente, pero interesa observar la distribución de unos ingresos mínimos y para unas necesidades estrictamente municipales (no aparece ningún pago de deuda).

En 1813 sólo conozco con fiabilidad los ingresos, en donde la dramática disminución de los resultados de sisas motivan una mayor importancia de los propios (además de que incluyen lo ingresado por alumbrado).

En el segundo año económico del Trienio, a pesar de incluirse entre los ingresos el alumbrado, las puertas siguen conservando su protagonismo. En cuanto a los gastos, los intereses de la deuda pasan a un segundo lugar debido a la división de la deuda en nacional y municipal. Los valores absolutos de este año suben algo al incluirse en este presupuesto todos los gastos del municipio.

El tercer año económico no aporta grandes cambios sobre el anterior.

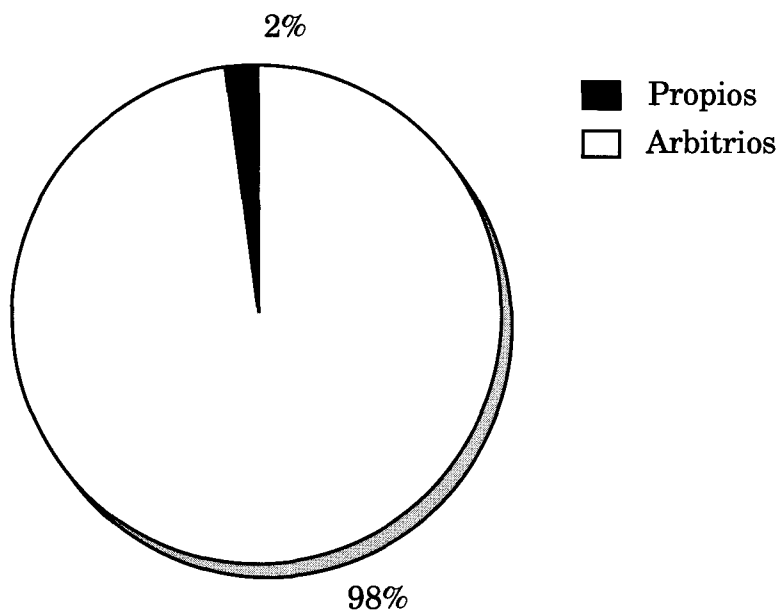
En 1830, se sigue manteniendo la estructura de ingresos; y en los gastos disminuye la porción de la deuda debido a que los otros son mayores, entre otras cosas debido a lo que se aportaba a la real Hacienda.

En 1833, tampoco hay grandes variaciones en los ingresos. En las salidas la menor importancia de los intereses de la deuda, respecto a 1766, se debe a la inflación del gasto.

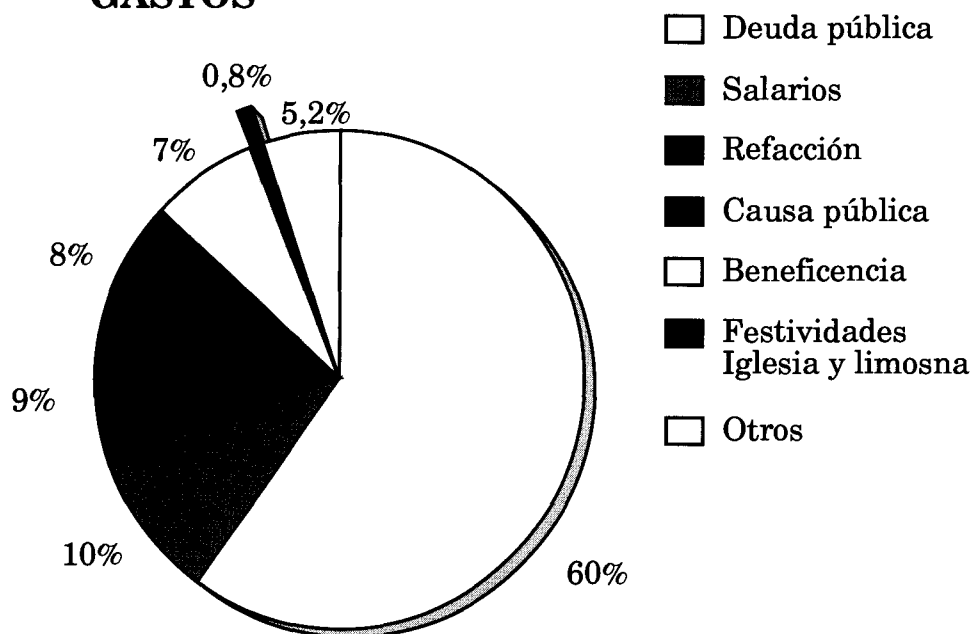
Por último unas barras de totales absolutos de los años expuestos, que son un complemento de los anteriores, y que muestran de una sola mirada la evolución producida.

AÑO 1766

INGRESOS

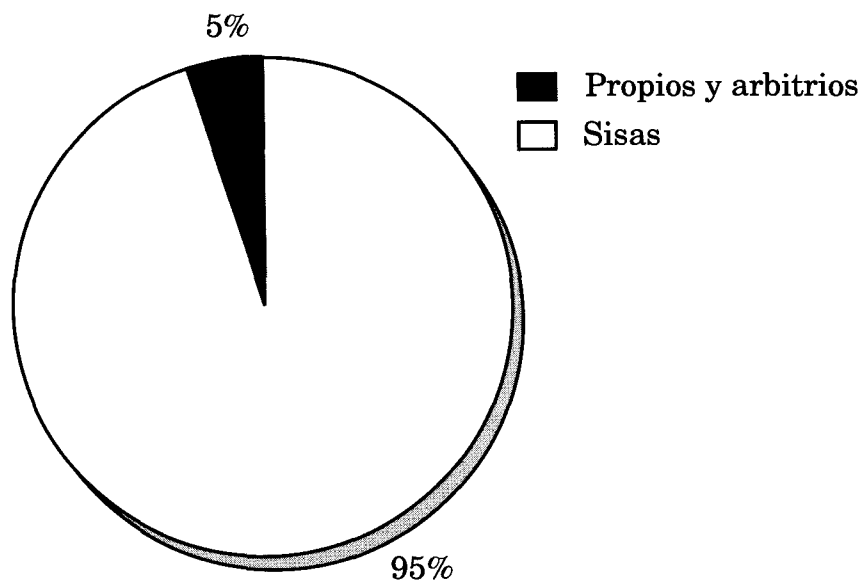


GASTOS

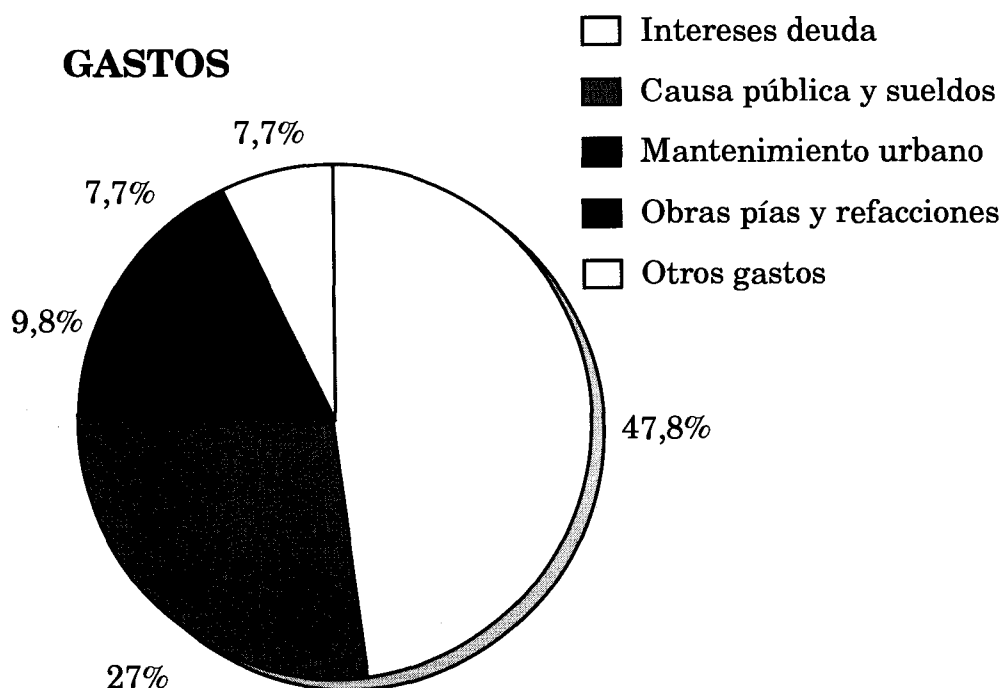


AÑO COMÚN 1804-1808

INGRESOS

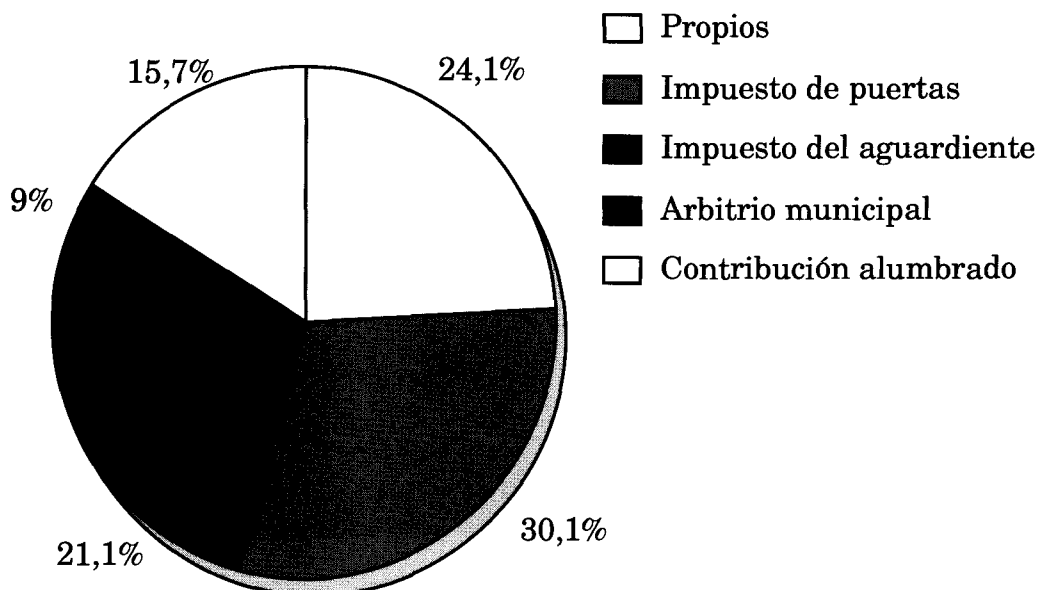


GASTOS

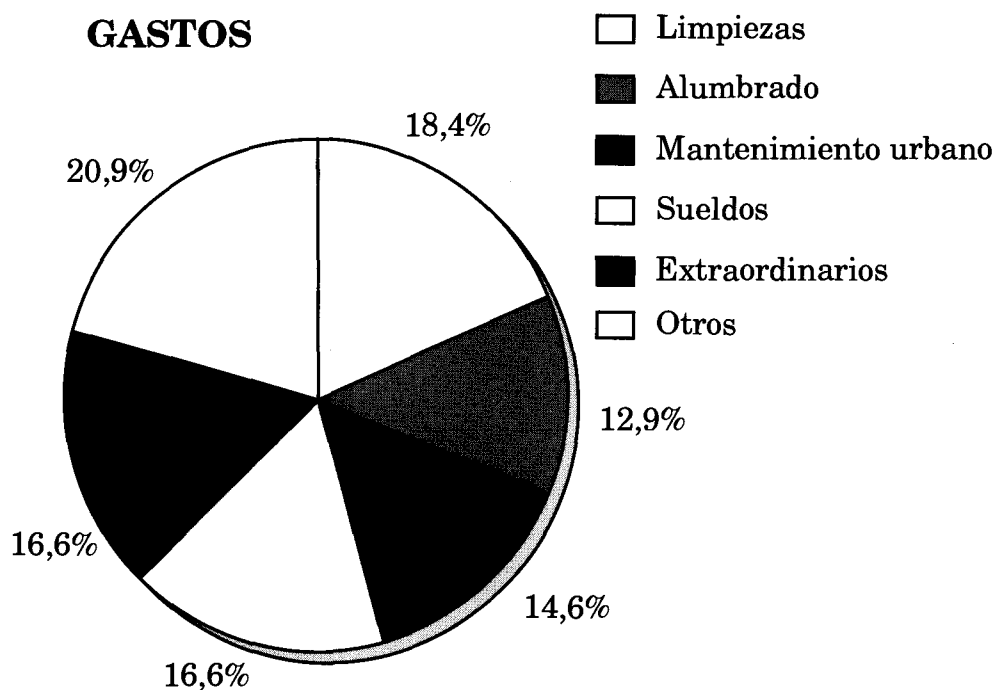


AÑO 1812

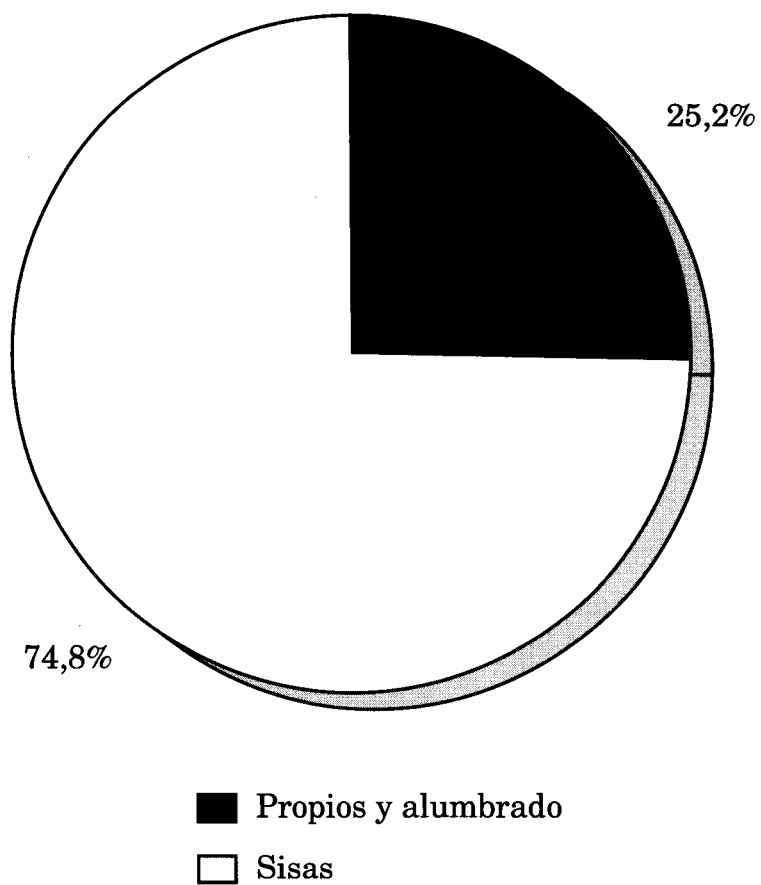
INGRESOS



GASTOS

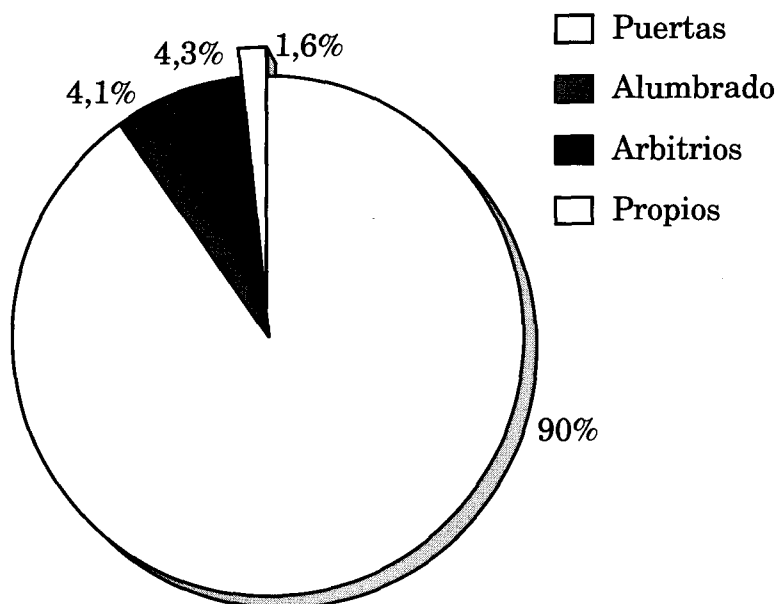


AÑO 1813
INGRESOS

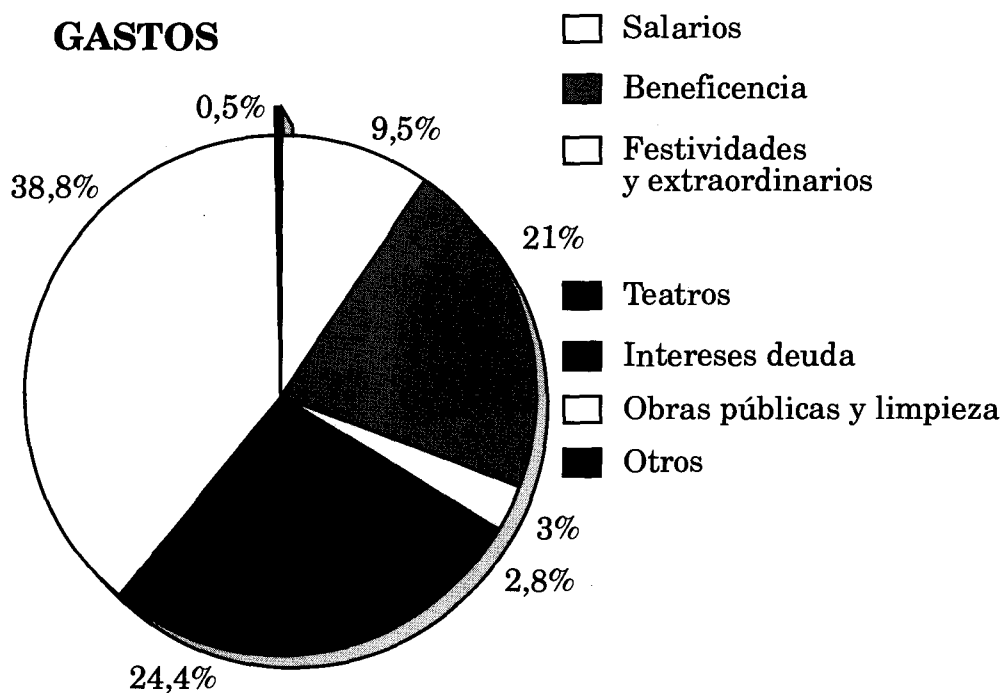


AÑO 1821-1822, segundo del Trienio

INGRESOS

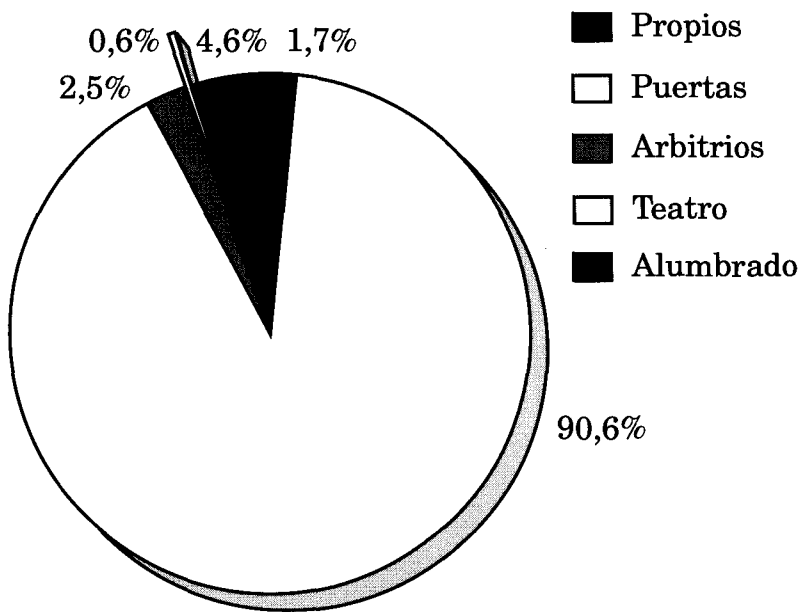


GASTOS

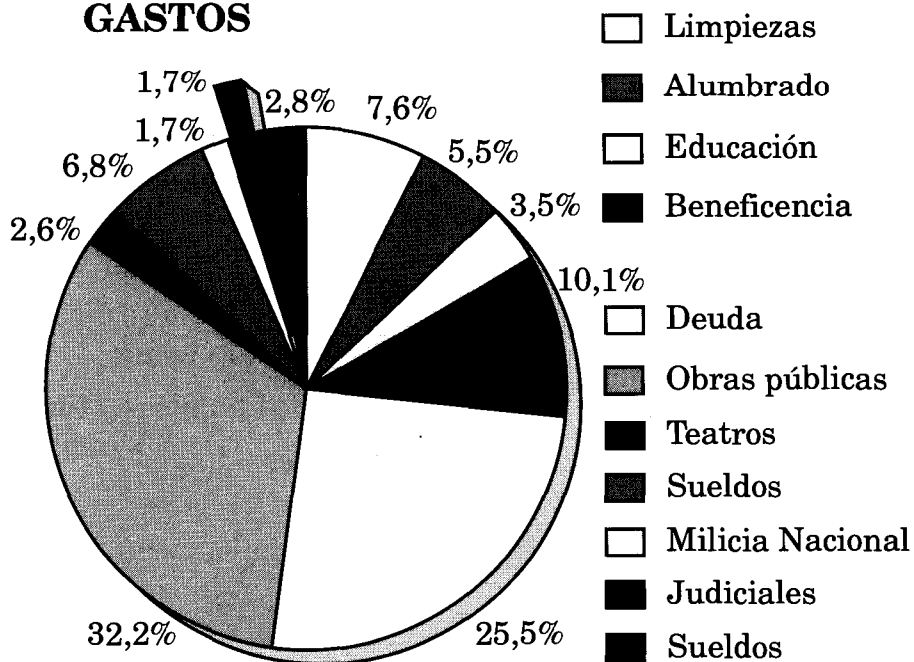


AÑO 1822-1823, tercero del Trienio

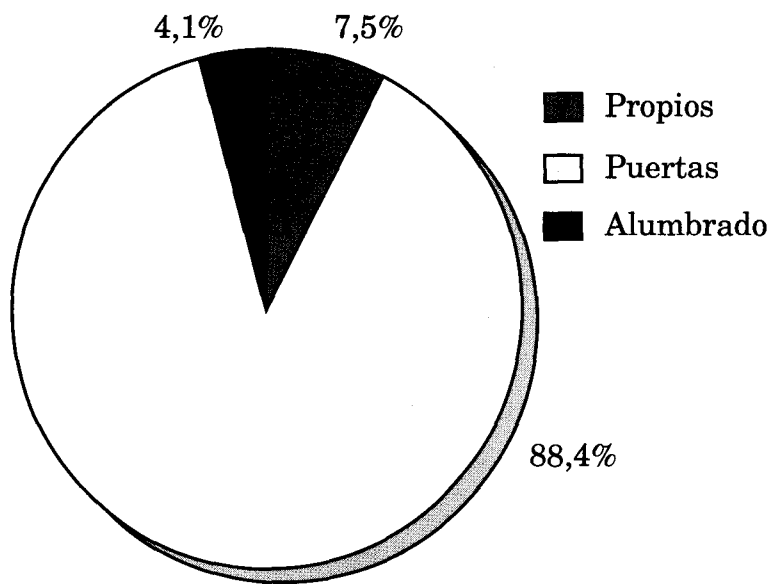
INGRESOS



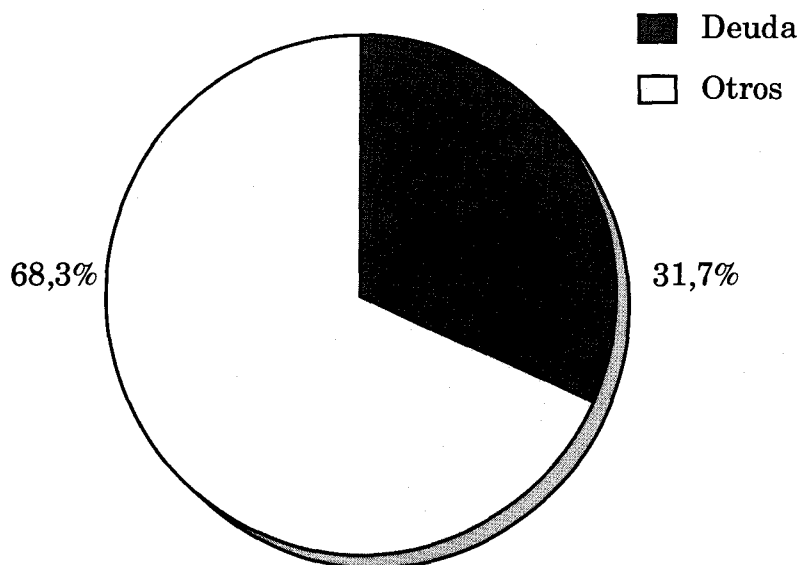
GASTOS



AÑO 1830
INGRESOS

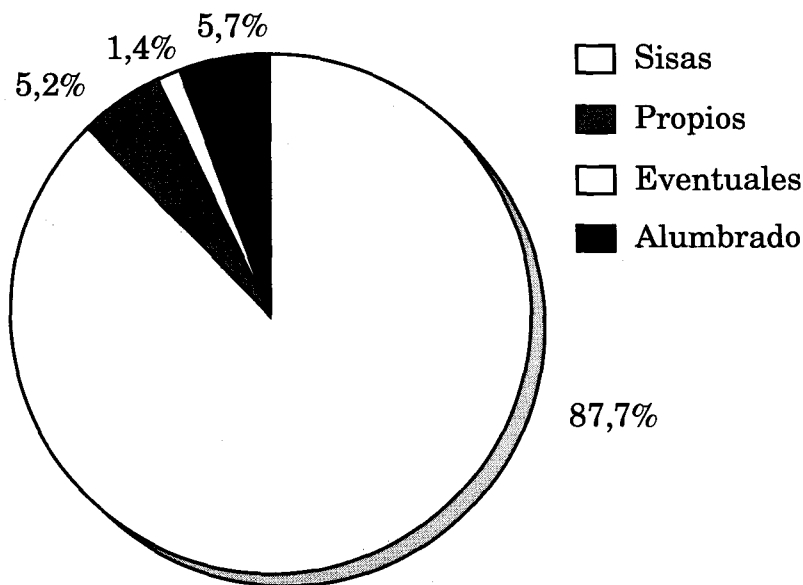


GASTOS

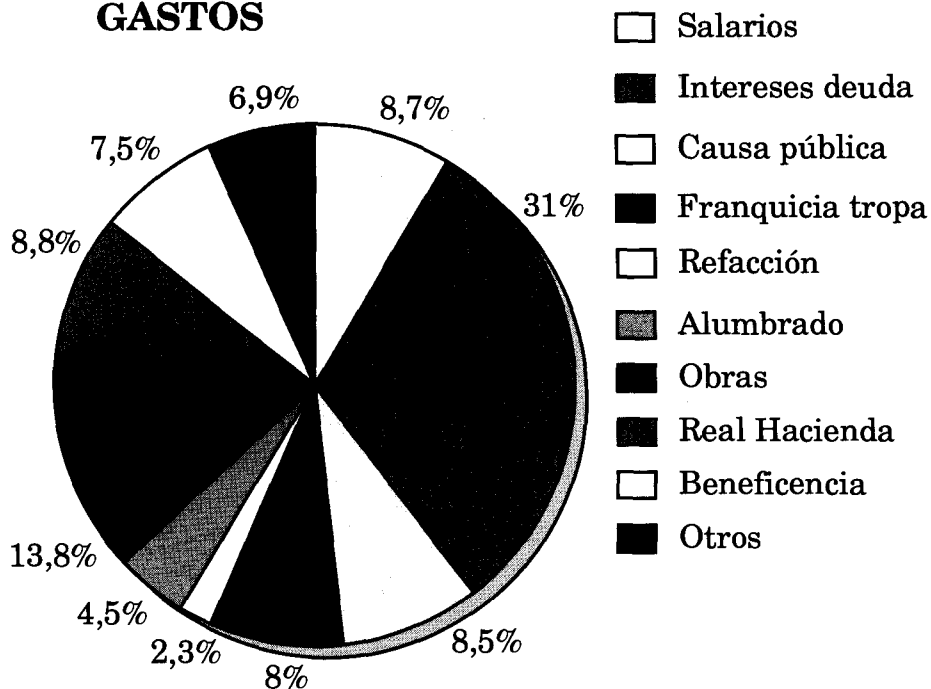


AÑO 1833

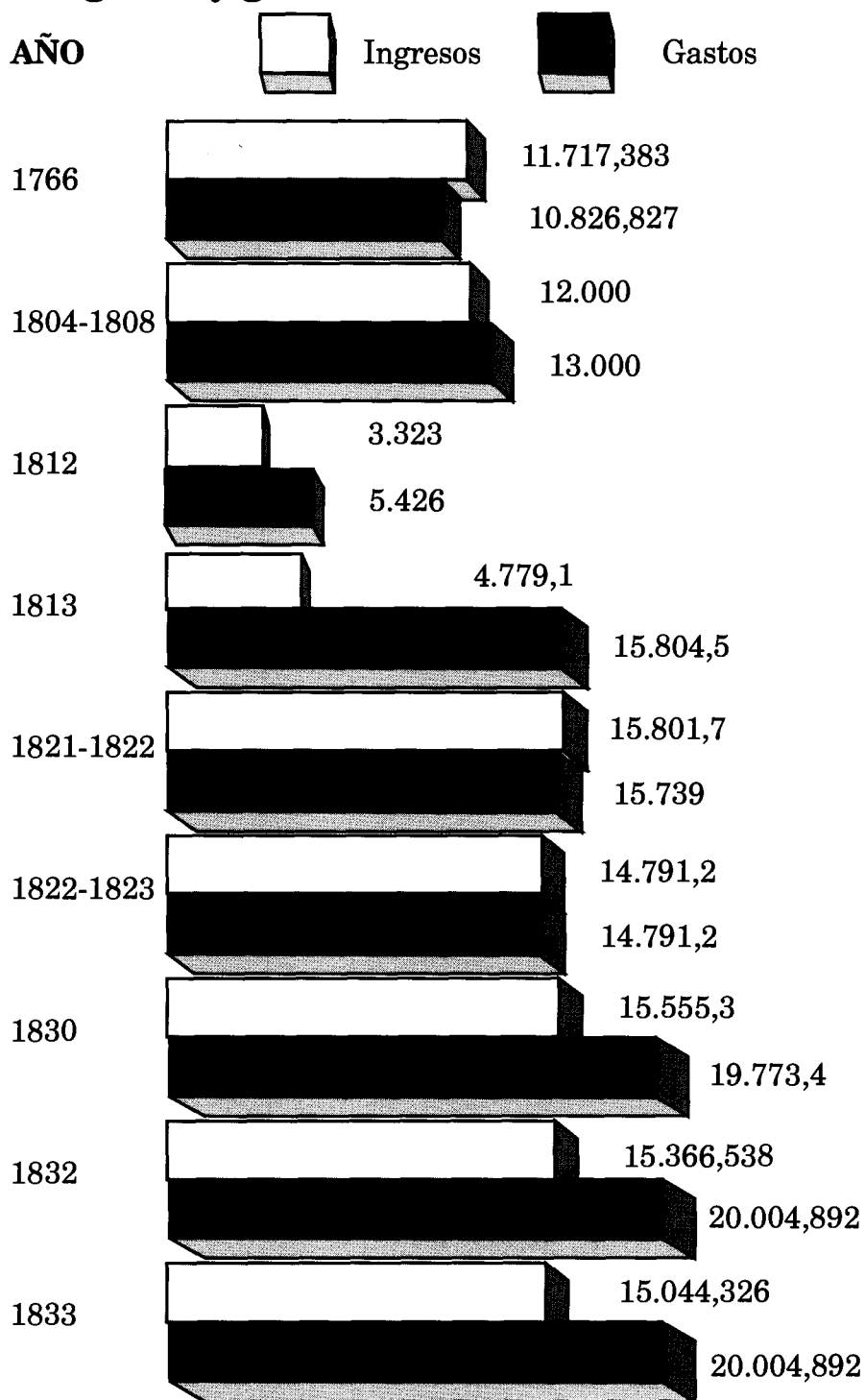
INGRESOS



GASTOS



Ingresos y gastos 1766-1833 (en miles de reales)



RELACIÓN BIBLIOGRÁFICA

- Aguirre Hueto, Jesús Manuel, «Reglamento del Consejo de Propios y Arbitrios de la ciudad de Burgos (1763)», *La ciudad de Burgos*, Burgos, 1985, 479-489.
- Alonso Romero, M.^a Paz, «Ventas de bienes municipales de la provincia de Salamanca durante la guerra de la independencia», en *Desamortización y Hacienda pública*, tomo I, Madrid, 1986.
- Álvarez Pantoja, María José, «La hacienda municipal sevillana en 1819», en *Archivo hispalense*, vol. 171-173, Sevilla, 1973, 97-107.
- , «Funcionalidad de las haciendas locales: las reformas de los propios y arbitrios sevillanos (1750-1780)» en M. Artola y L. M. Bilbao, *Estudios de hacienda, de Ensenada a Mon*, Madrid, 1984.
- , «La hacienda municipal sevillana en el trienio liberal», en *Hacienda Pública Española* (55), 19.
- Alvarez de Prado, Luis Alfredo, «Aportación al estudio de las haciendas concejiles castellanas. Los propios y rentas de Burgos en el siglo XVIII», en *La ciudad de Burgos*, Burgos, 1985.
- Artola, Miguel, *La Hacienda del Antiguo Régimen*, Madrid, 1982.
- , *La Hacienda del siglo XIX. Progresistas y moderados*, Madrid, 1986.
- Baena Pinedo, Pablo, «La división municipal de Madrid», en *Homenaje a Miguel Artola*, en prensa.
- , Martínez Neira, M., «El ayuntamiento de Madrid a finales del reinado de Fernando VII», *Anales del instituto de estudios madrileños*, tomo XXXIV, Madrid, 1994, 543-563.

Bernal, Antonio Miguel, «Haciendas locales y tierras de propios: funcionalidad económica de los patrimonios municipales (siglos XVI-XIX)» en *Hacienda Pública Española*, 55, 1978, 285-312.

Canga Argüelles, José, *Elementos de la ciencia de hacienda*, Madrid, 1833.

—, *Diccionario de hacienda con aplicación a España*, 2 tomos, Madrid, 1833-34.

Carbajo Isla, María F., *La población de la villa de Madrid. Desde finales del siglo XVI hasta mediados del siglo XIX*, Madrid, 1987.

Carpio García, Maximino, *Las haciendas municipales en la década moderada (especial referencia a Madrid)*, 1844-1854, Memoria inédita, UAM, s.a.

Castro, Concepción de, *La revolución liberal y los municipios españoles (1812-1868)*, Madrid, 1979.

Cayetano Martín, M^a. del Carmen, «El siglo XIX en el Archivo de Villa», en *Madrid en la sociedad del siglo XIX, I Coloquio de historia madrileña*, Madrid, 1986, vol. II, 549-569.

Clavero, Bartolomé, «Hispanus fiscus, persona ficta: concepción del sujeto político en la época barroca», en *Tantas personas como estados. Por una antropología política de la historia europea*, Madrid, 1986, 53-105.

Cristobal y Mañas, M., *La hacienda municipal de la Villa de Madrid: estudio histórico crítico*, Madrid, 1900.

Cruz Mundet, J. R., *Rentería en la crisis del Antiguo Régimen (1750-1845): familia, caserío y sociedad rural*, Rentería, 1991.

Dou i Bassols, R. L., *Instituciones del Derecho Público general de España, con noticia del particular de Cataluña, y de las principales reglas de gobierno en cualquier Estado*, tomo V, Madrid, 1802.

Etapé y Rodríguez, Fabián, *La reforma tributaria de 1845*, Madrid, 1971.

Fernández Albaladejo, Pablo, «Monarquía ilustrada y haciendas locales en la segunda mitad del siglo XVIII», en *Fragmentos de Monarquía*, Madrid, 1992, 455-467.

Fernández García, Antonio (dir.), *Historia de Madrid*, Madrid, 1993.

- Florez Estrada, *Curso de economía política*, Londres, 1828.
- Fontana, Josep, *La quiebra de la monarquía absoluta (1814-1820)*, Barcelona, 1978.
- , *La historia después del fin de la historia*, Barcelona, 1992.
- , *Hacienda y Estado en la crisis final del Antiguo Régimen español, 1823-1833*, Madrid, 1973.
- y Garrabou, R., *Guerra y Hacienda. La Hacienda del gobierno central en los años de la Guerra de la Independencia (1808-1814)*, Alicante, 1986.
- García Fernández, Javier, *El origen del municipio constitucional: autonomía y centralización en Francia y España*, Madrid, 1983.
- García García, Carmen, *La administración de las Rentas Municipales en el Antiguo Régimen. La Contaduría General de Propios y Arbitrios (1760-1824)*, Memoria de licenciatura inédita, UAM, 1984.
- , «Haciendas municipales y bienes de propios: las reformas de Carlos III», en *Anales de estudios económicos y empresariales*, I, Valladolid, 1986, 89-113.
- , «Las ayudas financieras de los concejos a la hacienda estatal (1740-1820)», en *Fiscalitat estatal i hisenda local*, ss. XVI-XIX, Palma de Mallorca, 1988, 427-450.
- , «Desarrollo y liquidación de la deuda censual: el caso de la ciudad de Valladolid (178-1877)», en B. Yun Casalilla, *Estudios sobre el capitalismo agrario, crédito e industria en Castilla*, Salamanca, 1991, 267-289.
- , «Oligarquías urbanas y haciendas municipales: irregularidades en la gestión de los fondos locales vallisoletanos en el siglo XVIII», *Hacienda pública española*, Madrid, 1994.
- , *La crisis de las haciendas locales: de la reforma administrativa a la reforma fiscal (1743-1845)*, tesis doctoral inédita, Universidad Autónoma de Madrid, 1994.
- García Monerri, Encarnación, *La monarquía absoluta y el municipio borbónico. La reorganización de la oligarquía urbana en el Ayuntamiento de Valencia (1707-1800)*, Madrid, 1991.
- Garrido Gómez, M. I., *La organización del municipio de Madrid durante la Guerra de la Independencia (1808-1814)*, memoria de licenciatura inédita, UCM, 1986.

- Gil Novales, Alberto, *El trienio liberal*, Madrid, 1980.
- González Alonso, Benjamín, *Sobre el Estado y la Administración de la Corona de Castilla en el Antiguo Régimen*, Madrid, 1981.
- , *El Corregidor castellano (1348-1808)*, Madrid, 1970.
- Grossi, Paolo, *La propiedad y las propiedades. Un análisis histórico*, Madrid, 1992.
- Guardia Herrero, Carmen de la, *Conflicto y reforma en el Madrid del siglo XVIII*, Madrid, 1993.
- Guillamón, Javier, *Las reformas de la administración local durante el reinado de Carlos III*, Madrid, 1980.
- Hernández Benítez, Mauro, «Los regidores de Madrid en el siglo XVIII», en *AH-DE*, Madrid, 1986, 637-681.
- , «La evolución de un delegado regio: corregidores de Madrid en los siglos XVII y XVIII», en *AHDE*, Madrid, 1991, 579-607.
- Hernando Ortego, Francisco Javier, «La gestión de las tierras de propios de Madrid en el siglo XVIII», comunicación presentada a la V Reunión anual del seminario de historia agraria, Santiago de Compostela (30.IX-2.X.1992).
- , *Los bienes de propios de Madrid en el siglo XVIII*, memoria de licenciatura inédita, UAM, 1985.
- , «Control del espacio y control del municipio. Carlos III y el Pardo», en Equipo Madrid, *Carlos III, Madrid y la Ilustración*, Madrid, 1988, 49-76.
- Hoz García, Carlos de la, «Las reformas de la Hacienda madrileña en la época de Carlos III», en EQUIPO MADRID, *Carlos III, Madrid y la Ilustración*, siglo XXI, Madrid, 1988, 78-101.
- , «Fuentes para el estudio de la fiscalidad municipal en el Madrid de la Edad Moderna», en *Primeras jornadas sobre fuentes documentales para la historia de Madrid*, Madrid, 1990, 329-333.
- , «El sistema fiscal de Madrid en el Antiguo Régimen: las sisas», en *Anales del Instituto de estudios madrileños*, XXV, Madrid, 1988, 371-386.
- , «Hacienda municipal y poder urbano en Madrid durante el Antiguo Régimen», en *Fiscalitat estatal i hisenda local*, ss. XVI-XIX, Palma de Mallorca, 1988.

aude fiscal en Madrid durante el siglo XVIII», comunicación inédita presentada en el curso organizado por la UIMP sobre *El fraude fiscal en la historia de España*, La Coruña, 19-23 de octubre de 1992.

Infante Miguel-Motta, Javier, *El municipio de Salamanca a finales del Antiguo Régimen. Contribución al estudio de su organización institucional*, Salamanca, 1984.

—, «Aportación al estudio de las haciendas de los concejos castellanos en las ordenanzas municipales durante el tardofeudalismo», en *Estudis* (19), Valencia, 1993, 191-232.

—, «Nuevos datos y observaciones sobre la hacienda del concejo de Salamanca durante el tardofeudalismo», en *Revista Studia Histórica* (XI), Salamanca, 1993, 169-205.

Lorente Toledo, Luis, *Hacienda local y política económica en la España de Fernando VII. La provincia de Toledo (1814-1833)*, Ayuntamiento de Toledo-Diputación provincial de Toledo-Universidad de Castilla la Mancha, s.a., el depósito legal es de 1990.

Madoz, Pascual, *Madrid, Audiencia, Provincia, Intendencia, Vicaría, Partido y Villa*, Madrid, 1848.

Marina Barba, Jesús, *Poder municipal y reforma en Granada durante el siglo XVIII*, Granada, 1992.

Martín Niño, Jesús, *La Hacienda española y la Revolución de 1868*, Madrid, 1972.

Martínez Neira, Manuel, «Fiscalidad municipal en el reinado de José Bonaparte: Madrid 1808-1813», en *Anuario jurídico y económico escorialense*, XXVI, vol. II, 1993, 609-638.

—, *Una reforma ilustrada para Madrid. El Reglamento del Consejo Real de 16 de marzo de 1766*, Madrid, 1994.

—, *La hacienda de la Villa de Madrid en el reinado de Fernando VII*, tesis doctoral, Universidad Carlos III de Madrid, Madrid, 1994.

—, Baena Pinedo, P., «El ayuntamiento de Madrid a finales del reinado de Fernando VII», *Anales del instituto de estudios madrileños*, tomo XXXIV, Madrid, 1994, 543-563.

Martínez Ruiz, José Ignacio, *Finanzas municipales y crédito público en la España moderna. La hacienda de la ciudad de Sevilla 1528-1768*, Sevilla, 1992.

- Mercader Riba, Juan, *José Bonaparte rey de España 1808-1813 (historia externa del reinado)*, CSIC, Madrid, 1971.
- , *José Bonaparte rey de España, 1808-1813. Estructura del Estado español bonapartista*, Madrid, 1983.
- Moral Ruiz, Joaquín, *Hacienda central y haciendas locales en España, 1845-1905*, Madrid, 1984.
- , *Hacienda y sociedad en el Trienio constitucional 1820-1823*, Madrid, 1975.
- Mugartegui Eguía, *Estado, provincia y municipio. Estructura y coyuntura de las haciendas municipales vascas. Una visión a largo plazo (1580-1900)*, Oñati, 1993.
- , *Hacienda y fiscalidad en Guipuzcoa durante el Antiguo Régimen, 1700-1814*, Donostia, 1990.
- Muñoz de Bustillo Romero, Carmen, *Bayona en Andalucía: El Estado bonapartista en la prefectura de Xerez*, Madrid, 1991.
- Nieto, A., *Bienes comunales*, Madrid, 1964.
- Núñez Roldán, Francisco, «Haciendas municipales en el reino de Sevilla a mediados del siglo XVIII», *Historia, Instituciones, Documentos* (12), Sevilla, 1985, 89-132.
- Ortego Gil, Pedro, *Evolución legislativa de las Diputaciones provinciales en España. La Diputación provincial de Guadalajara (1812-1845)*, Universidad Complutense, 1990.
- Ortiz de Orruño, J. M., *Alava durante la invasión napoleónica. Reconversión fiscal y desamortización en el término municipal de Vitoria*, Vitoria, 1983.
- Otaegui Arizmendi, A., *Guerra y crisis de la hacienda local (las ventas de bienes comunales y de propios en Gipuzkoa. 1764-1814)*, Gipuzkoa, 1991.
- Peset, Mariano, *Dos ensayos sobre historia de la propiedad de la tierra*, Madrid, 1982.
- Puyol Montero, José María, *El Consejo Real de Castilla en el reinado de Fernando VII*, Universidad Complutense, 1992.
- San Román Rodríguez, Juan, «La hacienda local madrileña en el siglo XIX», en *Madrid en la sociedad del siglo XIX, I coloquio de historia madrileña*, vol. I, Madrid, 1986, 515-525.

- , *La hacienda de Madrid en el periodo 1834-1843. Una aproximación al estudio de las haciendas locales en el siglo XIX*, Memoria inédita, UAM, s.a.
- Sánchez Gómez, M. A., «Haciendas municipales y revolución liberal: el caso de Santander (1807-1823)», en *Fiscalitat estatal i hisenda local*, ss. XVI-XIX, Palma de Mallorca, 1988.
- Sánchez-Arcilla Bernal, José, «Del municipio del Antiguo Régimen al municipio Constitucional. Un caso concreto: Guadalajara», *Actas del IV Symposium de Historia de la Administración*, INAP, Madrid, 1983, 629-681.
- , «El municipio de Palencia durante la ocupación francesa: 1808-1813. Notas para el estudio del régimen municipal josefista», *Actas del I Congreso de Historia de Palencia*, tomo III, Palencia, 1987.
- Santayana Bustillo, Lorenzo de, *Gobierno de los pueblos de España*, 1742 (existe una edición de 1979 a cargo de F. Tomás y Valiente).
- Seligman, E. R. A., «El desarrollo de la imposición», en *Hacienda Pública Española*, 13, 1971, 149-162.
- Spiegel, W., *Desarrollo del pensamiento económico. Historia del pensamiento económico desde los tiempos bíblicos hasta nuestros días*, 3ª, Barcelona, 1990.
- Suárez, F., *Martín de Garay y la reforma de la Hacienda*, Pamplona, 1967.
- , «Introducción», en *López Ballesteros y la Hacienda entre 1823-1832*, 5 vols., Pamplona, 1970.
- Tomás y Valiente, F., *El marco político de la desamortización en España*, Barcelona, 1971.
- Vilar, Pierre, «Historia del Derecho, historia "total"», en *Economía, Derecho, Historia*, Barcelona, 1983.
- Villas Tinoco, Siro, «Estructura fiscal del municipio malagueño», en *Actas del I Symposium internacional: Estado y fiscalidad en el Antiguo Régimen*, Murcia, 1988, 369-380.

BIBLIOTECA DE ESTUDIOS MADRILEÑOS

- I-II. **Historia del Colegio Imperial de Madrid**, por José Simón Díaz. Tomo I: XVI + 621 páginas con ilustr. 300 ptas. Tomo II: 305 páginas con ilustr. 300 pesetas.
- III. **Colección de Documentos sobre Madrid**, por Angela González-Palencia Simón. 741 páginas. 300 ptas.
- IV. **Geografía Literaria de la Provincia de Madrid**, por José Fradejas Lebrero. XVI + 260 páginas, con ilustr. 300 ptas.
- V. **El Gremio de Representantes Españoles y la Cofradía de Nuestra Señora de la Novena**, por José Subirá. 270 págs. + 1 lámina. 300 ptas.
- VI. **Madrid en el siglo XVI**. Tomo I. (Agotado).
- VII. **Madrid en el teatro**, por Miguel Herrero García. VIII + 450 págs. 300 ptas.
- VIII. **Fuentes para la Historia de Madrid y su provincia**, recopiladas por José Simón Díaz. Tomo I: Textos impresos de los siglos XVI y XVII. XI + 461 págs. 400 ptas.
- IX. **Bibliografía de Madrid y su provincia**, por José Luis Oliva Escribano. Tomo I: Manuscritos e impresos. IX + 476 págs. 500 ptas.
- X. **Bibliografía de Madrid y su provincia**, por José Luis Oliva Escribano. Tomo II: Artículos de publicaciones periódicas. XIX + 496 páginas. 500 ptas.
- XI. **Anales de Madrid (desde el año 447 al de 1658)**, por Antonio de León Pinelo. Transcripción y notas de Pedro Fernández Martín. XI + 386 págs. 400 ptas.
- XII. **Temas musicales madrileños. (Evocaciones históricas)**, por José Subirá. 323 págs. 400 ptas.
- XIII. **Contribuciones documentales a la Historia de Madrid**, por Agustín Millares Carlo. 251 páginas. 400 ptas.
- XIV. **El abastecimiento de Madrid en el reinado de Isabel II**, por Antonio Fernández García. XV + 241 págs. 400 ptas.
- XV. **La enseñanza privada seglar de grado medio en Madrid (1820-1868)**, por María del Carmen Simón Palmer. XXIII + 458 páginas, con ilustr. 600 ptas.
- XVI. **Antonio González Ruiz, pintor de cámara de S.M. y director general de la Academia de Bellas Artes de San Fernando**, por José Luis de Arrese. 212 págs. + 41 láms. 420 ptas.
- XVII. **Arquitectura y arquitectos madrileños del siglo XIX**, por Pedro Navascués Palacio. XX + 391 págs. con ilustr. y lám. 700 ptas.
- XVIII. **Arquitectos madrileños de la segunda mitad del siglo XVII**, por Virginia Tovar Martín. 430 págs. con ilustr. y láms. 1.200 ptas.
- XIX. **Ordenación y transformaciones urbanas del Casco antiguo madrileño durante los siglos XIX y XX**, por Eulalia Ruiz Palomeque. 681 págs. con ilustr. y láms. 2.000 ptas.
- XX. **El desarrollo metropolitano de Madrid: sus repercusiones geodemográficas**, por Julio Vinuesa Angulo. 368 págs. con ilustr. y láminas. 1.000 ptas.
- XXI. **Los accesos ferroviarios a Madrid: su impacto en la geografía urbana**, por M. Pilar González Yanci. 524 págs., ilustr. 1.500 ptas.
- XXII. **Don Juan Bautista de Arriaza y Superviela, marino, poeta y diplomático (1770-1837)**, por Fernando Marcos Álvarez. XI + 473 págs. con ilustr. 1.400 ptas.
- XXIII. **La Enseñanza en Madrid: Análisis de una Función Urbana**, por Ana Olivera Poll. 424 páginas. 1.500 ptas.
- XXIV. **Arquitectura religiosa de los siglos XVII y XVIII en la provincia de Madrid. Estudio y documentación del partido judicial de Getafe**, por M^a Pilar Corella Suárez. XVI-312 Páginas. 1.650 ptas.
- XXV. **El gobierno municipal de Madrid (1560-1606)**, por Ana Guerrero Mayllo. 300 páginas. 3.000 ptas.
- XXVI. **Abastecimiento de carne a Madrid (1477-1678)**, por Antonio Matilla Tascón. 120 páginas. 1.500 ptas.
- XXVII. **Una Reforma Ilustrada para Madrid**, por Manuel Martínez Neira. 112 páginas. 2.000 ptas.
- XXVIII. **Revolución y Fiscalidad Municipal**, por Manuel Martínez Neira. 252 páginas. 2.000 ptas.